

MIGUEL SERNA · EDUARDO BOTTINELLI coordinadores

# EL OFICIO DEL SOCIÓLOGO EN URUGUAY EN TIEMPOS DE CAMBIO

Experiencias locales y diálogos con la sociología latinoamericana



 COLEGIO de  
SOCIÓLOGOS  
Uruguay

Editorial Biblos PENSAMIENTO SOCIAL

Serna, Miguel

El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio: experiencias locales y diálogos con la sociología latinoamericana / Miguel Serna; Eduardo Bottinelli; coordinación general. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2020.

304 pp.; 23 x 16 cm. (Pensamiento social)

ISBN 978-987-691-795-7

1. Sociología. I. Bottinelli, Eduardo. II. Serna, Miguel, coord. III. Bottinelli, Eduardo, coord. IV. Título  
CDD 301

Diseño de tapa: *Luciano Tirabassi*

Imagen de tapa: Pato Gainza, *La guerrera*, 2017. Serie *Las Máscaras*. Óleo sobre fibra, 42 x 60 cm.

Armado: *Hernán Díaz*

© Miguel Serna y Eduardo Bottinelli, 2020

© Editorial Biblos, 2020

Pasaje José M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos Aires

[editorialbiblos@editorialbiblos.com](mailto:editorialbiblos@editorialbiblos.com) / [www.editorialbiblos.com.ar](http://www.editorialbiblos.com.ar)

Hecho el depósito que dispone la ley 11.723

Impreso en la Argentina

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Esta primera edición fue impresa en Imprenta Dorrego,  
avenida Dorrego 1102, Buenos Aires, República Argentina,  
en abril de 2020.

# Índice

Introducción	
<i>Miguel Serna y Eduardo Bottinelli</i> .....	11

## PRIMERA PARTE

### El oficio del sociólogo y los desafíos de la práctica en Uruguay

La sociología y el oficio del sociólogo en Uruguay: prácticas y ámbitos	
<i>Miguel Serna, Eduardo Bottinelli y Mariana Porta</i> .....	23

El ejercicio de la sociología frente a la cuestión social	
<i>Denis Merklen</i> .....	39

Itinerarios de la profesión del sociólogo en Uruguay	
<i>Marcos Supervielle</i> .....	59

## SEGUNDA PARTE

### Miradas críticas del desarrollo de la sociología en Uruguay

Sociología de género y militancia feminista	
<i>Rosario Aguirre</i> .....	75

Sociología y territorio: un camino de encuentros desde la investigación	
<i>Alfredo Falero</i> .....	89

La enseñanza de la sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República	
<i>Verónica Filardo</i> .....	103

La sociología como disciplina escolar dentro de la Administración Nacional de Educación Pública	
<i>Dinorah Motta de Souza</i> .....	109

La sociología observando el territorio: ¿trabajos precarios o precarios trabajos en el agronegocio uruguayo?	
<i>Juan Romero</i> .....	123

### TERCERA PARTE

#### El oficio del sociólogo en primera persona

Cuando la práctica educativa trasciende una disciplina: la enseñanza de la sociología en formación docente y en la Facultad de Ciencias Sociales	
<i>Alejandra Capocasale Bruno</i> .....	143
La reflexión sociológica y el trabajo de campo	
<i>Lorena Custodio</i> .....	147
La profesión de la sociología en Uruguay	
<i>Teresa Herrera Sormano</i> .....	153
Ejercer el oficio del sociólogo fuera de la academia: algunas consideraciones	
<i>Cristian Maneiro</i> .....	155
Colegio de Sociólogos: construcción de futuro	
<i>Susana Mallo Reynal</i> .....	159
A cuento de <i>Fronteras que nos unen y límites que nos separan</i>	
<i>Enrique Mazzei</i> .....	163
La diversidad de roles de los sociólogos: ¿fortaleza o debilidad profesional?	
<i>Diego Moles</i> .....	167
Ser socióloga y hacer sociología en Uruguay: prácticas, experiencias y reflexiones	
<i>Cecilia Pereda</i> .....	171
Sociología de la cultura: travesía de una pasión	
<i>Rosario Radakovich</i> .....	181
Una breve mirada al ejercicio de la sociología a partir del Uruguay de los años 70	
<i>María del Carmen Rico Menge</i> .....	189

## CUARTA PARTE

### La sociología y la defensa de la profesión en América Latina

Declaración del Encuentro de Colegios y Asociaciones Profesionales de Sociología en América Latina (ALAS).....	197
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y los desafíos de las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana y caribeña <i>Karina Batthyány</i> .....	199
Reflexiones sobre la relación de la sociología y la opinión pública en la Argentina <i>Juan Pedro Blois</i> .....	205
Situación del mercado laboral de las personas profesionales en sociología en Costa Rica <i>Carmen Camacho Rodríguez, Ariel Calderón González, Fernando Chavarría Lizano y Marvin Rodríguez Vargas</i> .....	215
Instituciones y asociaciones de sociología en México <i>Angélica Cuéllar Vázquez</i> .....	227
Pasado, presente y futuro: el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile <i>Maite Descouvieres</i> .....	241
La antipática pero necesaria defensa política de la tecnocracia en América Latina <i>Fernando Filgueira</i> .....	247
A sociologia e os sociólogos no Brasil: da expansão e consolidação, aos desafios das mudanças <i>Jacob Carlos Lima</i> .....	271
Los vínculos entre la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo y la sociología del trabajo uruguaya <i>Francisco Pucci</i> .....	279
Medio siglo de sociología rural en América Latina <i>Alberto Riella</i> .....	291



## Introducción

*Miguel Serna y Eduardo Bottinelli\**

El libro que se presenta tiene la finalidad de resumir y presentar algunos de los hitos más relevantes que ha tenido el IV Congreso Uruguayo de Sociología desarrollado entre el 24 y el 26 de julio de 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) y que llevó como nombre “El oficio del sociólogo/a en tiempos de cambio”.

El libro se basa en los cuatro pilares principales que impulsaron el Congreso: 1) la práctica del oficio o profesión de la sociología desde la perspectiva de sus propios actores, mostrando las diversas herramientas teórico-metodológicas y modalidades prácticas en el ejercicio del oficio y sus tensiones internas (la docencia, la investigación social, la gestión de programas sociales, la consultoría técnica, la asesoría a organizaciones colectivas o el papel del intelectual crítico en espacios públicos); 2) indagar sobre la utilidad y pertinencia social de la sociología a través de los modos de apropiación del conocimiento sociológico en la sociedad, sus contribuciones y dificultades para recorrer los diversos espacios entre el mundo académico y profesional (las universidades, las instituciones educativas, el Estado, organizaciones sin fines de lucro, el sector privado, la opinión pública y los diversos medios de comunicación, difusión y debate de ideas); 3) la expansión de las fronteras del oficio del sociólogo en el territorio del país, descentrando lentamente la tradicional macrocefalia de la capital, y 4) el diálogo y la cooperación internacional entre las asociaciones de sociología y sociólogos de Uruguay y de América Latina, abriendo interrogantes sobre los principales desafíos y retos que

\* Miguel Serna es presidente y Eduardo Bottinelli secretario del Colegio de Sociólogos del Uruguay.

enfrenta la disciplina y su práctica en contextos de crítica y cuestionamiento conservador sobre el papel de la sociología como ciencia social.

Este iv Congreso de Sociología fue organizado por el Colegio de Sociólogos del Uruguay, en conjunto con el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), el Departamento de Ciencias Sociales-Cenur Litoral Norte de Salto (Udelar), la Universidad Católica del Uruguay, el Departamento de Ciencias Sociales-CURE (Udelar), polos de desarrollo universitario sociales de la Casa de la Universidad de Cerro Largo (Udelar), centros universitarios de Rivera y Tacuarembó (Udelar).

El Congreso se realizó en un contexto especial, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Contó con un total de 286 inscriptos, de los cuales 73 fueron ponentes y asistentes del exterior y 213, ponentes y asistentes de Uruguay. Los países con mayor presencia fueron Brasil (28), Argentina (20), Chile (7) y México (7).

Al comparar los asistentes al iv Congreso Uruguayo de Sociología de 2019 con el iii Congreso realizado en 2015 se aprecia una baja importante de la cantidad de inscriptos: mientras en 2015 hubo un total de 337 participantes, en 2019 fueron 286, es decir, 51 participantes menos. Sin embargo, al analizar la presencia de participantes nacionales y extranjeros se aprecia que entre los nacionales no ha habido variación (211 en 2015 y 213 en 2019). Por tanto, puede inferirse que el contexto regional afectó la participación en mayor medida de participantes del exterior.

Este iv Congreso Uruguayo de Sociología estuvo signado por algunos elementos clave que se buscaron, con mayor o con menor éxito, desde la concepción misma de su organización. Entre estos aspectos se pueden resaltar fundamentalmente cuatro:

- 1) El nombre del Congreso. Puede no resultar novedoso; sin embargo, se ha entendido que a partir de ciertos cambios que se han producido en los últimos años a nivel regional y a nivel nacional referidos a transformaciones en la masificación de la enseñanza universitaria, así como en la difusión y democratización del acceso a los saberes científicos en la sociedad. Pero también signados estos cambios por los que se producen en la propia sociedad, cambios sociales drásticos de expansión de la cuestión social ante las recurrentes crisis económicas y sus consecuencias sociales devastadoras, por la persistencia de las desigualdades sociales estructurales, la multiplicación de las desigualdades y la fragmentación del tejido social, la visibilización y creciente incorporación de las desigualdades en la agenda de las políticas públicas, la internacionalización de saberes sociales, entre



otras. Es en este contexto en el cual el rol de la socióloga o el sociólogo se enfrenta a nuevos desafíos, una inserción más capilar en diversos ámbitos de la sociedad, una sociología más presente en las políticas públicas, en la opinión pública y en la vida cotidiana de diversos grupos sociales subalternos, que implica más y nuevos desafíos en las prácticas del oficio, en los compromisos sociales y públicos, entre otros.

- 2) La integración profesional y académica. Si bien el núcleo central del Congreso ha sido y sigue siendo esencialmente académico y disciplinar, se ha realizado un hincapié específico en la integración del campo profesional con el campo académico dentro del Congreso. Esto responde sustancialmente a que en las últimas décadas la sociología como profesión se ha ido expandiendo en cantidad y calidad de egresadas y egresados, y esa expansión abarca desde el tradicional mundo académico a diversos ámbitos y roles en las sociedades en contextos de cambios sociales profundos, tanto en el campo público como en el privado. En este sentido se ha consolidado la necesidad de integrar los distintos ámbitos del ejercicio de la sociología como un ejercicio de enriquecimiento de retroalimentación de esas diversas inserciones profesionales.
- 3) La integración territorial. Específicamente se ha realizado un importante esfuerzo para integrar a las distintas instituciones que desarrollan la actividad de docencia e investigación en el interior del país. Fue por esta razón que se han integrado a la organización los distintos centros y polos académicos de la Universidad de la República, así como se incorporó en un lugar de destaque la temática del territorio. Seguramente queda mucho por hacer en este aspecto, pero este IV Congreso Uruguayo de Sociología buscó específicamente acercar a la profesión que se desarrolla a lo largo del territorio nacional.
- 4) El diálogo y la cooperación internacional entre la sociología uruguaya y latinoamericana en particular. El desarrollo de la sociología nacional estuvo temprana y recurrentemente entrelazada con la inserción y el intercambio con circuitos académicos internacionales, especialmente de la región de América Latina y el Caribe. El Congreso abrió un espacio específico para promover ese intercambio en una coyuntura regional particular de crítica y cuestionamiento a las ciencias sociales, y en ese sentido se reivindicó la defensa de la disciplina académica y de su praxis profesional, así como su compromiso público con la sociedad.

La estructura del Congreso estuvo marcada por tres grandes componentes: los grupos de trabajo, los paneles y las mesas.

En el caso de los grupos de trabajo se confeccionaron quince, dentro de cada cual se nuclearon temáticas similares y complementarias y se obtuvo, a su vez, una amplia diversidad y cobertura de los principales temas que se están investigando y estudiando desde la sociología nacional e internacional. De esta forma los grupos de trabajo quedaron conformados de la siguiente forma:

- 1) Sociología del trabajo, organizaciones y recursos humanos. Coordinación: Mariela Quiñones (DS-Udelar), Alejandro Novoa (Cenur Litoral Norte-Udelar), Israel Falcón (CS).
- 2) Sociología de género y diversidad. Coordinación: Natalia Genta (DS-Udelar), Lucía Pérez (DS-Udelar), Carla Sacchi (CS).
- 3) A. Educación y sociedad: sociología de la educación superior. Coordinación: Tabaré Fernández (DS-Udelar), María del Luján Peppe (CFE ANEP, FDER-Udelar).  
B. Educación y sociedad: sociología de la educación inicial, básica y media. Coordinación: Santiago Cardozo (DS-Udelar), Pablo Menese (CUT-Udelar), Verónica Ardisoni (CFE ANEP, CS).
- 4) Política, poder, movimientos sociales y pensamiento crítico. Coordinación: Anabel Rieiro (DS-Udelar), Mariana Fry (DS-Udelar), Marcia Barbero (CS, Udelar).
- 5) Sociología urbana y desarrollo territorial. Coordinación: Mariana Porta (Casa Cerro Largo-Udelar, CS), Diego Hernández (Departamento de Ciencias Sociales y Políticas-UCU), Natalie Robaina (Cenur Litoral Norte-Udelar), Sebastián Aguiar (DS-Udelar).
- 6) Cultura, comunicación y TIC. Coordinación: Rosario Radakovich (FIC-Udelar), Natalia Moreira (DS-Udelar), María Julia Morales (DS-Udelar).
- 7) Generaciones y población. Coordinación: Carmen Varela (UM-Udelar), Irene Viera (CS).
- 8) Sociología sobre violencia y criminalidad. Coordinación: Luis Eduardo Morás (FDER-Udelar), Nilia Viscardi (FHUCE-Udelar), Ana Vigna (DS-Udelar).
- 9) Desigualdad, movilidad social y pobreza. Coordinación: Rafael Rey (DS-Udelar), Lorena Custodio (Dinem-Mides), Víctor Borrás (DS-Udelar).
- 10) Metodologías e investigaciones aplicadas. Coordinación: Mauricio

- Tubío (Cenur Litoral Norte-Udelar), Pablo Hein (DS-Udelar), María Julia Acosta (DS-Udelar, Equipos Consultores).
- 11) Migraciones y multiculturalismo. Coordinación: Felipe Arocena (DS-Udelar), Mónica Olaza (PSICO-Udelar).
  - 12) Sociología rural y desarrollo. Coordinación: Paola Mascheroni (DS-Udelar), Joaquín Cardeillac (DS-Udelar), Emilio Fernández (CUT-Udelar).
  - 13) Salud y seguridad social. Coordinación: Rodolfo Levin (FMED-Udelar), Franco González (FMED-Udelar, CS).
  - 14) Ocio, deporte y consumo. Coordinación: Cristian Maneiro (CS), Tomás Sartorio (CS).
  - 15) Drogas y sociedad. Coordinación: Gabriel Eira (CURE-Udelar), Clara Musto (DS-Udelar).

Complementando el trabajo y los intercambios que cada grupo de trabajo desarrolló, se habilitó la presentación de paneles temáticos. Finalmente se realizaron diez paneles con una diversidad interesante de temáticas y fundamentalmente con la participación de profesionales extranjeros, lo que enriqueció el intercambio en estos ámbitos. Los diez paneles temáticos fueron los siguientes:

- 1) La sociología como profesión en un escenario de cambios: diálogos latinoamericanos. Integrado por Juan Pedro Blois (UNGS, Argentina), Amurabi Oliveira (UFSC, Brasil), Daniela Sabatovich (IPA, Uruguay), Pablo Hein (Udelar, Uruguay).
- 2) Montevideo XXI: contradicciones y conflictos urbanos en las primeras dos décadas del siglo. Integrado por Víctor Borrás (Udelar, Uruguay), Sebastián Aguiar (Udelar, Uruguay), Marcelo Pérez (Udelar, Uruguay), Pablo Cruz (PMB-MVOTMA, Uruguay), Lucía Fernández (Udelar, Uruguay).
- 3) Las estrategias de vinculación de educación y trabajo en Uruguay y los modelos productivos. Integrado por Silvia Morales (CETP-UTU, Uruguay), Nicolás Marrero (Udelar, Uruguay), Mario Pereira (CETP-UTU, Uruguay), Irene Viera (CETP-UTU, Uruguay).
- 4) Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Integrado por Federico Rodríguez Hormaechea (Udelar, Uruguay), Santiago Escuder (Udelar, Uruguay), Ana Laura Rivoir (Udelar, Uruguay), Victoria Cancela (Udelar, Uruguay), Mauricio Nihil (Udelar, Uruguay).
- 5) Inclusión digital, una mirada desde la educación y la perspectiva de

- género. Integrado por María Julia Morales (Udelar, Uruguay), Esther Angeriz (Udelar, Uruguay), Martín Pérez Pollero (Udelar, Uruguay), Natalia Moreira (Udelar, Uruguay), Victoria Cancela (Udelar, Uruguay).
- 6) A Educação Popular e a Decolonialidade nas Ciências Sociais. Integrado por Noelia Rodrigues Pereira Rego (PUC-Río de Janeiro, Brasil), Yasmin Barros Cortez (PUC-Río de Janeiro, Brasil), Elisangela Alves dos Santos (PUC-Río de Janeiro, Brasil), Raphael Ribeiro da Silva (PUC-Río, Brasil).
  - 7) Empresarios y política en América Latina y Uruguay. Integrado por Miguel Serna (Udelar, Uruguay), Inés Nercerian (UBA, Argentina), Florencia Luci (UBA, Argentina), Adriano Codato (UFPR, Brasil), Eduardo Bottinelli (Udelar, Uruguay).
  - 8) Debates contemporáneos en teoría social crítica y compromiso social: descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar los saberes en América Latina. Integrado por Betty Weisz (Udelar, Uruguay), Rebeca Yanis Orobio (ICRUP, IMUP, Panamá), Marina Ábrego (UP, Panamá), Mónica Vargas (CSS, Chile), Susana Mallo (Udelar, Uruguay).
  - 9) Reflexiones sobre los programas de proximidad y el vínculo con los beneficiarios. Integrado por Verónica Filardo (Udelar, Uruguay), Denis Merklen (IHEAL-Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3, Francia), Juan Pablo Labat (Mides, Uruguay), Valentín Magnone (Udelar, Uruguay), Gustavo Medina (Udelar, Uruguay).
  - 10) Investigaciones cualitativas en educación y desigualdades: prácticas, hallazgos y reflexiones. Integrado por Cecilia Pereda (Udelar, Uruguay), Lucila Dallaglio (UADE, Argentina), Emilia Di Piero (UNLP, Flacso, Argentina), Juan Dukuen (UBA, Argentina), Mabela Ruiz Barbot (Udelar, Uruguay).

Finalmente, la tercera modalidad de presentaciones que se desarrolló durante el Congreso fue el de las mesas centrales. También en este caso se procuró diversidad de enfoques, tanto desde el punto de vista territorial como desde la búsqueda de amalgamar las distintas perspectivas disciplinares, tanto en el ámbito público como en el privado, tanto desde el punto de vista académico como del ejercicio profesional.

Se desarrollaron siete mesas con temáticas de relevancia académica y profesional, así como con un grado de actualidad importante, que permiten analizar los cambios que se están desarrollando en el oficio de sociólogo o socióloga. Las mesas fueron las siguientes:

- 1) La enseñanza de la sociología. Alejandra Capocasale (IPES-CFE), Verónica Filardo (DS-Udelar), Dinorah Motta de Souza (CFE ANEP).
- 2) La sociología y la profesión: resultados de la Encuesta sobre Situación Profesional y Expectativas de los Sociólogos/as en Uruguay. Miguel Serna (DS-Udelar, CS), Eduardo Bottinelli (DS-Udelar, CS, Factum), Mariana Porta (Casa Cerro Largo-Udelar, CS), Marcos Supervielle (DS-Udelar), Diego Moles (moderador, CS).
- 3) Políticas sociales y derechos. Denis Merklen.
- 4) Sociología y territorio. Enrique Mazzei (Casa Cerro Largo-Udelar, CS), Juan Romero (Cenur Litoral Norte, Udelar), Alfredo Falero (DS-Udelar)
- 5) Diálogos de la sociología uruguaya en América Latina. Gerónimo de Sierra (profesor emérito, Udelar), Ana Rivoir (ALAS), Alberto Riella (ALASRU), Francisco Pucci (ALAST), Karina Batthyány (Clacso).
- 6) Gestión y evaluación de proyectos y programas: Juan Pablo Labat (Mides), Cecilia Rossel (UCU), Fernando Filgueira (EDUUY21, CIESU), Mariana González (moderadora, Udelar).
- 7) Sociología, elecciones y opinión pública. Juan Pedro Blois (UNGS, Argentina), Eduardo Bottinelli (DS-Udelar, CS, Factum), Ignacio Zuasnar (UCU, Equipos Consultores). Miguel Serna (moderador, CS, Udelar).

El Congreso también buscó ser un ámbito que permita y fomente el intercambio y la integración de colegios y asociaciones latinoamericanas. En este sentido, se dedicó un espacio central al Encuentro de Colegios y Asociaciones Profesionales de Sociología en América Latina. En este encuentro participaron las siguientes organizaciones:

- Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Chile. Maite Descouvieres, Mónica Vargas.
- Consejo de Profesionales de Sociología de Argentina. Alejandro Terriles.
- Federación de Profesionales de Panamá. Rebeca Yanis.
- Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresados de la Universidad de Panamá. Marina Abrego.
- Colegio de Sociólogos del Uruguay. Miguel Serna, Eduardo Bottinelli.
- Sociedad Brasileña de Sociología. Carlos Benedito Martins.
- Colegio de Profesionales de Costa Rica. Carmen Camacho.
- Sindicato de Sociólogos de Río de Janeiro (FNS-B), Brasil. Alexandre Fernandes Correa.

Para su funcionamiento el Congreso contó con una comisión organizadora integrada por Betty Weisz, Cecilia Pereda y Fabiana Hernández por el Colegio de Sociólogos del Uruguay; Alfredo Falero y Susana Lamschtein por el Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República; Alejandro Novoa por el Departamento de Ciencias Sociales, Cenur Litoral Norte, Universidad de la República; Enrique Mazzei y Mariana Porta por los polos de desarrollo universitario sociales de la Casa de la Universidad de Cerro Largo y los centros universitarios de Rivera y Tacuarembó, Universidad de la República; Gabriel Eira y Mariana Cabrera por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República.

La comisión organizadora contó a su vez con la asistencia de la comisión de apoyo integrada por Cristian Maneiro, Javier Landinelli, Leonel Rivero, Alejandra Iervolino, Betty Weisz, Susana Lamschtein y Cecilia Pereda.

A su vez se contó con el apoyo de un consejo académico y profesional integrado por Rosario Aguirre, Rafael Bayce, Gerónimo de Sierra, Teresa Herrera, Ruben Katzman, Diego Piñeiro, María del Carmen Rico, Marcos Supervielle y Danilo Veiga.

Es a partir de este Congreso y del desarrollo de las diversas instancias que se han descrito, basado fundamentalmente en las mesas temáticas y la participación de grandes referentes de la sociología, que se ha llevado adelante la coordinación de este libro.

La estructura del libro se desarrolla en cuatro partes. La primera aborda el oficio de socióloga o sociólogo y los desafíos de la práctica en Uruguay, presentando un panorama de su inserción en el país con los resultados de una encuesta sobre situación profesional y expectativas de estos profesionales realizada por el Colegio de Sociólogos del Uruguay, a lo que se agregan dos abordajes de sociólogos sobre la profesión en general. Por un lado, Denis Merklen, sociólogo que como tantos otros compatriotas el exilio y la migración calificada lo condujeron al exterior, y que reside actualmente en Francia, y al mismo tiempo de uruguayos que mantienen su vínculo con el país, en este caso académicos, y que traen una reflexión sobre el ejercicio de la sociología frente a la cuestión social. Por otro lado, Marcos Supervielle, referente de las generaciones fundacionales de la sociología en el país, con una mirada retrospectiva de su experiencia de muchas décadas en distintos ámbitos institucionales de desarrollo de la sociología y de la sociedad uruguaya, sus avances, y también contribuciones.

La segunda parte presenta algunas miradas críticas sobre los desarro-

llos de la sociología en Uruguay, en particular tres asuntos que revisten particular interés. Los textos de Verónica Filardo y de Dinorah Motta de Souza abordan la problemática de la formación disciplinaria y enseñanza de la sociología en distintos niveles, específicamente en la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP) y en Udelar. El desarrollo disciplinar de la sociología de género y sus itinerarios en el país, temática de suma relevancia y actualidad, es presentado por Rosario Aguirre. Otra temática que adquirió mucho destaque en los debates públicos contemporáneos de la sociología es la cuestión del territorio, problemática que es tratada desde distintos ángulos en los artículos de Alfredo Falero y Juan Romero.

La tercera parte tiene como objetivo presentar el oficio de sociólogas y sociólogos a través del relato biográfico de los propios sujetos. Esta idea surgió de una iniciativa del Colegio titulada “La sociología en primera persona” para promover la reflexión y la praxis del oficio desde los propios participantes. Así pues, se ofrecen al lector once testimonios de sociólogas y sociólogos de diferentes ámbitos académicos y profesionales, de diversas generaciones, con diferentes trayectorias e inserciones profesionales. La selección de estos profesionales no es completa ni exhaustiva, más bien intenta mostrar un caleidoscopio de la heterogeneidad de trayectorias profesionales que existen, y de la que seguramente muchas más se van a desarrollar en el futuro.

Por último, la cuarta parte aborda el campo de la sociología y la defensa de la profesión en América Latina. Se presenta primero una declaración conjunta de trabajo y cooperación entre asociaciones académicas y colegios profesionales de la región. Luego el lector va a encontrar tres tipos de abordajes sociológicos: primero, un conjunto de análisis de caso sobre la situación de asociaciones y colegios de sociología y de las sociólogas y los sociólogos de distintos países (Jacob Carlos Lima sobre Brasil, Maite Descouvieres sobre Chile, Ariel Calderón González, Carmen Camacho Rodríguez, Fernando Chavarría Lizano, Marvin Rodríguez Vargas sobre Costa Rica, Angélica Cuéllar sobre México); segundo, trabajos que analizan problemáticas y campos emergentes del ejercicio profesional, como los aportes de Juan Pedro Blois acerca de la relación de la sociología y la opinión pública en la Argentina y de Fernando Filgueira sobre la antipática pero necesaria defensa política de la tecnocracia en América Latina; tercero, análisis de los diálogos de sociólogos y sociólogas uruguayos en asociaciones latinoamericanas, con los aportes de Alberto Riella sobre el desarrollo de la sociología rural latinoamericana, de Francisco Pucci sobre los vínculos con la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo

y de Karina Batthyány sobre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y los desafíos de las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana y caribeña.

Esperamos que el lector encuentre un libro que contribuya a la reflexión, el debate y la promoción de la sociología y la profesión en Uruguay, y que estas páginas inviten a las nuevas generaciones a formarse en un oficio con rigor científico y profundo sentido de compromiso con la sociedad de su tiempo.



PRIMERA PARTE

El oficio del sociólogo y los desafíos de la  
práctica en Uruguay



## La sociología y el oficio del sociólogo en Uruguay: prácticas y ámbitos

*Miguel Serna,\* Eduardo Bottinelli\*\* y Mariana Porta\*\*\**

El presente trabajo fue realizado en el ámbito del Colegio de Sociólogos del Uruguay, con el objetivo de aportar conocimiento actualizado sobre la situación de la sociología y la profesión de quienes la ejercen en el país.

Se desarrollan a continuación algunos rasgos destacables de la profesión y su proceso de despliegue en Uruguay. Posteriormente se presentan los resultados de una encuesta realizada desde el Colegio de Sociólogos sobre la situación profesional y las expectativas de estos profesionales en el país, información sobre egresos, ejercicio y declaración al Fondo de Solidaridad y aportes a la Caja de Profesionales Universitarios.

El desarrollo histórico de la sociología fue marcado por algunos períodos que están bien documentados. Gerónimo de Sierra identifica tres períodos para la sociología. Uno, fundacional, con tres hitos –1958, 1968, 1973–, caracterizado por cierto atraso en el contexto regional, al tiempo que de madurez precoz en la calidad del conocimiento alcanzado.<sup>1</sup> Un segundo período, marcado por la dictadura militar (1973-1984), que tuvo como consecuencia el cierre de las carreras de ciencias sociales en la Universidad y su reconstrucción en los centros privados de investigación social apoyados en financiamientos internacionales. En ese período, a

\* Profesor agregado, dedicación total, Departamento de Sociología, Udelar. Investigador Nivel II SNI (Uruguay). Doctor en Ciencia Política UFRGS (Brasil). Sociólogo, Udelar (Uruguay). *miguel.serna@cienciassociales.edu.uy*.

\*\* Asistente efectivo, Departamento de Sociología, Udelar. Candidato a doctor en Sociología, Udelar. Sociólogo y magíster en Sociología (Udelar). Director de Factum. *eduardo.bottinelli@cienciassociales.edu.uy*.

\*\*\* Magistra, Casa de la Universidad de Cerro Largo, *mariana.porta@cucel.edu.uy*.

1. Gerónimo de Sierra, “La sociología moderna y su profesionalización en Uruguay”, en Enrique Mazzei (coord.), *El Uruguay desde la sociología*, vol. III, Montevideo, Departamento de Sociología, 2005.

pesar del desmantelamiento universitario, se mantiene la “vocación científica” y se produce una nueva forma de internacionalización. El tercer período se ubica a partir de la restauración democrática en 1985 en adelante, momento en que se reinstalan las ciencias sociales en la vida universitaria, al tiempo que se multiplican los espacios de institucionalización de la sociología, período marcado por un ciclo de consolidación y expansión de las ciencias sociales, de la formación y profesionalización de los sociólogos.

De acuerdo con dicha periodización, nos interesa señalar algunos hitos en la creación de instituciones de producción de conocimiento y formación de la sociología. El desarrollo fundacional de la disciplina en Uruguay se caracterizó por una institucionalización tardía en perspectiva regional y en un contexto de deconstrucción, movilización sociopolítica y crisis del legado e imagen de *país modelo*. En ese período de la sociología se destacan la creación del Centro Latinoamericano de Sociología (CLAEH) y el Instituto de Ciencias Sociales en la órbita de la Facultad de Derecho de la Universidad la República (Udelar), con una primera generación de sociólogos entre 1968 y 1969.

El segundo período se desencadena por la irrupción del régimen autoritario en 1973, que tuvo impactos negativos debido a la intervención por el gobierno dictatorial de la Universidad de la República y el cierre de la Licenciatura en Sociología en 1973. El período autoritario tendrá consecuencias inmediatas negativas por la expulsión y el exilio de gran parte de los sociólogos; no obstante, a partir de la década del 1980 comienza lentamente a rearticularse la producción de investigación social y de nuevas generaciones de sociólogos aglutinados alrededor de los centros privados de investigación (CLAEH, CIEDUR, CIESU, entre otros).

El tercer período se inicia con el proceso de transición democrática de 1985 en adelante, cuando se va a producir la reinstalación del cogobierno y la vida universitaria que redundará en un desarrollo progresivo de la disciplina, de la producción de investigación social y de la formación local de profesionales universitarios.

Las décadas de 1990 y de los 2000 se caracterizaron por una progresiva diversificación académica e institucional universitaria, en ámbitos públicos y privados, en la capital y en el interior del país. Puntualmente, pueden señalarse algunos hitos en el desarrollo de instituciones en orden cronológico.

Primero, la reinstalación del Instituto de Ciencias Sociales y la Licenciatura de Sociología en la Udelar, posteriormente será uno de los promotores centrales de la creación del Departamento de Sociología con

estructura docente de enseñanza e investigación en el marco de la nueva Facultad de Ciencias Sociales de esa Universidad (1991).

También puede señalarse la creación de la carrera de Licenciatura de Ciencias Sociales, luego en Sociología, en la Universidad Católica del Uruguay (UCU, 1991), las iniciativas para la creación del Instituto de Investigación sobre Pobreza y Exclusión Social (1999) y más tarde del Departamento de Ciencias Sociales y Política (2012).

Más allá de la capital, comienzan a desarrollarse iniciativas de centros de investigación y enseñanza de la sociología a nivel universitario en el interior del país, primero con la instalación de la Licenciatura de Sociología (1989) y la creación de la Unidad de Estudios Regionales (1992) en la Regional Norte de la Udelar en la ciudad de Salto, que años más tarde desembocará en la formación del Departamento de Ciencias Sociales (2012) en el Centro Universitario Litoral Norte de la Udelar. Asimismo, en los últimos años se destaca la instalación de sociólogos en los polos de desarrollo universitario del área social de la Región Noreste y del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de la Región Este de la Udelar.

A este desarrollo a nivel nacional debe agregarse, por un lado, el proceso de internacionalización de la sociología, con egresados realizando su formación de posgrado en el exterior y, por otro, con la presencia de la sociología nacional en campos latinoamericanos, en posiciones de destaque y organización de eventos: presencia en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso; Secretaría 2018), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS; 1957, 1987, 2017), la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU; sede 2018), la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST; sede 2007), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal; investigadores de destaque) e internacionalización de las publicaciones.

El desarrollo institucional de la sociología en el ámbito universitario se expresó en una ampliación progresiva de la oferta de formación de profesionales en la enseñanza de grado y posgrado; en ese sentido, a título de reseña cronológica de los principales programas, destacamos las que se muestran en la tabla 1.<sup>2</sup>

Otro hecho relevante para los sociólogos de nuestro país en el período más reciente es la expansión del espacio profesional, más allá de los ámbitos universitarios, a partir de un importante despliegue en el campo de políticas públicas del Estado, de organizaciones de la sociedad civil y

2. Las tablas y los gráficos son en su totalidad elaboración propia.

**Tabla 1. Programas de formación de Sociología en la enseñanza universitaria de grado y posgrado en el país**

<b>Formación de grado</b>
Licenciatura en Sociología, Udelar. Planes de estudio 1971, 1992 y 2009 Licenciatura en Sociología, UCU. Plan de estudio 1991
<b>En el interior</b> Licenciatura en Sociología. Plan de estudio 1992. Licenciatura en Ciencias Sociales. Plan de estudio 2009
<b>Formación de posgrado</b>
Diplomas de Sociología Urbana y de Sociología del Trabajo, 1994-1995, Udelar Maestrías en Sociología (1996-1997), en Sociología y Métodos Avanzados de Investigación (2016), en Estudios Contemporáneos de América Latina (2014), en Políticas Públicas (2016), Udelar Doctorado en Sociología (2003-2004), Udelar Diploma y Maestría en Políticas Sociales, CLAEH, en desarrollo local, diploma 1995; Maestría 1996, UCU Maestría en Políticas Públicas (2017), UCU
<b>En el interior</b> Diploma en Gestión del Desarrollo Regional, 1997

del mercado profesional privado. La ampliación del campo profesional contribuyó a la creación de nuevas demandas, como la inclusión de la profesión en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en marzo de 2006.

El total de egresados en sociología registrado en las universidades que otorgan titulación en Uruguay es de 1.170 en total, de los cuales 1.062 son egresados de la Universidad de la República y 108 de la Universidad Católica (tabla 2).

En lo que se refiere a la declaración de ejercicio de la profesión, tenemos que la Caja de Jubilaciones de Profesionales (CJPPU) registra 149 inscriptos con declaración de ejercicio en 2017. Solamente el 20% de los sociólogos está registrado como activo. Sin embargo, comparado con otras disciplinas del área social (políticos, antropólogos y licenciado en Relaciones Internacionales), los sociólogos tienen el mayor porcentaje de activos (tabla 3).

Por otro lado, sobre el total de activos que registra la CJPPU (59.052), los sociólogos representan el 0,3%. Sin embargo, al comparar sobre el total de activos que declaran no ejercicio en la CJPPU (71.020), los sociólogos tienen una incidencia mayor que entre los activos; el 0,8% del total de activos que declaran no ejercicio son de sociología. En cuanto a

**Tabla 2. Número de egresados en Sociología de la Universidad de la República y de la Universidad Católica**

<b>Año</b>	<b>Udelar</b>	<b>UCU</b>
1990	52	
1991	74	
1992	20	
1993	21	
1994	29	
1995	49	1
1996	46	2
1997	37	5
1998	30	9
1999	21	9
2000	21	3
2001	20	5
2002	27	7
2003	31	6
2004	34	6
2005	26	4
2006	49	6
2007	32	0
2008	56	1
2009	43	5
2010	42	1
2011	54	8
2012	45	5
2013	81	3
2014	50	9
2015	40	7
2016	32	6

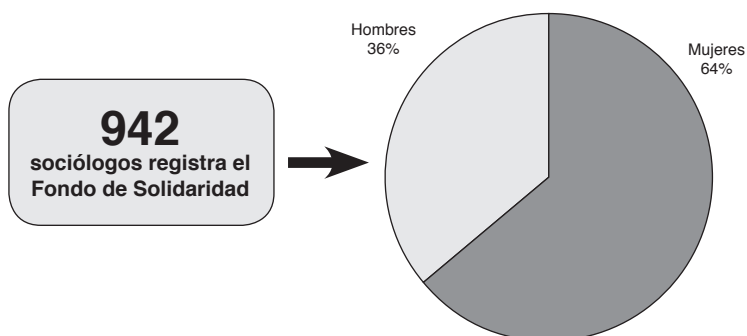
los aportes realizados, los sociólogos solamente aportan en las cinco primeras categorías de las diez que tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales del Uruguay (tabla 3).

Por su parte el Fondo de Solidaridad registra 942 sociólogos, siendo el 64% mujeres. El 82,5% residen en Montevideo y el resto en el interior, porcentaje similar al que registran los inscriptos en la CJPPU (83%) respecto del lugar de residencia (gráfico 1).

**Tabla 3. Socios activos de profesiones de ciencias sociales a la CJPPU, 2017**

	Activos	No ejercicio	Total	% activos	% no ejercicio
Sociología	149	595	744	20,0%	80,0
Ciencia Política	46	257	303	15,2%	84,8
Relaciones Internacionales	128	1.948	2.076	6,2%	93,8
Antropología	28	163	191	14,7%	85,3

**Gráfico 1. Sociólogos y sociólogas registrados en el Fondo de Solidaridad**



### **Resultados de la Encuesta sobre la Situación Profesional y Expectativas de Sociólogos en Uruguay**

Con el objetivo de tener una primera aproximación a la situación de la inserción profesional de los sociólogos, el Colegio de Sociólogos del Uruguay realizó una encuesta de 221 casos efectivos (estimando una participación del 18% del total de sociólogos en el país) entre el 9 y el 14 de octubre de 2018.

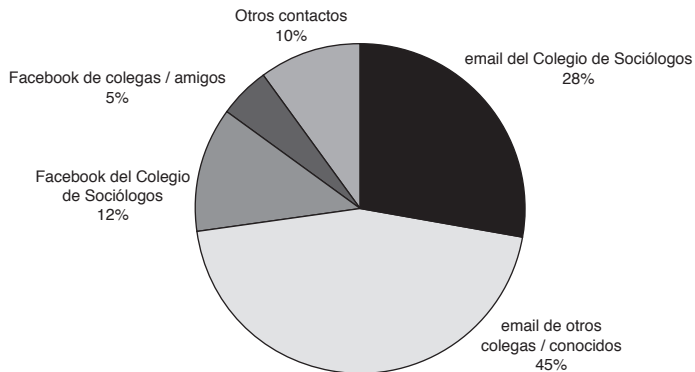
La encuesta se llevó a cabo online, autoadministrada con formulario de Google, mediante contactos y técnica de muestreo de bola de nieve. El 40% de los encuestados manifestó haberse enterado de la encuesta a través de correo electrónico y redes sociales del propio Colegio de Sociólogos, mientras que el restante 60% lo hizo a través de redes sociales y correos electrónicos de colegas o conocidos (gráfico 2).

En cuanto al perfil sociodemográfico de los sociólogos, el 94,4% de los encuestados nació en Uruguay y el 95,8% vive actualmente en el

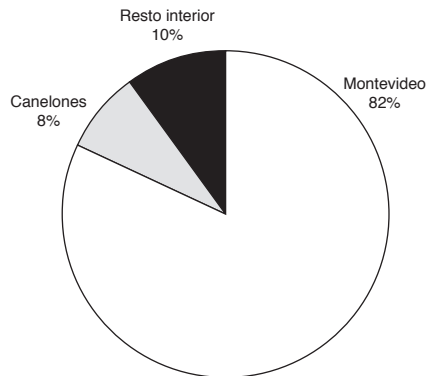


país. El 82% de ellos vive en Montevideo y el 18% en el interior, con la distribución por departamentos que se puede apreciar en el gráfico 3, lo que expresa una fuerte concentración de graduados en la capital del país.

**Gráfico 2. Cómo se enteró de la encuesta**



**Gráfico 3. Lugar de residencia de los encuestados**



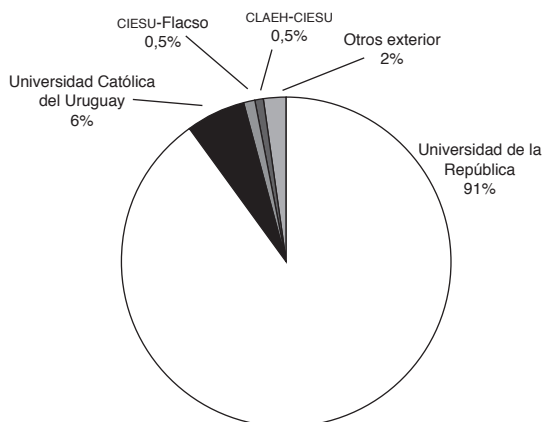
Con relación al perfil etario, el 64% de los sociólogos tiene entre 30 y 49 años, con un promedio de 41 años.

Por otro lado, respecto de la distribución según identidad de género, el 56% se identifica como mujer, el 43% como hombre y el 1% con otra identidad.

Asimismo, se indagó sobre identificación de ascendencia étnico-racial: el 87% declara tener ascendencia blanca y el 13% otro tipo de ascendencias.

Se investigó respecto del perfil de formación educativa de los sociólogos: los resultados muestran que el 91% obtuvo tu titulación universitaria de grado en la Universidad de la República, el 6% en la Universidad Católica del Uruguay y el 2% en universidades del exterior (gráfico 4).

**Gráfico 4. Institución en la cual se graduó**

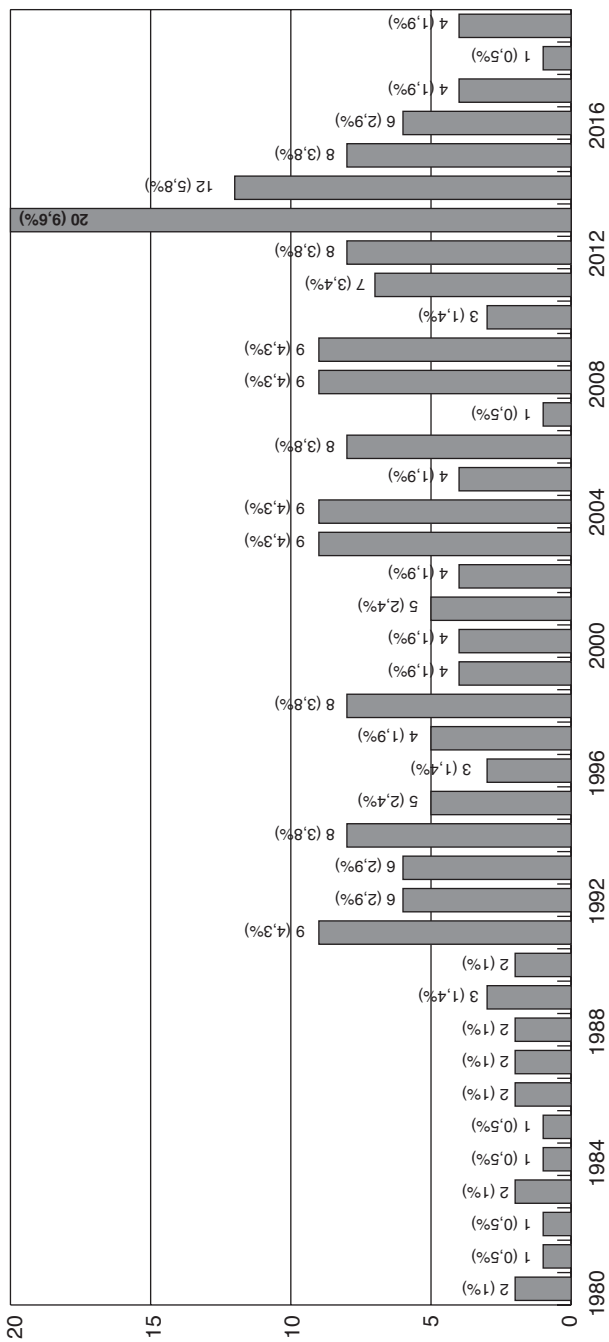


Con relación al año de graduación, puede apreciarse en el gráfico 5 el número de graduados por año con puntos de alza. Se cree que estos responden a cambios institucionales –como la reapertura de la carrera en el retorno a la democracia– y a cambios en los planes de estudio, como es el caso de 2013.

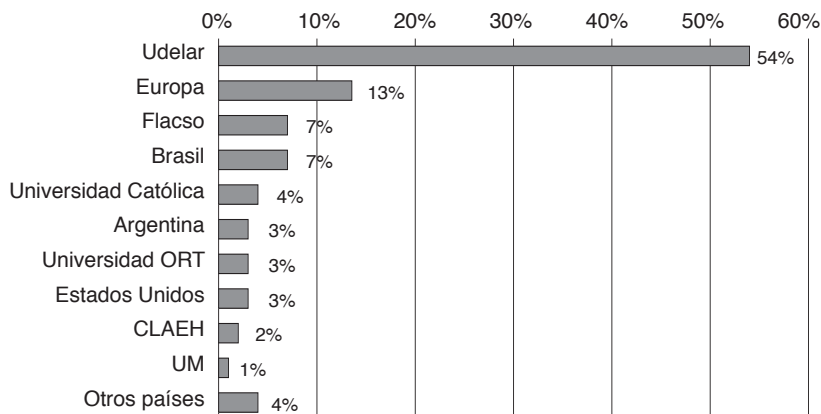
Es destacable que el 82% de quienes respondieron la encuesta están cursando o han terminado algún posgrado. El 54% realiza o realizó su posgrado en la Udelar, el 10% en universidades privadas nacionales y el 36% en el exterior (gráfico 6).

Respecto de la situación laboral, la encuesta refleja que el 77% tiene un trabajo remunerado como sociólogo, mientras que el 20% tiene un trabajo remunerado no vinculado a la profesión. Por otro lado, en cuanto a los ingresos económicos, el 54% manifiesta que el trabajo que constituye su mayor fuente de ingresos tiene mucha relación con la sociología y el 27% dice que tiene bastante relación. En ambos casos se puede apreciar una brecha de género, en cuanto es mayor el porcentaje de hombres que tiene un trabajo remunerado como sociólogo y es también más elevado el porcentaje de hombres cuyo trabajo con mejor remuneración tiene mucha o bastante relación con la sociología (gráficos 7, 8 y 9).

Gráfico 5. Años de graduación y cantidad de graduados

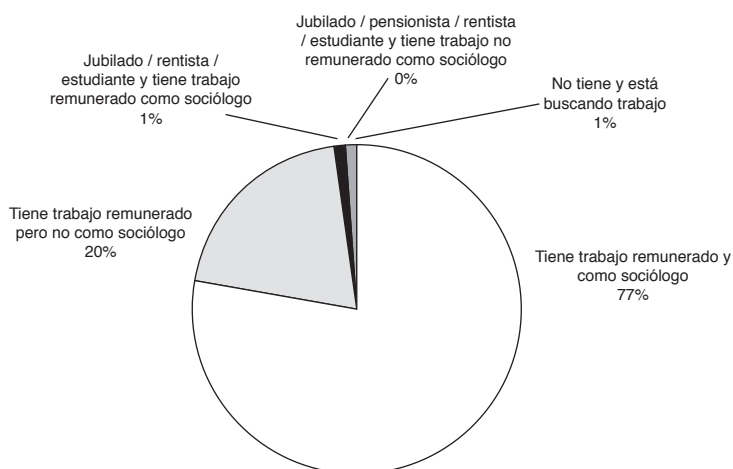


**Gráfico 6. Institución en la cual realizó el posgrado**

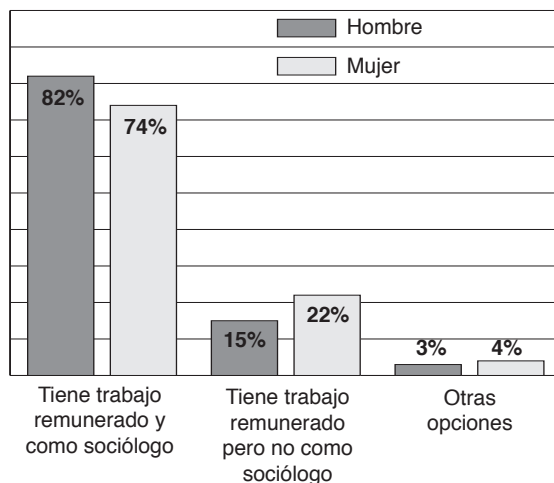


En cuanto a la distribución del empleo por categorías, se observa que el 68% tiene como principal trabajo un empleo público y el 18%, un empleo privado. El 6% es patrón o trabaja por cuenta propia. La misma tendencia en la relevancia del empleo público se observa respecto del segundo trabajo, donde el 42% de los encuestados manifiesta estar empleado en el sector público (gráfico 10).

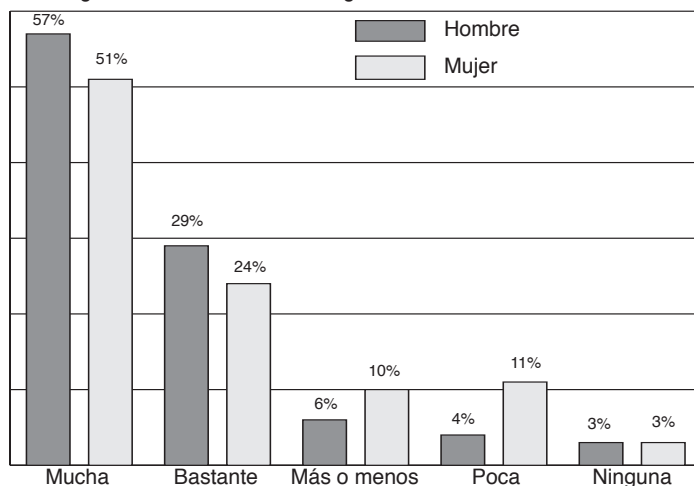
**Gráfico 7. Trabajo remunerado y vinculación con la profesión**



**Gráficos 8 y 9. Trabajo como sociólogo y percepción de ingresos económicos según vínculo con la profesión**

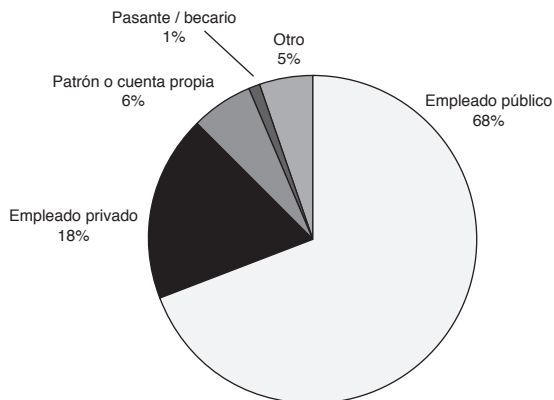


En el cargo que es su mayor fuente de ingresos, ¿su desempeño tiene alguna relación con la sociología?



Se preguntó también acerca de las actividades que realiza en su trabajo. Se plantearon las siguientes opciones: docencia, investigación, gestión (cargos de dirección, coordinación de programas o proyectos), consultoría o asesoría, trabajo de relacionamiento con el medio, intervención social

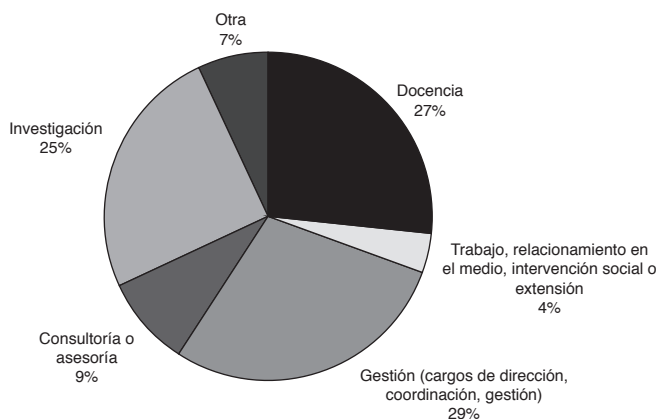
**Gráfico 10. Categoría ocupacional del principal trabajo**



o extensión u otros. Como resultado, se observa que el 29% realiza algún tipo de gestión, el 27% hace docencia, el 25% hace investigación y el 9%, consultoría (gráfico 11).

Con referencia al número de horas de trabajo semanal, el 43% trabaja más de 40 horas por semana, el 31% entre 31 y 40 horas y el 21% entre 21 y 30 horas. Se preguntó además cuántas de esas horas de trabajo en la semana son específicamente en la profesión de sociólogo. Las respuestas, que se pueden ver más detalladas en el gráfico 12, indican que el 58% trabaja más de 30 horas semanales en la profesión.

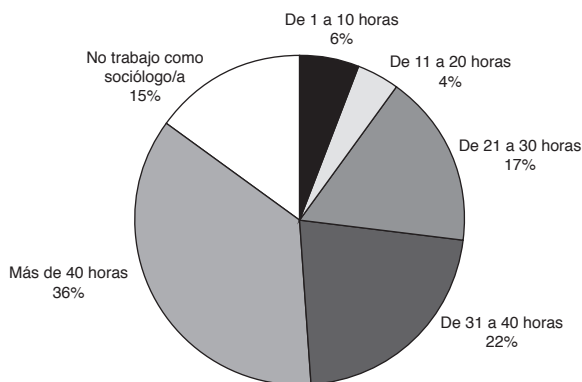
**Gráfico 11. Actividades que realiza en su trabajo**



Frente a la pregunta acerca de los motivos para pertenecer a una red de sociólogos, se releva en primer lugar que el 40% considera que es importante el propósito de socialización, de encuentro con colegas. En segundo lugar, aparecen el acceso a la formación y la defensa del espacio profesional, con 37%. En tercer lugar, la identificación con los fines y objetivos de la asociación.

El Colegio de Sociólogos del Uruguay es la única red uruguaya de sociólogos del país. Se pide a los encuestados que seleccionen las tres principales contribuciones de dicha organización. En respuesta se señala como principal la realización del Congreso Nacional de Sociólogos (36%); en segundo lugar, la difusión y promoción de la sociología en el país (26%) y en tercer lugar, promover el encuentro anual de sociólogos del país (19%). Se entiende, por otro lado, que la principal actividad que debería realizar el Colegio es facilitar información sobre la disciplina, según el 38%; participar en iniciativas de compromiso de la sociología con causas colectivas, según el 32%, y participar en la defensa de la sociología en la opinión pública, según el 30% (gráfico 13).

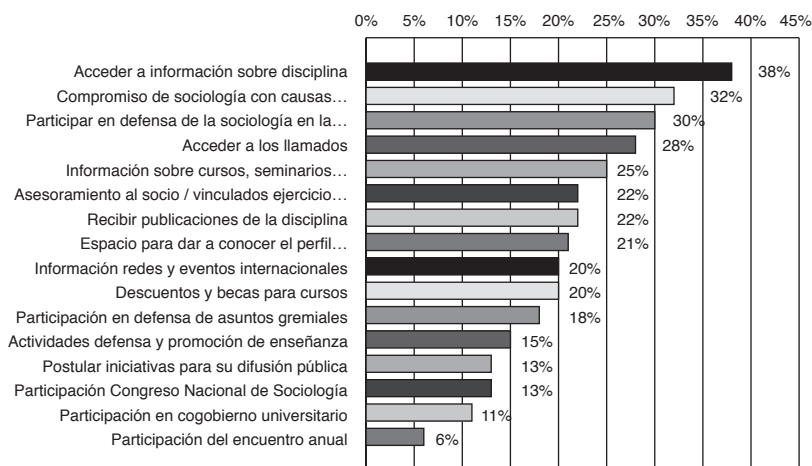
**Gráfico 12. Horas de trabajo en la profesión**



### **A modo de síntesis**

El estudio refleja un panorama de las sociólogas y los sociólogos del país, mostrando una centralidad montevideana, más bien de mediana edad (el 76% menores a 49 años) y con un perfil de egreso más feminizado (56% son mujeres).

**Gráfico 13. Principales actividades que debería ofrecer el Colegio de Sociólogos del Uruguay**



Hay 1.170 sociólogas y sociólogos egresados de las universidades que otorgan el título, de los cuales 1.062 egresaron de la Universidad de la República y 108, de la Universidad Católica.

Se aprecia una centralidad de la Universidad de la República en la formación de profesionales de ambos sexos: el 91% en formación de grado y el 54% en posgrados son egresados de esa Universidad. Es destacable que el 82% de los encuestados, varones o mujeres, tienen algún curso de posgrado realizado, finalizado o no.

Existe una fuerte vinculación con el desarrollo laboral vinculado con la profesión: el 81% trabaja en la profesión; de ellos, el 58% tiene dedicación completa.

Por otro lado, existe una centralidad importante del sector público: el 74% está vinculado a ese sector. El desarrollo de la profesión se da en 41,5% en el sector público no académico, 32,5% en el sector público académico y 10,4% en el sector privado no académico.

Se aprecia una brecha de género respecto del desarrollo de la actividad vinculada a la profesión, y también en el peso de los ingresos vinculados a la profesión en sus ingresos totales.

Con relación a las tareas realizadas: 29% está vinculado a la gestión, 27% realiza tareas de docencia, 25% a la investigación y 9% a la consultoría o asesoría.

En la CJPPU hay 744 afiliados, de los cuales 149 son socios activos. La



sociología muestra una tasa mayor de activos que profesiones similares como ciencia política, relaciones internacionales o antropología.

Con referencia a la pertenencia a redes profesionales y académicas, el 64% pertenecen al Colegio de Sociólogos del Uruguay y el 36%, a una asociación de sociólogos o red temática internacional.

Finalmente, el Colegio de Sociólogos aparece posicionado como un lugar de congregación a partir del propio Congreso Uruguayo de Sociología y también como un lugar de difusión y defensa de la profesión.

### **La dinámica reciente y los nuevos retos del oficio del sociólogo**

Luego de seis décadas de la creación de centros universitarios para la formación y producción de conocimiento sociológico en el país, el panorama contemporáneo de la sociología muestra un desarrollo vital del mundo académico universitario hacia el campo profesional en el Estado, la sociedad civil y el mercado.

Este tránsito fue posible por la multiplicación de ámbitos de producción de saberes sociológicos desde la investigación básica hasta la circulación y aplicación de investigación social, el saber científico, el saber técnico especializado, el saber comprometido, incluso la crítica social. Al mismo tiempo se produce una creciente apropiación social del conocimiento sociológico en distintos campos de la sociedad, desde las políticas públicas, el sistema educativo, las agencias de cooperación internacional, los actores colectivos (gremios, movimientos sociales, ONG, empresas), hasta la reflexividad crítica e influencia en la formación de la opinión pública.<sup>3</sup>

En las dinámicas de desarrollo, también se destacan cambios en el modo de producción del oficio del sociólogo, de una primera generación volcada a la generación de pilares de un conocimiento sociológico general que diera cuenta de la estructura social del país hacia una creciente división social del trabajo científico que produce múltiples sociologías especializadas en áreas temáticas diversas. Asimismo, se registran cambios en las herramientas para la producción de conocimiento sociológico, del análisis social macro a la preocupación por el método.

En estas transformaciones en el modo y los ámbitos de creación de

3. Sobre los usos sociales del conocimiento social en las sociedades contemporáneas de América Latina se puede consultar José Joaquín Brunner y Osvaldo Sunkel, *Cocimiento, sociedad y política*, Santiago de Chile, Flacso, 1993, cap. 1 y 2.

conocimiento social aparecen nuevos roles y perfiles profesionales: el académico, el experto, el sociólogo comprometido, el intelectual en el ágora pública.

Dinámicas y transformaciones que suponen nuevos retos que exigen la defensa y promoción activa del oficio del sociólogo en su desdoblamiento de producción de conocimiento riguroso y crítico. A título ilustrativo:

- La pequeñez de la comunidad académica local.
- El asentamiento de la demanda en el flujo de egresados.
- La localización de la mayoría del cuerpo de sociólogos en Montevideo, con una aún incipiente expansión al interior del país.
- La vulnerabilidad del mercado de trabajo profesional, que tuvo una expansión vía Estado, con espacios aún acotados en el ámbito privado y de la sociedad civil.
- Un perfil de formación que avanzó a un énfasis excesivo de la metodología y la investigación empírica, pero muchas veces desarticulado del análisis social fundamentado teóricamente.
- Una profesión relativamente nueva en el país, pero en un espacio creciente de competencias con otros profesionales, ante una multiplicación de saberes expertos y científicos que conviven entre prácticas de complementariedad interdisciplinaria y competencia en campos comunes de trabajo.
- Un cambio de contexto externo de la sociedad con un retorno a las tradiciones y creencias más conservadoras del sentido común, en contraposición y desconfianza del conocimiento científico, más aún del producido por la sociología y las ciencias sociales.

## El ejercicio de la sociología frente a la cuestión social

*Denis Merklen\**

*El velo semitransparente del desasosiego  
un día se vino a instalar  
entre el mundo y mis ojos.  
Yo estaba empeñado en no ver lo que vi,  
pero a veces la vida es más compleja de lo que parece.*

Jorge Drexler, “La vida es más compleja de lo que parece”

El IV Congreso Uruguayo de Sociología nos ofrece la posibilidad de reflexionar aquí sobre las políticas sociales y, más precisamente, sobre el Estado social en el Uruguay frenteamplista, sobre las continuidades y las innovaciones introducidas en ese campo a partir de la llegada de la izquierda al gobierno. Reflexionar en definitiva sobre el Estado social del siglo XXI, tal como este se presenta a dos décadas ya de iniciado este siglo, tal como lo imaginamos y lo proyectamos hacia adelante, no solo en Uruguay sino frente a un capitalismo agresivo que ha recuperado la iniciativa de innovación sobre todos los planos de la vida, la producción de conocimiento incluida.

Reflexionar sobre el Estado social en el marco de un congreso de sociología destinado a pensar el oficio del sociólogo en tiempos de cambio nos obliga a interrogarnos sobre el modo en que hacemos sociología. ¿Cómo piensa la sociología la cuestión social y cómo piensa al Estado frente a esa cuestión social así pensada? Es decir, hay que comenzar por examinar la manera en que el Estado se vincula con las relaciones sociales

\* Profesor de Sociología, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Miembro del Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. [denis.merklen@sorbonne-nouvelle.fr](mailto:denis.merklen@sorbonne-nouvelle.fr)

que estructuran y organizan la vida, la vida cotidiana y la de los grupos y de las categorías en que se divide la sociedad.

Pero no estamos aquí en el espacio público o, al menos, no directamente. Estamos apenas en el seno del mundillo de los sociólogos, aquel en el que cooperamos para producir conocimiento y en el que nos damos las normas para su producción. Y lo hacemos, por cierto, habitados por un muy estricto sentido de la responsabilidad, que nos obliga a la conciencia de saber que la sociedad nos financia, porque la mayoría de nosotros trabajamos en el empleo público, y nos concede algunos privilegios a cambio de que la ayudemos a conocerse mejor y a pensarse de un modo singular, gracias a la inteligibilidad que brinda el “razonamiento sociológico”, por utilizar una expresión de Jean-Claude Passeron. Esa relación entre espacio público, espacios sociales y mundo de la universidad constituye una parte importante de aquello sobre lo que debemos discutir cuando queremos detenernos a observar el modo en que hacemos sociología.

Nuestro propósito es antes que nada el ejercicio de la profesión o del “oficio”, *le métier*, como llamaron a nuestra actividad Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. Se trata aquí entonces de reflexionar sobre cómo ayuda la sociología uruguaya a la sociedad uruguaya a pensar la cuestión social y el Estado social. ¿Qué herramientas le damos al Estado para actuar sobre la sociedad? ¿Y cuáles le damos a la sociedad para criticar esa misma acción del Estado? ¿Cuándo y cómo vamos al espacio público para presentar lo que sabemos? Y cómo y cuándo asistimos al espacio público para someternos a la crítica de quienes saben también, no desde un supuestamente bobo “sentido común”, sino desde unas ciertamente muy ricas experiencias sociales. Debemos atención a estas cuestiones fundamentales pues es de ese modo como reembolsamos, parcialmente, esa deuda que tenemos con la sociedad. Evidentemente, ello obliga a evaluar nuestras investigaciones introduciendo la vida social y política en el seno de nuestra universidad, un ejercicio que conlleva los más altos riesgos. Sabemos delpreciado valor de la autonomía universitaria. Pero sabemos también de los riesgos que corre una universidad que no piense en el modo en que el conocimiento que produce se relaciona con el mundo que la rodea.

“Políticas sociales y derechos” reza el título del espacio en el que el Congreso de Sociología ha ubicado nuestra conferencia, y quisiera subrayar la opción por algunos términos que refieren a algunos conceptos y categorías. Hasta aquí no hemos hecho referencia alguna justamente a esos términos propuestos por los organizadores del Congreso, “políticas sociales y derechos”. Hemos preferido la expresión “Estado social” a la

de uso más corriente, la inglesa *welfare state*. Y dijimos “cuestión social” y no “pobreza” a sabiendas de que en el Uruguay de hoy se prefiere “pobreza” para nombrar lo que nosotros llamamos “cuestión social”. No hay nada de azar ni de distracción en esas elecciones. Se trata de cuestionar, por medio de ese desplazamiento lexical, esa alianza cognitiva que se ha anudado entre las ciencias sociales –sociología incluida– y la política –prensa, gobierno y partidos políticos incluidos–.

Permítaseme referirme ahora a un proyecto de investigación que acaba de llegar a término y que condujimos junto a nuestra colega Verónica Filardo sobre la experiencia de las políticas sociales implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Uruguay y cuyos resultados estamos justamente presentando en este momento.<sup>1</sup> En ese trabajo hicimos justamente un esfuerzo por pensar la cuestión social en el Uruguay de hoy y por pensar en lo que el Estado hace frente a ella, tras quince años de gobierno de izquierda. Se trata también de observar a través de métodos de tipo etnográfico la ampliación del Estado social uruguayo y las políticas y los dispositivos que ha puesto en marcha desde la creación del Mides en 2005. Es también una investigación sobre la experiencia social del Estado, sobre el modo en que las clases populares viven ese remodelado Estado uruguayo. “Experiencia social” no es solo representaciones sociales. Buscamos saber cómo lo piensan, qué dicen de él y qué hacen con él o frente a él. Estamos presentando los resultados de esa investigación aquí en este congreso, frente a los técnicos y las autoridades del Mides, al público a través de la prensa, la radio y la televisión, en algunos ámbitos militantes, frente a las propias personas y grupos cuya vida y experiencia nos propusimos someter a estudio. De ahí entonces la particular importancia de la relación del ejercicio de nuestro oficio con las diferentes instancias de nuestra vida social: técnicas, políticas, de espacio público, de espacios sociales o ámbitos de discusión. Y lo hicimos a sabiendas de que los textos de inspiración etnográfica son prácticamente inexistentes en la producción de la sociología uruguayana. Desde ese punto de vista, nuestro trabajo representa una novedad en el espacio de la investigación local.<sup>2</sup>

1. Verónica Filardo y Denis Merklen, *Detrás de la línea de la pobreza: la vida en los barrios pobres de Montevideo*, Buenos Aires, Gorla-Pomaire, 2019.

2. Un capítulo aparte merecería la cuestión de por qué la sociología uruguayana no practica la etnografía, o la investigación por inmersión o por integración social, una práctica muy frecuente y de ricos resultados en la Argentina y Brasil, por ejemplo, por no citar el caso de la sociología francesa donde estos métodos son habituales

El Mides conoce muy bien sus acciones, la población sobre la que actúa, y tiene perfectamente definidos los problemas que se propone combatir, definidas las metodologías para esa acción, y hace un muy preciso seguimiento de los impactos o las consecuencias de su acción. Lo hace de dos modos. A través de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (Dinem) con toda una batería de indicadores y estudios que el propio Ministerio elabora. Y a través de un riquísimo proceso de discusión interno, pero que llega al Estado desde fuera de él ya que lo traen los “operadores” (que es el nombre que se les da a los trabajadores sociales que implementan la acción social) a partir de la experiencia cotidiana que ellos hacen en los barrios y junto con las familias de las que se ocupan. Se despliega y se construye así una afilada inteligencia colectiva que permite sentir el pulso de la acción del Estado casi cotidianamente. Subrayo esto porque no es frecuente que en un ministerio se produzca un diálogo tan aceitado y de tal horizontalidad. Sin embargo, esos debates internos a la acción pública no habían merecido, hasta ahora, el examen sociológico. A esto se le suma la producción de conocimiento que aportan otros agentes públicos, tan importantes como el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, ¿qué aportar y con qué propósito a partir de una nueva investigación?

“La vida es más compleja de lo que parece...” (*cantabile*, sobre melodía de Jorge Drexler). Estos versos y estos compases de esa canción contienen con simpleza la hipótesis que funda el punto de partida de nuestra investigación: que la vida es más compleja de lo que parece luego de que la sociología ha pasado por allí para simplificarla. Simplificarla, claro, para poder categorizarla, pensarla y dar herramientas o puntos de apoyo para actuar sobre ella. La sociología simplifica la vida para sacarla de esa complejidad que vuelve toda acción imposible. Es el natural proceso de conceptualización propio del conocimiento científico y de la consecutiva creación de tecnología para intervenir en ese mundo complejo.

¿Cómo ocurrió esa simplificación? Caricaturizando apenas, podemos decir que las políticas sociales del Mides fueron diseñadas y son evaluadas y discutidas en el Uruguay de hoy a partir de su capacidad para “combatir la pobreza”. Esto es así porque ese fue el espíritu con el que fue creado el Mides frente a la terrible urgencia social en la que vastos sectores de la ciudadanía se encontraban en el comienzo de siglo. Así fue presentada su misión en el espacio público, respondiendo a una de las grandes promesas

---

desde los muy difundidos trabajos de Pierre Bourdieu sobre el campesinado kabil o sobre “el baile de los solteros” en el Bearne.

con las que la izquierda llegaba al poder: reducir la indigencia, combatir la pobreza, achicar el desempleo... atacar la cuestión social, preferimos nosotros. Pero no fueron así las cosas. La expresión "cuestión social" no estaba presente en el discurso público y había caído en el olvido de una izquierda que actuó, debe decirse, con cierta distracción adoptando las categorías que, no debemos ocultárnoslo, habían elaborado sus enemigos.

En la década de 1980, el modo en que las sociedades latinoamericanas tenían de enfrentar la cuestión social sufrió un vuelco de ciento ochenta grados. Hasta entonces, en el centro de la cuestión social estaba la figura del trabajador y todas las preguntas giraban en torno a la problemática del trabajo. En esos años, como consecuencia de una serie de artilugios sobre los que hemos escrito mucho, se dejó de prestar atención al trabajador para no mirar sino al pobre.<sup>3</sup> Este cambio no se produjo porque se tratase de personas diferentes, porque el pobre fuese otro que el trabajador, y tampoco porque las actividades o las prácticas hubiesen cambiado, sino porque las ciencias sociales comenzaron a considerar el problema de modo diferente y le dieron al Estado una nueva categoría y una nueva problemática resumidas en el término "pobreza". Esta nueva problematización se sintetiza básicamente a través de la "curva de la pobreza" con la que se representa gráficamente la evolución del número de personas o de hogares que están por encima o por debajo de la famosa "línea de la pobreza", a su vez determinada por un valor de referencia del ingreso de las personas y los hogares. Unos años después, cuando comenzó a hacer agua el proyecto político que en la década de 1990 algunos llamaban "del Consenso de Washington", apareció otra curva junto con la de la pobreza. La curva del desempleo permitió recuperar una parte del terreno perdido por aquel cambio tan radical que llevó del trabajador al pobre. Muchos comenzaron así a hacer sonar la alarma y se atrevieron a decir que el trabajo no había desaparecido de la faz de la Tierra como algunos tan imprudentes como irresponsables se atrevían a afirmar alegremente, e incluso se atrevieron a recordar que el trabajo constituía el primordial principio organizador de nuestras sociedades y de los individuos que las componen.<sup>4</sup> Se pudo así observar que había una estrecha pero no por ello

3. Cf. Denis Merklen, "Du travailleur au pauvre", *Études rurales*, N° 165-166, 2003, pp. 171-196, y "Un pobre es un pobre: la sociabilidad en el barrio, entre las condiciones y las prácticas", *Sociedad*, N° 11, 1997, pp. 21-64.

4. El monumental libro de Robert Castel, *Las metamorfosis de la cuestión social: una crítica del salariado* (1995 por su primera edición en francés) cumplió un papel fundamental en ese intento de retorno a la centralidad del trabajo.

menos compleja relación entre la evolución de las curvas de la pobreza y del desempleo. Hacia el final de los años 90 esas dos curvas aumentaban simultáneamente, lo que daba razón al pensamiento de izquierda que así podía denunciar al neoliberalismo con el apoyo de pruebas estadísticas. Pero el resultado de ello fue que en lugar de volver a su primigenia concepción de una cuestión social basada en el trabajo que se dedicara a observar y a permitir actuar sobre las relaciones sociales, la izquierda mantuvo, adoptó e hizo propia la curva de la pobreza como prisma de observación de la cuestión social, pero sumándole la curva del desempleo.

Las curvas proveyeron a la izquierda de un arma muy eficaz. Y así llegaron al poder, con las curvas en la mano. Y a poco de andar, esas curvas tuvieron un comportamiento virtuoso. Las políticas económicas y sociales implementadas por los gobiernos de izquierda en América Latina produjeron un descenso de la curva de la pobreza y junto con ella la del desempleo. De ningún modo se observó críticamente a estos indicadores pues brindaban al mismo tiempo la posibilidad de una crítica del modelo anterior y la convicción de que los cursos de acción elegidos eran los correctos. Medidas la derecha y la izquierda con la misma vara, se hacía evidente que la opción de izquierda daba mejores resultados.

Fue por ello que los gobiernos progresistas no cambiaron ese modo de mirar la cuestión social producido y elaborado bajo el neoliberalismo, porque esos indicadores los reconfortaban, les daban razón. Lo que ellos ponían en práctica resultaba eficaz a la luz de los mismos criterios que habían utilizado para evaluar a los gobiernos neoliberales de los años 90 y que eran sus principales enemigos. Allí se encuentra una de las razones por las que la llegada de la izquierda al poder no se tradujo por un cambio en el enfoque neoliberal de la cuestión social.

No es cierto que ningún cambio se haya producido. Aparecieron otros tópicos. Pero si uno recuerda el miedo presente entre las filas de la izquierda de perder las elecciones en octubre de 2019 –como efectivamente sucedió–, lo que se escuchaba decir era: “Pero, miren, el coeficiente de Gini, la curva de la pobreza y de la indigencia, todos los indicadores han bajado. No puede decirse que nos fue mal”. Seguían remitiéndose a ese mismo referencial teórico y político.

Pero se olvida que esta manera de pensar condujo a la reorganización de las políticas sociales. Antigüamente, cuando la figura que orientaba la acción social era la del trabajador, las políticas sociales determinaban muy precisamente el modo en que el Estado alcanzaba a las clases populares, que en esa época se llamaban clases trabajadoras o clase obrera. Los dos canales principales a través de los cuales el Estado actuaba eran



la protección del trabajo y la de la familia. El corrimiento hacia la idea de la pobreza reemplazó estos canales por un complejo panel de políticas específicas dentro del cual, tardíamente, entra íntegramente el Mides con sus programas y sus políticas. A las políticas que componían ese panel se las pensó a través de las ideas de descentralización y focalización. En lugar de generalistas, debían ser específicas (para tratar cada problema), y el territorio se convirtió en el canal privilegiado por el Estado para acceder a las clases populares. Lo que se procura desde entonces es estar cerca del pobre. La idea de pobreza que subyace a esta concepción del Estado social tiene una característica muy particular. La pobreza ya no es concebida como empobrecimiento, como un proceso, sino como un estado en el que se encuentran las personas; de ahí expresiones del tipo “situación de pobreza”. Para combatir la pobreza es necesario *sacar* a los pobres de la pobreza. Pero el triunfo político de la concepción neoliberal comienza cuando se separa la pobreza del empobrecimiento, cuando se observa la situación de pobreza más que los procesos que conducen a ella. Es entonces cuando la política social se concentra más sobre el pobre para sacarlo de la pobreza que sobre las dinámicas que conducen al empobrecimiento.

Esto tiene consecuencias muy profundas y se expresa de muchos modos. Uno de los terrenos en los que se observan sus consecuencias es en la distinción que realizan los economistas, a partir de un criterio contable entre transferencias “contributivas” y “no contributivas”. Las primeras son aquellas en las que el beneficiario contribuye, por ejemplo, la jubilación. Quien se beneficia con ella ha contribuido ya al financiamiento del sistema pagando la jubilación de la generación que lo precede. En cambio las segundas, como un subsidio a un discapacitado, no lo son porque se supone que el beneficiario no contribuye o no contribuyó al sistema en cuestión. En las primeras, antes cotizo o contribuyo, luego me beneficio. En las segundas, el beneficiario recibe sin haber dado nada a cambio. Esta idea reposa en un razonamiento puramente contable. Porque si pensamos como pensábamos antes, que no era una mala manera de pensar, la protección de los riesgos sociales como la enfermedad, el accidente o la vejez era legitimada por el hecho de que la participación en la vida social conlleva riesgos y que la sociedad debe proteger a sus miembros de ellos. Por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada corre una cantidad de riesgos provocados por su condición, y por ello la protegemos con una licencia que la dispensa de la obligación de trabajar y a esto le sumamos toda una serie de protecciones. Tales economistas dirían que eso no es contributivo porque no consideran el embarazo como una contribución a

la vida social. Si no contribuye financieramente al sistema, no contribuye. Lógica de contador.

Lo mismo ocurre con las transferencias destinadas a combatir la pobreza. Se piensa que los pobres no hacen nada para contribuir al bien público, al bienestar colectivo o a la vida en sociedad. Esto es más o menos lo mismo que decir que “se le da plata a unos vagos que la reciben de arriba”, solo que se lo dice con un vocabulario técnico: “No contribuyen”. Esta idea de que el pobre “no contribuye” es políticamente nefasta, pero el lenguaje técnico la vuelve aceptable. Porque despojamos al pensamiento social del pensamiento político, de la sensibilidad política. Lo convertimos en un procedimiento técnico de observación que como tal es exacto, es decir, los beneficiarios de esos programas no contribuyen monetariamente y directamente (porque sí contribuyen a través de los impuestos que pagan, como el IVA, por ejemplo) a financiar el programa. Desde el punto de vista contable, el economista tiene razón. Pero no podemos detener allí el razonamiento sobre el Estado social.

Nuestra investigación arranca al constatar que la vida es más compleja de lo que la simplificación operada sobre la cuestión social a través de la noción de pobreza deja parecer. Una observación, por cierto, que puede ser considerada tan simplista como boba. ¿Llegar hasta aquí para afirmar que aquello que simplificamos es menos complejo que lo que acabamos de simplificar? Sin embargo, no nos olvidaremos de aquella observación de Marx cuando decía que si el mundo fuese como aparenta ser, la ciencia no sería necesaria. La ciencia es necesaria porque el mundo no es lo que parece. En ese sentido, consideramos que la restitución de una parte de esa complejidad perdida es necesaria hoy porque, tal como fue operada, la simplificación de la línea de la pobreza nos deja en la encerrona de una coyuntura política ciertamente peligrosa. Nuestro propósito ha sido describir el mundo, narrar la vida, captar el acontecimiento, colocar lado a lado las temporalidades sociales, institucionales y políticas, recorrer las continuidades y saltar junto con el lector por encima de las discontinuidades, sean estas espaciales o temporales.

La sociología que proponemos opera una triple exigencia metodológica, una triple *contrainte* hubiera dicho si me expresara en francés, para insistir sobre el límite, la obligación, el carácter material de la exigencia. Las tres patas de esa exigencia metodológica son la descripción de tipo etnográfica, la teorización crítica de lo observado antes, durante y después de la observación, y luego un importante esfuerzo de sociología narrativa, una atenta y vigilada escritura. Esa triple exigencia metodológica está destinada a proteger al sociólogo de dos riesgos que acechan a todo

trabajo de tipo etnográfico. El primero de esos riesgos se advierte al recordar el mal que afecta a Funes, el memorioso de Jorge Luis Borges. Se recordará que Funes había perdido la capacidad de olvidar y que como no podía dejar de pensar ningún detalle de aquel mundo que lo rodeaba, porque lo percibía todo y lo pensaba todo, estaba inmóvil y postrado en una cama. Entonces, ¿cómo ir a la descripción etnográfica sin simplificar la vida social, sin dejar nada de lado? La sociología que proponemos en cierta medida juega con trampa, porque nosotros le pedimos restituir una complejidad sobre la que hemos ya operado una simplificación o una elección de aquellas aristas por las que transitaremos.

El segundo riesgo es el del *voyeur*, que es la peor de las tentaciones que acechan al sociólogo que se aventura por el trabajo de campo, sobre todo cuando dedica su esfuerzo a describir el mundo de las clases populares. Ese peligro consiste en considerar la vida de las clases populares como si fuese un mundo alejado, exótico; como procedían los viejos antropólogos cuando salían de Europa para observar un mundo extraño, observar lo que allí pasaba y volver al centro del mundo para narrarlo a sus coterráneos y a sus contemporáneos. Un riesgo ya observado por Clifford Geertz cuando dice que el antropólogo escribe aquí, para sus pares universitarios, lo que fue a observar allá, lejos. El riesgo es que el sociólogo venga a conquistar galardones contándole a sus pares de clase media cómo viven los pobres. Hay que protegerse de ese *voyeurisme*. Y para ello hay que captar desde la observación y trabajar en la escritura aquello que conecta a las clases populares con el resto de la sociedad, lo que liga a unos grupos sociales con otros y que permite comprender que la vida de unos depende de la de los otros. Los ricos son ricos por su capacidad de mantener a los pobres viviendo con poco dinero. Más profundamente, es necesario conectar aquello que observamos en el taller y en la fábrica, en el barrio y en la casa de las personas, en la cancha de fútbol y en el bar, en las interacciones de la vida cotidiana, en los discursos, en esos momentos de la vida ordinarios o excepcionales, con las relaciones sociales que producen esa vida que estamos observando primero y describiendo luego al escribir. De lo contrario, corremos el riesgo de creer que ese mundo es independiente del resto, que es como una civilización independiente, como una cultura con sus propias leyes. Allí interviene de modo crucial la exigencia de una escritura vigilante.

Es por ello que nuestro trabajo no admite síntesis, lo que se traduce en una cuarta exigencia que se dirige al lector. No se puede resumir a Balzac, hay que leer entera *La comédie humaine*. Hay que leer cada una de las novelas de la primera palabra hasta la última. Si alguien nos cuenta

la historia, no podemos vivir la experiencia de la narración y acceder así a la inteligibilidad del mundo social que esta propone.

Es por ello que voy a permitirme incluir aquí tres cortos pasajes de nuestro texto, buscando que se entienda por qué esta sociología necesita de un lector que acepte frotarse con el texto y que lo haga con cierta lentitud. Se trata de volver accesible aquello que se encuentra escondido o tapado detrás de la línea de la pobreza. Todo aquello de lo que dejamos de hablar porque es más fácil entenderse observando la evolución de la curva de la pobreza.

El primero fue escrito para intentar hacer visible la importancia de los lazos de parentesco en ese espacio social de los barrios populares que se engarzan en el eje 8 de Octubre-Camino Maldonado, saliendo de Montevideo hacia el noreste, y que constituyen el blanco social de las políticas sociales del Mides. Esos lazos de parentesco estructuran la inscripción territorial de las clases populares y los lazos de solidaridad que son uno de los principales soportes de la vida allí. Al mismo tiempo, con este pasaje intentamos advertir al lector sobre el riesgo que las rupturas de esos lazos de parentesco (que son más complejos que una relación de pareja) hacen correr a las clases populares y que de hecho las amenazan desde siempre. Una de las características de las clases populares es que sufren la inestabilidad y la inseguridad que atraviesan la vida familiar. Y producir condiciones de seguridad social no es lo mismo que redistribuir ingreso para pasar del lado de arriba de la línea de la pobreza.

La inestabilidad familiar ha sido una de las fuentes de sufrimiento de las clases populares desde que el capitalismo produjera el desarraigo de los grupos más desfavorecidos en la Europa del Antiguo Régimen y antes de que el desarrollo del Estado social pudiera ofrecerles, ya entrado el siglo xx, alternativas de integración y de seguridad social. Es seguramente por ello que numerosos partidos y organizaciones sociales de la clase obrera se opusieron con fuerza a los proyectos de legalización del divorcio durante mucho tiempo. En un contexto de inseguridad social, la ruptura de la alianza matrimonial puede acentuar la precariedad e, incluso, convertirse en una importante fuente de riesgo. Y ella conduce frecuentemente a la distensión e incluso al quiebre de las relaciones entre padres e hijos. Se abre allí una problemática de inestabilidad que corroe los lazos de solidaridad. Lo que la ruptura pone en juego es mucho. ¿Cómo intervienen en esa problemática los diversos dispositivos del Estado?

Gracias a Lilián, a quien conocimos en el barrio Nueva España,

beneficiaria de Cercanías y del Plan Juntos, conocimos a Andrés en casa de Fernando. La “casa” de este era una pieza de alrededor de 6 metros cuadrados, con un patiecito algo más estrecho, al borde de una zanja pestilente. El pasaje donde se encuentra permite entrar al barrio desde Camino Delfín, que sirve de frontera y conduce, luego de tres cuartos de hora de marcha por calles de tierra, balastro y asfalto, hasta Punta de Rieles. Del otro lado de la calle, un amplio criadero de chanchos se extiende como un oloroso chiquero de una hectárea de lodazal. Dentro de la casita, una sola cama contra la esquina del fondo y una improvisada cocina en la esquina opuesta, cerca de la puerta de madera. El techo de chapa de zinc protege seguramente de la lluvia pero difícilmente del frío de ese mes de julio de 2018 en que los encontramos, y seguramente tampoco del calor cuando el sol del verano descarga su potencia sobre la chapa, aunque acá abajo sea más fresco que allá arriba, nos explica Fernando. Habíamos concertado una entrevista con él, que nos esperaba a la entrada del barrio, unos 200 metros antes. Pero al llegar con Fernando a su casa nos encontramos con que allí estaba también Andrés, su hermano. Y a los pocos minutos se sumó Valentina, cuñada de ambos, que vive dos casas más allá. Conversamos largamente aquella tarde con aquellos tres treintañeros. La familia estaba fuertemente sacudida pues unos días antes Andrés había sido expulsado de su propia casa por Cecilia, su excompañera y madre de sus dos hijas.

¿Cómo se rompió aquella pareja de diez años de vida común? Valentina lo explica por la relación con el trabajo y el dinero: “*Ella nunca trabajó. Es como que yo te diga: «Yo trabajé». Yo nunca en la vida tampoco trabajé porque mi marido nunca quiso que trabaje, ¿entendés? Lo mismo pasó con él. Ella consiguió un trabajo y se consiguió otro macho, y le hacía la vida imposible a mi cuñado. Es así?*” Y Andrés confirma: “*Claro, empezó a laburar ella y ahí ya cambió todo, ¿me entendés? Ahora no trabaja más. Trabajó tres o cuatro meses, en un hotel, de limpieza. Ahí se empezó a abrir, viste. Se empezó a abrir, abrir. Antes de las fiestas, todo. Y ta*”.<sup>5</sup>

Este breve fragmento de relato nos muestra la presencia de varias familias interconectadas por el parentesco en un mismo territorio, la importancia de los bienes materiales, la autonomía de la mujer y el trabajo, la violencia doméstica, la centralidad de la economía doméstica. Debe saberse que la exmujer de Andrés, apoyándose en la medida cautelar que

5. Verónica Filardo y Denis Merklen, “Las rupturas”, en *Detrás de la línea de la pobreza*, pp. 90-91.

le impedía a este acercarse al domicilio, vendió la casa. Es probablemente por ello que la familia estaba muy dolida y preocupada por la pérdida de ese bien que no es un bien de la pareja sino que se inserta en la trama de relaciones de parentesco territorialmente estructuradas (todo esto aparece después del episodio narrado aquí, en otra parte de la narración, siempre por estos tres miembros de la familia con la cuñada como voz cantante). Puede verse así algo de la complejidad de la intervención del Estado en la trama de solidaridades locales, que incluye a la policía.

El fragmento siguiente tiene que ver con el trabajo y, principalmente, con la naturaleza del trabajo al que acceden estos grupos sociales. Este aspecto es de crucial importancia porque cuando vamos a ver el barrio a través de la observación, yendo allí para ver y para saber, tenemos tendencia a no ver el trabajo porque el trabajo no se realiza, en su mayoría, allí. Tendemos a darle una importante centralidad a la vivienda, a lo doméstico, a la familia, a la infancia, a las mujeres y a los viejos. Porque así es la vida que se desarrolla en ese territorio y porque en los horarios en los que vamos a hacer observación las mujeres, los niños y los viejos están más presentes que los hombres en edad de trabajar. Lo que está ahí es lo que vemos. Pero debemos ser capaces de integrar a esa realidad local lo que no se ve, lo que no es evidente, porque ese mundo social no se agota en lo que parece ser, en su apariencia y en su evidencia. Y para lograrlo, el arma de la que dispone el sociólogo son las preguntas. Las que el investigador hace a sus interlocutores y las que se hace a sí mismo, las que le hace al saber sociológico o de las ciencias sociales y la filosofía.

Fernando (28 años) trabajó por muchos años en la carga y descarga de diferentes mercaderías. La empresa donde trabajaba *dio quiebra*. Comenta que le pagaban muy poco, y que ese trabajo solo lo agarran los *pastabaseros*. La empresa sigue trabajando bajo otro nombre y con otra persona como titular.

Ahora Fernando se dedica a la clasificación de residuos, a la que llama “requeche”. Esa actividad consiste en salir en bicicleta y buscar en barrios como Malvín, Buceo, Pocitos, Punta Carretas, Centro, algún tipo de desecho que tenga valor de reventa (ropa, electrodomésticos, plástico). Desde El Viñado a Punta Carretas hay unos 14 kilómetros tomando el recorrido más corto, por 8 de Octubre (que no siempre conviene al requeche), es decir, aproximadamente una hora de pedaleo –cuando la bicicleta no está cargada y en subida, como al regreso–. Comenta que la policía muchas veces lo para en esos barrios, incluso de formas discriminatorias, usando palabras como “pichi de mierda”. Fernando

dice que está tranquilo de circular por la calle porque no tiene antecedentes. Muchos son los que recorren la distancia de los lazos de la explotación social entre los asentamientos de Camino Maldonado y los barrios pitucos del litoral, como veremos un poco más tarde para [el caso de] Fredi, que va hasta allí en condiciones mucho menos duras.

Antes Fernando trabajaba en una empresa de carga y descarga en 8 de Octubre y Larravide. “*Descargando camiones. Descargaba pa’ la banana del Pepe en el Mercado Modelo. Se descargaban camiones de banana. Pero ahora, ahora... estoy... sin empleo... Estoy saliendo a la calle*” (silencio).

–¿Y qué es salir a la calle? ¿Qué hacés?

Fernando. –*Voy a buscar cosas para vender para la feria* (silencio). *Cosas así. Nomás me traje una cantidad de zapatos, cartera, ropa* (silencio). *No hay otra.*

Lo que Fernando consigue lo vende en la feria o se lo vende a algún pariente, a familiares, a su hermana. Esa tarde, mate de mano en mano, conversamos largo sobre su vida de trabajo. En el patio de su casa, junto con Andrés, su hermano, que fue completando el relato y donde se fueron entreverando el ahora de trabajar en la calle y el antes de la carga y descarga de camiones. Desde los dieciocho años Fernando trabajó en una empresa de carga y descarga: “*Descargábamos varias cosas, o sea, descargábamos pa’ Magic Center, descargábamos café, pa’ varios lados descargábamos*”. Pero de esos diez largos años, en los que la fuerza del hombre estuvo al servicio de la circulación de mercaderías producidas lejos, muy lejos de esos barrios humildes de Montevideo, Fernando trabajó solo un año “en caja”, con aportes jubilatorios y protección social. El resto fue “en negro”, sin cobertura social, sin sindicalización, fuera de la ley, sin seguro, atrapado en la imposibilidad de actuar colectivamente.

Como todos sus compañeros estaban “en caja” menos él, un día Fernando se tiró del camión de bananas para asustar a los patrones e intentar que lo blanquearan: “*Y ahí fue que me llevaron al Banco de Seguros y me pusieron en caja*”. Hizo como que se caía y se tiró con caja de bananas y todo para atrás del camión, se golpeó y recuerda aún hoy como le dolía “*toda la espalda, el brazo, la pierna...*”, pero logró que los de la empresa se asustaran y lo blanquearan.

–¿Y cuánto pagan ahí?

Fernando. –*Tres o cuatro gambas* (risas). Trescientos o cuatrocientos pesos uruguayos al día, lo que podría alcanzar entre 7.200 y 9.600 pesos en un mes de veinticuatro días de trabajo, con la

condición de que el trabajo y la paga fuesen estables, lo que es muy poco probable. “Y ahí, mirá, nosotros descargábamos por día cinco o seis camiones, o a veces llenábamos cinco o seis cámaras [frigoríficas] también, entre tres o cuatro [trabajadores]”. Fernando explica que eran once empleados en total que se ocupaban de distintas cargas y descargas cada día, hasta el fin de semana. Pero luego, con la mejora del mercado de trabajo, “se fueron yendo, porque la plata no daba. Vos te matabas laburando y cuando ibas a cobrar agarrabas 1.500 pesos por semana o 2.000 pesos a veces. Cuando llegaba a los 3.000 pesos saltabas en una pata. Y si hacíamos treinta camiones a la semana, agarrabas 5.000 pesos y ahí tirabas cuetes pa’ arriba, porque te pagaban por camión [5.000 pesos representaban menos de 132 euros y de 172 dólares estadounidenses de 2018]”.

Andrés (hermano de Fernando). –*Algunas veces lo hacían ir a la siete de la mañana y si el camión venía a las diez se tenía que quedar esas tres horas ahí, esperando a que el camión viniera, pero esas horas no se las pagaban. Le pagaban solo el camión. Si tenía un camión ahora y otro a las cinco de la tarde, hasta que no termine el otro camión, vos te quedás toda la hora ahí... Por destajo.*

La realidad laboral nunca está socialmente lejos de la del barrio, porque la primera determina a la segunda, aunque la sociología contemporánea, cuando es boba, olvida conectar el mundo de la vivienda y la familia con el del trabajo.<sup>6</sup>

La no consideración del trabajo en la observación de la vida barrial está muy estrechamente ligada con la manera en que se evalúa la eficacia de las políticas sociales para combatir la pobreza. Cuando se pierde de vista que es este tipo de trabajo el que produce la pobreza, que estos barrios están masivamente habitados por personas que trabajan mucho pero que no logran vivir dignamente de su trabajo y resolver sus problemas esenciales con su esfuerzo, que la retribución del trabajo es pobrísima, también se pierde de vista que ese tipo de trabajo, aunque permita contar un trabajador más y un desempleado menos en la curva del desempleo, no es vector de integración social ni de salida de la pobreza, es pura explotación. Entonces se evalúa de mala manera a las políticas sociales. Es como si a ese agente del Mides que se acerca a una familia porque hay tres hijos pequeños y hay que acompañar a la familia y demás se le pidiera que actuara sobre las causas de una pobreza cuya producción se origina fuera de su campo de acción y del barrio, en un espacio que no es un espacio físico. Ellas están en la trama de relaciones sociales que

6. Verónica Filardo y Denis Merklen, “Las rupturas”, pp. 112-113.



estructuran la vida, cosa que la sociología sabe desde hace muchísimo tiempo. Pero la sociología también puede empobrecerse.

Para terminar, quisiera restituir aquí un fragmento de mi propio diario de campo, escrito a la salida de una visita a otro barrio de la zona de Camino Maldonado. Veremos una serie de consideraciones sobre el tiempo y sobre la experiencia social del tiempo. Esas observaciones tienen su origen en que, antes de ir al barrio esa vez, en mayo de 2018, yo había leído notas de un diario de campo redactado en la década de 1990, cuando ya había estado en la zona observando la vida de las clases populares. El diario que sigue resulta, en buena parte, de la comparación de lo que observé en 2018 con lo que había escrito luego de una observación realizada más de veinte años antes, prácticamente en el mismo lugar.

La esquina de Punta de Rieles ha sido renovada. Hasta tal punto que resulta irreconocible para quien no haya estado por allí en los últimos quince años. Es ahora el punto más colorido que puede verse desde que nace la avenida 8 de Octubre hasta que la ruta 8 termina de salir del departamento para entrar a Canelones. Es hoy un centro de transporte y de comercio que irriga una de las zonas más pobres de la ciudad. Sobre el costado sur de la esquina con Camino Maldonado se recuesta un conjunto de instituciones culturales. La escuela, un jardín de infantes, una biblioteca popular y un centro cultural. Murales y agentes culturales sembrando vida junto a la severa presencia del Guayubá [principal –y única– empresa estatal de refinería de petróleo y afines] en bronce de Blanes que vigila el conjunto. También una importante estación de servicio ANCAP [Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland], un bar, varios comercios. ¡Uruguay y Montevideo se han transformado tanto en estos últimos años! Y no solo sobre la costa, y no solo como efecto de la inversión inmobiliaria que privilegia las torres de cristal con vista al río.

Quienes pueblan la zona de Punta de Rieles no son quienes miran ahogarse en el mar al sol desde las ventanas y los balcones de sus apartamentos. Sin embargo, unos y otros viven engarzados por múltiples relaciones sociales. Algunos cuantos albañiles de estos barrios han levantado las torres de aquellos y otros cuantos vecinos de aquí van a trabajar cuarenta horas semanales allí. Fredi es portero en uno de esos edificios de Pocitos. Vive en La Chancha, el nombre que en la zona de Punta de Rieles se le da a una parte del asentamiento Nueva España –aunque algunos los consideren dos barrios distintos, si bien contiguos–. En un día soleado de mayo de 2018 nos dio cita, al mediodía, en la puerta

de la escuela, cuando venía a buscar a uno de sus hijos, a un nieto y al hijo de unos vecinos.

Desde la escuela en Punta de Rieles lo acompañamos hasta el local de la junta vecinal del barrio, cerquita de su casa. En el camino nos encontramos con María, la mayor de sus hijas, que se llevó a su hijo, el nieto de Fredi que venía con nosotros. El sociólogo quiere aprender. Observa la vida y toma notas de las relaciones sociales. Relaciones de vecinazgo, lazos de parentesco.

Fredi llegó a Nueva España en 1995, poco después de la ocupación que le había dado origen al barrio dos años antes. Corrían los duros años del neoliberalismo en el que tantos obreros fueron desclasados y desplazados por la pobreza. Empujado por ese vendaval llegó Fredi desde Paysandú, obrero de la construcción, cuando allá no había más trabajo y él todavía no tenía treinta años. En Nueva España ha crecido junto con él y su compañera una familia de cinco hijos y tres nietos, once personas y tres generaciones sólidamente ligadas en la trama de relaciones locales que estructura el espacio social del barrio. Pero otras relaciones sociales modelan la vida de quienes viven allí. Fredi es hoy portero de un edificio en Pocitos, recordemos. Cotidianamente se ocupa de volver más limpia, más segura, más presentable la vida de aquellos otros que no son sus vecinos sino sus patrones. Gracias a este otro lazo social, el del trabajo, Fredi está mucho mejor que la mayoría de sus vecinos de Nueva España. Él tiene un empleo estable, formal, con protecciones sociales y un ingreso regular, con un tiempo de trabajo limitado por la ley que le deja resto para participar en la junta vecinal y llevar y traer a los gurises de la escuela. Realiza una tarea importante en la vida cotidiana de aquellos niños que no crecen así tan solos como otros del barrio. Pero más de treinta años de trabajo y un empleo estable condenan todavía a Fredi y a las dos generaciones que lo siguen a batallar la vida en un asentamiento irregular, a un kilómetro y medio de tierra de la linda esquina de Punta de Rieles. A 1.500 metros del transporte, de la escuela, de los colores de la cultura. Mucho le queda por progresar al asalariado en Uruguay. Mucho para que el trabajo, todos los trabajos, vuelvan a ser garantía de integración social y de dignidad ciudadana (a la igualdad ciudadana mantengámosla entre paréntesis).

Así se organiza uno de los ejes de la pobreza y el mal trabajo en Montevideo, alrededor de ese largo eje que parte desde el corazón de la capital con el nombre 8 de Octubre para devenir luego Camino Maldonado y perderse más allá de Canelones bajo el asfalto de la ruta 8. Cuando se deja de contar la longitud de la sinuosa

semirrecta con números y se la comienza a medir en kilómetros, han desaparecido ya las veredas. Allí, la extensión de la ciudad deja de obedecer a las normas de la clase obrera que se estructuró bajo el Uruguay batllista y comienzan los “asentamientos irregulares”, barrios así llamados aunque obedezcan a la regularidad implacable de una serie de normas. La de la propiedad ilegal del suelo, la de un asalariado quebrado por esos dos gigantescos golpes que fueron la dictadura de las décadas de 1970 y 1980, y el neoliberalismo de los años en que terminaba el siglo xx para joderle la vida al XXI. Ese nuevo espacio de trabajadores pobres está lejos del Cerro y de la Teja, también del Cerrito de la Victoria, un poco más allá de la Vuelta de Maroñas.

Violada y apaleada, la clase obrera parió un desparramo de hijos que se agrupan como pueden en esa heterogénea familia que conviene llamar “clases populares”. Como un intento de recordar su filiación con la unificada clase obrera y la heterogeneidad de aquellas astillas que se desprendieron de su tronco sin que quede lugar para actuar concertadamente, pero sin cederle, tampoco, un tranco a esa fuerza centrífuga que busca siempre el desparramo. Allí vive la población objeto de las políticas de proximidad operadas por el Mides y así se definen su espacialidad y su historicidad, en la casa más pobre de esa familia de herederos desparramados que no se juntan nunca a comer un gran asado, que pasan largos períodos sin compartir los tallarines del domingo en la misma mesa.<sup>7</sup>

He aquí por qué la sociología que proponemos no puede ser sometida a la síntesis; como mucho, puede aceptar la lectura de un fragmento a modo de ejemplificación. En este estudio sobre la vida en los barrios populares y sobre la experiencia del Estado social, con una atención particular puesta en las políticas sociales implementadas por el Mides, partimos naturalmente con un conjunto de hipótesis. Una de ellas es que el Estado no interviene solo sobre individuos y familias, unidades a las que el Mides dirige su acción explícitamente, sino que lo hace también sobre el barrio. Y un barrio popular no es solo un conjunto de personas y de familias habitando contiguamente un mismo espacio. El barrio es un conjunto de relaciones sociales. Las relaciones territorializadas, que transcurren en la copresencia, y las que no lo son, que ligan agentes sociales que no interaccionan cara a cara, que no se conocen y que son relaciones sociales que no suponen interacciones entre las personas. Esas otras relaciones sociales salen del radar de la evaluación, de la planificación, del

7. Verónica Filardo y Denis Merklen, “Las rupturas”, pp. 120-122.

conteo de la política social. Esta acción del Estado que observamos en su lucha contra la pobreza a través de lo que el Mides llama “políticas de proximidad”, y que actúan sobre el territorio, modifica algunas relaciones sociales, perturba otras, refuerza algunas e incluso intenta crear nuevos vínculos sociales.

La presencia del Mides en estos espacios sociales probablemente no hace sino mellar un poco el filo de la pobreza, pero tiene un valor positivo muy importante. Porque esos “operadores”, esos trabajadores sociales se acercan a las familias para acompañar a realizar un trámite, para acercar bienes y servicios, para acercar a las personas y a las familias a las instituciones del Estado social como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Banco de Previsión Social (BPS), la escuela, el juzgado, los trámites... que dan acceso a ciertas transferencias monetarias. En la medida en que esa presencia se institucionaliza, se integra a la realidad local y se vuelve estable, puede constituir lo que deberíamos llamar, acercándonos a la sociología de Robert Castel, un “soporte” de integración social. Aunque no corresponda exactamente con su concepto, porque Castel pensaba en “soportes de individuación”, mientras que nosotros vemos soportes para la solidaridad y para la integración social, traicionándolo un poco. Nosotros pensamos que esos soportes hacen la vida más fácil, más livianita, más llevadera. Tienen un valor incalculable, pero no van a provocar ninguna inflexión en la curva de la pobreza y, si lo hacen, lo harán marginalmente.

Estas políticas sociales no actúan sobre la pobreza sino en otro terreno de la cuestión social. El problema es que miramos la cuestión social con los instrumentos conceptuales de los años 80. Y hasta que no nos quitemos de la cabeza ese espacio de reflexión no veremos dónde actúan y dónde no lo hacen, cuándo lo hacen bien y cuándo no. Es por ello que para nosotros era necesario describir la vida y así restituirle su complejidad, para poder observar y volver visible a los ojos de la sociedad uruguaya dónde actuó el Estado social del Frente Amplio. De ahí la importancia de la descripción y el relato como modos de producción del conocimiento.

El Estado social de proximidad introduce en la vida de las clases populares una serie de ambigüedades y de tensiones que no pueden tener sino resolución política. Señalemos dos, muy rápidamente. Esta presencia del Estado en los intersticios más alejados y más olvidados de la sociedad favorece la inscripción territorial de las clases populares. Y esto tiene un aspecto virtuoso, que es lo que acabamos de señalar a través de la idea del “soporte”. Pero al mismo tiempo puede favorecer la desconexión de estos segmentos de las clases populares de la estructura de las relaciones

sociales que determinan la morfología de su existencia. El Estado puede así reforzar la creencia de que los pobres son pobres porque están ahí, en los barrios pobres, concentrando así los esfuerzos en tratar de *sacarlos* de la pobreza, descuidando el control de las fuerzas sociales que mantienen a esos trabajadores en condición de empobrecimiento permanente. Así, podemos señalar en el origen de la concepción del Mides un relativo error de conceptualización. Se suponía que el Estado debía acercarse a esos grupos para llevar a las personas hacia los derechos universales o hacia las instituciones universalistas. Esto es ya muchísimo más inteligente y sofisticado que la simple distribución de recursos que se encuentra detrás de la idea de “redistribución”, tan cara a las versiones más economicistas de la izquierda. Pero, en realidad, yendo a buscar individuos y familias a las que acercarse evitaron pensar en la trama de relaciones sociales en la que estos se encuentran implicados.

Y una última ambigüedad. Estas políticas sociales de proximidad se han constituido en un importante soporte de integración, y en este sentido no podemos sino desear su continuidad, que se estabilicen y se consoliden. Por ejemplo, se ha dado, este último año (2019), un importantísimo paso en ese sentido cuando se integró a los técnicos, los “operadores”, a la planta del Ministerio, como funcionarios públicos, que hasta entonces trabajaban como personal contratado exterior al Estado. De ese modo se refuerza su capacidad de acción y se protege su actuar de los vaivenes propios a los cambios de gobierno en democracia. Pero al mismo tiempo esa presencia alimenta la ilusión colectiva de que la pobreza se combate actuando sobre los individuos y sobre las familias que la padecen. Una vez más: que de lo que se trata es de sacar al pobre de la pobreza en la que ese encuentra. Mucho de lo que está vehiculado a través de metáforas como “hay que llegar al núcleo duro de la pobreza”. Una visión geométrica, espacializada, de la vida social que lleva a creer que la pobreza es un fenómeno que está ahí y que hay que actuar sobre él.

Ahí se advierte la responsabilidad social y política de la sociología. Nuestro trabajo consiste en desarticular estas facilidades de pensamiento con las que muy frecuentemente el periodismo y los políticos y razonan porque las ciencias sociales les han brindado un vocabulario fácil de manejar. Pero el problema es que simplifican la vida y no nos queda sino recordar, para concluir, que “la vida es más compleja de lo que parece...” (*cantabile*, sobre melodía de Jorge Drexler).



# Itinerarios de la profesión del sociólogo en Uruguay

*Marcos Supervielle\**

## **Intento de una historia de la profesión del sociólogo**

### *Primera etapa: la etapa ensayística*

Como en toda América latina, se desarrolla en Uruguay a partir de la segunda mitad del siglo XIX un “pensamiento social” particularmente orientado a dar cuenta de lo que en la época se denominaba la “cuestión social” y, quizá más modernamente, el “orden social”. Ello se realiza desde una perspectiva ensayística. El tono general de estas reflexiones es el de denuncia y/o el de proponer soluciones a los problemas que se perciben en la sociedad.

Este encare ensayístico aparece hoy en día como una debilidad, pero, aun así, tenía la virtud de proponer un programa de construcción de una sociedad, en momento en que tenía un estado todavía incipiente. La denominación “sociología” se asociaba a la idea de dar cuenta de la sociedad existente y eventualmente de colaborar de alguna manera con la construcción de un nuevo orden social quizá más justo, y sobre todo más integrado.

Es interesante que el tratamiento de estos temas generales se hacía

\* Profesor emérito. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [marcos.supervielle@cienciassociales.edu.uy](mailto:marcos.supervielle@cienciassociales.edu.uy)

Agradecimientos. 2019 es el año de mi jubilación después de cuarenta y nueve años de docencia universitaria. Estoy profundamente agradecido porque se me haya invitado para dar una comunicación sobre la profesión de sociólogo. Intentaré presentar ciertos aspectos que hacen a cómo, a mi entender, un sociólogo debe encarar su actividad profesional mostrando así su aporte específico, es decir, diferenciándose de otros profesionales de las ciencias sociales y de profesionales de otro tipo, periodistas entre otros, que compiten con los sociólogos en la escena pública.

articulado a la búsqueda de “soluciones” a grandes problemas y, por lo tanto, sin ningún ánimo especulativo de tipo filosófico sino impregnado de un estilo pragmático, con una vocación a ser profesionalizante. El encare de los Varela (José Pedro y Jacobo), orientados al desarrollo de la educación a través de la educación pública, y el de Ángel Floro Costa inscribiendo su mirada en un positivismo orientado a introducir la idea de desarrollo en la sociedad uruguaya son ejemplo de esta corriente de pensadores sociales del fin de siglo XIX, estilo que se prolongará algo así como cincuenta años más. En estos pensadores, el “soporte” de sus ideas es la riqueza de su retórica, y no la descripción empírica “objetivante” la que motivaba sus reflexiones. Es cierto que estos ensayos a veces se apoyaban en una sociología académica y libresca, con vocación erudita, que se dictaba en las cátedras de Sociología de la Universidad en estos años.

Aun así, esas reflexiones apuntaban a resolver problemas existentes reales en la sociedad uruguaya. Y, como apunta Gerónimo de Sierra muy correctamente en un artículo, el desarrollo y la profesionalización fueron tardíos con respecto a otros ámbitos de América latina. A su vez, siguen la pauta lúcidamente sintetizada por Arturo Ardao: “Los *logos* podrán venir de Europa, pero los *pathos* y los *ethos* son bien nuestros”.

Consideramos que las dos partes de esta reflexión final son muy ciertas: efectivamente, los *logos* venían de Europa y en menor grado, al acercarnos a la mitad del siglo XX, también de Estados Unidos. Pero, por el otro lado, “los *pathos* y los *ethos* eran bien nuestros”. La percepción de estos temas era que no eran importados, casi nunca.

Creemos que de alguna manera una excepción importante a esta perspectiva surge justamente del debate muy fundado, que transcurre durante varios años al principio del siglo XX, sobre la ley de ocho horas de la jornada de trabajo. Debate liderado por Emilio Frugoni, quien fue político y académico. Esta situación es excepcional para la época por dos razones. En primera instancia porque la fundamentación de esa ley se basa en gran parte en información fehaciente sobre las duraciones reales de la jornada de trabajo en Uruguay, en las distintas ramas de actividad. Se logra demostrar que, en algunas de esas ramas, la jornada de ocho horas ya era un dato de la realidad. Para presentar un panorama general se requirió el soporte de una base de datos que ya existía en la época y estaba disponible. Información que utiliza también José E. Rodó, quien también la usó para justificar su posición de la necesidad de la jornada de nueve horas y no de ocho, como sostenían Frugoni y otros parlamentarios batllistas.

Uno de los múltiples proyectos de ley de las jornadas de ocho horas



impulsado por el gobierno battlista fue finalmente votado. Con ello Uruguay fue uno de los primeros países en el mundo en promulgar una ley de la jornada de ocho horas, muy avanzada incluso para los países desarrollados. Aunque en aquellos países ya era un reclamo de los sindicatos.

Permítaseme una corta digresión. A algo de más de cien años de dicha ley, la pregunta que uno podría hacerse es por qué se votó esa ley de avanzada tan tempranamente en el concierto mundial. La explicación que se maneja es la de la necesidad del apoyo de los trabajadores a su gobierno. Esta explicación solamente puede ser parcial, y además colocaría a José Battle y Ordóñez casi en una posición populista, cosa que en muchísimas ocasiones demostró que no era su orientación política ni su estilo de gobierno.

Dar respuesta a esta pregunta requiere articular una serie de elementos que operan a distinto nivel. Por ejemplo, para llegar a la ley de ocho horas se requería una aceptación generalizada del reloj como mecanismo de regulación del tiempo en las sociedades; antes aún de la generalización del reloj, de la ficción de que el día está dividido en veinticuatro horas. Antes de ello, las jornadas de trabajo eran de “sol a sol”, como dice el dicho popular. La generalización del reloj, de su utilización pública a través de las campanas de las iglesias y de las sirenas de las fábricas, no solamente pautaba el tiempo de trabajo sino también las tareas de la vida cotidiana. Aun así, esta generalización de la referencia a las horas del reloj no alcanza para explicar el porqué de la votación de la ley que reducía la jornada de trabajo. Si miramos con cuidado las estadísticas que manejaron Frugoni y Rodó entre otros, uno percibe que las jornadas de trabajo más reducidas son actividades productivas de bienes o de servicios que se realizan en el mundo urbano y que, en algunas actividades económicas, ya se había pactado con los patrones un horario de ocho horas, mientras que las actividades que se producen en el mundo rural tienen horarios mucho más extendidos, incluso con horarios de distinta duración en verano y en invierno. Ello muestra que el tiempo “solar” todavía tiene peso en la consideración de las horas de la jornada laboral en este medio. La argumentación de que la ley estaba regulando una situación que ya existía de hecho no es sostenible.

Si leen los debates parlamentarios, encontrarán que entre algunos de los diputados que finalmente votaron la ley y permitieron su promulgación se percibe que fue el miedo el que generaba la posibilidad de que en nuestro país se instalase una conflictividad social como la que se estaba dando en Europa en la época, generada por las movilizaciones de la clase obrera de entonces. Es este estado de situación –la de encontrarse con

una gran incertidumbre ante un nuevo fenómeno social, y por lo tanto sin claras ideas de cómo contenerlo y encauzarlo— el que generó un clima muy especial aquí en Uruguay, y que permitió que la ley finalmente fuese votada.

Finalizada esta digresión, lo que quería remarcar para justificarla es que por primera vez la fundamentación y la defensa de un proyecto de ley en el país se realiza a partir de estudios sociográficos, es decir, de la producción sistemática de información social de base empírica. Y con ello procuro señalar que, aun en ese momento de auge del ensayismo, no se desprecian los datos empíricos como fuente de fundamentación de políticas.

Para culminar estas referencias a esa etapa ensayística, quería también referirme a Víctor Arreguine, un uruguayo que llegó a ser profesor de Sociología en la Argentina donde realizó auténticas investigaciones sociológicas —por ejemplo, sobre el suicidio en Buenos Aires— y que nunca fue citado por aquellos que han estudiado la historia de las ideas sociales a fines del siglo XIX. Sin embargo, este autor escribe antes de partir a vivir en Buenos Aires sobre temas de Uruguay.

En efecto, Arreguine, en un ensayo sobre la época de Juan Manuel Rosas y su influencia en Uruguay, casi de forma marginal, realiza algunas observaciones sociológicas de base empírica, que me parecen de relevancia para comprender ciertas evoluciones sociales, culturales e ideológicas que son muy específicas de Uruguay en el concierto latinoamericano.

La tesis que defiende emerge de una anotación que realiza indirectamente sobre las relaciones extramatrimoniales a mitad del siglo XIX. Señala que en gran parte la falta de matrimonios constituidos y consagrados existentes en el interior del país se debe a la falta de curas en estas áreas.

Esta anotación es una expresión de la debilidad de la Iglesia en Uruguay en todo el siglo XIX, que quizá se mantenga hasta ahora. Situación que diferencia a Uruguay de forma muy importante de otras sociedades latinoamericanas. Y es esta debilidad de la Iglesia la que permite comprender, por un lado, la facilidad con que Battle y Ordóñez, y las corrientes liberales que en ese plano representa, logra imponer tanto la separación de la Iglesia del Estado tan tempranamente como el divorcio e, incluso antes de su período, que se imponga la educación laica. Con relación también a otros Estados latinoamericanos, se observó también la temprana laicidad de la enseñanza entre otras reformas que debilitaron los espacios institucionales que usualmente fortalecían la legitimidad de la Iglesia Católica en los sectores populares. Pero donde salta a la vista su auténtica debilidad es con su falta de reactividad, y la de los sectores burgueses católicos, ante

estas leyes que suponen cambios institucionales que debilitan los propios fundamentos de la Iglesia Católica. Si uno observa lo que ha sucedido en otras naciones en América Latina, como la sangrienta guerra cristera en México, y lo compara con cómo sucedieron estos cambios en este terreno, lo que ocurrió en Uruguay no es banal, por cierto.

De hecho, no hubo nunca en Uruguay una Iglesia de masas basada en una profunda devoción popular como existe actualmente en muchas regiones de América Latina. Esa inserción social hace que la vivencia, y quizá incluso la sobrevivencia de la Iglesia Católica en Uruguay en el tiempo, pasa mucho más por el papel que supo jugar en el seno de la propia intelectualidad uruguaya que en su penetración en los ámbitos populares.

Por ello, la Iglesia uruguaya debe ser la más intelectual de América Latina, en términos relativos, y ello ya desde el siglo XIX. En su trabajo *Espiritualismo y positivismo en Uruguay*, analizando el pensamiento uruguayo a fines del siglo XIX, Ardao reconoce la capacidad intelectual de monseñor Soler y lo señala como uno de los principales pensadores espiritualistas de su época y, quizá, en uno de los principales intelectuales de su propia generación, comprendiendo en ella todas las corrientes intelectuales.<sup>1</sup> Y ello a pesar de que el clima intelectual era en ese momento muy favorable a las corrientes de pensamiento positivista.

Esta perspectiva sobre el poder de la Iglesia Católica quizá pueda ayudar a explicar algunos aspectos del desarrollo de la sociología en la segunda etapa, como veremos enseguida, pero, para culminar la etapa ensayística, querríamos decir que Arreguine nos aporta con este dato sociodemográfico una pista para hipotetizar las bases empíricas para comprender la existencia de un conjunto de instituciones emergentes y de institucionalizaciones sociales y de estilos de vida y de convivencia social y política, que diferenciaron muy fuertemente a la sociedad uruguaya de otras sociedades latinoamericanas en esa época. Que incluso, quizá, está en el origen de ciertos *habitus* en la propia sociedad, en el sentido que le da Pierre Bourdieu, que de alguna forma posiblemente se mantengan hasta hoy en día; *habitus* que permitieron a nuestra sociedad salir de forma muy original, en el sentido de pacífica, de los regímenes autoritarios que sufrió en su historia en el siglo XX por ejemplo. Regímenes autoritarios que, además, fueron solamente dos, y mucho menos sangrientos que en el resto de la región.

1. Arturo Ardao, *Espiritualismo y positivismo en el Uruguay*, Montevideo, UR, 1950.

## *Segunda etapa: la emergencia sociográfica de la sociología*

Se puede decir que la sociología comienza a profesionalizarse fuertemente sobre todo a mediados de los años 50 cuando culmina el período de bonanza de la guerra de Corea. De hecho, es un período cuando comienza a percibirse una crisis mucho más profunda del modelo social, político y económico que se había implantado luego de la dictadura de Gabriel Terra en la década de 1930 y que se había reforzado con la Segunda Guerra Mundial en la que, en esa coyuntura, Uruguay se había visto muy favorecido en la división internacional del trabajo, modelo que tuvo una segunda prolongación con la guerra de Corea. En este contexto se da la emergencia de los consejos de salarios para favorecer un aumento del poder adquisitivo de la población trabajadora obrera y de clase media empleada, para dinamizar el mercado interno uruguayo.

Este modelo socioeconómico fue fundamentalmente agroexportador, pero incluye una industria de productos de origen agropecuario, como lo fueron los cueros y las lanas. Pero claramente se agotó y entró en crisis una vez que los países europeos y Estados Unidos volvieron reconstruir una industria orientada al consumo luego del período de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus industrias estaban orientadas a la guerra.

La crisis se instaló poco a poco e hizo funcionar distintos mecanismos sociales y políticos en diferentes esferas del orden social, ello como forma de intentar ajustarse al modelo ya agotado, o directamente de intentar modificar las reglas de juego del modelo anterior, buscando encontrar un nuevo modelo socioeconómico viable para nuestra sociedad.

Dos posibles ejemplos de este ajuste e innovación pueden ser las elecciones de 1958, cuando el Partido Nacional gana las elecciones por primera vez en algo menos de cien años, y los trabajadores asalariados, que inician un proceso de unificación sindical que termina con divisiones que parecían definitivas, proceso que culminará en 1966.

Es en este contexto cuando poco a poco se comienza a percibir la falta de información existente en Uruguay sobre sí mismo. Y también poco a poco comienza a haber conciencia de que era imposible cambiar sin tener información de cómo era Uruguay en muchos planos.

Recién en 1963 se realiza el Censo de Población y Vivienda, que no se llevaba a cabo desde 1908. En 1958 se crea el Instituto de Ciencias Sociales con el fin inicial de realizar un censo de las poblaciones universitarias. Por esas fechas se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, se realizan más de veinte estudios sobre distintos tópicos que abordan la situación del agro, de la industria, de los servicios, de la administración

del Estado, de la educación, entre otras temáticas. Participan en ella una gran cantidad de académicos de la Universidad, como también altos funcionarios del Estado de distintas orientaciones políticas, e incluso los sindicatos, en la elaboración de estas informaciones “de base”.

Este involucramiento del Estado en la producción de información sociodemográfica y económica tuvo sin embargo como antecedente inmediato la producción de información por institutos privados que se fueron creando con ese cometido. Muchos miembros del Equipo del Bien Común, de origen católico, crearon el primer Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), y bajo la orientación del padre Louis Joseph Lebret realizaron la primera investigación tipo *survey* de la sociología uruguaya, sobre la familia de Montevideo. Esta investigación fue dirigida por el arquitecto Juan Pablo Terra, quien fue sin duda uno de los sociólogos pioneros de la sociología de vocación científica empírica en Uruguay, en una ruptura total con la sociología de tipo ensayista. Un segundo estudio que tuvo repercusiones muy relevantes en su época ya que sirvió como espejo de una nueva imagen de la sociología en Uruguay fue el estudio del “Uruguay rural” realizado por el CINAM-CLAEH, con el mismo equipo de base y con la misma orientación metodológica inspirada en el padre Lebret. Con menor repercusión también hubo otras investigaciones de vocación sociográfica, o sea orientada a la producción de información empírica, una de ellas sobre la clase obrera realizada por el padre Carlos Tosar.

Hacemos notar que, curiosamente, es desde los intelectuales de origen católico que se inicia este movimiento de darle a la sociedad una sólida base empírica de información sobre lo social, y con ello el de generar las bases de una sociología moderna, de vocación científica. Fenómeno que solamente puede ser comprendido por las características del lugar que ocupó la Iglesia Católica en todo el siglo xx en Uruguay, como señalábamos para la etapa anterior.

Los trabajos de esta corriente intelectual sirven de antecedente al gran esfuerzo del Estado –paradójicamente, fuertemente laico– en construir una base de información sólida y rigurosa sobre el propio Uruguay donde participaron muchos de los intelectuales católicos que habían trabajado en las investigaciones mencionadas. Todo ello permitió que, poco a poco, el debate político en torno a la orientación económica y social del país se hiciera a partir de otras bases de como se hacía en el pasado.

Pero una de las características de esta sociología emergente es que es fundamentalmente de tipo sociográfico, empirista, es decir orientada a la producción de información empírica rigurosa, y no a la de imponer mo-

delos teóricos que puedan emerger de esa información como mecanismo de producción de inteligibilidad del orden social existente.

Darí la impresión de que es en esta etapa cuando se constituye un reconocimiento de la sociología en cuanto disciplina científica, junto con otras disciplinas de las ciencias sociales, pero solamente como proveedora de datos rigurosos y, por lo tanto, se la reconoce solamente en el nivel sociográfico. La producción de la política, y más precisamente de las políticas, queda librada a orientaciones teóricas o pragmáticas, que vienen de “otro lugar”. A título de ejemplo, es notable en el período el debate sobre las clases sociales y la estratificación social,<sup>2</sup> debate que involucró de forma directa o indirecta a los sociólogos propios Errandonea padre e hijo, Gerónimo de Sierra, Enrique Cárpena, Liliana De Riz, Aldo Solari, Carlos Filgueiras y Néstor Campiglia. Y, sin embargo, ese debate no tuvo ninguna consecuencia en términos de influencia en las políticas del Estado ni en el accionar de los actores sociales de la época, o sea en otros ámbitos, por fuera de los de la sociología académica. Aun así, a partir de 1964, la sociología uruguaya comienza a vincularse fuertemente a otras.

Por otro lado, se comienza a perfilar una división del trabajo en las propias ciencias sociales. Entre ellas, comienza a emerger la economía como ciencia social hegemónica. Por un lado, a través de la creación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, se despliega una reflexión teórica y empírica que va separando a los economistas de los contadores y de los administradores de su propia Facultad.

Por otro, la emergencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el plano regional se instala como centro de reflexión teórica para la región, con sus esquemas interpretativos de fuerte contenido económico que conllevan orientaciones fuertes de políticas globales para el futuro. Propuestas que, si bien incorporan en ciertas áreas a sociólogos como José Medina Echeverría, Aldo Solari, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Aníbal Quijano, entre otros, imponen sus categorías económicas, tanto analíticas como teóricas, como rectoras de los análisis de las sociedades latinoamericanas y de su desarrollo. Es interesante señalar que Cardoso, creador de la teoría de la dependencia, se autodefinía en algún trabajo como sociólogo del desarrollo económico.

Este proceso, a mi entender, llega a su punto de no retorno, cuando los ministerios de Hacienda se transforman en ministerios de Economía en la región, institucionalizando de esta forma la economía como la ciencia social de referencia, e incluso de control, de las otras ciencias sociales y,

2. Reseñado en un estudio por Alfredo Errandonea (h.).

en particular, de la sociología. Y, en la medida en que la propia economía sufre un proceso de homogeneización interna, transformando las miradas críticas internas a la propia economía en “desarrollos no ortodoxos”, las posibilidades de pensar el orden social de nuestras sociedades desde otros puntos de vista pasa a ser marginalizado. Esta, que es la temática central de la sociología, queda casi por fuera de las agendas de investigación, o filtrada por las categorías de la propia economía, que pasa a ser la ciencia social “general” de referencia, casi ineludible para todas las otras ciencias sociales.

En tal contexto, con esta división tácita del trabajo de las ciencias sociales, el espacio de la sociología fue el de ocuparse de la reflexión sobre la sociopolítica como prolongación de la sociología del período ensayista, de la educación y, de forma compartida con los arquitectos, de la vivienda, y finalmente de lo rural. Con respecto a esta última temática, seguramente porque la percepción de la pobreza era visualizada en la época como un fenómeno esencialmente rural. Y globalmente, bajo ese u otro rótulo se consideraba que la pobreza debía ser una de las temáticas de estudio de la sociología.

Nuevamente hago aquí una pequeña digresión. En la etapa actual de las ciencias sociales también hoy la economía es la referencia principal en materia de pobreza, concibiendo en primera instancia a los pobres como población de seres individuales carente de ingresos y no la resultante de exclusiones, marginalidades o pérdidas de afiliación, como sostiene Robert Castel. En este contexto, es el espacio que se le asignó históricamente a la sociología en el período, y quizá en gran medida sigue siendo el que todavía se considera su “espacio”, en el cual legítimamente tiene algo que decir.

### *La sociología uruguaya en un mundo crecientemente ajeno*

La dictadura es muy dura con la sociología, particularmente con el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho donde se despidió a sus docentes, que habían entrado por concursos de oposición y méritos. Pero es sobre la base fundamentalmente de este conjunto de sociólogos despedidos que se crean las diferentes instituciones de investigación privada que mantienen la investigación sociológica. El Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), el ya mencionado CLAEH (en su nueva etapa) y el Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur), entre otros, comienzan a llenar un espacio que había sido abandonado por la Universidad de la dictadura.



Comienzan a desarrollarse investigaciones, también de corte descriptivo, pero ahora con un estilo de tipo consultorías, la mayoría de las veces sobre temáticas comunes a varios países de América Latina, porque el financiamiento de las investigaciones es fundamentalmente externo, con más frecuencia de tipo regional y, de alguna forma, se inscribe en miradas comparativas sobre todo de los países de la región.

Aparecen tímidos asesoramientos con componentes de conocimiento sociológico a actividades privadas, como las mediciones de audiencias, los estudios de mercado, etc. Sobre esta base, luego de la caída de la dictadura, el campo se fortalece y, además, se extienden las encuestas de opinión pública y sobre todo de opinión política. Para ello surgen empresas como Equipos Consultores, entre otras varias.

De cierta manera, la investigación sociológica profundiza en esta etapa su nivel sociográfico con recursos cada vez más sofisticados que bloquean la posibilidad de “entrar” en este campo sin la formación y el instrumental adecuado. Pero al mismo tiempo no logra transformarse en una autoridad reconocida para construir un discurso inteligible del orden social de nuestra sociedad, y de los problemas que tiene este orden. Aun así, a través de la investigación de opinión pública y de opinión política, comienza a reconocérsele a la sociología, pero sobre todo a algunos sociólogos, además de su tecnicidad y la de las herramientas que manejan, cierta autoridad en la capacidad interpretativa. Y ello, porque la materia sobre la que trabajan y producen información es extremadamente lábil y, por eso, requiere un análisis casi simultáneo a la información que se está produciendo. Ya no se trata de temáticas que culminaban en informes y diagnósticos que producen una información estática, como es el caso de los censos, o las encuestas, que arrojan información descriptiva mucho más estática y estable.

A su vez, con el retorno a la democracia, se restituyen a sus funciones los docentes expulsados del Instituto de Ciencias Sociales y se comienza un programa de enseñanza y de investigación con una lógica algo distinta que antes de la dictadura.

Por un lado, aumentan las investigaciones ajustadas a períodos anuales de financiamiento, como el de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). Este nuevo contexto regulatorio hace que las investigaciones puntuales para realizar acumulaciones se inscriban, en muchos casos, en auténticos programas de investigación. A su vez, en esta nueva etapa del Departamento de Sociología, se intenta romper con la asignación temática en la que en la división del trabajo previa a la dictadura se le había encorsetado. En ciertas ocasiones, porque el enfoque que se le



daba necesitaba ser ampliado y recontextualizado, como es el caso de la sociología de la educación, la sociología política y la sociología agraria. Esta última, porque se percibía como necesaria una perspectiva más amplia de la propia sociología rural tal como se concebía en el pasado, pero en otras porque emergían nuevas temáticas a tener en cuenta en la búsqueda de hacer inteligible el orden social de nuestra sociedad. Por ejemplo, sociología de género, del trabajo, de la juventud, entre otras áreas y espacios desde donde investigar.

La acumulación de investigaciones puntuales va generando así un conocimiento muchas veces denso en campos específicos de conocimiento sociológico y ciertas áreas del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales se transformaron en referentes casi obligados para aproximarse a ciertos temas en las decisiones políticas o institucionales.

En paralelo, la Universidad Católica del Uruguay también abre una Licenciatura en Sociología y también opera de forma similar la Universidad de la República, con investigaciones inscriptas también en programas de investigación. Y, asimismo, ejerciendo una influencia relevante en distintas áreas como en la educación.

La emergencia de la actividad de investigación y de docencia e incluso de extensión en las universidades debilitó la investigación en los institutos privados que, a su vez, perdieron el acceso al financiamiento externo. Aun así, estos centros no desaparecieron, y mantuvieron y mantienen cierta actividad académica.

Una tercera fuente de producción sociológica profesional son los organismos de Naciones Unidas que han realizado estudios de carácter sociológico en Uruguay, particularmente la Cepal, pero en menor medida Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo.

A su vez, múltiples ministerios e incluso empresas públicas y en algún caso privadas han solicitado a las universidades y a las empresas privadas con competencias de investigación sociológica estudios sobre distintas temáticas sociales con un encare sociológico.

Finalmente, la profesionalización de la sociología en el ámbito privado se ha extendido a tal punto que se ha ido especializando e, incluso, ha requerido cursos especializados a nivel terciario para dar cuenta de las demandas de información en múltiples campos de conocimiento sociológico.

En esta etapa el nivel de esta sociología de tipo descriptivo y sociográfico ha mejorado notablemente. Se ha transformado, sin lugar a duda, en una fuente ineludible para realizar políticas sociales y políticas de extensión universitaria. Políticas que tienen dimensiones sociales relevantes, como

también en la vida de la economía privada o de las empresas públicas. Ello, como apoyo a las decisiones empresariales o de jerarquía pública sobre un importante y variado campo de decisiones.

No me extiendo sobre esta temática porque la encuesta del Colegio de Sociólogos que hemos visto ofrece una información muy consistente sobre todos estos tópicos.<sup>3</sup>

### **Conclusiones: el camino a seguir para fortalecer la profesión**

Ante la excelente presentación de la situación de la profesión realizada por el Colegio de Sociólogos y de su creciente inserción en distintos ámbitos institucionales públicos y privados, lo que queda es preguntarse cómo el Colegio puede ampliar y fortalecer estas inserciones en el mundo laboral uruguayo.

Creemos que para avanzar es necesario fortalecer la profesión en tres direcciones distintas pero articuladas.

En primera instancia, se requiere robustecer y apoyar a los sociólogos insertos en el sector público no académico. Por de pronto, es necesario que los llamados donde pueden presentarse sociólogos sean llamados específicos a sociólogos y no genéricos a científicos sociales y a trabajadores sociales. Considero que para ello el propio Colegio debe realizar gestiones ante la administración central y los entes autónomos, municipios, etc., para que efectivamente avancemos en este sentido. Un segundo paso en la misma dirección es mostrar el tipo de competencias en las que el sociólogo está mejor preparado que otros profesionales para ejercer una función pública. Más allá de áreas específicas, consideramos que los sociólogos están en muy buenas condiciones de generar información social, bancos de datos e incluso investigar sobre temáticas sociales que son novedosas, y que son demandadas por las instituciones públicas. La consistente formación metodológica de las carreras de Sociología en el país, incluso a nivel de grado, permite reforzar esta imagen de los sociólogos, para reclamar un espacio específico en la división del trabajo de los técnicos en las instituciones públicas y privadas.

En la misma dirección, es necesario construir un *ethos* propio de los sociólogos, fundamentalmente en la administración pública, algo así como la tienen las profesiones tradicionales en este ámbito. Para ello es

3. Cf. Miguel Serna, Eduardo Bottinelli y Mariana Porta, “La sociología y el oficio del sociólogo en Uruguay: prácticas y ámbitos”, en este volumen.

necesario que los sociólogos que ya estén insertos en ese medio logren establecer redes de información y de comunicación donde se puedan intercambiar las soluciones a los problemas a que se ven enfrentados de forma recurrente e incluso en la vida de trabajo cotidiano. Por ejemplo, que en sus ámbitos de trabajo se sepa qué es lo que hace o puede hacer un sociólogo. Y, por lo tanto, que sea reconocida su valía en temas y/o procedimientos específicos. Sabemos que en muchos lugares se han hecho avances notables en este sentido. Por ejemplo, en administraciones públicas se sabe en qué tipo de áreas administrativas puede ser eficiente tener un sociólogo trabajando, poniendo en práctica sus conocimientos profesionales adquiridos; daría la impresión de que en áreas como las de producción de información social, evaluación de proyectos, evaluación de desempeño (o, más en general, de recursos humanos), negociación y diálogo social entre actores. Pero ¿hay otras? ¿Sería conveniente hacer un estudio al respecto? ¿Es posible pensar, en el marco de la formación permanente, en fortalecer los conocimientos de los sociólogos que están ocupando estos espacios? Todo ello implica que el Colegio realice un balance de la inserción de los sociólogos en la administración pública y eventualmente defina una estrategia para afianzar la profesión en este sector.

En una segunda orientación más general, es necesario buscar la superación del espacio de ser solamente “productores de información social” que para algunos es la imagen dominante de lo que hacen los sociólogos. Es necesario que se nos reconozca una capacidad en la interpretación de la información e incluso de contextualizarla en sistemas de conocimientos más amplios con el fin de generar insumos para la elaboración o la evaluación de políticas que tengan una dimensión social o de colaboraciones con los actores sociales colectivos. Consideramos que los sociólogos estamos capacitados para ofrecer un punto de vista específico que, junto con otros puntos de vista provenientes de otras ciencias sociales incluyendo la economía, amplíe las perspectivas para la consecución de las políticas públicas o las privadas, mejorando así su calidad. Tenemos, por lo tanto, la necesidad de dejar de estar, a la larga, encasillados en una actividad sociográfica, para realmente ser respetados por la capacidad de poner en valor un punto de vista sociológico. Este proceso que involucra a todos los sociólogos profesionales, sea cual sea su inserción laboral, debe ser un objetivo de mediano plazo para toda la actividad sociológica profesional.

Pero, finalmente, para orientarse a mejorar persiguiendo los objetivos antedichos, es necesario darle a la sociología un anclaje en una pregunta que le dé unidad a la enorme dispersión temática que tiene hoy en día la sociología, y que es bueno que la tenga, porque la sociedad debe ser

enfocada desde múltiples puntos de vista distintos. Aun así, es necesario volver a tener una pregunta común que sea la que nos da una identidad también común. Pero, sobre todo, una identidad propia en el concierto de las ciencias sociales.

Si no, este ensanchamiento de la inserción de la sociología en la sociedad uruguaya, que ha demostrado ser notable en el correr de pocos años, quizá haya perdido en este camino un poco *su alma*.

La sociología no insiste en entender su sentido original. La pregunta que se realizaba Georg Simmel en 1908 como la gran pregunta que le da razón de ser a la sociología es la siguiente: “¿Cómo es posible el orden social?”. Consideramos que sigue siendo válida, aunque cambiemos la palabra “orden” por “cohesión”, “integración”, etc. O también que la miremos desde el sentido opuesto, por su fragmentación, por la existencia de sectores excluidos, desafiados o marginales, u otras descripciones que se nos ocurran.

Y en función de ello, nos podemos preguntar aquí en Uruguay cómo es posible mejorar este orden social que tenemos. La pregunta podemos hacérsela porque, en alguna medida, consideramos que este orden social está constituido con mucha injusticia, desigualdades, faltas de libertad, discriminaciones, etc., o, por el contrario, podemos pensar que el orden social es relativamente justo en términos relativos. Podemos abordar esta pregunta desde múltiples teorías que incluso pueden confrontarse entre sí. Podemos situarnos en una amplia gama de posiciones, desde simples observadores neutros de la realidad del orden social u orientados a su cambio desde posiciones reformistas e incluso revolucionarias. Podemos pensar el orden social en términos nacionales o en términos regionales e incluso globalizados. Podemos pensarlo a nivel micro, meso o macrosocial.

Sin embargo, nunca debe abandonarse esta pregunta fundante. Debemos tenerla siempre como telón de fondo de las preguntas específicas que nos hacemos en el área que estamos estudiando y a la que buscamos resolver en nuestra actividad de sociólogos en nuestra actuación profesional.

Es solamente así que guardaremos, de alguna forma, un punto de vista que nos es propio, que nos da identidad como sociólogos. O sea, la pregunta fundante que mencionábamos, que nos hacemos, es la que expresa este punto de vista específico de los sociólogos, que para poder existir en cuanto tales debe transformarse en una pregunta de la propia sociedad. Si esta se pregunta “¿cómo es posible el orden social?”, nosotros los sociólogos tenemos un lugar en ella.

SEGUNDA PARTE

Miradas críticas del desarrollo de la sociología  
en Uruguay



# Sociología de género y militancia feminista

*Rosario Aguirre\**

## Los inicios

A partir de mediados de la década de 1980, con el proceso de democratización después de doce años de dictadura, mujeres procedentes de distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y humanas comienzan a desarrollar investigaciones y estudios que irán configurando un cuerpo de conocimientos con identidad propia. Debe recordarse que una parte significativa del personal docente que fue expulsado del ámbito universitario público se agrupó en centros académicos privados, la llamada “Universidad de extramuros”.<sup>1</sup>

Los debates político-ideológicos acerca de la situación de las mujeres en la sociedad y la “cuestión femenina”, como se la llamó a comienzos de siglo, fueron el objeto de investigación de los primeros estudios en los años 80. En esa primera etapa la producción de conocimientos sobre las mujeres surgió íntimamente vinculada con el activismo. Las organizaciones y el movimiento de mujeres que lucharon por la democracia aportaron a la construcción de nuevos problemas y a la formulación de temas investigación. Participaron activamente feministas, en su mayor parte vinculadas a las fuerzas políticas progresistas. Por otro lado, los conocimientos alimentaron a las organizaciones en cuanto a la elaboración de agendas. Tuvo un rol protagónico uno de los centros privados

\* Socióloga egresada de la primera promoción de la carrera de Sociología (1974), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Udelar. Magistra en Ciencias Sociales, Flacso Ecuador. Fue profesora titular y directora del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Actualmente es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. *rosario.aguirre.cuns@gmail.com*

1. Luego de que la dictadura interviene la Universidad de la República en octubre de 1973 y desmantela o cierra los institutos y centros más importantes, con el impulso de quienes se quedaron en el país se iniciaron gestiones externas para preservar espacios de trabajo y de producción académica independiente. Es así que entre 1974 y 1985 se refundan o fundan cinco centros académicos de tipo independiente.

creados en plena dictadura, el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en Uruguay (GRECMU), promovido por la socióloga brasileña Susana Prates, con la activa participación, entre otras, de las historiadoras Silvia Rodríguez Villamil y Graciela Sapriza.

A la salida de la dictadura se constituyó en 1984 la Concertación Nacional Programática (Conapro), a la cual se integró una Mesa de Concertación sobre la Condición de la Mujer que recogió las demandas de las mujeres, y se elaboraron documentos que sistematizaron los conocimientos disponibles. En esa etapa, los resultados de las investigaciones se volcaban inmediatamente en actividades de capacitación para activistas. Fue un período muy estimulante para la creación de conocimientos por esta íntima vinculación entre generación de conocimientos, capacitación y construcción de agendas.

Se abordaron temáticas nuevas y nuevas formas de pensar la realidad. La preocupación fundamental era mostrar las discriminaciones, sacar a las mujeres de la invisibilidad, dar cuenta y denunciar las desigualdades entre varones y mujeres.

Las principales áreas trabajadas fueron la historia de las mujeres y las discriminaciones en el mundo del trabajo. Las historiadoras estuvieron interesadas en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres líderes sindicales y políticas.

A mediados de los años 80, a mi regreso a Uruguay con el retorno de la democracia, me reintegré al Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur), de cuyo grupo fundador formé parte. Retorné al país con la firme decisión de contribuir desde ese espacio a la consolidación de los estudios de género. Un papel muy importante tuvo el “descubrimiento” en el exterior de la producción de destacadas feministas latinoamericanas a través de sus textos y de los intercambios en distintos espacios académicos y militantes, además de haber “vivido” la diversidad de los feminismos de la región en el II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Lima en 1983. El Centro aprobó la creación de un área de trabajo sobre desarrollo y género y desde allí impulsé una investigación sobre el mercado de trabajo femenino en áreas urbanas del país, que reveló la heterogeneidad y la articulación entre las diferentes formas de trabajo femenino: asalariado, informal, en casas particulares y doméstico.<sup>2</sup> Los resultados de la investigación

*2. El trabajo femenino en áreas urbanas de Uruguay, 1986-1987: encuesta sobre muestra representativa en Montevideo, Paysandú y Maldonado, historias de vida y entrevistas a mujeres entre 14 y 55 años, Montevideo, Ciedur, 1988.*



fueron trabajados en talleres con activistas del movimiento sindical y publicados en fascículos dentro de una serie de la institución (“Uruguay hoy”) destinada a la difusión masiva.

Desde el comienzo trabajamos sobre la base de que las funciones adjudicadas a las mujeres y la subvaloración de su experiencia eran una construcción social que no derivaba de sus diferencias sexuales. Superar las desigualdades se planteaba como una vía para democratizar la sociedad. Aunque se buscaba no solo describir las desigualdades sino también desarrollar una perspectiva crítica, predominaron los estudios descriptivos en los que la realidad social era presentada a través de las voces de las mujeres.

En ese período la base del funcionamiento de los centros de producción de conocimientos fue la cooperación internacional. Se tejieron redes de relaciones con investigadoras de distintos países de la región, de Europa y Estados Unidos, “el colegio invisible” del que habló alguna vez Jeanine Anderson. Fue un período muy fermental por los intercambios entre académicas de distintas procedencias disciplinarias.

Silvia Rodríguez Villamil realizó una exhaustiva crónica del desarrollo de los diferentes estudios y actividades de difusión en esta etapa fundacional –entre 1978 y 1988– que muestra de forma rigurosamente documentada cómo se fue configurando desde distintos enfoques un campo de estudio con un perfil propio.<sup>3</sup>

## Los cambios en los 90

La década de 1990 estuvo signada por grandes cambios en la sociedad uruguaya y en el contexto internacional, que influyeron fuertemente en la producción de conocimientos en ciencias sociales.

Se produjo un decaecimiento casi generalizado de los centros privados de investigación, como consecuencia del retraimiento del financiamiento externo y de las muy débiles posibilidades de trabajar sobre la base de recursos nacionales. A partir de 1994 me reintegré plenamente a la Universidad de la República (Udelar).

Se fortaleció el desarrollo institucional de las ciencias sociales, en el

3. Silvia Rodríguez Villamil, “Diez años de estudios de la mujer en Uruguay, 1978-1988”, en Nea Filgueira, *La mujer uruguaya*, Montevideo, GRECMU, 1989.

ámbito universitario público y privado.<sup>4</sup> A fines de la pasada década se iniciaron los primeros programas nacionales de posgrado, con bastante retraso respecto de otros países de la región.

Por otro lado, cabe destacar que existió una mayor relación entre la academia y el sector público, el cual incorporó a expertos universitarios en algunos sectores sociales sometidos a procesos de reforma, como educación. También desde el sector público, especialmente desde el Instituto Nacional de la Mujer y la Familia, se contratan algunos estudios puntuales. Los apoyos de los organismos internacionales jugaron un papel importante en este sentido.

Este cambio de escenario permitió desarrollar una articulación más plural con el sector empresarial y el sindical, así como con otras instituciones del Estado. Se plantearon nuevos desafíos a la producción de conocimientos al requerirse insumos precisos para la elaboración de propuestas de acción.

Se incrementaron en sociología y economía los recursos técnicos al alcance de investigadoras e investigadores para la realización de estudios y diagnósticos. Los acuerdos interinstitucionales posibilitaron el acceso a la información producida por la oficina estadística nacional, lo cual hizo posible trabajar con un mayor nivel de profundidad, con nuevos desarrollos metodológicos, y en la construcción y actualización de indicadores de género, tanto a nivel nacional como departamental.

Se incorporó una conceptualización más abarcativa centrada en las relaciones de género y las temáticas se ampliaron, abarcando las transformaciones en las relaciones sociales en distintas esferas. El mundo del trabajo y la participación política y social fueron algunos de los ejes temáticos privilegiados por la investigación, tratando de hacer realidad medidas tendientes a permitir un acceso equitativo de las mujeres a las distintas estructuras de poder y a los distintos ámbitos de la vida social.

## **La trayectoria en el Departamento de Sociología**

Comenzamos en 1987 proponiendo seminarios temáticos optativos

4. La Udelar vuelve a ocupar un lugar central en las ciencias sociales, tanto en docencia como en investigación. Tiene recursos públicos estables para salarios y para fondos concursables para investigación, retornan a ella una parte importante de los destituidos por el golpe de Estado, los investigadores buscan desarrollar acuerdos con organismos públicos o privados y con actores y movimientos sociales.

en el último año de la Licenciatura en Sociología. Incorporamos en esta licenciatura una Sociología Especial, también optativa, en el plan de estudios de 1991. La irrupción de esta temática no estuvo exenta de dificultades en cuanto a su legitimidad y autonomía respecto de otras subdisciplinas, como la sociología del trabajo o de la familia. Se logró integrar en la licenciatura, a partir de 1995, talleres centrales de investigación sobre relaciones de género.

Se consiguió desarrollar, a partir de mi reincorporación plena a la vida universitaria en 1992, el Área de Sociología de Género (en ese momento, una de las cinco áreas del Departamento) que realiza actividades de investigación, docencia de grado y posgrado y actividades de relaciones con el medio (convenios y extensión). La creación de esta área fue posible por la política universitaria de promover la investigación científica mediante los llamados a concurso para aspirar a los fondos destinados a este fin. En esa etapa se investigó casi exclusivamente con fondos universitarios públicos derivados de llamados a concursos a proyectos, lo cual nos permitió mantener continuidad en nuestras actividades de enseñanza, investigación y relaciones con el medio.

Los conocimientos generados en la investigación pudieron ser incorporados a la enseñanza de posgrado. El Departamento de Sociología inició una primera edición de Maestría en Sociología en 1998, y en ella se incorporó una focalización en género y sociedad para todos los estudiantes. En la segunda edición incluimos un módulo en la concentración temática sobre desigualdades sociales y políticas sociales y en la tercera edición y cuarta edición, un curso sobre desigualdades sociales que integró las desigualdades de género. La relectura desde un análisis de género de los teóricos del bienestar y la presentación de resultados de investigación empírica sobre desigualdades de género, ciudadanía y trabajo han procurado contribuir al replanteo de los modelos de desarrollo social y de las nociones de igualdad y justicia.

No voy a tratar de explicar cómo esto fue posible; tal vez este desarrollo se vio favorecido por las características de los planes de estudio en una facultad nueva, que contempla la existencia de materias optativas (dentro de un limitado abanico de opciones) y talleres de investigación con temáticas que rotan, lo cual da cierta flexibilidad para incorporar nuevas propuestas.

Un rápido autoexamen de nuestra propia experiencia docente muestra que nos fuimos deslizando desde una bibliografía centrada exclusivamente en las teorías feministas clásicas y contemporáneas a una complementación con un análisis crítico del pensamiento social contemporáneo. Esto fue

estimulado por la incorporación a la enseñanza de las teorías feministas y de la investigación de género que están realizando nuevos aportes a las ciencias sociales. En los cursos se analizan las críticas de las autoras feministas de los países del norte que dialogan y debaten con representantes de la corriente principal de la sociología, los cuales son estudiados en las materias centrales de la docencia disciplinar, por ejemplo, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Gosta Esping-Andersen, entre otros.

Me parece importante destacar que el incremento de los intercambios académicos a nivel internacional en esa década jugó un papel fundamental para el desarrollo de este campo. Fue también una estrategia buscada que contribuyó al reconocimiento interno dentro del colectivo disciplinario. La participación en eventos internacionales y la realización de pasantías se vio facilitada por la creación de programas específicos para su financiamiento. Este apoyo fue fundamental para la formación y consolidación del grupo de investigadoras, incentivar el intercambio y poder insertarnos en las discusiones de la comunidad académica internacional. En materia de docencia, los intercambios de docentes con otros programas de estudio ha sido muy fermental. Quisiera destacar la experiencia muy positiva e innovadora de la red creada a través del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP; Flacso, Argentina), que permitió la elaboración de contenidos a través de la coordinación del seminario sobre pobreza, globalización y género que realizamos en el marco de ese programa.

La participación en redes académicas y proyectos regionales y subregionales ha potenciado nuestro trabajo al posibilitar el desarrollo de una perspectiva comparada, lo cual da la oportunidad de lograr avances en cualquier campo del conocimiento.

El énfasis estuvo en el análisis de la dinámica del mercado de trabajo y de la división sexual del trabajo a través de la producción de investigaciones empíricas, como insumo indispensable para desarrollar argumentos, dar visibilidad pública a las desigualdades de género y ser construidas social y políticamente a fin de ser incorporadas a las agendas. El trabajo con fuentes estadísticas oficiales que revelaban la situación de las mujeres y las brechas de género fue facilitado a partir de entonces, como resultado de la democratización del acceso a la información generada por la oficina estadística nacional. Simultáneamente, continuaron los estudios de caso sobre las desigualdades de género en el mercado de trabajo que daban cuenta de la heterogeneidad de las inserciones laborales de las mujeres.

La década de 1990 fue muy intensa: seminarios y cursos optativos dentro de la carrera de Sociología, eventos, congresos e intercambios de

distinto tipo con investigadoras del país y de la región, y una creciente participación en redes internacionales. También se ampliaron los recursos informativos documentales, lo que alcanzaría volúmenes inimaginables en los años siguientes.

En esos años se produjeron importantes discusiones sobre la ampliación de los derechos ciudadanos de las mujeres en el marco del impacto de las crisis de los Estados y de los procesos de globalización que acentuaron la heterogeneidad y las desigualdades sociales. La participación en 1996 en el Grupo de Estudios del Proyecto Mujer y Gobierno Local en América de la Unión Internacional de Municipios y Autoridades Locales<sup>5</sup> me permitió analizar la experiencia latinoamericana en relación con los fundamentos maternalistas de las nuevas políticas sociales neoliberales, en el marco de los procesos de ajuste estructural y reforma del Estado en diferentes escenarios de integración regional.<sup>6</sup>

Progresivamente, los trabajos realizados condujeron a la discusión del propio concepto de trabajo, a las críticas a las categorías tradicionales para captar y analizar la diversidad y complejidad de las experiencias de trabajo de las mujeres, cuestión ya insinuada en las primeras investigaciones. Casi a finales del siglo pasado, procuré dar cuenta de los avances realizados a lo largo de esos años en el libro *Sociología y género* con la intención de mostrar que la perspectiva sociológica y el análisis de las relaciones sociales del punto de vista de género se enriquecen mutuamente.<sup>7</sup> Si bien el trabajo remunerado fue el centro de nuestro trabajo en esos años, como un importante camino hacia los derechos sociales de ciudadanía y hacia una ciudadanía política activa, consideramos necesario enfatizar la interacción de lo privado y lo público para entender mejor la posición económica de las mujeres.

Procurando aportar a la comprensión de las dificultades de las mujeres para poder gozar de un estatus ciudadano completo y para tener un efectivo acceso y ejercicio de su derecho al trabajo en condiciones de

5. El proyecto fue coordinado por María Arboleda y el grupo de estudios, por Jeanine Anderson y Ana Falú.

6. Cf. Rosario Aguirre, “El maternalismo en las políticas sociales: la ciudadanía a debate”, en Eugenia Holo y Ana María Portugal (eds.), *La ciudadanía a debate*, Santiago de Chile, CEM-Ediciones de las Mujeres, 1997. Una nueva versión fue publicada en 1999 en la *Antología latinoamericana y del Caribe: mujer y género, período 80-90*, recopilación histórica sobre temas fundantes de las ciencias sociales latinoamericanas.

7. Rosario Aguirre, *Sociología y género: las relaciones entre hombres y mujeres bajo sospecha*, Montevideo, Doble Clic-Udelar-CSIC-FCS-DS, 1998.

equidad comenzamos a trabajar nuevas líneas de investigación sobre la ciudadanía social de las mujeres con relación al trabajo.

### **La trayectoria en este siglo**

Comenzamos el nuevo siglo con un proyecto de investigación, “Género, ciudadanía social y trabajo”.<sup>8</sup> Las bases conceptuales retoman las contribuciones del pensamiento feminista a las teorías de la ciudadanía. La hipótesis central sostiene que la distancia entre la igualdad formal y la igualdad real –que fragiliza la ciudadanía social de las mujeres– procede de la división sexual del trabajo en la producción y de las responsabilidades derivadas de la maternidad y de los cuidados a los miembros de las familias. Se afirma que esa “fragilidad” tiene una dimensión político-económica que se expresa en la exclusión y la segregación ocupacional, y una dimensión ideológica valorativa, presente en las representaciones estereotipadas que devalúan los trabajos de las mujeres y que alcanza en mayor medida a las trabajadoras madres. Una parte de esta investigación sirvió de insumo para la tesis de doctorado de Karina Batthyány, la primera tesis de doctorado de Sociología que en el país tomó como tema los cuidados, en este caso, el cuidado infantil.

Partimos de la convicción de que las transformaciones sociales requieren conocimientos y acción social para incidir en el diseño y la implementación de las políticas públicas. A partir de 1992-1993 formamos un grupo integrado por mujeres procedentes de distintos campos disciplinarios y con experiencia de militancia social, con la finalidad de colocar en el debate público las transformaciones familiares y generar iniciativas legislativas para su reconocimiento. En octubre de 1993 se organizó el seminario internacional “Qué mujeres, qué hombres, qué familias: una mirada al siglo XXI”. Con Clara Fassler presentamos una ponencia que posteriormente fue publicada en Chile por Isis Internacional.<sup>9</sup> Esta fue una simiente a partir de la cual se generaron otros espacios.

La mirada en la esfera privada y no mercantil condujo a la recon-

8. Cf. Rosario Aguirre, “Género, ciudadanía social y trabajo”, Montevideo, Udelar-FCS-DS, 2003, investigación basada en fuentes secundarias, estudio de caso múltiple a trabajadoras madres de tres instituciones financieras del sector público y el privado y entrevistas en profundidad a trabajadoras madres de esos sectores. Contó con el apoyo del Programa I&D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, Udelar.

9. Rosario Aguirre y Clara Fassler, *¿Qué hombres? ¿Qué mujeres? ¿Qué familias? Familias siglo XXI*, Santiago de Chile, Isis Internacional-Ediciones de las Mujeres, 1994.

ceptualización de la noción de trabajo, la incorporación del trabajo no remunerado para incluir las actividades no mercantilizadas que se realizan en los hogares por fuera de las relaciones laborales. El concepto de división sexual del trabajo en las familias ha sido clave para entender las limitaciones que las mujeres tienen para el efectivo ejercicio de sus derechos sociales, económicos y políticos. Las preguntas de investigación se dirigen a conocer cómo es el reparto de las tareas en las familias, quién hace qué, qué tiempo le dedica y qué instituciones pueden participar en la reorganización de ese reparto.

Casi inmediatamente nuestro grupo de investigación enfatizó el análisis empírico y cuantitativo. Se dedicó a partir de 2003 a la medición del trabajo no remunerado en sus distintos componentes (trabajo doméstico, cuidados familiares, trabajo comunitario), dedicando gran parte de los esfuerzos a fortalecer la producción de información, como sustento de esos análisis. La estrategia metodológica utilizada como en los antecedentes internacionales fue el uso del tiempo. Promovimos su incorporación a las estadísticas oficiales, junto con Inmujeres. Aquí el apoyo de los fondos concursables de la Universidad de la República, la colaboración de María Ángeles Durán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y de ONU Mujeres tuvieron un rol fundamental.

A partir del análisis de estas encuestas y de los desarrollos anteriores, los cuidados alcanzan la máxima relevancia debido a su estrecha vinculación con las desigualdades de género, su vinculación con la identidad femenina y como una barrera para el real ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Los trabajos sobre cuidados realizados en los primeros años de este siglo sentaron las bases para la fundación del Grupo de Investigación en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, que originalmente llamamos Área de Sociología de las Relaciones de Género.

Es así como, a partir de los resultados de estas encuestas y de los desarrollos anteriores, al lado de una comunidad internacional de investigadoras que crecía y de un contexto del país que lo requería, aunque todavía no lo demandaba, nos centramos en el estudio de la crisis de los cuidados y de las relaciones sociales de cuidado, mostrando su vinculación con las desigualdades sociales y de género.

Este recorrido conceptual y empírico condujo a la revisión de la literatura internacional sobre la organización social del bienestar tratando de caracterizar los modelos de cuidado y el rol de los diferentes agentes proveedores (Estado, mercado, familia, comunidad). El interés por abordar el nivel institucional de la división del bienestar a fin de preguntarse

por la posibilidad de repartir los cuidados nos condujo a la propuesta de Adalbert Evers, Maria Pijl y Clare Ungerson de 1994<sup>10</sup> que a través de la figura del “diamante del bienestar” identifica los agentes del bienestar (esta ha sido posteriormente utilizada por una variada bibliografía, muchas veces olvidando a los autores que la introdujeron). Me refiero a los cuatro agentes sociales principales (Estado, mercado, familias y voluntariado) y otros agentes subsidiarios como amigos, vecinos, servicios públicos a través de empresas privadas, ONG subvencionadas por el Estado. Esta mirada ha permitido detectar desigualdades y desbalances en la provisión de los agentes y avanzar hacia la caracterización de diferentes modelos de organización del bienestar.

Las relaciones con la sociedad civil se estrecharon a través fundamentalmente de la Red Género y Familia que se había conformado en 1994 con el liderazgo de Clara Fassler con el objetivo de incidir para que las políticas públicas incluyeran la perspectiva de género y generaciones. Se impulsaba el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares y la modificación de las prácticas institucionales a fin de garantizar los derechos humanos. Me integré al trabajo de esta red aportando a su trabajo los resultados de nuestras investigaciones, fundamentalmente desarrollos conceptuales y empíricos sobre la crisis de los cuidados y los resultados de la primera encuesta de uso del tiempo y trabajo no remunerado que revelaban la desigual carga de trabajo de varones y mujeres en los diferentes tipos de hogares y estratos socioeconómicos.

Las reflexiones de quienes integraban este espacio y de los actores sociales, políticos y gubernamentales que fueron convocados a distintas instancias de intercambio aportaron argumentos para la incidencia política que fue realizada a través de una estrategia metodológica innovadora. Estuvo basada fundamentalmente en tres herramientas: producción de documentos para el debate, mesas de diálogo con actores clave en distintas áreas y producción de documentos de sistematización y difusión de los debates producidos. La Red realizó un aporte sustancial en cuanto a colocar en la agenda social, política y gubernamental el tema de los cuidados. Su trabajo contribuyó a la concreción de una red más amplia, la Red Pro Cuidados, que nació en 2013 para impulsar la aprobación de la ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNIC).

10. Citados por Michael Hill, *Social Policy: A comparative analysis*, Londres, Prentice Hall-Harvester Wheatsheaf, 1996.



En un artículo publicado en 2014,<sup>11</sup> el grupo de investigación realiza un recorrido de la producción sociológica de estos últimos años que evidencia el círculo virtuoso entre esta producción, los actores sociales y la formulación de políticas que buscan transformar las relaciones de género.

### **Los desafíos para los estudios de género**

Los avances logrados por los estudios de género en Uruguay en los últimos años son importantes, pero aún no es posible prever su evolución futura.

Dos elementos juegan a favor de la sostenibilidad de su expansión: los avances demográficos que están ocurriendo en el alumnado y en el profesorado universitario y el proceso de acelerada modernización del sistema científico que comenzó recientemente posibilitando la apertura de nuevos espacios para la investigación y la formación, así como procesos más transparentes para el acceso a los recursos.

Un factor que juega en contra consiste en las dificultades de reconocimiento por desconocimiento o prejuicios ideológicos por parte de algunos académicos y profesionales y la existencia de desigualdades en las carreras docentes y de investigación, así como las dificultades de las mujeres para el acceso a las instancias de gobierno universitario y para llegar a los máximos niveles en el Sistema Nacional de Investigadores, temas emergentes que comienzan a ser investigados.

En este marco es que planteo los principales desafíos para el desarrollo de este campo, a saber:

- Los aportes del conocimiento a la sociedad. Surge una preocupación importante en cuanto a aportar al diseño y la formulación de políticas públicas. Se trata, asimismo, de colaborar con mujeres que, asumiendo cargos públicos de responsabilidad, intentan llevar a la práctica algunas iniciativas que tienen su origen en propuestas derivadas de investigaciones.

Por otra parte, el conocimiento continúa siendo un instrumento que le otorga mayor legitimidad a las propuestas de las organizaciones sociales. Una cuestión problemática y de enorme complejidad –que

11. Rosario Aguirre, Karina Batthyány, Natalia Genta y Valentina Perrota, “Los cuidados en la agenda de investigación y en las políticas públicas en Uruguay”, *Iconos. Revista de ciencias sociales*, N° 50, 2014, pp. 43-60.

solo enunciamos aquí— es la mediación entre las esferas académicas y la militancia feminista, la cual tiene aspectos específicos y otro más general que se enmarca en la discusión sobre los puentes entre investigación y sociedad, entre conocimiento y acción.

- La profundización de los enfoques teóricos. Simultáneamente, se plantea la necesidad de analizar la temática desde nuevas perspectivas. En las investigaciones de los años 80 el foco del interés estaba en el sujeto mujer y a veces en las relaciones sociales hombre-mujer a los efectos de servir al diseño, la instrumentación y evaluación de proyectos de desarrollo vinculados a la cooperación internacional. Hoy en día se ha complejizado el concepto de género en cuanto categoría de análisis que da cuenta de la construcción histórica del sistema de desigualdades sociales y de diferenciaciones culturales. Tenemos más autonomía para realizar un trabajo teórico no tan atado a los condicionamientos del financiamiento y a proyectos de desarrollo predeterminados. La tarea académica puede asumir una lógica propia que permita definir una agenda propia, problematizar marcos conceptuales, indagar sobre temas escasamente investigados.

Si bien los estudios de género exigen un abordaje interdisciplinario, la ubicación de estos estudios en la Universidad pública nos obliga a respetar las especificidades de las distintas disciplinas para establecer puentes de comunicación con las principales corrientes del pensamiento social y político dominantes en cada una de ellas. Esta es una tarea difícil de asumir; supone tácticas “subversivas” de cuestionamiento del saber establecido, pero es ineludible a fin de ubicar los estudios de género en los planes de estudios e incorporar bibliografía que pueda promover la reflexión crítica sobre “los padres fundadores” de la disciplina.

Por otra parte, la perspectiva de género se expande y se adopta por parte de investigadoras e investigadores de distintos grupos e instituciones académicas cuya preocupación fundamental no son las mujeres ni el género; para ellas y ellos el género es una variable o una dimensión de la desigualdad de la misma jerarquía que otras o solamente una variable diferenciadora en las muestras. Se abre así un frente de discusión con colegas sociólogos y de otras disciplinas de gran interés.

Estamos convencidas de que una de las vías de avance radica en la promoción de relaciones de intercambio y cooperación que permitan la realización de estudios comparativos para desarrollar una reflexión crítica en torno a un proyecto intelectual propio de la región, a la vez que se responda a las necesidades de integrar estos conocimientos en la

estrategia de fortalecimiento institucional de los espacios destinados a las políticas de género.

La feminización de la población universitaria docente y estudiantil, sobre todo en las ciencias sociales, favorece la emergencia de esa masa crítica, pero además sabemos que es necesario remover factores discriminatorios cuyos mecanismos de actuación debemos identificar.<sup>12</sup>

12. Además de los textos citados, recomiendo los siguientes: Rosario Aguirre, intervención en la mesa de trabajo “Los usos del conocimiento de género y las trayectorias individuales e institucionales de las investigadores/as”, en Virginia Guzmán y Eugenia Holo (eds.), *El conocimiento como un hecho político*, Santiago de Chile, CEM, 1996, y “¿Es posible la renovación de la investigación científica desde la perspectiva de género? Aportes para la reflexión”, en *Red Temática de Estudios de Género, Género y Universidad, avances y desafíos: los estudios de género en la Universidad de la República*, Montevideo, Udelar, 2003, disponible en [www.rau.edu.uy/sui/publicaciones/docTrabajo](http://www.rau.edu.uy/sui/publicaciones/docTrabajo); Susana Prates, “Los estudios de la mujer: un desafío para la política universitaria de investigación y docencia”, *Revista de Ciencias Sociales*, segunda época, N° 1, 1986, pp. 78-89.



## Sociología y territorio: un camino de encuentros desde la investigación

*Alfredo Falero\**

### **Cuando el sociólogo se encuentra con el territorio**

El sociólogo puede encontrarse con el territorio en múltiples e infinitas formas. Desde los más diversos temas con que se trabaja, se puede llegar a la necesidad de plantear el problema territorial. Si bien es la geografía la que tiene allí un centro neurálgico de atención, esto ocurre en general con las distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades en general. De modo que, como punto de llegada o de partida, como “soporte” o “espacio contenedor” de relaciones sociales, siempre asoma aquí y allá esta noción compleja, polisémica, siempre actual, de territorio.

En pocas palabras, se puede definir territorio como producción social de una espacialidad. Porque, en cuanto marco, delimitación, porción que lleva implícito este macroconcepto, lo que lo define esencialmente es cómo se relacionan allí diversos actores o agentes sociales y cómo entre tensiones, conflictos, luchas que son a la vez prácticas y simbólicas en función de sus intereses terminan definiendo un territorio determinado. Por lo expuesto, puede decirse que no todos los “espacios” son territorios, aunque todo territorio implica un espacio. O, lo que es lo mismo pero para hacerlo más explícito aún, un territorio es un “fragmento” del espacio.

De este modo aparece inmediatamente la idea de “apropiación” de un territorio y aquí surgen los problemas. Pues el territorio puede ser también el espacio de concreción de la destrucción ambiental originada en los procesos de apropiación económica. Tener esto en cuenta no significa necesariamente una preservación de tipo religioso con una predicación

\* Doctor en Ciencias Sociales, especialización Sociología. Docente e investigador, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [alfredo.falero@cienciassociales.edu.uy](mailto:alfredo.falero@cienciassociales.edu.uy)

de tipo ecologista-naturista. En todo caso, se convierte siempre en centro de representaciones sociales, racionalidades y estrategias de actores diferenciadas referidas a dicha problemática, pues de fondo, como recordaba Milton Santos, allí opera la relación del ser humano que, a partir de un conjunto de medios instrumentales y sociales, transforma la naturaleza.<sup>1</sup>

Una nación o una comunidad tienen una referencia directa a un territorio y esto se encuentra en los propios orígenes de la sociología como disciplina. Como Karl Marx ha sido, de los autores considerados “clásicos”, el que más exequias ha sufrido hasta la actualidad y la sociología local ha puesto su granito de arena en ello, conviene recordar que el tema no le fue ajeno, como no lo fue para Max Weber o Émile Durkheim.

Esto no quiere decir que haya tenido siempre en cuenta sus implicancias. David Harvey seguramente es uno de los autores que más se ha ocupado de ello sin dejar de realizar un análisis crítico. Así decía que “quizá una de las principales ausencias en el *Manifiesto comunista* es su falta de atención a la organización territorial del mundo en general y del capitalismo en particular”.<sup>2</sup>

Dicho esto, si se toma la obra en su conjunto, para Marx la expansión territorial trascendiendo bases nacionales era una de las bases constitutivas de la explotación del mercado mundial a partir de los intereses de la clase capitalista. Pero se podría agregar que en ese marco no llegó a comprender de forma inmediata las complejidades que encerraba la expansión territorial bajo una lógica capitalista. Cuando a comienzos de 1850 examina la política británica en la India sugería una idea casi celebratoria del desarrollo capitalista a partir de lo que veía en Europa. Esto será revisado drásticamente advirtiendo otras complejidades, pero el punto destacable con el ejemplo es cómo hasta una gran capacidad intelectual para campar complejidades sociales puede caer en una perspectiva demasiado lineal en este tema de la expansión territorial capitalista y de relaciones sociales implicadas en ella.

El debate sobre la globalización que comenzó en la década de 1990 (y que acumula una vastísima bibliografía) requirió hablar de territorios profundamente transformados en función de mecanismos sociales que también la sociología ayuda a poner de manifiesto. Flaco favor se le hace a la disciplina cuando se entiende que su aporte es simplemente agobiar con un conjunto de estadísticas –por ejemplo, para describir un territorio

1. *Território e sociedade: entrevistas com Milton Santos*, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2001.

2. David Harvey, *Espacios de esperanza*, Madrid, Akal, 2005, p. 49.

determinado– marginando lo sustantivo: el conjunto de mecanismos, agentes e intereses que terminan configurándolo, que le terminan dando una lógica específica con relación a otro.

La perspectiva someramente expuesta hasta aquí permite mostrar alguna de las bases de lo que sigue: un recorrido personal –entre muchos itinerarios posibles, debe insistirse– en que la investigación sobre problemáticas sociales se encontró con el territorio. Encuentros que, como se verá, pueden entrar sin avisar y colocar una complejidad a resolver como una presencia inevitable demandan estar atento para visualizar mediaciones analíticas, líneas de fuga, proyecciones, siempre pensando en el trabajo del sociólogo.

Y en lo personal esto se manifestó principalmente en tres temáticas precisas que por razones de espacio serán brevemente expuestas: la presencia directa e indirecta del territorio en el pensamiento sociológico latinoamericano, la importancia que pudo advertirse al estudiar movimientos sociales en Uruguay y América Latina y, finalmente, su necesidad de abordarlo cuando se procura captar las formas en que procesos globales se instalan y modifican el Estado-nación (en particular en el caso uruguayo).<sup>3</sup>

### *Primer encuentro: el territorio como referencia no explícita del debate sobre modernización y dependencia en la década de 1960*

Sea en el largo debate de tránsito de sociedades tradicionales a sociedades modernas como en el incomprendido pero fructífero debate sobre dependencia que recorrió toda la década de 1960, asoma el territorio. Pero más bien puede decirse –una vez examinada la literatura sociológica de aquellos años–<sup>4</sup> que se cuele, se filtra en los debates.

3. Podría agregarse una cuarta línea de trabajo, que aquí no será expuesta, que fue la de las transformaciones del territorio por ese actual y vasto fenómeno del turismo. Cf. Alfredo Falero y Rossana Campodónico, *El turismo bajo la lupa académica*, Montevideo, Udelar-CSIC-Bibliotecaplural, 2014. Corresponde, además, establecer que, en cuanto recorrido personal, el texto se verá cargado de referencias a trabajos propios pero cabe integrarlas a efectos de posibilitar la profundización de las problemáticas abordadas.

4. Cf. Alfredo Falero, “El paradigma renaciente de América Latina: una aproximación sociológica a legados y desafíos de la visión centro-periferia”, en AA.VV., *Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano*, Buenos Aires, Clacso 2006; “De amnesias conceptuales e intelectos capturados: algunos aportes de la década del 60

En el primer caso, porque las asincronías sociales derivadas de la transición también se expresan en diferentes tipos de territorio. La “dualidad estructural” de la que se hablaba en esos años también implica lo territorial. Lo interesante es que esto ocurre dentro de un mismo país, de modo que la idea de “sociedad” mecánicamente atribuida a un Estado-nación podía ocultar diferencias sustantivas entre territorios.

Las variables adjudicadas a la “sociedad moderna” eran, entre otras, estratificación social relativamente abierta, organización racional del Estado con participación de los estratos populares y –lo que significa una transferencia de lealtades de la comunidad local a la comunidad nacional– secularización de las relaciones familiares y cambios en la estructura demográfica (con la introducción de un “comportamiento racional”). En la concepción predominante de aquellos años, la homogeneización se lograría con una difusión de pautas culturales desde lo moderno a lo tradicional, un simplismo que la historia se encargó de colocar en su lugar.

Podrían colocarse esas diferencias territoriales en todos los países de América Latina, pero el propio Uruguay es un ejemplo. La visualización de país relativamente moderno, el mito de la excepcionalidad anestesiaban sobre profundas diferencias entre Montevideo y el interior profundo. La marcha cañera en el marco de la crisis social y del ciclo de luchas de la década de 1960 puede considerarse parte de un despertar abrupto de una realidad oculta muy alejada de lo “moderno”.<sup>5</sup> De hecho, la idea de Cono Sur como región relativamente más desarrollada oculta (hasta hoy) las profundas diferencias sociales expresadas territorialmente no solo en nuestro país sino también en la Argentina y Chile.

También el debate sobre dependencia mostraba las diferencias territoriales. Porque si, como explicaron autores como André Gunder Frank,<sup>6</sup> la expansión del sistema capitalista penetró efectiva y totalmente aun los aparentemente más aislados sectores del mundo subdesarrollado, esto quiere decir que no solo instituciones, Estados, relaciones económicas, políticas, sociales y culturales fueron reorganizados desde los países centrales; también lo fueron los territorios. Las dinámicas de economía

---

para pensar América Latina en el siglo XXI”, en Yamandú Acosta, Waldo Ansaldi, Verónica Giordano y Lorena Soler (coords.), *América Latina piensa América Latina*, Buenos Aires, Clacso, 2015.

5. Cf. Alfredo Falero, *Las batallas por la subjetividad: construcción de derechos, luchas sociales y dominación simbólica en Uruguay*, Montevideo, Udelar-CSIC-FCS-Fanelcor, 2008.

6. André Gunder Frank, James Cockroft y Dale Johnson, *Economía política del subdesarrollo en América Latina*, Buenos Aires, Signos, 1970.



de enclave (plantación o mineros) que señalaban Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto en 1969 hoy reactualizadas –como se explicará más adelante– suponían profundas transformaciones territoriales.<sup>7</sup>

Un último elemento a anotar aquí son categorías que se debatieron en aquellos años y que, además de componentes sociales, tenían profundos componentes territoriales. Es el caso de “marginalidad”. Este concepto tiene una connotación territorial además de la propiamente social y transmite una idea genérica de periferia urbana (si bien puede encontrarse que se habla de “marginados” en el centro de la ciudad). Socialmente, sugiere exclusión (forzada) en distintos niveles. Originalmente, la noción se asocia al problema de la inmigración y al hecho de pertenecer a un grupo distinto al que lo recibe, según lo examinó en su momento el sociólogo Robert Ezra Park, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago conocida por sus desarrollos en sociología urbana.

En la región el concepto está profundamente conectado con el desarrollo conceptual de la década de 1960 que llevó a proponer y debatir categorías de análisis que pudieran explicar la especificidad de la región. En esa discusión participaron varios sociólogos reconocidos. Gino Germani fue uno de ellos, pero no lo articuló especialmente con su dimensión territorial. En línea con su propuesta teórica de modernización, el autor visualizaba la marginalidad como problema del carácter asincrónico y desigual del proceso de transición a la modernización. Para ello tenía en cuenta un conjunto de factores que agrupaba en una dimensión económico-social, una político-social, una de orden cultural, una psicosocial y finalmente una demográfica.<sup>8</sup>

En cambio, puede afirmarse que otros autores colocaron el tema –más allá del debate entre ellos– con una impronta más territorial. En esta segunda línea, pueden recordarse entre otros los aportes de José Nun, Aníbal Quijano y Ruy Mauro Marini. En contraposición a los países desarrollados con un mercado de trabajo autónomo, el funcionamiento del mercado de trabajo en América Latina es dependiente. Los “excedentes” de población sugerían mecanismos de segregación social y esto suponía una expresión territorial que no consistía en meras supervivencias del pasado que desaparecerían con la “modernización”.

De este modo, la marginalidad asumía un carácter estructural en función de la dinámica de capitalismo dependiente, que se reproducía,

7. Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Ciudad de México, Siglo XXI, 1977.

8. Gino Germani, *El concepto de marginalidad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972.

y que llevaba a ensanchar esos “márgenes” de las ciudades latinoamericanas.<sup>9</sup> No está de más recordar que estas ideas no fueron mejoradas cuando se expandió el concepto de exclusión en la década de 1990 con intenciones de sustitución de “marginalidad”. Como señaló el sociólogo brasileño José de Sousa Martins, más que una definición más precisa del problema, la idea de exclusión expresaba una incertidumbre y una gran inseguridad teórica en la comprensión de los problemas sociales de la sociedad contemporánea.<sup>10</sup>

Como siempre, queda la sospecha de que revisar y ponderar estos planteos de las ciencias sociales de la década de 1960 constituyen un mero ejercicio arqueológico; basta visualizar la situación urbana de América Latina hoy para mostrar la actualidad de esa expresión territorial del problema, su marcado carácter estructural, y lo que ha conllevado en cuanto a lo que los sociólogos contemporáneos trabajan como “fractura social” y de estigmatización espacial de la pobreza, entre otras muchas líneas de análisis.<sup>11</sup>

### *Segundo encuentro: el territorio como componente clave para pensar los movimientos sociales en América Latina*

En la línea de trabajo sobre movimientos sociales y acciones colectivas aparece decididamente el territorio en los dos últimos ciclos de luchas de la región. De hecho, puede considerarse uno de los ejes teórico-metodológicos clave para su estudio.<sup>12</sup> Sin embargo, aquí solo corresponde mencionar algunos de los elementos que en el estudio del tema en Uruguay y la región permiten mostrar el punto.

En el segundo ciclo de luchas (de expulsión de las dictaduras y re-

9. Cf. Aníbal Quijano, *Cuestiones y horizontes (antología esencial): de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*, Buenos Aires, Clacso, 2014.

10. José de Sousa Martins, *A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais*, Petrópolis, Vozes, 2008, p. 27.

11. Cf. Loïc Wacquant, “La estigmatización territorial en la edad de la marginalidad avanzada”, *Ciências Sociais Unisinos*, vol. 43, N° 3, 2007, pp. 193-199.

12. Cf. Alfredo Falero, “Desafíos teórico-metodológicos para el estudio de los movimientos sociales en América Latina”, en Heriberto Cairo y Gerónimo de Sierra (comps.), *América Latina una y diversa: teorías y métodos para su análisis*, San José de Costa Rica, Alma Máter, 2008 pp. 225-247 (también publicado en *El Uruguay desde la sociología* VI, Montevideo, Departamento de Sociología, 2008).

cuperación democrática) se observa la presencia de fuerte tejido social barrial y de movimientos vinculados con la vivienda, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua como uno de los actores en el caso uruguayo hasta la actualidad. En el tercer ciclo de luchas que emergen en enfrentamiento a los proyectos neoliberales de la década de 1990 –y que precede y da lugar a lo que luego se denominó ciclo de gobiernos “progresistas” y “nacional-populares”– claramente se visualiza el protagonismo de movimientos de base territorial o con despliegue territorial de las luchas sociales. El territorio es espacio de resistencia, pero también de resignificación en función de las luchas por su uso.

Para captar esto debe tenerse en cuenta el lugar de América Latina en la economía-mundo como exportadora de productos primarios y *commodities*, y lo que ello implica con diversas y generalizadas dinámicas extractivistas, llámense megaminería o agronegocio. De modo que las luchas, las resistencias, los grandes núcleos conflictivos de la región (no los únicos, obviamente) están relacionados con el uso del territorio.

Uno de los movimientos más importantes a nivel mundial es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Nacido formalmente en 1984, ha debido tener en cuenta en sus demandas de tierra (aunque no solamente se trata de eso) que en las últimas dos décadas el campo brasileño –como también ocurrió en la región en general– fue apropiado por el capital financiero y las empresas transnacionales que impusieron su modelo de producción agrícola que es precisamente el “agronegocio”. Las elites rurales locales –con su gran bancada ruralista en el Congreso– están asociadas con ese esquema.

Actualmente el movimiento integra 130.000 familias acampadas en Brasil (es decir, sin tierra, no asentadas), 350.000 familias asentadas, 100 cooperativas y una dinámica agroindustrial alternativa, con experiencias de producción agroecológica, dos elementos a tener en cuenta a los efectos de este trabajo. En primer lugar, si bien en los últimos años ha sido más un período de resistencia que de avance sostenido para el movimiento, pues no solo se trata de las dinámicas económicas mencionadas sino que este ha debido enfrentar una política de criminalización de organizaciones sociales y de protestas, considerarlo para ejemplificar la importancia de la relación entre campo popular y territorio en la región sigue siendo clave. En segundo lugar, mencionarlo casi como un caso paradigmático no puede eclipsar o invisibilizar la existencia de un enorme conjunto de movimientos y experiencias más pequeñas con idénticas preocupaciones en toda América Latina. Piénsese en las luchas por la tierra en Colombia

y el creciente asesinato de dirigentes de organizaciones sociales y activistas en general.

También es necesario recordar que grandes procesos colectivos de protesta en la Argentina desde fines de la década de 1990, y que alcanzan esa coyuntura clave de la crisis de 2001 que implica el corte de ruta o de calles, las asambleas barriales, los movimientos de desocupados, sugieren otra relación con el territorio. Con la crisis del período del presidente Mauricio Macri, nuevamente el tejido social del conurbano de Buenos Aires y las acciones colectivas de base territorial se vuelven elementos clave para entender las dinámicas de resistencias y conflicto.

Cuando se examina el movimiento mapuche en Chile y Argentina, muchas veces se queda preso de una visión centrada en “identidades” y “cosmovisiones” o de un debate sobre multiculturalidad. Es la fórmula conceptual perfecta para escamotear el problema central de fondo, que es la apropiación territorial en la que intervienen intereses políticos de ambos Estados-nación y grandes intereses económicos, particularmente transnacionales. Del mismo modo, considerada la región andina, se advierte que han sido movimientos de base territorial –indígena y campesina– grandes protagonistas desde la década de 1990. Por citar solo un ejemplo reciente: los eventos ocurridos en 2019 en Ecuador, que han frenado las políticas neoliberales del presidente Lenin Moreno, han tenido como gran protagonista a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El caso uruguayo es un poco particular, no porque no existan las mismas dinámicas económicas que en el resto de la región, sino porque, considerando la escala, el despoblamiento rural (se estima 5% de población rural según el censo de 2011), la estructura social general y el peso que tienen los trabajadores urbanos, los núcleos conflictivos fuertes no están asociados con el uso del territorio por la expansión de plantaciones de soja y forestación o el uso de recursos naturales, sino por movilizaciones y protestas de base territorial urbana.

Esto, por supuesto, no quiere decir que el uso del territorio haya estado exento de conflictos. Piénsese en el intento frustrado en torno a un emprendimiento de megaminería de hierro en la zona de Cerro Chato y Valentines, así como la apuesta –conectada a lo anterior en cuanto suministro de energía– de la regasificadora en el oeste de Montevideo.<sup>13</sup> Recuérdense las movilizaciones por la ley de riego y su intento frustrado

13. Cf. Alfredo Falero, “Transformaciones territoriales y resistencias colectivas: consideraciones sociológicas a partir de los emprendimientos de megaminería y

de derogación y conflictos en lugares específicos (Laguna del Cisne, en el departamento de Canelones, por ejemplo). Nótese asimismo el conflicto por la infraestructura necesaria (particularmente el ferrocarril) para la instalación de la planta de celulosa de UMP en el centro del país.<sup>14</sup>

En nada de lo antes expuesto está ajena la discusión por el uso del territorio, si bien puede presentarse aquí y allá como un problema ambiental (que también puede serlo) o de afectación de vecinos (que igualmente también puede serlo). El peligro analítico es que todo quede recortado en pequeñas experiencias de resistencia y no advertir la existencia de lógicas más de fondo en este tipo de conflictos, ya que la captación o no en ese sentido tiene profundas derivaciones explicativas.

### *Tercer encuentro: procesos globales, economía de enclaves y dinámicas de control territorial*

El último encuentro con el territorio que se desea presentar en esta trayectoria personal de investigación lo tiene como verdadero protagonista y tiene relación con mutaciones globales de vasto alcance y con lo que suele denominarse en la literatura especializada como generación de “territorios estratégicos”. Porque la investigación sobre Zonamérica comenzó no desde la identificación de una especificidad uruguaya, sino desde los debates sobre globalización y capitalismo cognitivo y la necesidad de visualizar cómo se cristalizaba todo ello en América Latina y Uruguay.

Más allá de disidencias, el debate sobre capitalismo cognitivo con epicentro en Francia es sustantivo para visualizar las profundas mutaciones en curso, no solo en términos de la conexión entre tecnología y relaciones sociales, ya que de allí emerge una enormidad de problemáticas (como trabajo, educación, entre otras). Pero se debe ser cuidadoso en no caer en perspectivas eurocéntricas y marginar o minimizar la polaridad entre regiones centrales de acumulación y regiones periféricas como América

---

regasificadora en Uruguay”, en *El Uruguay desde la sociología*, Montevideo, Departamento de Sociología-FCS, 2014.

14. Otro caso abordado en Uruguay en algunos trabajos sociológicos orientados por quien suscribe fue Bella Unión. Allí se ha examinado la territorialidad de las acciones y se ha mostrado que no hubo una política de tierra efectiva para los trabajadores. Podría decirse que lo que ocurre territorialmente en el norte del país suele estar invisibilizado.

Latina (una fecunda derivación del “primer encuentro” con el territorio, antes mencionado).

En cuanto a territorio específicamente, el debate implicó en su momento la discusión sobre efectos “desterritorializadores”. Uno de los autores más sobrevalorados y difundidos en ese sentido es Manuel Castells, quien propuso la idea de sociedad “en red” y la idea de “espacio de flujos”,<sup>15</sup> todo lo cual contribuyó al mito de la “desterritorialización”.<sup>16</sup> Pues, en realidad, lo que estaba plasmándose eran formas de territorialización de nuevo tipo en que estaban implicadas la fragilización del Estado-nación, formas más flexibles y versátiles de movilidad del capital y mayores posibilidades de deslocalización de empresas transnacionales.

Y en Uruguay, todo esto –entre otras discusiones teóricas adicionales– se condensaba en lo que significa examinar Zonamérica desde la sociología, en cuanto zona franca privada que presentaba características singulares y que mostraba un fuerte dinamismo económico.<sup>17</sup> Aun con las correcciones en las formas de cálculo, que una zona franca hoy representa aproximadamente el 2% del PBI debe decir algo no solo para insumo de los economistas.

Ahora bien, una vez establecidos los mecanismos de funcionamiento concretos, específicos del caso, visto ese particular “ensamblaje” (por utilizar la expresión de Saskia Sassen)<sup>18</sup> entre el nivel global y el subnacional que se daba (incluyendo ley de zonas francas uruguaya), ¿qué instrumentos conceptuales permitía captar esta lógica?, ¿por qué tendía a naturalizarse socialmente su presencia sin mayores discusiones de fondo?, ¿con qué otros casos de la región podía asimilarse, más allá de sus especificidades como emprendimiento? La respuesta debía –nuevamente– llevar a una discusión con fuerte carga sobre transformaciones territoriales.

De este modo se llegó a la idea de “enclave”, o más precisamente a la perspectiva de “economía de enclave” (puesto que un enclave puede ser también político), aunque en línea con las mutaciones del siglo XXI, ya que la idea fue utilizada para captar problemáticas de dependencia colonial, como ya fue señalado anteriormente. La idea básica de fondo es que las

15. Manuel Castells, *La era de la información*, 3 t., Madrid, Alianza, 1998.

16. Cf. Rogério Hasbaert, *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*, Río de Janeiro, Bertrand Brasil, 2004.

17. Cf. Alfredo Falero, *Los enclaves informacionales de la periferia capitalista: el caso de Zonamérica en Uruguay, un enfoque desde la sociología*, Montevideo, csic-Udelar, 2011.

18. Saskia Sassen, *Territorio, autoridad y derechos: de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales*, Buenos Aires, Katz, 2010.

transnacionales asentadas en zona franca tienen una conexión mucho más importante en todo sentido con las casas matrices y las regiones centrales de acumulación que con el nivel nacional de territorio no franco, con el cual las cadenas de valor generadas son débiles o inexistentes, aunque esto no debe aparecer públicamente de esta forma. De alguna manera, la lógica de enclave debe negar su condición de tal y, por ejemplo, revestirse con la idea de desarrollo nacional.

Numerosas actividades en América Latina pueden adoptar este carácter: forestación, industria de tipo maquila (como montaje de productos electrónicos con exoneraciones fiscales), actividades turísticas que cierran un territorio a partir de la lógica de grandes cadenas transnacionales, deslocalización del procesamiento de información incluyendo *call centers* en lo que suele denominarse hoy “servicios globales”.

De este modo, el concepto adquiere un potencial heurístico para analizar casos, pues es claro –en función de lo dicho– que la categoría “inversión extranjera directa” no es suficiente: debe adoptar esa lógica de enclave que no es solo económica sino también social por todo lo que implica (por ejemplo, en cuanto a empleos y condiciones).<sup>19</sup> Como se observa, en términos metodológicos en el modo de captar las transformaciones territoriales en esta línea de trabajo se pasó de lo general a lo específico para volver –en un “segundo momento”– a lo general.

En un “tercer momento” se llegó a una nueva especificidad. Porque la apuesta –ya entonces con un equipo interdisciplinario– implicaba preguntarse por un territorio más amplio que iba más allá del caso estudiado en primera instancia, puesto que comprendía la región metropolitana noreste. Ya se habían detectado allí algunas singularidades con relación a otras regiones metropolitanas de la ciudad por sus rápidas transformaciones en múltiples aspectos en los ejes de las rutas 101, 102 y 8 hasta Pando, Canelones.<sup>20</sup>

Corresponde mencionar en titulares algunos elementos que emanaron de ese estudio con relación al territorio:

19. Cf. Alfredo Falero, “La potencialidad heurística del concepto de economía de enclave para repensar el territorio”, *NERA*, N° 28, edición especial, 2015, pp. 223-240.

20. Proyecto “Territorio controlado: formas de intervención y dominación en la región noreste metropolitana de Montevideo”, 2015-2017, financiado por CSIC y llevado adelante por un equipo interdisciplinario coordinado por quien suscribe e integrado también por Alicia Rodríguez y Verónica Blanco (Psicología Social), Marcelo Pérez (Programa Integral Metropolitano), Cecilia Lombardo (Arquitectura-ITU), Aline Da Fonseca y Mauricio Ceroni (Geografía) y los estudiantes Dinorah Kaiser (Arquitectura), Guidahi Parrilla (Sociología) y Gabriel Soto (Psicología).

- a) En términos de actividades económicas, la desaparición de aquellas de base rural es ostensible e irreversible. No sin conflictos a su interior, el Estado acompañó este proceso con cambios de normativas en el uso del suelo. Un evento plasmado en 2017 pero parte del proceso también marca el nuevo perfil: el municipio Nicolich, que abarca Colonia Nicolich, Empalme Nicolich (confluencia de rutas 101 y 102) y Aeroparque, pasó a llamarse ciudad Liber Seregni.
- b) Además del visible uso logístico, se observan emprendimientos importantes que estructuraron el territorio: dos enclaves en términos de zonas francas (además de Zonamérica, es el caso de Parque de las Ciencias sobre ruta 101, este último actualmente en expansión), un parque industrial privado sobre la misma ruta, el parque científico y tecnológico estatal de Pando, con presencia de la Universidad de la República, y un vecino emergente parque industrial de la Intendencia de Canelones, ambos sobre el *bypass* que se construyó al este de Pando.
- c) La transformación territorial ha estado acompañada del manejo del plano simbólico: actualmente se apela a la designación oficial de “corredor de la innovación”, pero ese proceso se inicia con la propia transformación de la hoy Zonamérica a principios del siglo XXI.
- d) Generación de procesos de segregación originados a partir de sectores de trabajadores con bajos ingresos (algunos recientes como el asentamiento la Cumbre en Aeroparque y otros más antiguos como Villa El Tato sobre Camino de los Horneros), son tan solo una parte del tema.
- e) Generación de formas de segregación de sectores medio-altos y altos a través de barrios privados con separación del resto y en ocasiones articulándose con las necesidades del personal de tránsito internacional de las zonas francas. Se ha apelado a la idea de “socializaciones burbuja” para ver este tipo de situaciones.
- f) El tipo de separación territorial que se genera tanto en los enclaves y en otros emprendimientos económicos como en los barrios privados no se basa en muros sino en cercos perimetrales que permiten la visualización desde el exterior, obviamente con sistemas de fuerte vigilancia.
- g) Si bien se pueden apreciar –en forma no expresa– discrepancias sobre las perspectivas del territorio estudiado entre oficinas y niveles de gobierno, puede decirse que se generó –en términos generales– una alianza tácita entre sectores del capital y del Estado.
- h) La densificación poblacional de los corredores mencionados está basada en una fuerza de trabajo joven con un tejido social aún débil,



dependiente del dinamismo económico que pueda generarse en el territorio.

- i) En todo el proceso no se observan conflictos sino una aceptación con sentido práctico y de corto plazo de los cambios territoriales, el imaginario de pasado rural de quintas no influye en forma sustantiva en el presente; existen más bien fuertes expectativas de infraestructura y servicios al concretarse el carácter urbano del territorio.
- j) Tanto desde las zonas francas como desde el grupo de barrios privados La Tahona, han existido acciones de intervención social sobre sus entornos inmediatos a partir de diversas modalidades que pueden leerse como una de las formas de control territorial que se han desarrollado.

## **Conclusiones**

Para diversas disciplinas y no solamente para la geografía, el territorio tiene importancia decisiva. ¿Por qué para la sociología? Por múltiples razones que ya estaban en los autores llamados “clásicos” de la disciplina. A lo largo del trabajo se expusieron algunas. Pero puede agregarse que esa importancia es hoy mayor que antes. El recorrido realizado fue –tal cual se alertó al comienzo– uno entre muchos posibles, pues existen tantos recorridos de encuentros con el territorio como investigadores de la sociología puede haber. Seguramente en algunos más, en otros menos, pero de algún modo siempre asoma.

La invitación de la propuesta a visualizar el territorio comenzó con la teoría social latinoamericana de los años 60, un contexto sumamente creativo para las ciencias sociales de la región. Aquí el territorio bien podía quedar atado a enfoques más bien eurocéntricos, pero también pudo escaparse de ellos y en ese marco la construcción latinoamericana del concepto de marginalidad es un ejemplo posible.

A efectos de estas líneas finales lo importante es preguntarse cómo emerge el territorio en estos conceptos y problemáticas, y en ese sentido puede decirse que el territorio se somete a la teoría. Porque no se trata solo de lo empírico, del registro de “variables”, sino de captar cómo lo territorialmente visible y separado puede encubrir lo que está efectivamente conectado. En otras palabras: para que lo “tradicional” se siga reproduciendo deben existir dinámicas de lo “moderno” que lo hacen posible; para que exista informalidad, deben existir dinámicas de la economía formal que la posibiliten y le sean funcionales. Inicialmente pueden

parecer universos separados, pero la teoría coloca entonces las guías para mostrar a través de la investigación que también existen intereses que los articulan. Un caso clásico entre muchos posibles fue el nordeste de Brasil con relación a San Pablo.

De este tema se pasó al de los movimientos sociales (dicho en el sentido de temática general y no de concepto). Aquí el territorio, lejos de ser mero “soporte” de las acciones colectivas, puede considerarse una pieza clave de la capacidad de captar la realidad actual. Si la fábrica fue –en términos generales– centro del conflicto en el proceso desencadenado por la revolución industrial y durante buena parte del siglo xx, el territorio en su conjunto es el protagonista en el siglo xxi.

Deben considerarse en tal sentido, y para América Latina en particular, las dinámicas extractivas de los procesos globales en curso. El territorio es protagonista tanto en lo que significa su defensa en las luchas por su uso en la región, a nivel rural con los movimientos campesinos e indígenas, pero también a nivel urbano en cuanto repertorio de las acciones colectivas en el espacio público contra un modelo socioeconómico (la irrupción colectiva en las calles de Santiago y otras ciudades de Chile constituye uno de los casos más interesantes de 2019).

Finalmente, la tercera invitación para visualizar la relación entre territorio y sociología llevó a colocarlo como centro de atención. La línea de trabajo sobre procesos globales y una economía de enclaves actualizada lo recoloca con protagonismo. En el fondo se trata de categorías analíticas en las que la problemática sobrepasa límites disciplinarios. Con los procesos globales en curso, solo en forma aparente los límites geográficos del Estado-nación (e ideas como soberanía) quedan “intactos” ya que las fuerzas para que las instituciones estatales sean principalmente meras aseguradoras de las dinámicas del capital resultan muy poderosas.

Además, las nociones de cierre, guetos, formas de separación, territorios estratégicos y control territorial (por ejemplo, a través de mecanismos de responsabilidad social empresarial) sugieren que se abren innumerables planos de análisis para seguir avanzando en pensar el papel del territorio en la sociología contemporánea. Entre ellos no está de más recordar uno que nunca puede olvidarse pensando la esencia de la disciplina: visibilizar los renovados mecanismos de dominación que se generan y se expresan territorialmente y la capacidad de pensar críticamente sobre ellos.

## La enseñanza de la sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

*Verónica Filardo\**

En primer lugar debemos reconocer la importancia de la realización de un cuarto congreso uruguayo de sociología. La convocatoria sostenida que ha tenido en las cuatro ediciones y la calidad y diversidad de las participaciones muestran una comunidad académica y profesional activa. Este tipo de actividades son necesarias como espacio de encuentro y de intercambios en varias dimensiones, y saludamos en consecuencia el esfuerzo de la organización conjunta de varias instituciones, además, con la fuerte impronta del Colegio de Sociólogos, en esta oportunidad.

A fines de 2018, luego de un largo proceso, los docentes del Departamento de Sociología (DS) deciden colectivamente que el órgano de dirección pasara a ser un colegiado, de cinco miembros, en el que están representados todos los escalafones de docentes efectivos. Su integración es producto de la elección (que es secreta y masiva) de los docentes del DS. El Colegiado, a partir de un diagnóstico de la situación del departamento, prioriza la enseñanza de grado en su primer año de mandato.

Debatir y pensar sobre la enseñanza de sociología es pertinente para nosotros como departamento de la Facultad de Ciencias Sociales. Es necesario, no obstante, señalar que la orientación de nuestra presentación se distancia sustancialmente de las exposiciones anteriores, dado que no se trata de la enseñanza de una asignatura, sino que está orientada a la enseñanza de una carrera universitaria. El Departamento de Sociología forma licenciadas y licenciados en sociología, magísteres y magistras, doctoras y doctores en sociología. Por lo tanto, lo disciplinar se constituye en lo profesional, y lo profesional tiene a su vez cierta complejidad puesto que, a diferencia de otras profesiones universitarias, supone un campo extremadamente diverso, de perfiles muy distintos. Abarca hoy tanto el sector público como el privado, la actividad profesional liberal y

\* Doctora en Sociología. Profesora titular del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [veronica.filardo@cienciassociales.edu.uy](mailto:veronica.filardo@cienciassociales.edu.uy)

la académica, las políticas públicas, los estudios de mercado, las proyecciones electorales, etcétera.

Esta complejidad en el mercado de trabajo y en los perfiles profesionales, tan amplia, supone un desafío para la formación y por tanto para la enseñanza. Pero no es el único. Hay que señalar necesariamente que los perfiles profesionales y la formación mantienen relaciones recíprocas y varían en el tiempo. No siempre el campo profesional de la sociología tuvo estas características. De hecho, fue un proceso relativamente veloz. La formación profesional es productora pero también producto de los contextos sociohistóricos del campo profesional. Por eso es conveniente en primer lugar “situarla” en tiempo y espacio.

Nos proponemos, entonces, colocar algunos elementos de contexto histórico, vinculando la enseñanza y los desafíos que se plantean respecto del campo profesional. En una primera etapa la sociología era en la Udelar una disciplina que se dictaba como asignatura en diferentes carreras. Existían “cátedras de Sociología” en varios servicios de la Universidad, en las que se destacaron nombres que siguen siendo referencia para sociólogas y sociólogos. La producción académica en esa fase era de corte ensayístico, y no por eso menos relevante y pertinente. Las contribuciones realizadas en ese período siguen siendo de referencia, siguen vigentes.

En 1958 se crea el Instituto de Ciencias Sociales (ICS), en el seno de la Facultad de Derecho, y es de allí de donde egresan las primeras sociólogas y sociólogos de Uruguay. El Instituto de Ciencias Sociales es la consolidación de la autonomía disciplinar y de la construcción de un campo profesional en consecuencia. Sin embargo, en la década de 1960 se vive una efervescencia social en el país, y en la Universidad. Luego del golpe de Estado en 1973, el Instituto de Ciencias Sociales y la Escuela Nacional de Bellas Artes serán los únicos servicios universitarios que la dictadura cierra, cancela. La Universidad es intervenida y mantiene sus actividades con todas las restricciones que esto supone. Pero estos dos servicios son cancelados de la oferta de formación. La sociología durante la dictadura y hasta que se levanta la intervención en 1984 se desarrolla en centros privados (CIESU, Ciedur, CLAEH, GRECMU, IPRU y otros) donde se concentran intelectuales y académicos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, y donde también se forman sociólogas y sociólogos. No hay que aclarar que muchísimos vivieron en el exilio durante ese período. En todo caso, el desarrollo de la disciplina en ese tiempo no se corresponde con la Universidad (la Udelar, porque para ese entonces tampoco existían universidades privadas reconocidas como tales) y no formaba parte de la oferta de la formación de educación superior.

El Instituto de Ciencias Sociales retoma sus actividades a partir de 1984, momento en que se recompone la carrera y se oferta nuevamente la Licenciatura en Sociología. Estas primeras generaciones de estudiantes, de las cuales muchos de nosotros formamos parte, tienen un campo profesional lleno de incertidumbre y sobre todo de desafíos para construirlo. Es redundante aclarar que el Estado no se configura como “empleador” del saber sociológico.

Sin embargo, en la medida en que el cuerpo docente del ICS se conforma con un cuerpo de profesoras y profesores entre quienes muchos se habían formado en el exterior en diversos centros universitarios, de México, Ecuador, Europa, Estados Unidos, ese cuerpo retoma con conocimientos actualizados, particularmente en metodología de la investigación que constituye un punto fuerte de la carrera.

En 1992 se crea la Facultad de Ciencias Sociales y el ICS pasa a ser uno de los cinco departamentos que la conforman. Se dictan tres carreras en ese entonces: Sociología, Ciencia Política y Trabajo Social. La creación de la Facultad de Ciencias Sociales coincide con un nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Sociología, que tiene como innovación central los talleres centrales bianuales, en que cada estudiante desarrolla una investigación y que se plantean como síntesis y práctica (ejercicio de las competencias adquiridas a lo largo de los cuatro años de formación), y las monografías de grado. En ese proceso de la elaboración del plan de estudios de 1992 las ideas y el trabajo de Alfredo Errandonea (h.) fue fundamental.

En ese período, que podríamos llamar de “consolidación” de la sociología, el campo profesional se ensancha, haciéndose evidente un mercado de trabajo en empresas de estudios de mercado que contrataban sociólogos, y asimismo la actividad académica que empezaba a consolidarse en diversas líneas de trabajo expandía sus redes y aumentaba los cargos. El Estado comienza paulatinamente el reconocimiento del saber disciplinar y, aunque no se contratan sociólogos, se contratan servicios y se incrementan las firmas de convenios, acuerdos, investigaciones de los profesionales de ciencias sociales. A su vez los medios de comunicación de masas también actúan como caja de resonancia y de valorización de la disciplina, y se registra un aumento de la frecuencia de entrevistas a sociólogas y sociólogos que permiten construir una imagen pública del saber profesional específico. En la segunda mitad de la década de 1990 funcionan ya diplomas de especialización en varias temáticas vinculadas con la sociología y dirigidas entre otros a sus egresados, gestionados por el DS, así como se implementa la primera edición de la Maestría en Sociología, que continua sin interrupciones hasta el día de hoy. Asimismo, el DS

contribuye muy claramente en la consolidación de las ciencias sociales en la Regional Norte (Salto), mostrando desde ese entonces un fuerte compromiso institucional con los procesos de descentralización de la Udelar.

En 2009 se aprueba un nuevo plan de estudios para la carrera de Sociología, que se inserta en un proceso de reconfiguración de la facultad, implicando todas las carreras que en ella se dictan, así como la creación de una nueva: la Licenciatura en Desarrollo. En 2005 el Frente Amplio había ganado por primera vez el gobierno nacional y se había hecho evidente un cambio en el lugar que ocupaban las políticas sociales y la relación con las ciencias sociales, la academia y el Estado. El Frente Amplio en su primer mandato crea el Ministerio de Desarrollo Social, que será uno de los destinos más potentes de los egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, consolidando un espacio (hasta ese momento inédito) en el campo profesional, orientado al diseño, la implementación y evaluación de programas y políticas públicas, pero también favorecedor de un espacio relevante para la investigación social que supone un rico intercambio entre la academia y el sector público, con tendencia incremental en el tiempo, que se mantiene hasta la actualidad. Crecientemente otros ministerios comienzan asimismo a crear cargos específicos para sociólogas y sociólogos, lo que habilita una expansión y complejización importante en el campo profesional. También se expande el mercado laboral en el sector privado, gracias a la legitimidad que van adquiriendo las empresas de medición de opinión pública, electoral y de mercado. Asimismo, la academia crece en número de investigadoras e investigadores, y en exigencias en la formación de estos. La formación de posgrado en el exterior es cada vez más frecuente entre las nuevas generaciones, las posibilidades de obtener becas se multiplican, tanto como los destinos y las áreas de especialización. Con la creación de la Asociación Profundación para las Ciencias Sociales se genera un nuevo espacio en el que sistemáticamente crecen los convenios, de diferente carácter y con diferentes contrapartes, que posibilitan también la inclusión de equipos de trabajo que eventualmente contratan recursos humanos con formación en sociología. Esto genera un desafío importante en términos de ajuste de la formación de grado, particularmente en lo que tiene que ver con el mercado profesional, pero no es el único. Otro viene dado por el desarrollo metodológico (en gran medida determinado por la potencialidad de la informática y nuevas tecnologías) que revoluciona las formas de captar, registrar y procesar información, y el teórico, en el que se amplían las temáticas, perspectivas y demandas sociales de respuestas desde las ciencias sociales a una diversidad de cuestiones. Por ello, el ajuste institucional y de la enseñanza a la velocidad de los cambios sociales supone

otro desafío de gran relevancia que nos tensiona, como disciplina, pero que nos trasciende, y que es común a la Facultad y a la Udelar.

Podríamos situar una tercera etapa, o fase, que es en la que estamos actualmente, que nos enfrenta a una situación que nos preocupa como Departamento y que refiere a la tendencia a la baja en la matriculación de estudiantes en la carrera de Sociología. Es una tendencia leve pero sistemática y específica de nuestra carrera (la matriculación de la Facultad se mantiene relativamente estable, mientras la de sociología manifiesta una leve baja).

En los últimos diez años el Departamento concentró sus esfuerzos en la formación de posgrado. Actualmente tiene bajo su responsabilidad directa la gestión de tres maestrías (Sociología, Estudios de América Latina, y Sociología y Métodos Avanzados de Investigación) y comparte la gestión de la Maestría en Políticas Públicas con el Departamento de Ciencia Política. Asimismo, dentro del Doctorado de Ciencias Sociales, es el responsable de la mención en Sociología. Por otra parte, tiene a su cargo media docena de diplomas de especialización en diferentes temáticas. Sin duda, la formación de posgrado es imprescindible para el DS: en el mundo actual, responde a las exigencias y los requisitos que imperan en muchas de las instituciones que regulan la vida académica, pero no puede descuidarse la formación de grado, particularmente porque de ahí provienen los potenciales estudiantes de posgrado.

La tendencia a la baja de matrícula en Sociología ocurre también en las universidades privadas, bajo riesgo de cancelar en ellas la formación en ciencias sociales próximamente.

Esto nos sitúa en un contexto nuevo donde, a pesar de los grandes avances en la consolidación del campo laboral de la carrera y la relativa capacidad de inserción inmediata de los egresados en actividades vinculadas a su formación, se ha producido un estancamiento de los interesados a cursar la licenciatura. Esto nos ha motivado a reflexionar profundamente sobre la formación que se dicta en el grado, a revisar el encadenamiento de los contenidos de las materias, las formas pedagógicas que utilizamos, los escollos más importantes para el flujo curricular, etc. A partir de ello, del trabajo radicado en diferentes comisiones –algunas cogobernadas, como la Comisión de Carrera, por ejemplo– y de un trabajo a conciencia y de alto compromiso, se han generado cambios importantes en las secuencias de contenidos entre las asignaturas del vector teoría, se ha empezado a discutir criterios pedagógicos para los talleres centrales y a explorar otras formas de organizar el dictado de las materias, llevando algunos cursos a un formato teórico-práctico, a establecer máximo de estudiantes por

subgrupo práctico, a favorecer espacios de intercambio docente, por ejemplo. La formación ofrecida no es seguramente la única explicación de esta tendencia a la baja (leve, pero que debemos atender), mas nos ha estimulado a iniciar este proceso de pensar en profundidad y sobre todo a dedicarle esfuerzo con participación de todos los órdenes, para asegurar calidad e interés en la formación de grado. Los esfuerzos que se han hecho y que continuamos haciendo a nivel de posgrado requieren no descuidar la formación de grado.

El Departamento, en este año (2019) de mandato del Colegiado, ha incorporado seis profesores asistentes en carácter efectivo y al menos diecisiete profesores ayudantes, todos con responsabilidades docentes (aunque también se estableció que a cada docente no puede asignarse más de cuatro unidades curriculares), pero también de investigación y extensión tal como establece el estatuto del personal docente en concordancia con las tres funciones de la Udelar que establece la ley orgánica. Incorpora, además, un número muy importante de docentes que se asignan a investigación con financiamiento proveniente de proyectos que, si bien se realizan en el marco del DS, no son con financiamiento del presupuesto propio del DS. Esto supone un conjunto de profesores con vínculo con el Departamento similar al número de estudiantes que recibimos por año. Los docentes del Departamento, debemos recordarlo, no solo dictan clase para la Licenciatura de Sociología sino para otras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, e incluso en otros servicios. Existen dos asignaturas con equipos completos del DS en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo. Asimismo, tiene un conjunto significativo de profesores del Departamento asignados en tareas docentes en el interior; en el Centro Universitario de la Región Este (CURE), en el Centro Universitario Regional Noroeste, etc. Tenemos una producción muy relevante en investigación, un conjunto de profesores en régimen de dedicación total relativamente alto, sabemos de la necesidad y pertinencia de la articulación entre producción de conocimiento y enseñanza. La extensión universitaria también tiene una presencia de peso en la vida del DS. Los docentes del DS tienen buenos resultados relativos en convocatorias concursables en la Udelar pero también en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y a nivel internacional. Sin duda que convergen un conjunto de condiciones favorables, que nos obligan y comprometen a asegurar la mejor calidad en la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Sociología. Estamos dedicados a ello.



## La sociología como disciplina escolar dentro de la Administración Nacional de Educación Pública

*Dinorah Motta de Souza\**

Como prolegómeno, corresponde destacar el lugar destinado en este congreso a la enseñanza de la sociología, como tema de una mesa central y procurando abarcar realidades institucionales diversas. En este caso, nuestra exposición refiere a la enseñanza de la sociología en el nivel educativo medio y a la formación de profesores para desempeñar esa tarea, dentro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), organismo del Estado uruguayo que gestiona y administra el sistema educativo en sus niveles de enseñanza inicial, primaria, técnica y formación docente (de maestros y profesores, que es terciaria mas no universitaria). Aquí se recogen aspectos analizados en nuestra tesis de la Maestría en Política y Gestión de la Educación cursada en el Universidad CLAEH, titulada “La sociología como disciplina escolar en el Uruguay: estudio focalizado en educación secundaria y formación docente entre 1963 y 2008”.

El itinerario previsto es el que se detalla a continuación. En primer lugar, se explica el proceso de construcción de la sociología como disciplina escolar en educación secundaria. En segundo lugar, se explican los antecedentes y la situación actual de la formación de profesores de Sociología dentro de la ANEP. En tercer lugar, se describe la situación del Departamento de Sociología en el Consejo de Formación en Educación (CFE). Finalmente, se plantean algunas conclusiones de las cuestiones que fueron planteadas a lo largo del recorrido realizado.

\* Magistra en Política y Gestión de la Educación, Universidad CLAEH. Diploma de Especialización en Educación y Desarrollo, CFE-ANEP/Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Udelar. Coordinadora académica nacional, Departamento de Sociología, CFE-ANEP. Profesora de Metodología de la Enseñanza, Facultad de Derecho, Udelar. *dep.sociologia@cfe.edu.uy*

## **El proceso de construcción de la sociología como disciplina escolar en la educación secundaria**

Como señalaba Jean-Michel Berthelot en su libro *La construcción de la sociología*, toda disciplina se construye.<sup>1</sup> En este apartado vamos a referirnos al proceso de construcción de la sociología como disciplina escolar dentro de la ANEP.

Los saberes en los sistemas educativos se encuentran organizados y compartimentados en disciplinas escolares que se nutren de las disciplinas académicas pero no son meras transmisoras de los saberes que ellas generan, ni simplificaciones o adaptaciones. Se plasman en planes de estudio y propuestas programáticas, y en los manuales o libros de texto, pero se definen en las prácticas de los colectivos docentes.

Aun en diseños curriculares organizados en disciplinas escolares que desde el punto de vista epistemológico se corresponden con las disciplinas académicas, las primeras se van configurando sin tomar como referencia directa los procesos de estas últimas, como sucede en nuestro sistema educativo y se verá claramente en el caso de la disciplina de la sociología.

Estas precisiones conceptuales son necesarias para dar sentido a este recorrido por el proceso de construcción de la sociología como disciplina escolar en Uruguay, en enseñanza secundaria y en formación docente. La finalidad de este relato no es meramente descriptiva. Permite conocer las condicionantes históricas y políticas que incidieron en su inclusión y construcción como disciplina escolar, su situación actual y los vínculos con la sociología académica.

Corresponde comenzar por un breve repaso del desarrollo académico de la disciplina en la principal casa de estudios terciarios, y luego del proceso de inserción de la sociología en el ámbito de la educación secundaria como disciplina escolar.

El proceso de institucionalización de la disciplina en el ámbito universitario comenzó en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) cuando se integró en el plan de estudios en 1913 mediante la ley 4.396 emanada del Poder Legislativo.

En 1958 se creó el Instituto de Ciencias Sociales, y progresivamente se incluyó la asignatura Sociología en varias facultades. En 1969 se creó la Licenciatura en Sociología y se dio inicio a la revista *Cuadernos de*

1. Jean-Michel Berthelot, *La construcción de la sociología*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991, p. 7.

*Ciencias Sociales*, iniciativa novedosa pues no había publicaciones de ese tipo en el país.<sup>2</sup>

Si bien en 1971 la Licenciatura de Sociología se incorporó al plan de estudios de la Facultad de Derecho, tuvo corta vida pues la carrera se cerró tras el golpe de Estado de 1973.

El proceso de consolidación de la sociología en el ámbito universitario se retomó con el regreso a la institucionalidad democrática cuando se reincorpora la Licenciatura de Sociología en la Facultad de Derecho. Pero en 1991 la formación de profesionales en Sociología pasó a la novel Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y en 1998, por iniciativa de Agustín Cisa, se concretó el Instituto de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho.

Cabe preguntarse si existe algún vínculo entre la Udelar y la ANEP en cuanto a la formación de futuros profesores de enseñanza media. La respuesta es que formalmente no existe ninguno. Se recurre a los docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales para actividades puntuales de actualización de los docentes de formación docente y enseñanza media.

Los licenciados en Sociología no obtienen un título que los habilite específicamente a hacerse cargo en enseñanza media de los cursos de sociología u otras ciencias sociales. Pueden presentarse a llamados en el CFE, al igual que los egresados de este subsistema de ANEP que tiene a cargo la formación de docentes para enseñanza inicial, primaria y media.

En la década de 1960 el país atravesó una crisis económica que tuvo su impacto a nivel social con movilizaciones de docentes y estudiantes. En 1962, con la participación de la Asamblea de Profesores Art. 40 y de las Inspecciones de Asignaturas se dio forma al llamado Plan 1963, que tuvo carácter experimental (se ofrecía en cuatro liceos de Montevideo y algunos pocos del interior del país) y coexistió con el Plan 41, hasta que fue desmantelado por la dictadura cívico-militar. Con el plan piloto de 1963, empieza la historia de la Sociología como disciplina escolar en el bachillerato de educación secundaria, y se mantiene en todos los planes de estudio posteriores.

El programa de Sociología en el plan de estudios de 1963 carecía de fundamentación, orientaciones y objetivos específicos. Consistía en un listado de temas. Ni siquiera recomendaba bibliografía. En la primera unidad temática, titulada “Los hechos sociales”, se presentaba a estos como objeto de estudio de la sociología sin el abordaje o postura de

2. Cf. *El Uruguay desde la Sociología*, N° 12, 2014, p. 409.

ningún teórico. Tampoco en la segunda unidad temática, titulada “La teoría social contemporánea”.

Cabe destacar que el programa se propuso distinguir el conocimiento y el lenguaje vulgar del científico. Y que si bien se presentó un conjunto de contenidos aparentemente no vinculados con una teoría específica –aunque claramente lo estaban–, pretendió darse al curso una cierta objetividad que se le atribuía al enfoque científico –también ligado a la mirada positivista de la ciencia–.

En febrero de 1970 la educación secundaria fue intervenida por el gobierno militar y poco después, con el advenimiento de la dictadura, el plan piloto de 1963 se abandonó.

En 1976 las autoridades educativas de la dictadura diseñaron e implementaron un nuevo plan de estudios para todos los liceos del país, incluyendo la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales en la orientación humanística del segundo año del bachillerato diversificado, con una carga horaria de cinco horas semanales. Debe recordarse que desde 1973 la Udelar no ofrecía la carrera de Sociología, si bien se dictaba Sociología como asignatura en la formación de los profesionales del derecho.

En cuanto a la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales del plan de 1976, revisando los contenidos programáticos se constata que once unidades temáticas tenían un contenido sociológico.

En diversos documentos de la época se manifestaba la preocupación de las autoridades por promover en los estudiantes valores como “la defensa del orden”, “la prescindencia de la problemática social”, “la no problematización en el ámbito laboral”, “la unidad moral de la Nación”, entre otros.<sup>3</sup>

Para la dictadura militar el sistema educativo había sido un campo permeable a las ideas marxistas y sediciosas que habían afectado el sistema educativo por culpa de algunos docentes que fueron expulsados. Como igualmente el peligro de infiltración marxista era inminente, resultaba necesario formar y alertar a las nuevas generaciones respecto de los riesgos que acarrearía para el orden social.

La finalidad de la inclusión de esta disciplina escolar puede inferirse de un programa que negaba la lucha de clases y apelaba al “orden natural con su carácter inmutable y armónico”. Por eso, el programa en la unidad ix, titulada “Estratificación social”, proponía tratar lo siguiente: “Clases sociales. Concepto. Indicadores e índices. *El problema de la lucha*

3. Cf. Silvia Campodónico, Ema Massera y Niurka Sala, *Ideología y educación durante la dictadura*, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1991, p. 92.

*de clases. Colaboración de las clases. La respuesta dada por el orden natural*. Y sugería un cierto abordaje: “Se discutirá el problema de las clases sociales partiendo de la base de que las mismas pueden colaborar entre sí, sin necesidad de lucha” (unidad iv: “Estratificación social”, en *Algunas de las actividades a realizar por parte del alumno*), “Factores y condiciones del cambio. El error marxista en la interpretación del cambio social. El error de tomar el desarrollo económico como un fin en sí mismo. El cambio y la libertad individual” (unidad vi: “Los cambios sociales”, en *Contenidos*).

También establecía en las sugerencias didácticas que “el profesor hará ver a los estudiantes que las ciencias sociales pueden no solo denunciar la patología social sino colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales” (unidad I, “Sugerencias didácticas”). Las personas y los grupos que generaban conflictos debían ser extirpados y las patologías corregidas en pro de una causa superior. La finalidad era que el sistema recuperase el equilibrio.

La bibliografía era escasa y se basaba en apuntes y manuales. El control de la bibliografía era estricto y los docentes no podían ni dejar de cumplir el programa ni utilizar bibliografía que no estuviera recomendada. La sociología escolar que se proponía tenía un enfoque moralizante y era la antesala del curso de Introducción al Derecho que según el plan se ubicaba en sexto año de enseñanza media.

Considerando el enfoque teórico dominante en el programa de ciencias sociales de 1977, la selección temática y la ausencia de pluralismo teórico y metodológico que caracteriza a la Sociología como disciplina, es comprensible que fuesen docentes de la asignatura Educación Moral y Cívica los designados para impartirla.

En 1978 hubo un ajuste del programa de quinto año y se introdujeron dos unidades de Derecho. El programa pasó a llamarse Introducción a las Ciencias Sociales y al Derecho.

En 1986, con la apertura democrática, se realizó una reformulación programática en secundaria para segundo ciclo. La asignatura Introducción a las Ciencias Sociales pasó a denominarse Introducción a la Sociología, y se quitaron las unidades de contenido jurídico. También se “limpiaron” las orientaciones que se entendieron más claramente tendenciosas. En general la secuenciación de contenidos del programa se mantuvo.

Este programa siguió vigente hasta la reformulación programática que se realizó en 1993 encuadrada dentro de la llamada “microexperiencia de bachillerato”. Lo novedoso fue que se creó un tronco común de asignaturas para la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y educación secundaria, y en él se incorporó en el segundo año de bachillerato

(quinto año de enseñanza media) una asignatura denominada Estudios Sociales con tres horas semanales, y una asignatura con cinco horas en la trayectoria humanística denominada Ciencias Sociales. El programa de estudios sociales incluyó una unidad temática de contenido sociológico y dos unidades temáticas de contenido jurídico. También se introdujeron algunas mínimas modificaciones en la reformulación programática del programa de Sociología, que cambió su nombre por Ciencias Sociales y mantuvo la estructura general del programa ajustado en 1986 con algunas escasas modificaciones.

Entre 1986 y 1991 se siguieron usando los libros de sociología con los apuntes de las clases de facultad de Aldo Solari y los de John y Mavis Biezsanz, pues no había otro material disponible. La primera edición del libro *Introducción a la sociología* de la socióloga uruguaya Adriana Marrero, destinado a estudiantes de enseñanza media, es de 1992.

Durante la administración del profesor Germán Rama, se implementó con carácter experimental (en once centros) el Plan 2003 o Plan TEMS (transformación de la enseñanza media superior). En este plan de estudios originalmente se propuso que Sociología fuera una asignatura que formara parte del tronco común de quinto año pero, finalmente, por decisión de la Inspección del CES de Educación Social y Cívica-Derecho, se mantuvo en el tronco común la asignatura Estudios Sociales con contenidos mayoritariamente jurídicos y la asignatura Sociología se mantuvo en la trayectoria humanística con cinco horas semanales.

Puede decirse que este programa de Sociología transformó en parte el programa que se había implementado desde 1976 con algunas modificaciones introducidas en las reformulaciones programáticas de 1986 y 1993. En la fundamentación se explicaba que la reformulación pretendía la incorporación y el desarrollo de parte de los estudiantes de una perspectiva sociológica. Se definieron además tres ejes vertebradores: los paradigmas teórico-metodológicos de la sociología que surgen del canon clásico –Durkheim, Weber y Marx–, el caso uruguayo como objeto de estudio y la perspectiva sociológica. Es decir, por un lado propuso que los estudiantes incorporasen la lógica de pensamiento y las concepciones que surgen de las corrientes clásicas para vincularlas con las formas de ver y producir ciencia social que se desprende de cada una. Por otro lado, acercar a los estudiantes la producción de conocimientos de la sociología a nivel nacional, procurando familiarizarlos con informes de investigación, censos y estadísticas. Pero, además, desarrollar en ellos una forma de ver la realidad que les permitiese conectar sus experiencias cotidianas con

fenómenos más generales. Se planteaba también la necesidad de vincular la teoría con la investigación empírica.

En este programa se amplía la bibliografía para los docentes y se recomiendan tres manuales para los estudiantes: además del ya clásico de Adriana Marrero,<sup>4</sup> se sugiere Anthony Giddens,<sup>5</sup> o John Macionis y Kent Plummer.<sup>6</sup>

El programa plantea que es necesario desarrollar los temas axiales de la sociología: sus métodos de investigación, la constitución del orden, la estratificación y la desigualdad y el cambio social. En todos los casos se considera que deben presentarse diferentes visiones teóricas.

En 2006 el nuevo gobierno implementó otro plan de estudios para bachillerato, dejando sin efecto el resto de los planes vigentes. Mantuvo un tronco común con la asignatura Educación Ciudadana, señalando como su antecedente la asignatura Estudios Sociales de los planes 1993 y 2003. Como en esos planes, los contenidos programáticos son mayoritariamente jurídicos con una primera unidad temática que aborda la socialización en la institución familiar, en el mundo del trabajo y en el sistema político, para cuyo desarrollo sugiere tres horas de clase.

En la trayectoria Ciencias Sociales y Humanidades se mantuvo el curso de Sociología con una hora semanal de clase menos, y con una propuesta programática similar a la del Plan 2003. En la primera unidad temática se amplió la propuesta de enfoques teóricos, en la unidad III al tratar las formas de desigualdad se incluyó sexismo y homofobia y en la unidad IV, “Cambio social”, se dispuso tratar la globalización y dentro de los cambios de la estructura uruguaya se agrega la seguridad, la violencia, la crisis de 2002 y su proyección actual.

Se trata de un programa que tiene una densidad y complejidad conceptual que se corresponde con el desarrollo que ha tenido la disciplina en el ámbito académico. También establece claramente las finalidades formativas de la disciplina para un bachiller: incorporar un vocabulario y una lógica de pensamiento propios de las ciencias sociales, procurando desarrollar en los estudiantes una perspectiva diferente, que les permita situarse en la realidad cotidiana con herramientas para el análisis desde lo conceptual y no meramente desde lo anecdótico.

4. Adriana Marrero, *Introducción a la sociología*, Montevideo, FCU, 1998.

5. Anthony Giddens, *Sociología*, Madrid, Alianza, 2000.

6. John Macionis y Kent Plummer, *Sociología*, Madrid, Prentice Hall, 1999.

## **Antecedentes y situación actual de la formación de profesores de Sociología dentro de la ANEP**

La formación de los profesores de Sociología ha estado fuertemente condicionada y ha funcionado como un espejo de los cambios y las demandas de la enseñanza secundaria. Cuando en 1976, en el segundo ciclo (bachillerato) de educación secundaria, más precisamente en la trayectoria humanística, se introducen contenidos sociológicos como eje de una asignatura llamada Introducción a las Ciencias Sociales, con una importante carga horaria de cinco horas semanales de clase, no existía en formación docente una preparación en sociología para los docentes que iban a desempeñarse en el nivel medio para tomar a su cargo dicho curso.<sup>7</sup> Y otro dato relevante es que la carrera de sociólogo en la Universidad de la República se había cerrado en 1973.

En 1979 el Consejo Nacional de Educación (CONAE) cambió la denominación de la Especialidad Educación Moral y Cívica-Derecho en lugar del Profesorado de Cultura Cívica. Cuando se modificó la denominación de la Especialidad también se incorporó una asignatura específica llamada Sociología –en lugar de Ciencias Políticas– al diseño curricular del Profesorado de Educación Moral y Cívica. Esta fue la preparación que se decidió alcanzaba para formar a los docentes que debían hacerse cargo del curso de cinco horas semanales en quinto año de la trayectoria humanística en educación secundaria.

Las autoridades de facto entendieron que había una sociología que podía ser conveniente a sus intereses y que debía ser dictada por los profesores de Cultura Cívica o Educación Moral y Cívica-Derecho. Una interpretación posible, aunque ingenua, puede llegar a relacionar esta decisión con los antecedentes ya explicados, porque fue en la Facultad de Derecho donde comenzó el proceso de institucionalización de la sociología. Sin embargo, no hay que olvidar que esta especialidad<sup>8</sup> aumentó notoriamente su carga horaria en educación media durante la dictadura. Con seguridad puede afirmarse que sus contenidos eran funcionales al sistema político que estaba vigente.

A partir de los años 90, el profesorado pasó a llamarse Educación

7. Desde el inicio y hasta el presente, se integró a la Sociología en el diseño curricular de los planes de formación de maestros y profesores. No es la idea en este texto analizar tal aspecto del proceso de institucionalización de la sociología en formación docente.

8. La Especialidad Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología reúne varias fuentes disciplinares desde los años 70.



Social y Cívica, Derecho y Sociología, carrera docente de la cual han egresado varias generaciones con un título que los habilita para hacerse cargo de los cursos de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología que integran los diseños curriculares de la enseñanza media (liceos de educación secundaria pero también de educación media tecnológica que incluyó Sociología en su malla curricular). Estos egresados tuvieron una escasa formación sociológica; en muchos casos no habían realizado una reflexión sistemática de lo que implica enseñar Sociología y, sin embargo, obtenían el título habilitante para hacerlo.

En la década de 1990, mientras en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en los institutos de formación docente del interior (IFD) se mantenía la Especialidad Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología, en distintos puntos del país se crearon los centros regionales de profesores (CERP), cuyos planes de estudios incluyeron la Especialidad Ciencias Sociales con tres menciones: Sociología, Geografía e Historia. En una carrera que tenía tres años, cada mención iba progresivamente adquiriendo especificidad. Igualmente es evidente que, mirando globalmente el profesorado, la formación sociológica era muy superior en carga horaria respecto del Plan 1986 del IPA e IFD.

Finalmente, este Plan 1997 de los CERP en 2005 se modificó y en él perdió autonomía la mención Sociología, con la sumatoria al diseño curricular de contenidos jurídicos. De esta forma, sus egresados podrían hacerse cargo de los cursos de Educación Social y Cívica, Educación Ciudadana y Derecho en la enseñanza media. Nuevamente los saberes jurídicos y sociológicos fueron unidos en una misma carrera de profesorado por una demanda de la enseñanza media y, en definitiva, de los propios egresados que veían pocas posibilidades de inserción laboral en los subsistemas de enseñanza media para los que se habían preparado específicamente como enseñantes.

Otro momento relevante en este relato se sitúa en 2007, cuando se promovió la reformulación organizativa y curricular de la formación docente a nivel nacional. Luego del encendido debate y confrontación, el Plan 2008 a nivel nacional estableció la oferta de una formación para dos especialidades: Sociología y Derecho. Puede afirmarse hoy que progresivamente cada profesorado ha ido perfilando su propia identidad.

En el documento principal que regula el Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD, 2008), en cuanto al perfil del egresado de la carrera de Profesorado de Sociología establece que este debe poder identificar las principales categorías conceptuales y analíticas de la sociología como ciencia, internalizar los usos terminológicos propios de

la disciplina e incorporar la articulación con otras disciplinas sociales, así como problematizar el desdibujamiento de sus fronteras. Se apunta también al dominio de la historicidad de los procesos de construcción de la disciplina desde una mirada compleja, multicausal, multidireccional, multidimensional e histórica de los fenómenos sociales.

La investigación disciplinar no aparece como un objetivo de la formación de profesores de Sociología, aspecto en el que difiere del perfil de la carrera de Licenciado en Sociología. En esta última, hay varios cursos que apuntan a la formación en metodología y técnicas de investigación social, y se exige una tesis para el egreso de la carrera. Esto se debe a que la finalidad fundamental de la Licenciatura en Sociología es formar profesionales que se dediquen a la investigación.

A partir de 2008, para el desarrollo progresivo de una institucionalidad universitaria se asignaron a los docentes horas remuneradas destinadas a la investigación, el análisis y la divulgación de nuevos conocimientos. Pero tomando en consideración su carácter de centros de formación docente, se entendió que en cuanto a investigación y producción de saberes debía ponerse “un énfasis importante en la didáctica específica”.<sup>9</sup> La didáctica de la sociología tiene un incipiente desarrollo en el ámbito de formación docente y a partir de la separación de ambos profesorados.

Un impulso importante fue la implementación en el ámbito del Consejo de Formación en Educación en forma colaborativa con la Udelar de un Diploma en Didáctica de la Enseñanza Media en la Especialidad Sociología a partir de 2007 en el llamado Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Y también ha sido fecunda la producción en la Maestría en Educación, Sociedad y Política, realizada en convenio con Flacso.

### **La situación actual del Departamento de Sociología en el CFE**

En 2005, en pos de la construcción de una institucionalidad universitaria, comenzó la transformación paulatina de la formación docente desde el punto de vista curricular y académico. Además de la implementación de un nuevo plan único nacional de estudios en 2008, se transformó la estructura organizativa con la creación de los departamentos académicos y sus respectivos coordinadores nacionales, con el cometido de promover y articular las actividades de enseñanza, investigación, extensión y formación permanente de todos sus integrantes.

9. DGFYPD, Proyecto de Presupuesto 2005-2009.

El Departamento Académico Nacional de Sociología forma parte del Instituto de Matemática y Ciencias del CFE. Está integrado por 72 docentes que se desempeñan en los centros regionales Sur, Este, Centro, Litoral, Norte e IPA, en las asignaturas Sociología del Derecho y Sociología Jurídica de la Especialidad Derecho de todos los centros regionales e IPA, y en la Didáctica de la Sociología modalidad itinerante de los institutos de formación docente.

En 2017 unos 140 estudiantes cursaron el Profesorado de Sociología, considerando la matrícula de los seis centros que cuentan con esta carrera, de los cuales 30 cursaron en modalidad semilibre. Entre 2011-2017 egresaron 104 profesores de la especialidad.

El Departamento de Sociología trabaja en forma coordinada con el Departamento de Ciencias de la Educación, Área Sociológica, y ambos difunden en su revista *Peldaños* las producciones de sus docentes.

La creación del Departamento Nacional de Sociología y la Coordinación Nacional refleja la consolidación de la Especialidad Sociología en la formación docente.

## **A modo de conclusión**

Las disciplinas escolares son entidades que se desarrollan con su propia lógica a partir de una lucha de intereses entre diversos grupos sociales. Como señala Antonio Viñao Frago: “Son espacios de poder, de un poder a disputar; espacios que agrupan intereses y agentes, acciones y estrategias”.<sup>10</sup> En el caso de la sociología como disciplina escolar dentro de la ANEP, esos intereses y disputas se visualizan claramente.

La sociología se incorporó como disciplina escolar en educación secundaria en el plan piloto de 1963 y posteriormente en el de la dictadura de 1976 a nivel nacional. En los sucesivos planes ha sido una asignatura específica de la orientación humanística en segundo año de bachillerato con una carga horaria de cinco horas semanales, hasta el Plan 2006, en el cual disminuyó su carga horaria a cuatro horas semanales.

Del recorrido por los diferentes planes de enseñanza secundaria surge que los contenidos del programa de Sociología o Ciencias Sociales –ha ido cambiando su denominación, pero los contenidos son sociológi-

10. Antonio Viñao Frago, “Historia de la educación e historia cultural: posibilidades, problemas, cuestiones”, 1995, p. 66, disponible en <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbedu/n00/n00a05.pdf>.

cos– se mantuvieron con escasas modificaciones durante treinta años, entre 1976 y 2003, año en que la propuesta programática es modificada sustancialmente en el Plan TEMS y en el Plan 2006.

El programa de Sociología del Plan 1976 permaneció en las aulas de enseñanza secundaria por generaciones, aun en democracia. Los profesores expertos de la asignatura –efectivos de los grados más altos– han trabajado con él la mayor parte de su carrera profesional. Son los profesores con más experiencia quienes actúan como coformadores o adscriptores de los estudiantes practicantes de Sociología que están cursando su formación inicial en esta especialidad, en la cual tienen ahora una formación específica.

En consonancia con el vasto desarrollo teórico y metodológico de la sociología en el ámbito académico, la formación docente ha creado un profesorado específico que comenzó a implementarse a nivel nacional en 2008.

La jerarquización o valorización de la sociología en el ámbito del Consejo de Formación en Educación –aún Dirección General de Formación y Perfeccionamiento Docente en 2008– no se ha dado en educación secundaria, ya que:

- fueron creado cargos de inspección docente con formación específica en sociología para supervisar, orientar y asesorar a los docentes que se hacen cargo de ella;
- en la única orientación en la que está incluida, hubo reducción de la carga horaria (pasó de cinco a cuatro horas en la orientación humanística), y
- en la convocatoria a concursos no se permitió a los egresados de Sociología presentarse para tomar los estudios en ciudadanía (Educación Social y Cívica, y Educación Ciudadana), desconociendo el carácter multidisciplinario de estos.

En el caso de la educación media tecnológica, la Sociología como disciplina escolar se ha consolidado como asignatura que forma parte del tronco común de todas las orientaciones o trayectorias de bachillerato en sexto año. Sin embargo, ha carecido de referentes académicos específicos, pues tampoco a los inspectores del Consejo de Educación Técnico-Profesional se les ha exigido formación en sociología y tienen a su cargo la orientación y supervisión de docentes de otras disciplinas, como Derecho y Filosofía.

La historia de la sociología en formación docente no puede entenderse

sin repasar las transformaciones curriculares que se fueron dando en educación secundaria. La creación de una especialidad de profesorado que brinda formación docente específica en sociología ha instalado una competencia por algunos espacios curriculares antes compartidos en la enseñanza secundaria, como Educación Social y Cívica en primer ciclo y Formación Ciudadana en el bachillerato diversificado, que han sido asignados a los profesores de Derecho. Sin mediar fundamentación ni debate al respecto, se ha dado por hecho que los estudios en ciudadanía –con las diferentes denominaciones que han ido adoptando– tienen una vertiente fundamental que es el derecho y una vertiente complementaria que es la sociología. En las propuestas programáticas, la presencia de la sociología es absolutamente residual.

Estamos ante definiciones que no solamente involucran al cuerpo docente de la especialidad sino que condicionan la enseñanza de contenidos sociológicos que se brindan a los estudiantes de enseñanza media. Se evidencia en las tesis de las profesoras del CFE Daniela Sabatovich y Gabriela Martínez que la enseñanza de la sociología ha estado influenciada por visiones propias de la enseñanza del derecho y que se fue dando una subordinación a la epistemología jurídica que obturó la reflexión sociológica.<sup>11</sup>

Para finalizar, a un nivel más general, cabe preguntarse cuál debe ser la relación entre las instituciones de formación de profesores y las de enseñanza media. Parece claro que debe construirse una carrera de profesorado que prepare sólidamente a sus docentes más allá de los cambios de planes y programas de los subsistemas en los cuales se insertan mayoritariamente sus egresados.<sup>12</sup>

11. Daniela Sabatovich, “La enseñanza de la sociología: entre contradicciones y armonías”, tesis de Maestría, Flacso, 2019; Gabriela Martínez, “Análisis de los fundamentos ideológicos de la incorporación de la sociología como disciplina escolar en la educación secundaria del Uruguay, 1977-1984”, tesis de Maestría, Flacso, 2019.

12. Además de la bibliografía citada en las notas al pie, hemos consultado Ernesto Campagna, “Sociología y derecho en la Universidad de la República: el proceso de institucionalización de la sociología y la sociología jurídica en la Facultad de Derecho”, *Cuadernos de la Facultad de Derecho*, tercera serie, N° 7; Gerónimo de Sierra, conferencia publicada en *El Uruguay desde la Sociología*, N° 12, 2014, pp. 413-416; Dinorah Motta de Souza, “La sociología como disciplina escolar en el Uruguay: estudio focalizado en educación secundaria y formación docente entre 1963 y 2008”, tesis de Maestría, Montevideo, CLAEH, 2016; Antonio Romano, *De la reforma al proceso: una historia de la enseñanza secundaria, 1955-1977*, Montevideo, Trilce, 2010.



## La sociología observando el territorio: ¿trabajos precarios o precarios trabajos en el agronegocio uruguayo?

*Juan Romero\**

En la última década, la estructura productiva agropecuaria de Uruguay ha tenido un aumento en la inversión productiva internacional en cadenas de producción de valor, generando territorios rurales integrantes del mercado global de alimentos, cadenas tales como cárnica, celulosa, soja, lácteos y arroz que representan 76% de las exportaciones. Tales transformaciones se enmarcan en la reestructuración del proceso capitalista (iniciando procesos de mayor flexibilización, descentralización productiva e innovación tecnológica) y su integración al proceso productivo agropecuario. Este trabajo pretende analizar en el mercado de trabajo (como parte de dicho proceso productivo) las condiciones sociales de los asalariados, considerando las dimensiones de análisis de calidad de empleo, niveles de pobreza y características productivas de las cadenas de los agronegocios de la carne, forestación y soja que explican el 57% de las exportaciones de alimentos del Uruguay. ¿Cuál ha sido la evolución de la pobreza de los asalariados rurales en tales cadenas? ¿En qué situación social y condiciones de empleo viven y trabajan? Se plantea necesario debatir acerca de estos procesos productivos integrados al mercado global, y las condiciones de empleo y sociales que ellos generan. Las fuentes de datos serán las encuestas continuas de hogares entre 2012 y 2017, dado que incorporan los territorios rurales y es el período de mayor crecimiento de la producción agroalimentaria. En definitiva, las transformaciones productivas generadas por el actual modelo socioproductivo ¿qué condiciones sociales y de empleo generan para sus trabajadores?

\* Doctor en Sociología. Profesor de la Udelar. Director del DCS-Cenur LN. [juanromero69@gmail.com](mailto:juanromero69@gmail.com)

## **Transformaciones productivas, agronegocios y trabajo asalariado: consolidando el capitalismo agrario**

En los últimos veinticinco años, aproximadamente, se han intensificado los efectos socioespaciales y político-institucionales de la reestructuración en los procesos productivos capitalistas posfordistas, los cuales no solamente se globalizan, sino que recomponen e impactan determinados espacios sociales.

La ruralidad de Uruguay no escapa de las tendencias globales en materia de transformaciones productivas y sociales: el crecimiento a nivel internacional de los precios de las materias primas, a raíz de la demanda de energía y alimentos,<sup>1</sup> produce un ciclo de expansión productiva y alza de los precios que transforma al sector agropecuario nacional. Un indicador claro de estos cambios es la evolución del precio de la tierra en el país que en esos años aumenta casi ocho veces su valor, con precios record, alcanzando en los casos de las tierras más fértiles precios similares a los de la región fronteriza.

Este nuevo contexto, como han mencionado Alberto Riella y Juan Romero,<sup>2</sup> está signado por cuatro factores que, conjugados entre sí, componen el escenario socioeconómico actual sobre el cual debe analizarse la estructura agraria contemporánea nacional. Ellos son las alteraciones en el uso del suelo, los cambios legales para la tenencia de la tierra, la extranjerización y el dinamismo del mercado de tierras.

El corolario de todos estos factores ha sido el aumento del precio de la tierra que al inicio de 2000 tenía un valor de precio promedio por hectárea vendida de 448 dólares, pasando en 2011 a 3.196. En las regiones con mayor aptitud agrícola el precio promedio superó los 5.000 dólares a fines del período. Los precios de los arriendos también mostraron un aumento importante, pasando la hectárea de 28 dólares promedio en el año base a 152 en 2011, y en los predios agrícolas el precio de arriendo promedio se ubicó por encima de los 300 dólares para ese año. El acceso a la tierra, la democratización de la estructura agraria y los intentos por reducir su

1. Cf. Blanca Rubio, “De la crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria: impacto sobre el campo mexicano”, *Argumentos*, vol. 21, 2008, disponible en <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59511124003>.

2. Alberto Riella y Juan Romero, “Continuidades y rupturas en la estructura agraria en el Uruguay del siglo XXI”, *Pampa*, N° 10, 2014, pp. 159-171; cf. Alberto Riella y Paola Mascheroni, “Desigualdades sociales y territorios rurales en Uruguay”, *Pampa*, N° 7, 2011, pp. 39-64.



grado de concentración se han visto detenidos por las dificultades y por el papel de los actores que actúan en ella.

Por un lado, los impactos territoriales han sido muy heterogéneos y dieron lugar a una nueva regionalización de las áreas rurales; por otro, se observan cambios generados por las dinámicas laborales en los grupos etarios que integran el mercado laboral, en especial los jóvenes, quienes pasan a integrarlos de manera precaria e informal, aunque en porcentajes menores que en el resto del continente.

En las últimas dos décadas se ha consolidado el proceso de modernización agraria en el cual las relaciones sociales capitalistas y de contratación salarial pasan a ser predominantes, en la última década en particular debido a factores de la demanda mundial hay un crecimiento de trabajadores asalariados para luego estabilizarse; en tal proceso se configura una forma de explotación secundaria en la cual la racionalidad del “intercambio de equivalencia” deja de aplicarse o solo se aplica de forma limitada,<sup>3</sup> utilizándose formas simbólicas y la fuerza política para devaluar el trabajo de ciertos grupos sociales o para excluir a ciertos grupos.

Las transformaciones en el proceso de producción agrario contemporáneo han consolidado el predominio productivo del trabajo asalariado y reafirmado su carácter capitalista. Ahora, como bien dice Juan M. Villulla:

Sin embargo, limitar la cuestión agraria al grado de desarrollo del capitalismo y medir el mismo por el peso del trabajo asalariado llevaría a equívocos importantes a la hora de caracterizar con exactitud una estructura social agraria de modo más integral, así como de identificar y explicar sus problemáticas específicas y prefigurar posibles soluciones y sujetos de cambio.<sup>4</sup>

De esta forma, se consideran una dimensión a tener en cuenta en el diseño analítico las condiciones precarias de empleo que se generarían

3. Cf. Klaus Dörre, “Landnahme. Triebkräfte, Wirkungen und Grenzen kapitalistischer Wachstumodynamik”, en Maria Backhaus, Olaf Gerlach, Stefan Kalmring y Andreas Nowack (eds.), *Die globale Einhegung – Krise, Ursprüngliche Akkumulation und Landnahmen im Kapitalismus*, Münster, Westfälisches Dampfboot, pp. 112-140; Claudia Cerda, “Precariedad laboral en el sector agroexportador: una propuesta conceptual”, xxxiv International Congress of the Latin American Studies Association, Nueva York, 2016.

4. Juan M. Villulla, “Capitalismo, cuestión agraria y trabajo asalariado: una relectura de los debates clásicos a partir de datos de la pampa húmeda argentina y en el *corn belt* estadounidense”, *Estudios*, N° 41, 2019, p. 56.

en el sector agroexportador, lo que implica la instalación de diferencias y jerarquizaciones sobre la base de la segmentación y categorización de trabajadoras y trabajadores, en este caso por la edad. Diferenciaciones y jerarquizaciones que implican una lógica de devaluación del otro que, a su vez, legitima la distribución diferenciada de protecciones así como el acceso diferenciado a derechos.<sup>5</sup>

En definitiva, esta última década ha marcado un quiebre en el proceso de estancamiento dinámico que caracterizaba la estructura agraria nacional desde mediados de la década de 1970, dicho quiebre ha significado profundizar las relaciones sociales de producción capitalista en la sociedad rural uruguaya de inicios del siglo XXI. Este proceso se fundamenta en la articulación contradictoria entre una realidad técnica agropecuaria precapitalista y las nuevas formas de sociedad y tecnología, que se han intensificado, consolidado y generado una base social ampliada de propietarios de los medios de producción.

## **Metodología**

La metodología aplicada fue de diseño cuantitativo; la fuente de datos, las encuestas continuas de hogares (ECH) entre 2012 y 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE), dado que incorporan los territorios rurales en el período de mayor crecimiento de la producción agroalimentaria. Por otra parte, la desagregación por sectores y subsectores de actividad se realiza de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme-Revisión 4 (CIIU Rev. 4) empleada en la ECH, lo que permitió la construcción de los sectores de actividad involucrados en cada cadena productiva y posteriormente analizar las características de sus trabajadores de acuerdo con los datos que se presentan.

El análisis empleado contó con técnicas de análisis exploratorio (estadística descriptiva univariable), de análisis bivariable con fines descriptivos (descripción del conjunto de la población observada) y de análisis factorial por correspondencias entre el índice de desarrollo departamental y cadenas de agronegocios. Cabe advertir que la ECH se realiza a partir de una muestra de la población, las cifras presentadas son una referencia válida pero no son exactas y la confianza se reduce a medida que aumenta el nivel de desagregación y las respuestas abarcan un conjunto de personas cada vez menor.

5. Cf. Claudia Cerda, “Precariedad laboral...”.

Al referirse a calidad del empleo estará considerada la dimensión de la formalidad sobre el cual el INE informa por medio del dato sobre el empleo no registrado en la seguridad social,<sup>6</sup> pero también se agrega el cobro de aguinaldo, entendido como sueldo anual complementario –la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero por el patrón en los doce meses anteriores al 1 de diciembre de cada año–, según la ley 12.840, del 22 de diciembre de 1960, y, por último, la cantidad de horas de trabajo semanal, es decir, que no se superen las 48 horas de trabajo semanal más allá de la rama de actividad laboral del trabajador. Es decir que aquel trabajador que desarrolle un empleo de acuerdo con la normativa vigente en las dimensiones señaladas se considerará que cuenta con un empleo de calidad.

El método empleado para la construcción de los indicadores de pobreza necesidades básicas insatisfechas (NBI) e indirecto, línea de la pobreza, se lo realizó en forma conjunta, también conocido como análisis integrado de la pobreza,<sup>7</sup> para obtener una nueva medición con mayor nivel de exhaustividad. Esta genera cuatro categorías, a saber, *pobreza crónica*, que comprende aquellos hogares que tienen ingresos (o consumo) bajo la línea de pobreza y una o más necesidades básicas insatisfechas; *pobreza reciente*, que incluye los hogares pobres por ingresos (o consumo) pero con NBI; *pobreza inercial*, que se refiere a hogares con NBI e ingresos (o consumo) sobre la línea de pobreza, y por último, *integración social*, que se trata de la población que no es pobre por ninguno de los dos criterios, es decir, tiene ingresos por encima de la línea de pobreza y sus necesidades básicas están satisfechas.<sup>8</sup>

Con relación a la metodología adoptada para la construcción del índice de desarrollo departamental, se toma del trabajo “Desarrollo económico

6. Cf. Jorge Leal “Desigualdad territorial de la calidad del empleo en Uruguay, entre las políticas posneoliberales y la estrategia neodesarrollista”, en María Fernanda Sañudo Pazos y Jorge Leal (eds.), *Aproximaciones críticas a la relación Estado y territorio en contextos de globalización neoliberal*, Buenos Aires, Clacso-Pontificia Universidad Javeriana-Udelar-Cenur-Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, 2018, pp. 30-31.

7. Cf. Rubén Katzman, “The heterogeneity of poverty: The case of Montevideo”, *Cepal Review*, Nº 37, 1989, pp. 131-142.

8. Cf. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), “Información general, número de miembros del hogar y sección 1, 2 y 13. 2013”; disponible en <http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1#>.

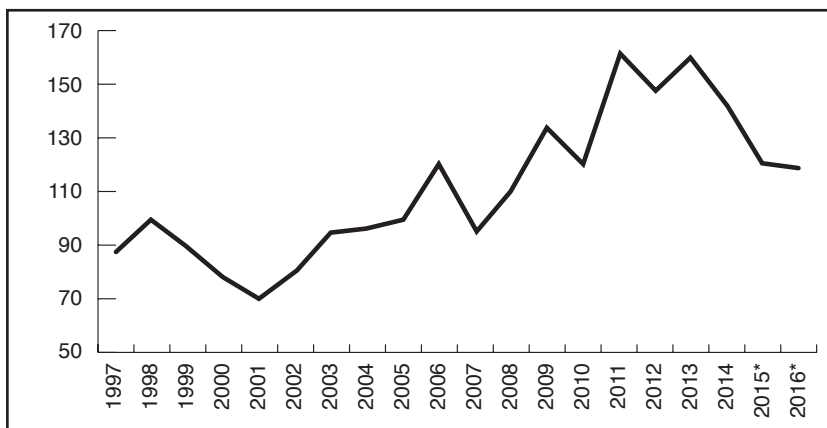
regional y clubes de convergencia en Uruguay”:<sup>9</sup> 1) departamentos por encima del índice de desarrollo (ID) promedio del período 2007-2015; 2) departamentos en el promedio del ID del período citado, y 3) departamentos por debajo del ID promedio del período 2012-2017.

En síntesis, se aplicó el análisis estadístico descriptivo e inferencial de fuentes secundarias de datos durante el período 2012-2017 del mercado de trabajo rural en sectores agroexportadores del Uruguay, lo que posibilita la evaluación de tendencias y la comparación de los datos disponibles.<sup>10</sup>

## Resultados

A continuación se presenta la evolución del producto bruto interno (PBI) agrícola y se observa el notorio crecimiento que tuvo a partir de 2002, incluidos los picos entre 2011 y 2013, indicando el liderazgo del sector en las transformaciones productivas (gráfico 1).

**Gráfico 1. Evolución PBI agrícola (base 100 = 2005)**



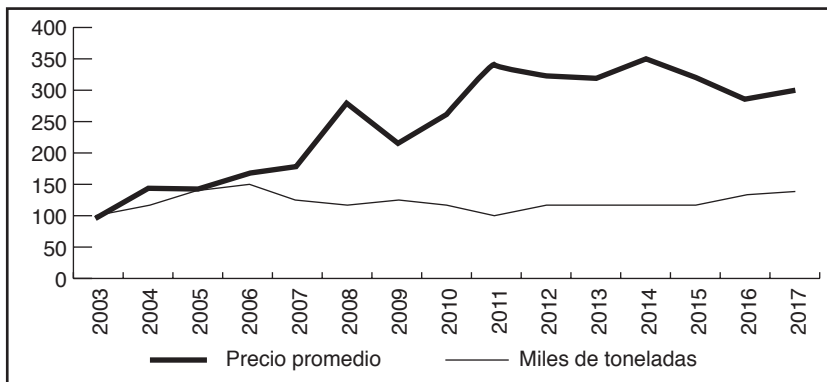
Fuente: Uruguay XXI, *Oportunidades de inversión: agronegocios*, Montevideo, 2018, basado en Banco Central del Uruguay.

9. Diego Aboal, Bibiana Lanzilotta, Martín Pereyra y Paz Queraltó, “Desarrollo económico-regional y clubes de convergencia en Uruguay”, documento de trabajo, Montevideo, CINVE, 2018.

10. Cf. David Stewart (1984: 11), citado por María Ángeles Cea D’Ancona, *Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social*, Madrid, Síntesis, 1996, p. 222.

El gráfico 2 indica la evolución de las exportaciones de carne vacuna. En 2017, las exportaciones de carne bovina sumaron 1.511 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 6% con respecto al año anterior. De esta manera, la carne bovina tuvo una participación de 17% sobre las ventas totales.<sup>11</sup>

**Gráfico 2. Evolución exportaciones carne vacuna**



Fuente: Uruguay XXI, *Oportunidades de inversión: agronegocios*, basado en Dirección Nacional de Aduanas e Instituto Nacional de Carnes.

A pesar de la creciente competencia de la agricultura por el uso de la tierra, la ganadería bovina no ha perdido su importancia en los últimos años: el número de vacunos se ha mantenido relativamente estable durante la última década.

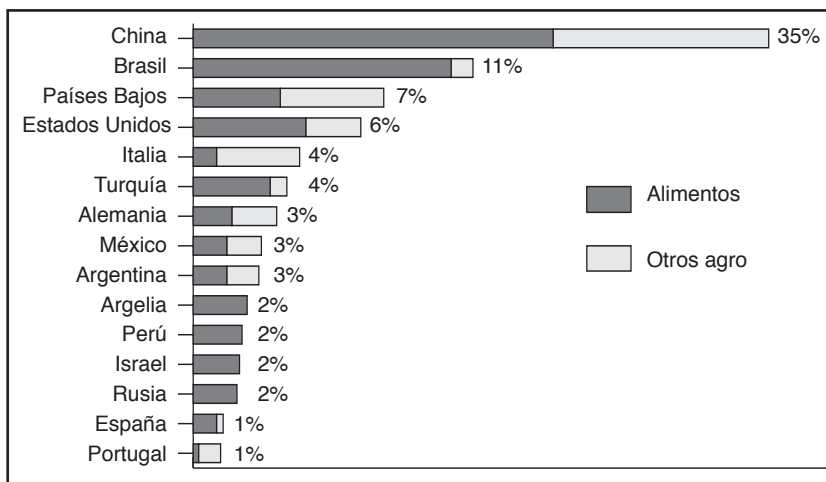
El gráfico 2 indica el incremento en el valor exportado de la última década basada en el aumento del precio, incremento asociado principalmente con las ventas a la Unión Europea. Tanto el volumen como el precio promedio mostraron desempeños positivos en 2017. Ambos indicadores crecieron a una tasa de 3% en la comparación interanual, situación que señala la importancia de dicha cadena productiva en la estructura del agronegocio uruguayo, pero también el papel en el mercado global dado que se encuentra entre los diez países mayores en la exportación de carne vacuna.

En el gráfico 3 se muestran los principales mercados del agronegocio

11. Cf. Uruguay XXI, *Oportunidades de inversión: agronegocios*.

uruguayo, para tener presente cómo este se ha integrado al mercado global de alimentos.

**Gráfico 3. Principales destinos del agronegocio uruguayo, 2017**



Fuente: Uruguay XXI, *Oportunidades de inversión: agronegocios*, basado en Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira, Montes del Plata y Penta Transaction.

El 35% de las ventas agroindustriales se dirigieron a China, principal destino de la carne bovina, celulosa, soja, madera, subproductos cárnicos y lana. Brasil es el segundo destino de exportación, posicionándose como el primer destino para lácteos, pescado, caucho, carne ovina, malta y cebada, mientras que la Unión Europea –que se analiza como un todo y no por país separado– constituye el segundo destino de los productos del agronegocio con un monto cercano a 1.361 millones de dólares, siendo principal destino de cueros, cítricos, carne equina, miel, frutas no cítricas y preparaciones de fruta.<sup>12</sup>

Los datos previos posibilitan contextualizar la importancia, por un lado, del agronegocio en la estructura productiva de Uruguay, pero también cómo este forma parte del mercado global de alimentos.

Los datos de la tabla 1 dan cuenta de la evolución entre 2012 y 2017 de las condiciones laborales y sociales de los asalariados rurales en las cadenas del agronegocio de carne, forestación y oleaginosos. Al referir-

12. Uruguay XXI, *Oportunidades de inversión: agronegocios*, p. 12.

se a condiciones laborales se trabaja con la formalidad del empleo y la construcción de un índice de calidad del empleo, el cual se compone por la cantidad de horas trabajadas por semana, trabajo en blanco y pago del aguinaldo (decimotercer salario). Las variables de condiciones sociales son las NBI y el índice multidimensional de la pobreza de Katzmann.

**Tabla 1. Trabajadores de la cadena de agronegocios (carne, forestación, cereales-soja y transporte), 2012 y 2017**

<b>2012</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Cadena carne	2.589	75,7	75,7
Cadena forestación	590	17,3	93,0
Cadena cereales-soja	239	7,0	
<b>Total</b>	<b>3.418</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2017</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Cadena carne	3.011	69,4	69,4
Cadena forestación	724	16,7	86,1
Cadena cereales-soja	604	13,9	
<b>Total</b>	<b>4.339</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012 y 2017.

Al considerar a los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios mencionadas en la tabla 1, se lo hace porque ellas estarían representando el 65% de los trabajadores asalariados del sector agropecuario (53% ganadería, 4% oleaginosos y 8% forestación).<sup>13</sup>

Por otro lado, representan el 57% (21% carne bovina, 19% celulosa y 17% soja) de las exportaciones agropecuarias de Uruguay, lo que significa aproximadamente 4.090 dólares, lo que señala la importancia de dichas cadenas de agronegocios. Considerando lo expuesto, en la tabla se aprecia estabilidad con relación al peso en el empleo del sector agropecuario, pero variación entre 2012 y 2017: un descenso del 7% aproximadamente en la cadena de la carne y un aumento del 7% en la cadena de oleaginosos.

En definitiva, la forestación ha sido estable en la composición de su fuerza de trabajo asalariada, mientras que ha descendido en la carne y aumentado en los oleaginosos.

13. Cf. Soledad Nion, “La gestión del riesgo en la industrial forestal uruguaya”, *La-boreal*, vol. 9, N° 1, 2013, p. 15.

En la tabla 2 se presenta la situación de tales trabajadores en cuanto a la formalidad de sus ocupaciones.

**Tabla 2. Tasa de formalidad del empleo de los trabajadores, 2012 y 2017**

<b>2012</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>
Formal	1.733	50,7
No formal	1.685	49,3
<b>Total</b>	<b>3.418</b>	<b>100</b>
<b>2017</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>
Formal	2.308	53,2
No formal	2.031	46,8
<b>Total</b>	<b>4.339</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012-2017.

Empleo formal implica aquel comprendido y amparado por la normativa laboral y social uruguaya, es decir, trabajo “en blanco”, descuentos del salario para la jubilación, derecho al salario vacacional, al pago de la hora extra, semana inglesa en horas de trabajo, pago de aguinaldo, etcétera.

Definido ello, se observa que entre los años analizados el empleo formal tuvo un incremento de prácticamente 2 puntos porcentuales entre los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios mencionadas (tabla 3).

En resumen, entre 2012 y 2017 el empleo formal aumentó 2%.

**Tabla 3. Índice de calidad del empleo, 2012 y 2017**

<b>2012</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>
Empleo de calidad	1.363	39,9
Empleo de no calidad	2.055	60,1
<b>Total</b>	<b>3.418</b>	<b>100</b>
<b>2017</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>
Empleo de calidad	1.752	40,4
Empleo de no calidad	2.587	59,6
<b>Total</b>	<b>4.339</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012-2017.



Se aprecia que la variación entre las dos categorías acerca de calidad del empleo, empleo de calidad y de no calidad, ha sido dentro de los valores esperados. Es decir que prácticamente la variación ha sido mínima (crecimiento de medio punto porcentual del trabajo de calidad) en el período analizado.

Al considerar la información de la tabla 4, los datos indicarían crecimiento de la formalidad laboral pero que no es lineal con el aumento de empleos de calidad. Ante ello se plantea el siguiente interrogante: ¿acaso se puede tener un empleo formal y precario?.

**Tabla 4. Calidad del empleo por cadena de agronegocios, 2012 y 2017**

Índice calidad de empleo	Trabajadores de cadena de agronegocios (carne, forestación, cereales-soja), 2012			Total
	Cadena carne	Cadena forestación	Cadena cereales-soja	
Empleo de calidad	79,8% <b>42,0%</b>	11,3% <b>26,1%</b>	9,0% <b>51,0%</b>	100,0% <b>39,9%</b>
Empleo de no calidad	73,1% <b>58,0%</b>	21,2% <b>73,9%</b>	5,7% <b>49,0%</b>	100,0% <b>60,1%</b>
<b>Total</b>	75,7% <b>100%</b>	17,3% <b>100%</b>	7,0% <b>100%</b>	100% <b>100%</b>
Índice calidad de empleo	Trabajadores de cadena de agronegocios (carne, forestación, cereales-soja), 2017			Total
	Cadena carne	Cadena forestación	Cadena cereales-soja	
Empleo de calidad	69,8% <b>40,6%</b>	14,3% <b>34,5%</b>	15,9% <b>46,2%</b>	100,0% <b>40,4%</b>
Empleo de no calidad	69,1% <b>59,4%</b>	18,3% <b>65,5%</b>	12,6% <b>53,8%</b>	100,0% <b>59,6%</b>
<b>Total</b>	69,4% <b>100%</b>	16,7% <b>100%</b>	13,9% <b>100%</b>	100% <b>100%</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012-2017.

Para el período analizado entre las diferentes cadenas de agronegocios, se aprecian cambios y estabilidades. La estabilidad se observa en la cadena forestal, dado que es la que presenta el mayor porcentaje de empleos de no calidad, y los cambios al interior de las cadenas de agronegocios ya que cereales-soja junto con la forestal aumentan el porcentaje de empleos de calidad, mientras que la cadena de la carne los disminuye.

En definitiva, aunque se advierten cambios en la mejora de empleos de calidad en algunas de las cadenas analizadas, lo que no se altera es que la cadena forestal es la que genera el mayor porcentaje de empleos de no calidad, seguida de la cárnica y luego la de cereales-soja.

En la tabla 5 se aprecia que durante el período analizado las NBI de los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios en cuestión aumentaron aproximadamente 9%. Es decir que ha mejorado la formalidad laboral, pero no ha sido así con la calidad del empleo y se suma ahora que las condiciones materiales de los asalariados tampoco han mejorado.

**Tabla 5. Situación de las NBI en los trabajadores de los agronegocios, 2012 y 2017**

<b>2012</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>
NBS	2.360	69,0
NBI	1.058	31,0
<b>Total</b>	<b>3.418</b>	<b>100</b>
<b>2017</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje válido</b>
NBS	2.619	60,4
NBI	1.720	39,6
<b>Total</b>	<b>4.339</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012-2017.

Siguiendo la línea de análisis de las condiciones sociales de los trabajadores, la situación de los trabajadores de la cadena cárnica sería intermedia en las diferentes categorías multidimensionales de la pobreza, entre los trabajadores de la cadena de cereales-soja se presentarían los mejores indicadores de integración social, mientras que los de la forestación serían aquellos con mayor porcentaje de pobreza estructural e inercial, indicando no solo ellos sino en general para las tres cadenas un porcentaje importante de pobreza inercial, lo que implica una condición de vulnerabilidad social ante los ciclos a la baja de los negocios de dichas cadenas productivas y el impacto que implica en los ingresos vía salario (tabla 6).

En la tabla 7 se continuará en el análisis pero con datos de 2017 para observar las características de las tendencias observadas en 2012.

Analizando la trayectoria de la pobreza multidimensional entre los asalariados de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y cereales-soja entre 2012 y 2017, se observa que la mayoría de ellos se encuentra

**Tabla 6. Condiciones sociales de los trabajadores de los diferentes agronegocios (carne, forestación, cereales-soja), 2012**

Índice multidimensional de la pobreza (Katzman)	Trabajadores de cadena de agronegocios (carne, forestación, cereales-soja)			Total
	Cadena carne	Cadena forestación	Cadena cereales-soja	
Integrados	78,8% <b>70,0%</b>	13,4% <b>52,4%</b>	7,7% <b>74,5%</b>	100,0% <b>67,3%</b>
Pobreza reciente	45,0% <b>1,0%</b>	41,7% <b>4,2%</b>	13,3% <b>3,3%</b>	100,0% <b>1,8%</b>
Pobreza inercial	74,5% <b>26,9%</b>	21,0% <b>33,2%</b>	4,5% <b>17,6%</b>	100,0% <b>27,4%</b>
Pobreza estructural	42,3% <b>2,0%</b>	48,8% <b>10,2%</b>	8,9% <b>4,6%</b>	100,0% <b>3,6%</b>
<b>Total</b>	75,7% <b>100,0%</b>	17,3% <b>100,0%</b>	7,0% <b>100,0%</b>	100,0% <b>100,0%</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012-2017.

**Tabla 7. Condiciones sociales de los trabajadores de los diferentes agronegocios (carne, forestación, cereales-soja), 2017**

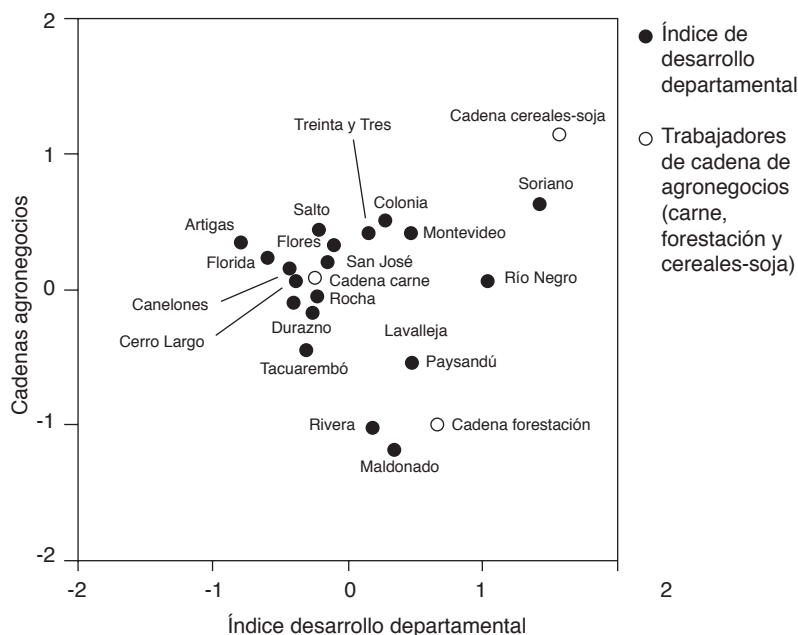
Índice multidimensional de la pobreza (Katzman)	Trabajadores de cadena de agronegocios (carne, forestación, cereales, soja)			Total
	Cadena carne	Cadena forestación	Cadena cereales-soja	
Integrados	69,7% <b>60,1%</b>	14,8% <b>53,2%</b>	15,4% <b>66,4%</b>	100,0% <b>59,8%</b>
Pobreza reciente	34,8% <b>0,3%</b>	52,2% <b>1,7%</b>	13,0% <b>0,5%</b>	100,0% <b>0,5%</b>
Pobreza inercial	71,5% <b>38,2%</b>	17,5% <b>38,8%</b>	11,1% <b>29,5%</b>	100,0% <b>37,1%</b>
Pobreza estructural	38,2% <b>1,4%</b>	41,8% <b>6,4%</b>	20,0% <b>3,6%</b>	100,0% <b>2,5%</b>
<b>Total</b>	69,4% <b>100,0%</b>	16,7% <b>100,0%</b>	13,9% <b>100,0%</b>	100,0% <b>100,0%</b>

Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2012-2017.

integrado socialmente, en especial los asalariados de cereales-soja, disminuye la pobreza estructural en las tres cadenas y, finalmente, aumenta la vulnerabilidad social de los asalariados en general y especialmente entre los forestales, como se ha señalado anteriormente.

Los datos del gráfico 4 presentan, de acuerdo con el índice de desarrollo departamental, la distribución territorial de los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios de carne, forestación y cereales-soja.

**Gráfico 4. Cadenas de agronegocios de exportación y su distribución territorial de los asalariados, 2017**



Fuente: elaboración propia, ECH-INE, 2017.

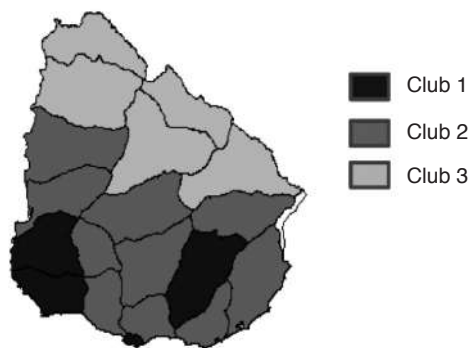
El primer grupo o club de convergencia se compone por los siguientes departamentos: Colonia, Lavalleja, Montevideo, Soriano; el segundo grupo o club de convergencia está integrado por Canelones, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, Paysandú, Rocha, Río Negro, San José, Treinta y Tres y, finalmente, el tercer grupo o club de convergencia está compuesto por los departamentos Artigas, Cerro Largo, Rivera, Salto y Tacuarembó.

Al analizar la localización territorial de los grupos o clubes de convergencia, se observa cierta correlación entre la pertenencia a un club y la ubicación en el mapa de Uruguay.

Como se puede observar en el gráfico 5, el denominado club 1 está compuesto por departamentos que se ubican en la mitad sur del país.

Por otro lado, de los diez integrantes del club 2, solo tres departamentos se ubican en la mitad norte. Por último, el club 3 está formado por los departamentos del norte y el noroeste del país, presentando una posición geográfica bien definida. Esto podría interpretarse como resultado de un proceso de rezago relativo en el desarrollo, que existe en los departamentos del norte y el noroeste del país.<sup>14</sup>

**Gráfico 5. Localización geográfica de grupos de departamentos según ID**



Fuente: Diego Aboal, Bibiana Lanzilotta, Martín Pereyra y Paz Queraltó, “Desarrollo económico regional...”, p. 19.

Al considerar la presente distribución y la de las diferentes cadenas de agronegocios analizadas, se aprecia que la de los cereales y la soja se localiza en un territorio de alto desarrollo (ID), la de la carne en territorios mayoritariamente de desarrollo intermedio y al sur del río Negro, como la cadena de cereales-soja, y con un peso importante también en territorios de bajo desarrollo; finalmente, la cadena forestal presenta un comportamiento en su distribución del desarrollo territorial similar al de la carne y en tales territorios los trabajadores desarrollan sus condiciones de trabajo, como se observa, de forma heterogénea con relación al proceso productivo de la propia cadena del agronegocio y al de desarrollo del territorio.

14. Cf. Diego Aboal, Bibiana Lanzilotta, Martín Pereyra y Paz Queraltó, “Desarrollo económico regional...”, p. 19.

## Conclusiones

Las transformaciones productivas en la ruralidad en los últimos casi veinte años han dinamizado diferentes cadenas de agronegocios; en términos de mercado de trabajo la forestación ha sido estable en la composición de su fuerza de trabajo asalariada, mientras que ha descendido en la carne y aumentado en los oleaginosos. Entre 2012 y 2017 el empleo formal aumentó 2% en términos generales en las cadenas analizadas, aunque se advierten cambios en la mejora de empleos de calidad en algunas de ellas. Lo que no se altera es que la cadena forestal genera el mayor porcentaje de empleos de no calidad, seguida de la cárnica y luego la de cereales-soja.

Se puede resumir que durante el período estudiado ha mejorado la formalidad laboral, pero ello no implica que linealmente mejore la calidad del empleo o las condiciones sociales de los asalariados. Analizando la trayectoria de la pobreza multidimensional entre los asalariados de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y cereales-soja entre 2012 y 2017, la mayoría de ellos se encuentran integrados socialmente, en especial entre los asalariados de cereales-soja; disminuye la pobreza estructural en las tres cadenas y, finalmente, aumenta la vulnerabilidad social de los asalariados en general, especialmente entre los forestales.

Por otra parte, se analizan tales comportamientos en el territorio como espacio social en el cual los diversos actores interrelacionan en la construcción de él. En este sentido, la cadena de cereales-soja se localiza en un territorio de alto desarrollo (ID), la de la carne en territorios mayoritariamente de desarrollo intermedio, con presencia menor al sur del río Negro en un territorio con varios departamentos con altos ID y con un peso importante también en territorios de bajo desarrollo; finalmente, la cadena forestal presenta un comportamiento similar al de la carne en su distribución del desarrollo territorial.

En tales territorios las condiciones de trabajo no necesariamente se encuentran relacionadas con la cadena en la cual se trabaja. Tales actividades se llevan adelante en territorios heterogéneos en su desarrollo socioeconómico, lo que forma parte de las condiciones y la calidad del empleo mencionadas.

El proceso productivo de las cadenas de agronegocios no generan *per se* mejoras sociales, económicas y laborales en forma de cascada en las condiciones sociolaborales de sus trabajadores y en el desarrollo del territorio, sino que insertas en determinados territorios podrían potenciar o no el proceso de desarrollo de ellos y de las condiciones sociolaborales;

por último, las tendencias actuales observadas en el aumento de la vulnerabilidad social de los asalariados plantean si se está ante la emergencia de precarios empleos formales.





TERCERA PARTE

## El oficio del sociólogo en primera persona



## Cuando la práctica educativa trasciende una disciplina: la enseñanza de la sociología en formación docente y en la Facultad de Ciencias Sociales

*Alejandra Capocasale Bruno\**

La responsabilidad de grupos de estudiantes tanto en institutos de formación docente (IINN e IPA de CFE) y de subgrupos (prácticos) en Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) –como en mi caso durante años– conlleva varios interrogantes que están presentes de manera constante. Preguntas básicas y simples que se transforman en un pensar problematizador que alcanza niveles pedagógicos, didácticos, disciplinares e inclusive epistemológicos. La práctica educativa no se restringe a lo que ocurre a nivel áulico; lo trasciende. Esta convicción académica produce y reproduce un quehacer educativo complejo, integral y transversal que tiñe cada vez que uno “da clase”. Ese “dar clase” se transforma en una experiencia única e irrepetible pero que da cuenta al mismo tiempo de generalidades vinculadas a la práctica educativa de la enseñanza de la sociología.

En esta oportunidad, tomaré tres de estos interrogantes básicos que durante años han estado presentes en mi práctica educativa como docente de Sociología y Sociología de la Educación tanto en la formación docente como en la Udelar. Estas han gestado en mí una búsqueda constante de estrategias pedagógico-didácticas para llegar a los estudiantes desde y con una disciplina que tiene un imbricado vínculo con su realidad social cotidiana. Una disciplina que algunos estudiantes aún no logran asumir ni entender en su carácter científico –algo tan evidente para nosotros, los sociólogos–. Una disciplina que se presenta ante los estudiantes muchas veces como ajena a sus preocupaciones diarias y se instala como parte de un saber académico que da respuestas con contenido estadístico a problemas sociales. Es que la distancia entre un problema social y un problema sociológico a veces para los estudiantes es tan grande que se transforma en una grieta insuperable.

\* Profesora de Filosofía (IPA). Magistra en Sociología (FCS-Udelar). Directora IPES-CFE (ANEP). [alecapocasale@gmail.com](mailto:alecapocasale@gmail.com)

¿Qué enseñar? Parece evidente que la respuesta es la siguiente: lo que establece el contenido programático. No obstante, más allá de que el contenido programático es la guía del contenido a enseñar, no da respuesta a este interrogante. Porque el contenido a enseñar tiene que ver con el sujeto educando, con el contexto académico y con la formación para una futura práctica profesional. La adecuación del contenido a enseñar en mi caso me implicó estudiar muy detenidamente el perfil de los estudiantes y su carrera profesional futura. (Cabe aclarar que el contenido a enseñar en todos los casos mantiene ciertos conceptos básicos estructuradores del conocimiento disciplinar específico.) En el caso de formación docente, el contenido toma una forma y un sentido diferente si el estudiante es de magisterio, de varios profesados simultáneos en un grupo, de magisterio y profesado en conjunto o de estudiantes de profesado separados por disciplina de estudio (profesado de Física o de Filosofía, por ejemplo, entre otros). Lo mismo ocurre en la Facultad de Ciencias Sociales si el subgrupo está formado por estudiantes de varias carreras posibles (por ejemplo, Sociología, Trabajo Social, entre otras). La presentación del contenido disciplinar requiere ejemplos específicos y particulares para cada caso. No solo son ejemplos a dar sino la forma en que se los analiza; se los trata desde los autores seleccionados para presentar los temas de referencia. Este hecho me llevó durante años a preparar mis clases, más que en sus contenidos programáticos, en su abordaje a partir de ejemplos. He trabajado temas actuales, casos y situaciones cotidianas coyunturales y no tanto, que me permiten primero indagar en las ideas previas de los estudiantes para luego abordarlas directamente para corregirlas, ampliarlas si son correctas y luego debatir. He descubierto que sin estos ejemplos a tratar en clase no es posible que el estudiante comprenda cabalmente el sentido de la disciplina en su carrera. He repetido constantemente: “La sociología les permite construir una nueva mirada de su mundo cotidiano”, frase que hice mía y que ellos repetían y luego me narraban cómo a partir de algunos conceptos trabajados en clase salían a su mundo cotidiano y lo percibían de forma diferente. Esta práctica educativa va generando una relación pedagógica cómplice que colabora con la construcción del futuro profesional que formará parte de una determinada comunidad académica dialógica. Es una práctica educativa que pretende trascender la práctica docente áulica y alcanzar la producción de los sujetos educandos:

Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los

individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen.<sup>1</sup>

¿Cómo enseñar? A pesar de que soy egresada del Instituto de Profesores Artigas (IPA), no es mi especialidad la didáctica y menos aún la didáctica disciplinar (lo que no significa que no le reconozca su valor sustantivo para la práctica educativa y mi admiración y respeto para aquellos que la han desarrollado). Esto es lo primero que he asumido en mi carrera profesional docente. No significa que carezco de conocimiento pedagógico-didáctico, pero no me he dedicado a perfeccionarme en el campo didáctico. Por este motivo, mi práctica educativa parte de mis conocimientos básicos y de lo que comúnmente se denomina “el buen enseñante”. Este es definido como un docente que conjuga su conocimiento básico pedagógico-didáctico con su experiencia docente (¡que vale mucho!). Luego de hacer esta aclaración, les cuento que el cómo enseñar para mí tiene una fuerte carga intuitiva. Al conocer a un grupo de estudiantes lo primero que asumo es su singularidad. Desde allí construyo poco a poco con y junto a ellos un camino también singular. Ellos me van guiando por dónde ir en el camino de presentación de contenidos a enseñar. Recuerdo a un grupo de estudiantes de la carrera de Educador Social de Formación Docente: cada contenido temático lo preparaban en equipos que hacían representaciones teatrales. De ahí íbamos extrayendo contenidos sustantivos con los otros estudiantes del grupo y armando un gran mapa conceptual temático en el pizarrón. Solo con ellos llevé adelante esta práctica educativa. Ellos encontraban tediosa la clase magistral dictada por mí. No tuve que consultarlos... solo los observé las dos primeras clases. Es que cada práctica profesional tiene un perfil de estudiantes con sus maneras de ser, actuar, sentir y hacer.<sup>2</sup>

¿A quiénes? A seres humanos. Esa es la primera respuesta que viene a mi mente. Seres humanos impredecibles. Seres humanos que se mueven por motivos, que participan de una acción social pedagógica que no tiene el mismo significado para mí como docente que para ellos como estudiantes. Una acción social que se transforma en la práctica educativa áulica en una relación social con sentido, significado, contexto y consecuencias posibles. Eso es lo primero que pienso... me posiciono como docente desde un pensamiento weberiano y desde allí comparto

1. Karl Marx y Friedrich Engels, *La ideología alemana*, Barcelona, Grijalbo, 1974, p. 79.

2. Cf. Émile Durkheim, *Las reglas del método sociológico*, Ciudad de México, FCE, 2001.

con ellos mi humanidad, mi condición humana.<sup>3</sup> La práctica educativa es una relación social educativa de vínculo humanizante y humanizador en la cual no se puede esperar que el estudiante (el otro) haga lo que yo quiero como docente (el yo). Es un encuentro para pensar dentro del marco una determinada construcción social académica. Por años esta manera de estar con otros (los estudiantes) me ha permitido aprender con y junto a ellos.

La práctica educativa de la enseñanza y del aprendizaje de la sociología ha sido para mí una aventura académica que transcurre entre el ser y el deber ser, entre lo posible y lo imposible. Me ha permitido comprobar empíricamente que no hay duda de que “los estudiantes superan a los profesores”... por lejos (independientemente de la calificación que obtienen) y vivir esto me colma de alegría vocacional.

3. Cf. Max Weber, *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*, Madrid, FCE, 2002.

## La reflexión sociológica y el trabajo de campo

*Lorena Custodio\**

Escribir sobre el aporte de la sociología desde mi visión y práctica profesional es la invitación y provocación inicial que inspiran las siguientes líneas. Sin lugar a dudas, consiste en un camino de ida y vuelta entre las reflexiones sociológicas, la experiencia del hacer en el ámbito de la política social y el contacto con la experiencia situada de aquellos sectores más desfavorecidos que interpela permanentemente a las dos anteriores. De este modo, la valoración sobre la contribución de la disciplina en el accionar de la política pública, inevitablemente, me invita a recordar mi recorrido profesional, así como también las orientaciones que he escogido entre las posibles miradas sociológicas.

Comencé mis estudios en sociología en 1996, anhelando con pasión comprender el entramado de la sociedad para poder transformarla. Esa inquietud tan amplia, y hasta utópica, fue tomando variadas formas a lo largo de mi experiencia como socióloga. Los inicios fueron haciendo encuestas de diverso tipo, entre ellas las “cara a cara”. Las puertas cerradas del barrio residencial de Carrasco, Montevideo, contrastaban con la facilidad para encontrar a las personas en los asentamientos irregulares de esta última ciudad y de Canelones, quienes accedían casi sin reparos a responder las –a veces– complejas preguntas que les hacía. De este modo, fui conformando el gusto por confrontar la teoría, los instrumentos de la investigación académica con la experiencia concreta de aquellas personas en sus múltiples registros, más allá del discurso.

¿Qué vemos, qué pensamos y qué reflexionamos a través de los datos y de la información con la cual contamos para analizar, para decidir, para

\* Directora de la División Estudios Sociales y Trabajo de Campo de Dinem-Mides. Docente en la Udelar. Doctoranda en Sociología (FCS Udelar-IHEAL Sorbonne Nouvelle). [lorena.custodio@gmail.com](mailto:lorena.custodio@gmail.com)

actuar? Esta pregunta fue y continúa acompañándome a lo largo de mi transcurso profesional. La realidad en la que viven muchas personas que están lejos de nuestro “mundo de vida” interpela nuestros instrumentos de medición y herramientas conceptuales, las bases de datos que analizamos y las políticas que implementamos. Aprendemos que las categorías a partir de las cuales interpretamos la realidad nos devuelven un mapa específico de orientación: una lectura posible. Y, por esto, ¡importa la teoría! Esa teoría que elegimos y que buscamos para encontrar las respuestas a los enigmas que la realidad social nos plantea cuando los números “fríos” nos dejan ciegos y no comprendemos qué sucede ni por qué.

Un hito fundamental que marcó mi carrera fue ingresar a trabajar como socióloga en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo. Aprendí mucho: del contacto con otras profesiones, del acercamiento a los diversos contextos del país, de confrontar la teoría con la práctica y las experiencias de vida de varias personas en situación de vulnerabilidad que, muchas veces, no son como se piensan. Me enfrenté a tener que articular lo aprendido en la Universidad con la dinámica de lo urgente para hacer y decidir, aun cuando la realidad no entrara en las categorías y los casilleros previstos. Los ejemplos son muchos.

En el viaje que realicé a París por mis estudios de doctorado, me reencontré con una sociología que había olvidado, aquella que se preocupa más por la reflexión y el análisis de los mecanismos sociales que por los instrumentos de medición hiperestructurados y los modelos estadísticos explicativos. Este hecho me hizo reconciliarme con el aporte sustantivo de la profesión y retomar aquellas preguntas que nos permiten pensar en “hacer sociedad”, ese *faire société* expresado en su idioma original. Esto es: ¿cómo vivimos juntos?, ¿qué nos une y qué nos separa y qué nos distingue?, ¿qué tipo de solidaridades creamos y legitimamos?, ¿quiénes y qué hacemos, cómo pensamos, medimos y actuamos para lograr la integración social? Con esto me refiero a trabajar por una sociedad de la que todos formemos parte, una sociedad más justa, con un sentido de justicia social compartido.

Es a partir de este incesante periplo, en el cual pasé por aplicar encuestas, diseñarlas, procesarlas, analizar datos e interpretar cifras, volver al campo, realizar entrevistas, observaciones y otro tipo de técnicas cualitativas, cuestionar mis ideas, leer teoría, viajar y conocer otros contextos, trabajar y discutir con otros, que me permito ilustrar algunos aportes con breves ejemplos. Cabe señalar que en el trabajo cotidiano no estamos permanentemente pensando en la contribución específica de nuestro



campo disciplinar. Muchas veces para poder actuar en la realidad es útil poder pensar en conjunto con otros, y especialmente con esos otros que son considerados como diferentes.

#### EL MUNDO DE VIDA Y LA SOCIABILIDAD DEL OTRO

Preguntábamos sobre el uso del tiempo de mujeres y hombres referido a las tareas domésticas y de cuidados para una encuesta de la Universidad. Trabajaba en asentamientos irregulares. Varias de las mujeres no podían contabilizar el tiempo, el cuidado de sus hijos sumaba “todo el día”, las tareas domésticas también. Las cifras no entraban en los casilleros previstos. El tiempo que guiaba y orientaba la rutina de estas mujeres era la escuela de sus hijos. No había otros horarios que permitieran ordenar o fragmentar en medidas de tiempo su día. En una jornada cocinaban, realizaban mandados, de a ratos, sin reloj. ¿Cómo contar el tiempo? En algunos casos ¡no sabían hacer cuentas!

#### ENTRE EL NÚMERO Y LA PALABRA: EL CONTEXTO

Era la época del PANES;<sup>1</sup> se estudiaban los resultados de la evaluación de impacto con metodologías cuantitativas. De los estudios cualitativos, que también se hicieron, se sostenía que las personas que recibían el plan, y aún más cuando cobraban varios meses acumulados, lo gastaban en su vivienda. Se analizaban los relatos de las personas entrevistadas. Los números de los resultados cuantitativos no indicaban eso, “efecto cero”. Hilar fino en las observaciones de campo de quienes habíamos estado recorriendo, conversando con varios beneficiarios, dio luz para resolver el acertijo de la contradicción entre ambas valoraciones: la palabra y los números. Ellos gastaban y mejoraban su vivienda, ¡sí! Pero eso no era captado por los indicadores y las variables que eran utilizadas en el formulario para la evaluación de impacto. Ellos ponían baldosas en una pieza, pero la mayoría de la vivienda mantenía el piso de hormigón sin contrapiso. Arreglaban una ventana, pintaban las paredes, construían una pieza de material al lado de la de costanero que ya tenían, etc. Eran arreglos, mejoras, parches, pero no eran cambios estructurales en la situación de su vivienda previstos por la medición original.

1. Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social instrumentado durante el primer gobierno nacional del Frente Amplio (2005-2007).

## EN BUSCA DE LAS PREGUNTAS ADECUADAS

A pesar de todas las prestaciones recibidas y del paso del tiempo con buenos indicadores socioeconómicos generales en el país, algunos índices con los cuales medimos la vulnerabilidad social no mejoraron en algunos barrios. ¿Qué pasó? ¿Significa que tal programa o tal plan fracasaron? ¿Acaso el marco lógico y la teoría del programa no fueron los correctos? ¿Mejoraron en algún aspecto sus condiciones de vida? Identificamos que lo que nosotros buscábamos en indicadores observables del bienestar material podríamos encontrarlo en una suerte de “bienestar subjetivo”, si es que así podemos llamarlo. En estos hogares de contexto pobre, la mejora fue poder independizar su vivienda de otros, a costa de la pérdida de elementos de confort y mejores condiciones de construcción.

Estos ejemplos, entre tantos otros, exponen la importancia de problematizar la producción de información y la comprensión de su análisis en función del contexto de generación. Cuando las preguntas se formulan desde una racionalidad distinta o para mediciones de tipo más general, se descuidan la especificidad y las lógicas de sociabilidad que son diferentes a las planificadas o ideadas. Allí lo importante es tener presente el contexto del relevamiento de la información a la hora de interpretar los números y las palabras. También hay que considerar que la foto del momento contiene historias pasadas. Cuando uno comienza a trabajar con los sectores más pobres, y transcurre el tiempo, y hay indicadores de miseria que permanecen, empieza a observar distintos rasgos de la pobreza y a comprender que detrás de ese número, de ese caso, hay un contexto sociopolítico y también una trayectoria vital que emerge tras distintas señales, que no siempre son las mismas. Entonces, debemos aprender a interpretar el detrás, el presente y la distancia ante ese hombre que, a sus cuarenta y pico de años, nos habla de la exclusión porque nunca tuvo credencial cívica ni le interesó tenerla, a esa muchacha que nos transmite la vergüenza de no saber leer y apenas escribe su nombre, a aquel otro joven que cuenta con la esperanza de ingresar al ejército como único camino posible para salir del barrio estigmatizado.

Por último, y lo más importante –tal vez en este momento–, es volver a hacernos las preguntas necesarias para comprender las realidades que suceden frente a nosotros de forma silenciosa, invisible. De alguna manera, es repensar algunas temáticas desde una sociología preocupada por una forma de entender los lazos sociales, la integración social desde una

mirada relacional. Como ya dijimos, retomar la pregunta por el cómo hacer sociedad, cómo lograr una sociedad integrada y cohesionada que nos permita a todos formar parte.

Es así como, hoy, vuelvo a la sociología y a sus teorías para intentar encontrar las preguntas que nos lleven a formular mejores respuestas, con la utopía de siempre: intentar transformar nuestra sociedad en una más justa. En los últimos pasos de este camino, de las diferentes formas de hacer sociología, me acerqué a mis inicios: al trabajo de campo, contemplando esos pequeños detalles que ponen en jaque la vertiginosidad y la presión de la producción del conocimiento rápido y útil, que no nos permite tomarnos el tiempo necesario para reflexionar sobre las propias categorías de análisis que utilizamos para actuar sobre la realidad, o para generar conocimiento a partir de un ida y vuelta entre la teoría y la experiencia situada que sea insumo para el actuar. Es así como aparecen otras formas de problematizar la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión. Vemos la complejidad de los múltiples factores del operar de las políticas sociales, de los actores públicos, de los anónimos y de los ignorados, de las trayectorias familiares signadas por los contextos sociopolíticos y del transcurrir del tiempo, de las imposibilidades y los pocos recursos de los sectores más desventajados. Nos permite también reflexionar sobre la manera en que los instrumentos del Estado construyen determinadas categorías que influyen en la toma de decisiones de la política.



## La profesión de la sociología en Uruguay

*Teresa Herrera Sormano\**

La trayectoria de la sociología como disciplina científica en Uruguay es, en términos históricos, breve.

Previamente al golpe de Estado de 1973, solamente hubo una cohorte de egresados, que no superaba la docena. Durante la dictadura no hubo formación universitaria. Recuperada la democracia, el primer Colegio de Sociólogos se organizó con esos egresados, con quienes tenían títulos en el exterior y con personas a las cuales se les reconoció competencia notoria, a pesar de no tener título en sociología.

En la actualidad quienes estudian sociología tienen una nutrida oferta académica y podemos decir que la profesión posee masa crítica.

Ahora bien, desde siempre las disciplinas se han definido por su objeto y su método pero, en el caso de la sociología, para el común de las personas, todavía no está claro qué es nuestra profesión. Con frecuencia se la asocia a la “aplicación de encuestas” y alcanza el punto máximo de notoriedad en etapas preelectorales. Sin embargo, en la actualidad esa actividad se corresponde, en muchos casos, más con la ciencia política (formación de data más reciente) que con la sociología.

Entonces, parafraseando a Pierre Bourdieu, ¿cuál es realmente el oficio de la sociología en general y en Uruguay en particular?

Como toda opinión, la mía es subjetiva, sobre todo con el sustrato de mi opción vocacional: el objeto de la sociología es coadyuvar a modificar, en forma positiva, las condiciones de vida de la gente. Veamos: digo “coadyuvar” porque no depende solamente de nuestra actividad y eso vincula directamente con las voluntades políticas. La sociología, como todas las actividades humanas, es política, pero en nuestro caso lo es mucho más

\* Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Especialista en Violencia basada en Género y Generaciones. Consultora de organismos internacionales. Exdocente de Udelar y Universidad ORT Uruguay. Coordinadora del Diploma online de Violencia basada en Género y Generaciones de la Universidad CLAEH. [teresaherrera2013.th@gmail.com](mailto:teresaherrera2013.th@gmail.com)

que otras. No creo en una sociología que solamente sirva para acrecentar el acervo cultural, para llenar anaqueles de bibliotecas. Creo en una sociología “con barro en los zapatos”; sin contacto con las personas, es muy difícil, por no decir imposible, comprender los procesos sociales.

Hay colegas en las más variadas actividades: educación, salud, vivienda, género, trabajo, actividad empresarial, participación política y podría seguir hasta el infinito, porque “nada de lo humano nos es ajeno”, siempre que no sea lo individual, siempre que sea grupal, sectorial, masivo.

¿Qué nos distingue? O al menos debería distinguirnos: la tarea científica; no podemos opinar como cualquiera sobre cualquier tema. Es necesario contar con evidencia significativa para diagnosticar, evaluar, pronosticar, sea producida directamente por nosotras y nosotros, o por otras y otros científicos, y debidamente analizada. La evidencia significativa puede ser obtenida mediante estrategias cuantitativas o cualitativas, pero debidamente fundada.

¿Nuestra profesión está socialmente validada? Esta pregunta es casi una paradoja. Seguramente lo está en muchos sectores, especialmente en lo público, pero veo aun varios tipos de problemas:

- 1) A pesar de la trayectoria institucional de la sociología, todavía no se la respeta como profesión de manera cabal y cualquiera opina sobre los temas de estudio, lo cual no se les ocurriría hacer con la medicina o el derecho, por ejemplo. De ahí mi insistencia en sustentar las opiniones de las y los colegas en evidencia significativa.
- 2) Habida cuenta de esta situación, todavía hay quienes sin tener título suelen cumplir “roles profesionales” que deberían ser ejercidos por colegas.
- 3) La relación entre la política y la sociología está lejos de ser una alianza virtuosa, es más frecuente que las decisiones en materia de políticas sociales respondan a la improvisación o la ideología antes que a la recomendación técnica.

Esto último nos conduce a una discusión sustancial en nuestro accionar: objetividad versus subjetividad. La primera no existe, desde el momento de la elección del objeto de estudio; lo importante es dar cuenta de ella, desde qué lugar y posicionamiento se ejerce la profesión.

El país, como el conjunto de la región y el mundo, se enfrenta a cambios sustanciales, eso hace más que nunca necesaria nuestra hermosa, desafiante y también, como la sociedad, cambiante profesión.

## Ejercer el oficio del sociólogo fuera de la academia: algunas consideraciones

*Cristian Maneiro\**

Motivado por una opción personal, aunque también condicionado por el acotado mercado laboral para la sociología en Uruguay, me he desempeñado la mayor parte de mi carrera profesional como consultor en ámbitos ajenos al mundo académico, en el área de monitoreo y evaluación de programas tanto en el sector público como en organizaciones no gubernamentales.

A pesar de contar con el mismo acervo de conocimientos teóricos y metodológicos que son utilizados en la práctica académica, la experiencia de quienes actuamos en otros ámbitos sugiere que la inserción profesional del sociólogo tiene sus desafíos particulares en una serie (no exhaustiva) de aspectos que me propongo comentar brevemente: contenido y propósito de las publicaciones, conformación de los equipos de trabajo, ética y aspectos formales.

En lo relativo a los *contenidos* de los productos de investigación, en ámbitos externos la jerga disciplinaria debe minimizarse. La exigencia académica de realizar constantemente citas de autores para legitimar las afirmaciones presentadas en cada párrafo es desalentada y se privilegia un lenguaje más sencillo, especialmente considerando que los resultados deben ser presentados no a pares académicos sino a diversos públicos (autoridades, donantes, socios) con niveles de formación e intereses heterogéneos.

En este sentido, los ejercicios de exégesis teórica, siguiendo la exhortación de muchos profesores durante la carrera de poner “a dialogar” autores, no tienen cabida y en su lugar se exige una enumeración de antecedentes y también el repaso exhaustivo de los hitos normativos referidos a la temática de interés (con especial atención a las fechas de declaraciones y compromisos internacionales).

\* Magíster en Sociología (UFPR, Brasil). Consultor independiente en monitoreo y evaluación de programas. [cristianmaneiro22@gmail.com](mailto:cristianmaneiro22@gmail.com)

Tampoco la explicitación de las opciones metodológicas es común fuera de la academia. Los detalles de cada etapa de las decisiones de muestreo, la presentación de los distintos modelos de regresión ensayados, los análisis de residuos, mapas conceptuales utilizados en trabajos cualitativos, etc., son reducidos en la mayoría de los casos a un anexo estadístico o apenas un listado de entrevistados. El énfasis metodológico es más bien colocado en la visualización de datos, donde herramientas como las nubes de palabras, las infografías y los gráficos dinámicos son preponderantes, lo que ha dado lugar incluso al surgimiento de expertos en visualización de datos<sup>1</sup> y a una serie de softwares específicos para estos fines (Tableau, Power BI, etc.). Estas nuevas herramientas van de la mano con el auge de la *ciencia de datos* que aprovecha los avances de la inteligencia artificial y la disponibilidad de uso de *big data* para la toma de decisiones.

En cuanto a los propósitos de la actividad sociológica, es frecuente que las investigaciones o los artículos académicos culminen con más interrogantes que certezas, se dejen abiertas problemáticas y se esboce una propuesta preliminar para una agenda de investigación a futuro, confiando en un modelo incremental de la generación de conocimiento científico a partir de la acumulación de casos empíricos. Todo lo contrario ocurre en la gestión pública, donde el clamor de los supervisores y hacedores de política es que las evaluaciones propongan recomendaciones claras que puedan dar lugar a acciones inmediatas para resolver problemas puntuales que (en última instancia) puedan constituirse como buenas prácticas a replicar en otros contextos.

Respecto de la *conformación de los equipos de trabajo*, la interdisciplinariedad, tan buscada y valorada en los trabajos de investigación académica, se da naturalmente, al estar integrados los entornos de trabajo por distintos profesionales de las ciencias sociales y de otras disciplinas (relaciones internacionales, educadores, psicólogos).

A diferencia de la especificidad de los llamados docentes, donde se definen de antemano no solo la formación requerida de los postulantes sino también la asignatura y los contenidos a leccionar, las convocatorias para ocupar vacantes en el sector público y en organizaciones no gubernamentales suelen permitir la postulación desde una serie amplia de formaciones y experiencias, por lo que es natural que los equipos acaben siendo integrados por personas con titulaciones diversas.

Adicionalmente, a las formaciones disciplinarias tradicionales, deben

1. Ver los trabajos de Sara Vaca en <https://www.saravaca.com/> o de Stephanie Evergreen en <https://stephanieevergreen.com/>.



agregarse una serie de actores que pueden tener antecedentes educativos diversos pero con *expertises* muy claramente definidas, responsables de aspectos de gestión que ocupan títulos y funciones relacionados con el mundo del management: planificación estratégica, monitoreo de indicadores claves (KPI), gestores de calidad, responsables de procesos. Por su parte en muchas organizaciones se replican los organigramas típicos de las agencias de Naciones Unidas (oficiales de programa, responsables de operaciones, responsables de movilización de recursos, etc.), por lo que la definición de roles es diferente de la academia y su clásica diferenciación entre las funciones de investigación, docencia y extensión.

Los aspectos éticos también presentan algunas particularidades, si bien desde la academia se proclaman y adoptan normas éticas en la investigación con seres humanos (por ejemplo, en los principios contenidos en el informe Belmont)<sup>2</sup> y muchas universidades establecen comités de ética que deben aprobar las investigaciones propuestas, la práctica profesional fuera de la academia está regulada por diferentes estándares. En este sentido, el trabajo con poblaciones vulnerables (niños y adolescentes, población carcelaria, víctimas de violencia, etc.) descansa en principios internacionales (por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño) pero implica la creación particular de instrumentos de recolección de información apropiadas a la edad y a la situación de cada grupo de interés específico.

El sociólogo que trabaja en estos ámbitos no puede adoptar una distancia académica sino que debe comprometerse con las consecuencias de su praxis. Por ejemplo, en la aplicación de entrevistas y grupos de discusión es necesario desarrollar en el investigador la capacidad de cerrar los procesos generados (catarsis, recuerdo de episodios traumáticos) de manera de no generar un daño en el entrevistado que pueda ser mayor al beneficio obtenido por el investigador.

Por otra parte, cuando se interviene desde el sector público, especialmente en los programas de asistencia social, es común que el investigador deba manejar las expectativas de los sujetos, quienes racionalmente esperan algún beneficio material al ser encuestados/observados.

Por último, en términos de *características formales*, a diferencia de la tradicional relación de dependencia utilizada en la academia nacional, es común en otros ámbitos la necesidad de abrir una empresa unipersonal, facturar los servicios y hacerse individualmente responsable por el pago de aportes e impuestos. La presupuestación de “horas-hombre” en

2. <http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf>

forma individual condiciona la remuneración a recibir a la aprobación de productos específicos (típico de los contratos de consultoría), e implica desafíos a la hora de definir de manera concreta las tareas que se espera realice el sociólogo.

Estas modalidades brindan una mayor independencia del empleado para manejarse con diferentes empleadores en simultáneo, aunque también es innegable que conlleva una precarización marcada por la ausencia de beneficios laborales (aguinaldo, salario vacacional, etcétera).

Estas diferencias reseñadas no implican necesariamente una dicotomía excluyente entre dos “tipo-ideales” de sociólogos. Muchos profesionales ocupan a lo largo de su carrera, de manera sucesiva e incluso simultánea, cargos académicos y posiciones de relieve en el ámbito público, el privado y en organizaciones internacionales, navegando de manera eficiente entre las expectativas de rol en estos diferentes ámbitos (Gustavo de Armas y Fernando Filgueira, por citar apenas dos casos notorios). No obstante, también es común encontrarse con sociólogos de tradición académica que no logran adaptar su praxis cuando son convocados por el sector público u organizaciones internacionales para realizar informes de consultoría o evaluaciones, resultando en un subaprovechamiento de los productos obtenidos y en descontento de ambas partes.

El modelo tradicional de ejercicio de la sociología en docencia e investigación universitaria es una de las posibilidades entre otras. Los cambios que se están procesando en las diversas disciplinas requerirán de cada profesional niveles de adaptación y rápida reconversión laboral, por lo que crecientemente el sociólogo debería conocer y ser capaz de desempeñarse de manera eficaz en las distintas alternativas de inserción profesional.

Desde este supuesto, mi recomendación (nada original, por cierto) es la conveniencia de la capacitación permanente y a medida en distintas herramientas: desde los nuevos paquetes estadísticos y de visualización de datos, las herramientas de gestión, las llamadas *soft skills* o habilidades interpersonales, idiomas, etc., para poder realizar este tránsito constante entre la academia y otros ámbitos de la manera más armoniosa posible.

## Colegio de Sociólogos: construcción de futuro

*Susana Mallo Reynal\**

*A Carlos Basilio Muñoz*

En 1987 la Universidad recibió un conjunto de docentes que provenían de distintas experiencias; sin embargo, se integró como un grupo diverso, lo que permitió reabrir lo que fue en ese momento el Instituto de Ciencias Sociales dependiente de la Facultad de Derecho. Veníamos de distintos destinos pero con una idea clara: refundar las ciencias sociales y sobre todo, en nuestro caso, la sociología. El distinto origen nos permitió aunar, discutir, planificar y transformar ese instituto cerrado en la dictadura.

Pero desde otros ámbitos se había continuado pensando, escribiendo y produciendo, lo que implicaba que no se empezaba de la nada. Muchos sociólogos habían partido de nuestro país sobre todo a Brasil, lo que supuso un nuevo bagaje de conocimientos.

Nos unimos en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, nuevo desafío, nuevas relaciones, nuevas miradas en un mismo asunto: consolidar la enseñanza, la investigación y la extensión con un mismo destino de resignificar el conocimiento sociológico.

Todos traíamos diversas formaciones para mirar y pensar la sociología; no obstante, logramos construir una misma carrera que cambió sus programas a medida que el pensamiento sociológico era un reflejo de un mundo cambiante.

Algunos pensábamos que para un país que volvía a la democracia se hacía necesario aportar algunas voces, ideas que podrían ser controvertidas pero que permitían recuperar una discusión que ya no solo tenía carácter nacional sino también internacional.

Me tocó la última teoría y fue nuestro objetivo introducir las producciones en la teoría social que integraba no solo a la sociología sino también a distintas disciplinas, como filosofía y antropología. Renovando

\* Doctora en Ciencias Sociales. Profesora emérita titular. Exdecana de la Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [susana.mallo@cienciassociales.edu.uy](mailto:susana.mallo@cienciassociales.edu.uy)

–o por lo menos lo intentamos–, transformando algunos de los enfoques del pensamiento social, es decir promoviendo lo contingente frente a los enfoques clásicos, para poder incorporar nuevos ejes haciendo posible articular la discusión contemporánea con la sociología clásica, esto significó integrar el bagaje teórico que se había desarrollado en las teorías y metodologías anteriores.

Desde sus inicios la disciplina sociológica ha sido escrita desde múltiples paradigmas que coexistieron y debatieron entre sí. A diferencia de otras ciencias, nunca se constituyó una única perspectiva dominante y hoy la discusión sobre temas y problemas fundacionales continúa y se complejiza, traspasando los límites de los campos y las disciplinas, tal como afirmamos.

Se abordó “la crisis” desarrollada a partir de la década de 1960, lo cual afectó a gran parte de las ciencias humanas y lo que durante la mayor parte del siglo se había constituido como una confianza radical en un “objeto sociológico”.

Hablar de crisis no en el sentido de la falta de productividad, sino todo lo contrario, en el sentido kuhniano de “proclividad a probarlo todo”, también nosotros, como pensadores de la actualidad sociológica, intentamos realizar preguntas novedosas: ¿qué tan dependiente es aún el componente más abstracto de la disciplina con respecto al contrato histórico de su nacimiento?, ¿cuál sería el nuevo papel de la sociología?, ¿cuál es su sustento epistemológico?, ¿cuáles son los nuevos componentes en las construcciones de la democracia política?, ¿es conveniente hablar de una sociedad global?

Todas estas cuestiones y temáticas se fueron incorporando también a la reflexión y práctica de la profesión del sociólogo.

En este marco, fue la función de Colegio de Sociólogos ser vistos y reconocidos en el ámbito nacional y, en épocas actuales, en el internacional. Se logró prestigiar la profesión en el conjunto de la sociedad. Esto supuso favorecer las condiciones de empleabilidad. Cinco presidentes han desarrollado distintas actividades para el logro de dichos objetivos. El Congreso que se realizó en 2019 es prueba de ello.

Distintas generaciones fueron conformando, ampliando y organizando el Colegio. Se realizaron seminarios, congresos, reuniones a las cuales se fueron integrando distintas problemáticas. También tuvo la tarea de aunar posiciones y lograr extender el ámbito sociológico planteando como tema: la acción humana, la cual conforma una discusión clásica y contemporánea enmarcada en las distintas corrientes que nos unen, pero también permite el intercambio de distintas opiniones.

A fuerza de personalizar este escrito, desde 1987 han pasado por nuestras aulas estudiantes que son hoy figuras destacadas.

El Colegio logró reunir las distintas generaciones que poseen diferentes perspectivas con un gran respecto por su formación sociológica.

La acción de muchos compañeros fue dando vida a planteos diversos, pero siempre con un espíritu de unidad y presencia de los intereses comunes y a veces no comunes.

Es así que encontramos sociólogos en los más diversos trabajos logrando dejar de ser una disciplina marginal para transformarse en una necesidad para la institución que valore y precie los procesos de cambio y modernización.

Al dejar este año la docencia luego de casi cuarenta años quiero agradecer a los jóvenes estudiantes de muy distintas generaciones que han formado este Colegio, lo que ha permitido un intercambio fructífero entre las distintas organizaciones.

Termino agradeciendo a estos jóvenes su trabajo, los logros y sobre todo su espíritu de seguir buscando nuevas formas de trabajos y sobre todo de ayuda social y al colegio por su producción y desempeño, por el reconocimiento por el cual han luchado tan denodadamente. Gracias.



A cuento de *Fronteras que nos unen  
y límites que nos separan*

Enrique Mazzei\*

La invitación del Colegio de Sociólogos del Uruguay a participar en la presente publicación constituye una excelente oportunidad para actualizar la imagen del capital académico de la sociología nacional a través de aporte de sus sociólogos de más larga trayectoria en las funciones de la disciplina y asimismo es un amable reencuentro con ese colectivo académico uruguayo.

La solicitud de los coordinadores de la publicación consistió en presentar un trabajo ya realizado que a consideración de su autor sea representativo de su producción en investigación sociológica.

En mi caso, como responsable del Polo de Desarrollo Universitario (PDU) Centro de Estudios de la Frontera (CEF) he seleccionado pasajes de la publicación *Fronteras que nos unen y límites que nos separan*, de mi autoría.<sup>1</sup>

Esa publicación fue producto de un trabajo de investigación que aspiró a generar nuevos conocimientos sobre las sociedades fronterizas urbanas uruguayas vecinas a Brasil, como lo son Rivera-Livramento y Río Branco-Yaguarón.

El abordaje de esa realidad partió del supuesto de la complejidad institucional de esas áreas binacionales. Esa mirada apostó a su valor heurístico adecuadamente comprensivo de relaciones sociales que transcurren en los bordes de las soberanías nacionales de ambos países, con amplia significación en sus intercambios económicos, sociales, culturales y políticos.

A su vez, ese supuesto se sostuvo en dos visiones de distinto carác-

\* Sociólogo, ICS-Udelar. Director del Centro de Estudios de la Frontera, CCI-Udelar. Director de la Casa de la Universidad de Cerro Largo (Cucel-Udelar). *enrique.mazzei@gmail.com*

1. Enrique Mazzei, *Fronteras que nos unen y límites que nos separan*, Melo, Udelar, 2013.

ter: una de carácter teórico y otra desde mi subjetividad personal como oriundo de la referida región de frontera.

A nivel teórico general, el abordaje del tema incorpora los efectos de las transformaciones sociales en un contexto de acelerada crisis civilizatoria asociada a un nuevo estilo de capitalismo mundial.

En ese nuevo (des)orden las nuevas inversiones, la reconversión productiva, la expansión del individualismo del consumo, el debilitamiento de los Estados y los avances de las tecnologías de la comunicación condicionan la construcción social de los territorios, lo que, para el caso uruguayo, ressignifica el avance de su proceso de modernización.

Las áreas fronterizas entre países, afectadas por estas transformaciones mundiales, renuevan los interrogantes acerca de sus capacidades para optimizar la integración social entre ellas, que siendo vecinas están separadas por la institucionalidad que resguarda la soberanía de sus respectivos Estados nacionales.

Se trata de formas específicas de la construcción social de territorios binacionales condicionadas por las contradicciones entre lo social y lo jurídico en cuanto un “estigma” que determina los vínculos sociales fronterizos.

A nivel de mi experiencia personal, el tratamiento del tema fronterizo refiere a un mundo de subjetividades vividas desde la infancia en las cuales “el Brasil” era un mundo de magnitudes misteriosas, asociadas a la alegría de su carnaval y las excursiones familiares de compras a los comercios brasileños de Yaguarón. Era, asimismo, imaginarse “el Brasil adentro” como refugio desconocido de las súbitas ausencias de infractores que escapaban a su enjuiciamiento penal. Para nosotros los niños esos lugares eran de los ticholos, la rapadura, la cocoa y el *pé de muleque*, y para las madres y las tías, las telas y conservas.

Aquellas imágenes eran de un gran almacén con mercadería barata invadido por el olor de los barriles de camarón seco, del cual salíamos cargados de paquetes y temerosos al retorno de la revisión aduanera en los pasos de frontera.

Esas incursiones comerciales cotidianas constituían un “estilo de vida” propio de una cultura local marcada por el afán de la compra barata que arriesgaba las revisiones aduaneras.

Tales vivencias aluden a una cultura fronteriza incentivada con fuerte sentido lúdico enmarcada en el rito de que “los uruguayos compramos y los brasileños nos venden”, el cual condiciona un arraigado desconocimiento de la realidad social de los brasileños por los uruguayos y de la realidad social uruguayo por los brasileños.



Recreados esos soportes de la investigación, sus principales aportes de nuevo conocimiento sobre las sociedades fronterizas uruguayo-brasileñas revelan perfiles que pueden facilitar la lectura de esas realidades fuertemente definidas por las estructuras tradicionales que enmarcan las coyunturas económicas regionales, principalmente comerciales.

La soberanía binacional en los territorios fronterizos uruguayo-brasileños se tipifican por un principal sentido de convivencia, en cuanto al contexto institucional mayor. Dicho contexto condiciona los efectos de las desigualdades socioeconómicas fronterizas regionalmente significativas de un acentuado déficit de sus indicadores de desarrollo a nivel comparativo.

Ese acuerdo de buena vecindad transcurre en escenarios políticos de diversa orientación a nivel nacional, regional y local, lo que constituye un damero político-partidario que incide en los avances y retrocesos del desarrollo fronterizo.

Sin embargo, esa diversidad en las ideologías del desarrollo indirectamente legitima el juego de la formalidad-informalidad institucional en el cual se reitera por razones de urgencias, la informalidad de acciones institucionales de la misma administración pública en materia de colaboración fronteriza principalmente en temas de salud y seguridad. En efecto, las relaciones entre la institucionalidad estatal binacional asimismo se enmarcan en el juego entre lo jurídico y lo social.



## La diversidad de roles de los sociólogos: ¿fortaleza o debilidad profesional?

*Diego Moles\**

Es un gusto poder compartir estas líneas de reflexión sobre los desafíos de la profesión del sociólogo en estos tiempos tan dinámicos para Uruguay, para Latinoamérica, para todos nosotros desde dentro de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) o desde afuera, en la multiplicidad de ámbitos en que los sociólogos se han hecho un espacio y han desarrollado su profesión, su medio de vida y construido sus realizaciones personales.

Hoy, en 2020, estamos muy lejos de aquel desconocimiento que existía treinta o cuarenta años atrás sobre lo que hace un sociólogo, y la siempre recurrente pregunta de padres, amigos, etc.: “¿De qué vas a vivir?”. Felizmente, mucho se ha popularizado la función del sociólogo, son numerosos los que la han prestigiado, con valiosas contribuciones a la investigación, al desarrollo del conocimiento y a su divulgación. Sin duda la difusión es de las esferas de actividad del sociólogo de más amplia repercusión pública y de construcción de reconocimiento y prestigio profesional en la sociedad.

No obstante, hoy permanecen algunos prejuicios, si efectivamente es una ciencia en serio, o si la FCS tan solo es una escuela de chamuyo y viru viru, entre otras posibles simplificaciones.

Es un gusto doble en lo personal escribir en clave biográfica, por tener un largo recorrido junto a la sociología, desde el proceso de reconstrucción de la carrera en 1983, en el marco de las incipientes organizaciones legales como la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública (ASCEEP), objetivo que logramos con la reinstalación de la carrera de Sociología en la Facultad de Derecho en 1984, previamente a la caída de la intervención de la Udelar y la propia dictadura.

Ese largo período, en el que hay mojones más que relevantes como es la creación de la Facultad de Ciencias Sociales en 1992, entre otras

\* Gerente comercial de República AFAP SA. Expresidente del Colegio de Sociólogos 2015-2017. Exsecretario del Colegio de Sociólogos 2013-2015. [dmoles@rafap.com.uy](mailto:dmoles@rafap.com.uy)

vivencias de toda la comunidad sociológica (en lo personal, terminar la licenciatura en 1995), nos vuelve a reunir hace unos siete años en otro proceso de reconstrucción: la nueva puesta en marcha del Colegio de Sociólogos. Ahí nos juntamos unos sesenta egresados de Sociología, tanto docentes de la FCS como de la Universidad Católica, con actividad en ámbitos públicos y privados, con la idea de recrear este espacio de encuentro de los sociólogos independientemente de donde se desempeñan profesionalmente o laboralmente. Ese grupo evolucionó hasta tener un máximo de cien asociados.

Cada vez más los sociólogos somos profesionales más interdisciplinarios, transversales, con todas las ciencias sociales con las cuales compartimos espacio físico, teorías, metodologías, etc., también con otras áreas como la economía, o aparentemente más lejanas como la arquitectura o la medicina, para destacar algunas. Y en esos espacios multidisciplinarios, de solapamientos diversos de campos de acción de las profesiones, tenemos que trabajar en identificar la relevancia y singularidad del aporte del sociólogo y reconstruir permanentemente su identidad.

La pregunta repetida “¿qué hace un sociólogo?” observada por las prácticas laborales ha tenido un fuerte impulso en los últimos años, en un contexto donde abunda la diversificación y especialización de los perfiles profesionales de los sociólogos en diversas áreas. La variedad de estas inserciones nos lleva a rediscutir aquello que los sociólogos hacen para ganarse la vida, redefinición que en los hechos pone en tensión los fundamentos o las formas de clasificar y jerarquizar las opciones profesionales que tradicionalmente fueron barreras infranqueables.

Por eso las definiciones de las posibles inserciones laborales de los sociólogos que han sido, desde la creación misma de la disciplina, una tarea difícil marcada por agudas controversias y debates en lo interno de la disciplina, tienen que ser expresadas lo más abiertamente posible y con destaque de los atractivos intelectuales, académicos o de trascendencia política social y laboral hoy, cuando tenemos un proceso de fuerte diversificación y especialización de sus perfiles profesionales. Si bien la vida académica se mantiene como un espacio laboral central, instituciones como el Estado, las empresas, las consultoras de análisis de mercado y estudios de opinión, las ONG, entre otras, constituyen espacios naturales de inserción, por lo que hay que reflejar esa diversidad desde la currícula de grado y también de la de posgrado.

El mundo del trabajo se complejizó y ofreció nuevas oportunidades. No obstante, la lista anterior no es taxativa; deben sumarse ámbitos como los de gestión de organizaciones y proyectos, donde los sociólogos tie-

nen capacidades y habilidades distintivas, y hacerlo, por lo tanto, desde la orientación y confección de las políticas públicas hasta el manejo de las estrategias de comunicación publicitaria de grandes empresas multinacionales, pasando por la participación y el asesoramiento en diversos movimientos sociales. En todos los roles los sociólogos han mostrado versatilidad, capacidad de adaptación, iniciativa y resolución en los diversos campos de intervención, por lo que sin timideces deben formar parte del menú de su oferta profesional.

Por eso es que entiendo que tenemos que rediscutir el relato fundacional sobre los límites legítimos de la disciplina. No es posible pararse en el viejo esquema de lo que un sociólogo podía hacer y aquello que le estaba prohibido. Hay que relanzar el rol trascendente de la profesión, reconstruir el relato y la misión, con esta mirada desde el contexto actual, signado por la expansión y diferenciación de las prácticas profesionales de los sociólogos, que no tienen una frontera preestablecida.

Quizá fuimos muy marcados por toda la escuela clásica, desde los autores más influyentes, incluso contemporáneos, que han tenido una marcada coincidencia en torno a una definición de la disciplina que rechaza la labor de los sociólogos en los escenarios no académicos.

Por eso es la academia la principal responsable de seguir construyendo para la reversión de esos conceptos, que son desalentadores para los estudiantes, alejan a los profesionales no académicos de la facultad y se apartan de la realidad laboral de los sociólogos. La academia es la que debe redefinir ese aspecto y reencantar a quienes se acercan a estudiar sociología mostrando la amplitud de opciones como fortaleza de la disciplina y la mejor proyección de desarrollo personal con aplicación de los diferentes roles trascendentes a los que aspiren los estudiantes y/o los egresados.

Según la visión de un autor como Michael Burawoy, entre las diversas sociologías debe haber la mayor interdependencia posible pues cada una de ellas obtiene –y podría obtener– “energía, significado e imaginación gracias a su interrelación” con las otras.

El Departamento de Sociología es un actor fundamental, es el que combina la práctica de la investigación con la docencia y el que construye el relato principal, el que va a propiciar los nuevos fundamentos de la profesión que le quiten los complejos fundacionales y hagan que estudiantes y egresados se sigan enamorando de la profesión.

Simplificando operativamente, daremos dos ejemplos de contribución: 1) viabilizar que los egresados alejados de la FCS encuentren que la formación permanente los tiene en cuenta por variedad de temáticas, horarios

y su utilidad práctica, y 2) las becas no solamente son instrumentos del desarrollo de los cuadros académicos, sino que también tienen en cuenta a todos los egresados con esa realidad multifacética de práctica profesional. Es decir, la academia sale a su encuentro y le revalida herramientas o le proporciona nuevas para que siga su desarrollo profesional.

El Colegio de Sociólogos es un puente útil para estos procesos, tiene un accionar en esa dirección que parte de sus definiciones constitutivas, por ejemplo, en su visión y misión cuenta con definiciones muy claras para colaborar con ese camino (está en su página web). Vamos a destacar algunas: el Colegio tiene la visión de ser la organización que aglutina a todos los sociólogos más allá de los diferentes ámbitos donde desarrollan su profesión. Respecto de la misión, destacamos que es una herramienta dinamizadora de la profesión, facilitadora del vínculo/articulador e integrador entre la academia, la empresa, los profesionales y el sistema político, que procura constituirse en el gran ámbito de encuentro y relacionamiento de todas las vertientes de profesionales de la sociología, así como promueve la mejora de los reconocimientos profesionales y las condiciones de empleabilidad.

Desde 2013 he integrado las sucesivas directivas, ocupando los roles de secretario, presidente y directivo, lo que me ha permitido observar desde mi microcosmos algunas fases de intersección de ciertos ejemplos de experiencias e intereses diversos de los sociólogos. Por ejemplo, podemos decir que el Colegio necesita del Departamento para existir, pero si el Departamento es dominante asfixia las posibilidades de incorporar distintos colectivos de sociólogos. Si la academia no tiene una acción militante para acercar e incorporar a los egresados de afuera, el ámbito común del Colegio se debilita.

Estas observaciones de los mundos diversos de los sociólogos las encontramos en muchos trabajos de investigación y en diversas publicaciones que han expuesto estas realidades de maneras sistemáticas y con fundamentos teóricos y metodológicos. El acceso a estos materiales me ha facilitado conceptualizar alguna reflexión en este artículo.

Por eso aprovecho la oportunidad para invitar a todos a acercarse al Colegio, adoptarlo para que nos sea útil a todos, con la variedad de intereses integrados, sin prevalencia, pero sabiendo administrar las asimetrías existentes sea en las posibilidades diferentes de tiempos, obligaciones, responsabilidades y áreas de actividad.

Y siempre es bueno tener un lugar para encontrarse con los pares, recordar, planificar, intercambiar, discutir, acordar, reconocer, homenajear, y también comerse un buen asado y tener momentos de diversión.

## Ser socióloga y hacer sociología en Uruguay: prácticas, experiencias y reflexiones

*Cecilia Pereda\**

A mediados de 2018 quienes integramos la comisión directiva 2017-2019 del Colegio de Sociólogos del Uruguay recibimos de parte de su presidente, Miguel Serna, la invitación a publicar en la página del Colegio de la red social Facebook un breve texto acerca de nuestra experiencia como sociólogos. “La sociología en primera persona” se tituló ese espacio en que varios de nosotros compartimos, desde diferentes ángulos y con variados estilos comunicativos, anécdotas y reflexiones surgidas en nuestra experiencia como sociólogos. Fue una invitación que no nos sorprendió en el marco de los lineamientos en los que venía trabajando el Colegio, orientados a reconocer y dar lugar a las diferentes formas de hacer sociología y de ser sociólogos que se vienen desarrollando en el país. En este marco esa comisión directiva realizó también la “Encuesta sobre situación profesional y expectativas de los sociólogos en Uruguay”<sup>1</sup> y el IV Congreso Uruguayo de Sociología, que se tituló “El oficio del sociólogo/a en tiempos de cambio”. Este invitaba, tal como figura en la convocatoria del evento, “a la reflexión y el análisis crítico de las diversas prácticas académicas y profesionales que contribuya a la difusión, visibilidad y presencia pública de la sociología en el país”<sup>2</sup>. Con ocasión de la publicación de este libro se retomó y amplió aquella invitación a compartir la experiencia de cada socióloga y sociólogo con la profesión. Ya no se trataba solamente de exponer una breve anécdota sino de integrar una sección de testimonios en primera persona que recogiera la perspectiva que se

\* Magíster en Sociología. Docente de la Facultad de Psicología, Udelar. *cpereda@psico.edu.uy*

1. Sobre esa encuesta, véase Miguel Serna, Eduardo Bottinelli y Mariana Porta, “La sociología y el oficio del sociólogo en Uruguay: prácticas y ámbitos”, en este volumen.  
2. <http://www.colegiodesociologos.org.uy/congreso-uruguayo-de-sociologia-2019.html>

tiene de la sociología desde diferentes perfiles de inserción profesional y de su aporte a la sociología en el país.

Si bien ninguna de estas invitaciones nos tomó por sorpresa, son novedosas en Uruguay, donde los sociólogos no solemos expresarnos en primera persona ni, menos aún, compartir públicamente nuestras experiencias y nuestras reflexiones sobre la sociología en el país. Muchos son los motivos para esta invisibilización de la experiencia personal. Quizá algunos tengan que ver con los abordajes metodológicos que se han priorizado en la formación. El IV Congreso develó a muchos colegas la necesidad de desarrollar abordajes de investigación con enfoque etnográfico.<sup>3</sup> A quienes nos dedicamos desde hace tiempo al trabajo con este, y con otras estrategias de investigación cualitativa que no pueden realizarse sin un alto involucramiento de quienes las llevan adelante (y por ende un profundo trabajo de reflexividad o de análisis de implicación según corresponda), nos demostró que debíamos seguir por ese camino y compartir más nuestras producciones con nuestros pares. Afortunadamente 2019 cerró con por lo menos dos publicaciones de sociólogos reconocidos en el país que recogen este tipo de trabajo de investigación<sup>4</sup> o modalidades de investigación-acción,<sup>5</sup> realizadas por diferentes equipos de sociólogos que además están relacionados en forma directa con la formación de los futuros profesionales. Por el contrario, la recuperación tanto de la experiencia personal como de la intervención profesional en la producción sociológica es común en otros países. Basta recordar las relevantes propuestas conceptuales surgidas para los estudios urbanos a partir de un trabajo de consultoría realizado por Norbert Elias y John Scotson y publicado originalmente en 1965,<sup>6</sup> o de las publicadas por Richard Sennett sobre las relaciones entre respeto y desigualdad en las políticas sociales tomando su “experiencia personal como punto de partida para

3. Me refiero al debate generado en el espacio de discusión e intercambio del panel 9 “Reflexiones sobre los programas de proximidad y el vínculo con los beneficiarios”, realizado el jueves 25 de julio de 2019 y coordinado por Verónica Filardo, Denis Merklen, Juan Pablo Labat, Valentín Magnone y Gustavo Medina.

4. Denis Merklen y Verónica Filardo, *Detrás de la línea de pobreza: la vida en los barrios populares de Montevideo*, Buenos Aires, Gorla-Pommaire, 2019.

5. Nilia Viscardi, Leonel Rivero y Verónica Habiaga, “Dramatización de la experiencia escolar: convivencia e investigación-acción en un liceo popular de Montevideo”, *Cuadernos del CLAEH*, segunda serie, año XXXVIII, N° 110, 2019, pp. 69-92.

6. Norbert Elias y John Scotson, *Establecidos y marginados*, Ciudad de México, FCE, 2015.



explicar un problema social más amplio”,<sup>7</sup> por nombrar solo dos de los muchos textos de este tipo que utilizo habitualmente en mis quehaceres cotidianos como socióloga.

Estas invitaciones me resultaron irrechazables por lo menos por dos razones. La primera tiene que ver con mi desarrollo como investigadora con estrategias de investigación cualitativas que toman en cuenta la experiencia en la construcción de los datos. Por tanto, poner en juego mi experiencia como socióloga no es algo que me resulte totalmente ajeno. La segunda razón, con que mi trayectoria como socióloga no ha sido únicamente la de la investigación. A casi veinte años de haberme graduado y a punto de entregar mi tesis doctoral, tomé estas invitaciones como una oportunidad de recuperar y compartir mi experiencia particular que también es común a la de otros sociólogos, en cuanto expresión de las condiciones de desarrollo de la sociología en el país por las que me tocó transitar. En este nuevo texto amplío el panorama sobre mis quehaceres como socióloga en diversas áreas temáticas y ámbitos laborales presentado con ocasión de la primera invitación y agrego algunas observaciones sobre el lugar de la sociología en estos. Cierro esta nueva presentación con algunas reflexiones sobre el aporte que mi práctica, como la de cada una de las sociólogas y los sociólogos, viene realizando a la construcción de la sociología como profesión y como disciplina científica en el país.

### **Mis prácticas sociológicas**

“Haber aprendido a pensar sociológicamente, un privilegio irrenunciable” era el título del texto originalmente publicado en la serie “La sociología en primera persona” que reproduzco a continuación:

Hace poco volví a leer “La construcción del objeto”, aquel texto de *El oficio de sociólogo* de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron publicado en 1973 que todos leímos alguna vez. Aquel que retomaba a Ferdinand de Saussure y que comenzaba así: “El punto de vista crea el objeto”. Es que trabajando, como lo hago ahora, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (a la que cariñosamente llamo “la casa de los primos”), de vez en cuando se me hace necesario explicar a estudiantes y docentes qué es pensar sociológicamente.

7. Richard Sennett, *El respeto: sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad*, Barcelona, Anagrama, 2003, p. 4.

En esas ocasiones no se trata, aunque a veces también lo tengo que hacer, de distinguir entre sociología y estadística. Tampoco de reclamar temas privativos de una u otra disciplina, ya que tal como se sostiene en aquel texto: “Una ciencia no podría definirse por un sector de lo real que le correspondería como propio”.<sup>8</sup> Cuando lo explico, me refiero más bien a mi propia experiencia como socióloga, la mía y la de tantos otros que hoy, a diferencia de cuando estudiaba, ejercemos nuestro oficio en los más diversos ámbitos. Al menos yo lo he hecho en organizaciones sociales muy distintas entre sí, oficinas públicas, organismos internacionales, universidades y un largo etcétera de escenarios, equipos de trabajo y con variedad de personas, grupos y organizaciones como interlocutores. Es que en ellos pude constatar lo que propone aquel texto: que quienes tenemos formación de grado en sociología, en la diversidad de nuestros estilos personales, opciones políticas, teóricas, epistemológicas y metodológicas e incluso, como es mi caso, en combinación con otras profesiones, tenemos algo en común. Un mismo punto de vista. Ese que crea el objeto. Un punto de vista que no reduce lo social a lo interpersonal, que no considera los contextos por fuera de los individuos y que menos aun diluye desigualdades en diversidades. Un punto de vista con capacidad de establecer relaciones conceptuales para explicar a los individuos en la sociedad y a la sociedad en los individuos, superando las sociologías espontáneas. Las de las personas con quienes trabajamos y también las nuestras. Un punto de vista que, en definitiva, no renuncia al privilegio de haber podido aprender a pensar sociológicamente.

En este texto daba cuenta de mi experiencia como socióloga en diferentes tipos de ámbitos laborales: desde universidades y centros de educación formal y no formal a organismos internacionales, oficinas estatales y organizaciones sociales. En ellos he desarrollado la enseñanza de la sociología y la investigación sociológica, así como el asesoramiento a través de la consultoría y la intervención social. Lo he hecho en ámbitos laborales fuertemente regularizados, en que mi trabajo estaba sujeto a jerarquías, horarios y protocolos, así como por fuera de la relación de dependencia, en lo que suele llamarse el ejercicio libre de la profesión. He desarrollado investigaciones cuyos objetos de trabajo y tiempos de realización estaban preestablecidos y también gozado de la libertad

8. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, *El oficio de sociólogo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 51.

de investigar en el marco académico, como estudiante de grado y posgrado y como docente universitaria. Lo he hecho en diferentes áreas temáticas en forma ocasional y en forma permanente en la educación aunque, como es casi imprescindible, en su combinación con otras temáticas con las que esta se relaciona y es necesario entrar en diálogo para su comprensión, como son las cuestiones urbanas, la participación social y las desigualdades sociales. Lo mismo sucede con el diálogo interdisciplinar. Una construcción que me ha acompañado como desafío personal primero, al ser también trabajadora social, y en segundo lugar porque casi no he trabajado en exclusividad con sociólogos sino con maestros, profesores, recreadores, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, comunicadores, contadores, abogados, arquitectos, agrimensores, economistas y un largo etcétera de profesionales con los que he compartido equipos, intercambios y discusiones de lo más variadas. Con sociólogas y sociólogos, por el contrario, he compartido únicamente tareas de investigación y también de enseñanza de la investigación y sociología de la educación, mayoritariamente en la Universidad de la República, y tareas de planificación, construcción de información y evaluación, así como actividades de intervención sobre convivencia, integración y participación social, en diferentes organismos del Estado.

Muchos son los motivos que me han llevado a esta diversidad de temáticas y de ámbitos laborales. Algunos son razones personales que no voy a develar aquí. Otros posiblemente se deban al momento en que cursé mis estudios de grado (fuertemente entre 1996 y 2000) que comencé en 1992, cuando me inscribí conjuntamente a la Licenciatura en Sociología y a la Licenciatura de Trabajo Social que ese año inauguramos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Lo mismo sucede con el momento histórico en que comencé a desarrollar mis primeras experiencias laborales como socióloga, a partir de 1997, como ayudante en varios proyectos de investigación (bajo contratos puntuales con la ANEP) a las que se fueron sumando experiencias en diversas facultades de la Universidad de la República, el Sector Educación de la Unesco Montevideo y en algunas organizaciones sociales o colaborando con otros docentes e investigadores que desarrollaban diverso tipo de investigaciones en forma particular. Se sumaron también experiencias investigativas en la evaluación de proyectos de intervención, que surgían casi naturalmente como corolario de las tareas que desarrollaba como trabajadora social en el marco de contratos con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Intendencia de Montevideo y diversas organizaciones sociales, y que desarrollaba en forma simultánea a mi formación en la

Maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Trabajé también entre 2005 y 2009 en la conjunción de ambas profesiones en el diseño, la intervención y la sistematización de programas de promoción de la participación social en las políticas sociales en el recientemente creado Ministerio de Desarrollo Social; en variadas tareas como integrante de equipos de asesoramiento e intervención con docentes, educadores y operadores sociales para diversas organizaciones sociales (principalmente desde la Asociación Cristiana de Jóvenes entre 2004 y 2014) y también en forma puntual desde otras organizaciones sociales y universidades. Fui docente de aula en varias universidades e institutos universitarios privados del país (la UCU, el CLAEH y el IUPA). Desde 2012 realizo las funciones integrales de enseñanza, investigación y extensión, propias de todo docente de la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, tareas que desempeñé en forma exclusiva bajo el régimen de dedicación total entre 2016 y 2018. Desde fines de ese año comparto estas tareas con un cargo de socióloga en la Intendencia de Montevideo, no ya en el ámbito de la educación sino en el de las políticas de vivienda. Esta última combinación temática me ha permitido un mejor entendimiento de ambas áreas, además de poder balancear mejor las bondades y las miserias de las diferentes formas de ejercer el oficio de sociólogo, incluidas las de la organización actual del trabajo académico a nivel mundial. Finalmente, si bien este vínculo implica una fuerte dedicación laboral en Montevideo, he realizado investigaciones, así como trabajos de intervención, asesoramiento y enseñanza también en otros departamentos del país.

Ahora bien, ¿cuáles pueden haber sido los aportes de la sociología en estas prácticas profesionales tan diversas? A responder esta pregunta dedico el siguiente apartado.

### **La sociología en mis prácticas como profesional científica y como científica profesional**

Muchas de estas oportunidades laborales podrían haber sido desempeñadas por personas con diverso tipo de formación en la educación, el trabajo social, la economía, la antropología, la ciencia política, las ciencias sociales en general. Sin embargo, en mi experiencia inevitablemente las he desarrollado como socióloga. Tal como compartía en el texto original, una vez que se ha aprendido a pensar sociológicamente, ello es un

privilegio irrenunciable; una perspectiva específica que compartimos todos los sociólogos, cualquiera sea nuestra especialidad, la del campo de trabajo, los estilos personales y las opciones políticas para realizarla. Una perspectiva que crea el objeto, sea este de investigación, de intervención, de asesoría o de enseñanza, como un objeto social que trasciende lo interpersonal pero no se sitúa por fuera de los individuos. Un punto de vista científico dedicado a dar respuesta a la pregunta epistemológica sobre cómo es posible la sociedad, explicando a los individuos en la sociedad y a la sociedad en los individuos.

En mis prácticas profesionales esta perspectiva ha estado presente y ha sido reconocida como un aporte específico en diversos planos. El primero que salta a la vista es el plano conceptual o el de la interpretación sociológica, que responde a necesidades de comprensión y explicación de lo social. Este plano se pone en juego como capacidad de análisis tanto en el ejercicio de la asesoría y la intervención como con la investigación. Un segundo plano es el del despliegue de estrategias de trabajo con diverso tipo de actores, reconociendo sus temporalidades y construcciones culturales específicas cuyo conocimiento también deriva de la formación sociológica. Un tercer plano es el de la experticia en la investigación social. En mi experiencia, la enseñanza y el asesoramiento en estrategias de investigación cualitativas también me han sido demandados como socióloga, sobre todo en el acompañamiento a otros profesionales (especialmente psicólogos, educadores sociales, maestros y profesores), tarea que se anuda con el trabajo de promoción de sus propias publicaciones.

No se trata aquí de defender una pretendida utilidad instrumental de la sociología en su aporte a la sociedad. Por el contrario, y tal como ha señalado François Dubet en una publicación publicada originalmente en 2011, el valor de la sociología para la sociedad es independiente de sus efectos sociales. Esta es útil tanto cuando es crítica, como cuando aconseja, cuando crea conocimientos puros y cuando demuestra pericia práctica, así como cuando participa del debate público, porque las sociedades serían peores si la sociología no les devolviera una imagen, por lo general poco complaciente, de sí mismas.<sup>9</sup>

Si las prácticas de los sociólogos, sean de investigación, de asesoría o de intervención, están orientadas a dar respuesta a la pregunta epistemológica sobre cómo es posible la sociedad (y la metodológica sobre cómo es posible investigarla), también con estas prácticas vamos construyendo

9. François Dubet, *¿Para qué sirve realmente un sociólogo?*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, p. 20.

respuestas a la pregunta sobre cómo se ejerce la sociología en el país. A continuación comparto algunas consideraciones al respecto, tomando como punto de partida mi experiencia como socióloga en Uruguay.

### **Mi experiencia de hacer sociología en Uruguay**

Como todo científico sabe, y más aún los sociólogos, el aporte de las prácticas de cada uno de nosotros al desarrollo de la sociología en el país no se desprende en forma directa de estas ni se puede interpretar a la ligera. Por este motivo, comparto aquí solo algunas reflexiones que organizo en tres líneas de posible contribución.

La primera de estas líneas con las que puedo haber contribuido al desarrollo de la sociología en Uruguay es, como lo hacemos todos los sociólogos que nos dedicamos a la construcción de conocimiento científico, a través de la investigación en temáticas específicas, en mi experiencia en aquellas relacionadas a la educación en su conjunción con otros campos temáticos.

La segunda línea de posible contribución se ubica en la participación en equipos interdisciplinarios en que mostrar una perspectiva y un quehacer diferenciado del trabajo social y de otras profesiones de las ciencias sociales. Ello ha sido un desafío como rol a construir día a día, aun cuando la perspectiva sociológica es valorada en su especificidad y aun cuando el cargo de sociólogo existe como tal, como sucede en muchas organizaciones del Estado en la actualidad.

En tercer lugar, esta perspectiva implica que, aun cuando se trabaje en un tema específico, el punto de vista sociológico supone trascenderlo para situarlo en lo social, en procesos de mayor alcance que las situaciones que se están observando en el momento de investigar, intervenir o asesorar. Por esto, la sociología no se define por su trabajo en temas que le son privativos. Su aporte específico está justamente en poder situarlos en un objeto mayor, lo social. Construir y analizar este objeto ha sido también otra línea de contribución que todas las sociólogas y los sociólogos que trabajemos en organizaciones sociales, en empresas, en los medios de comunicación, en la Universidad, en los organismos del Estado o en cualquier otro ámbito hemos ido consolidando desde nuestras prácticas cotidianas.

La historia del desarrollo de la sociología en el país y cómo esta se engarza con las trayectorias que cada socióloga y sociólogo hemos realizado aún no está escrita ni puede ser analizada a la ligera. De todos

modos, las circunstancias políticas, sociales, culturales y económicas que hacen a las agendas temáticas, los actores sociales que participan en estas, los tipos de contrato y las oportunidades laborales disponibles no han estado ausentes en mi experiencia que, como he compartido aquí, ha sido tan diversa como situada en estas. La historia de la sociología en Uruguay tendrá que escribirse sobre la base de las publicaciones y los logros académicos, pero también recuperando la memoria de todos quienes la hemos ejercido en diferentes ámbitos, así como recuperando los problemas que han requerido de la perspectiva sociológica para su resolución, sea esta la necesidad de nuevo conocimiento, el desarrollo de acciones de intervención, la asesoría y tantos otros quehaceres que las sociólogas y los sociólogos hemos ido y seguimos construyendo.





## Sociología de la cultura: travesía de una pasión

*Rosario Radakovich\**

La cultura fue y es mi pasión. La sociología, mi profesión. Fue participando de un grupo de teatro independiente en mi adolescencia y de una película como “extra” en mi juventud que supe que esos escenarios –de la cultura y el audiovisual– serían los míos. Pero ante la clásica y repetitiva pregunta a la que me vi sometida al finalizar la educación secundaria: “¿Se puede vivir del arte?”, opté por un “futuro mejor”, claro está, uno anclado en la sociología; con la salvedad de cumplir una condición que me autoimpuse: trabajar por y para el arte y la cultura desde la sociología.

Así es que comencé la Licenciatura en Sociología con un objetivo trazado que me impulsó a esta travesía. Una primera aproximación al área la tuve en la carrera de Sociología –generación 93– con Rafael Bayce, a quien agradezco reforzar aquella pasión por la cultura que ya tenía en mí. El taller de sociología política que cursé en los últimos años de la carrera me dio herramientas para pensar la cultura desde la política, también, en un encuentro que marcó mi vida entre la política y la cultura. Un tiempo después me encontré dando silueta a una tesis en políticas culturales bajo la tutoría de Felipe Arocena.

Camino complejo si lo hay el de la sociología de la cultura en Uruguay. Investigar la cultura tiende a ser uno de los más interesantes y dinámicos espacios sociales, donde se debe agudizar el oficio sociológico para dar cuenta de aquello que nos identifica y nos integra socialmente y aquello que nos distancia y distingue. Las “barreras simbólicas” son quizá uno de los desafíos más grandes a la hora de decodificar, especialmente en un país que se autoimagina hiperintegrado e hiperintegrador.

Tal como la concebí, la perspectiva del gusto cultural y artístico de los capitales culturales y las prácticas y producciones culturales se ofrecía ante mí como un mundo tan diverso como desconocido. También aquel

\* Doctora en Sociología. Profesora adjunta, Facultad de Información y Comunicación, Udelar. [rosario.radakovich@fic.edu.uy](mailto:rosario.radakovich@fic.edu.uy)

de la producción cultural y artística, el financiamiento de la cultura y la gestión cultural –muchos años antes de la institucionalización de estas especializaciones profesionales–.

La falta de antecedentes de investigación sociológica sobre la cultura y el arte fue tan desconcertante como desafiante. La conformación de un campo de estudios en consumos culturales, estudios de gustos, prácticas, rituales, comportamientos e imaginarios en torno al arte y la cultura, así como, aún más recientemente, en torno al audiovisual y la cultura digital desde la sociología, se ha venido definiendo en los últimos veinte años en Uruguay. A ese proceso asistí y creo haber contribuido con él.

Estudios como los de Néstor García Canclini y Jesús Martín-Barbero son paradigmáticos para reflexionar sobre cultura y comunicación desde el punto de vista social en América Latina. Con ellos la relación entre igualdad y desigualdad en el plano cultural y comunicacional se ve atravesada por relaciones de poder, jerarquización, estigmatización y diferenciación social.

No obstante, en otros contextos como el francés y el británico, las tradiciones de la sociología de la cultura y también de la sociología audiovisual o sociología de los medios han servido como referencia para la academia latinoamericana y constituyeron pilares sobre los cuales poder sostener la relevancia de tales intereses de investigación y docencia sin quedar fuera del *mainstream* sociológico, que ciertamente parecía y parece poco centrado en este campo de investigación.

Los estudios de Pierre Bourdieu sin duda marcan una línea de trabajo y ofrecen un marco teórico potente con capacidad de explicación y vigencia, especialmente en nuestro contexto de sociedades desiguales, donde la estratificación de la cultura y la estigmatización de las prácticas culturales en la cultura popular siguen siendo parte de la cotidianeidad. Categorías como poder y cultura, hábitos y estilos de vida, capitales culturales y campos y circuitos culturales se insertaron en la academia latinoamericana y han influenciado sustantivamente mi trabajo.

Pero también los estudios culturales británicos de la Escuela de Birmingham y su Center of Contemporary Cultural Studies –Richard Hoggart, Stuart Hall– aportan una mirada complementaria a la economía política de la comunicación, que permite explorar la complejidad de la cultura de masas y las industrias culturales, y sobre todo la experiencia y el uso social de los medios desde la perspectiva de la recepción.

Desde estos puntos de vista, los estudios de la comunicación se aproximaron progresivamente a los estudios de la cultura. Y con la convergencia digital, cultura y comunicación han logrado por lejos confluir

en el estudio de públicos, audiencias, usuarios digitales, lo que cada vez más es una piedra angular de nuestra vida; por tanto, estos han logrado ser centrales para entender, criticar y proponer transformaciones de la realidad social que nos ocupan como sociólogos.

Pensando en el largo plazo, investigar la cultura y en particular el consumo cultural desde los años 90 en Uruguay supuso incorporar los medios y las industrias culturales al análisis, sobre todo los estudios sobre la televisión, principal referente y creciente práctica de consumo cultural doméstico. De hecho, para 1991 ya hacía una década que se había instalado la televisión color en el living de los hogares uruguayos. En este contexto de profundos cambios en el área de los medios masivos de comunicación y su impacto en las prácticas cotidianas de uso del tiempo libre y consumo cultural, era bienvenida la investigación en los gustos y las prácticas culturales de los uruguayos.

A nivel personal, diez años de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística dejó en mí un persistente interés porque existieran estadísticas culturales –bajo la impronta de aquella frase “todo por hacer” que arrebató el espíritu de todo sociólogo–. Tanto las prácticas individuales como la producción cultural eran una incógnita tanto para la institución como para el país. Al fin buena parte de esta ausencia de datos se cubre con el trabajo emprendido en el Observatorio Universitario en Políticas Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar) coordinado por Hugo Achugar, que siguió luego aportando datos a lo largo de estos casi veinte años.

Un hito en la concreción de datos para la cultura fue la Primera Encuesta Nacional de Imaginarios y Consumos Culturales de los Uruguayos realizada en 2002. La encuesta tuvo una particularidad en cuanto a la fortaleza metodológica ya que abarcó 3.600 casos a nivel nacional, lo que le permitió otorgar información estadística representativa de cada uno de los diecinueve departamentos administrativos de Uruguay. Ello posibilitó caracterizar cada departamento del país en cuanto a prácticas, gustos y comportamientos culturales de sus habitantes. Adicionalmente, se realizó un estudio focal en localidades cuasi rurales, de forma de poder identificar las particularidades del consumo cultural en zonas de baja densidad poblacional.

Entre los resultados de la encuesta se señaló que el país tenía un consumo heterogéneo, diverso y fundamentalmente local.<sup>1</sup> Además, la

1. Hugo Achugar, *Imaginarios y consumo cultural: primer informe sobre consumo y comportamiento cultural*, Montevideo, Udelar-FHUCE-CEIL-Trilce, 2002.

autopercepción de los uruguayos reveló una sociedad fragmentada y ya no tan integrada como se pensaba tradicionalmente. Ello dio lugar a repensar el análisis de Uruguay desde el plano cultural y pasar a contrastar los imaginarios previos de un país culto, educado, integrado y solidario en el plano de la cultura y el arte con otro plano que sugería, a partir de los datos, otros procesos menos auspiciosos –en particular en medio de la crisis socioeconómica del período–. Así la encuesta permitió por primera vez la posibilidad de perfilar los gustos y las prácticas culturales de los uruguayos por departamento del país, sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, etc. Por tal razón fue un hito para los estudios culturales y para la sociología de la cultura en Uruguay.

Ese trabajo logró derribar mitos, sobre todo aquel que decía que la cultura y el arte no podía ser analizados a partir de encuestas y datos. La dificultad de legitimación de las encuestas de gustos, prácticas, comportamientos de consumos culturales en Uruguay fue real y persistente. No obstante, lograr la “foto” cultural y el mapa de las prácticas artísticas a nivel nacional permitió otorgar herramientas para la investigación en cultura, así como para los gestores en políticas culturales.

Con el ánimo de ahondar en los fenómenos culturales que se advertían con las encuestas de consumo cultural me propuse elaborar una tesis doctoral que permitiera triangular y contrastar el análisis cuantitativo con uno cualitativo de clases y gustos bajo la impronta de que no siempre en nuestro país la cultura operaba como integrador social, lo que realicé en la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) en Brasil, bajo la orientación de Renato Ortiz. La percepción que los brasileños tienen de Uruguay como país “aconflictivo” e “integrado” fue un gran motivador para trabajar y desmitificar tal imaginario.

En esta travesía me descubro en una suerte de trayectoria ecléctica, en la que me propuse develar los componentes de la desigualdad social a partir de los gustos y las prácticas culturales. En el devenir de estos veinte años de trabajo en el campo de investigación cultural, la amalgama de la cultura artística tradicional con la cultura audiovisual y digital en las prácticas cotidianas de todos nosotros supuso como nunca antes que lo que era trabajar en sociología de la cultura fuera también abordar la sociología de los medios y la sociología audiovisual. Actualmente el escenario digital de algoritmos, plataformas y redes sociales convoca a integrar abordajes, perspectivas y nuevas metodologías de investigación sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación para pensar lo cultural.

Así, con la agenda de la cultura como horizonte académico, en lo ins-

titucional he transitado la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interinstitucionalidad por veinte años dentro de la Universidad de la República manteniendo el espíritu sociológico a la hora de investigar. Trabajé por años en tres facultades paralelamente: Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación y en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, hoy Facultad de Información y Comunicación. No es fácil la articulación y la legitimación del oficio sociológico fuera de la cuna de la disciplina, pero doy fe de la riqueza del desmontaje del saber disciplinario y del reaprendizaje interdisciplinario tanto como de las dificultades de reconocimiento y legitimación de la sociología.

La sociología de la cultura ofrece el análisis de lo cotidiano, el tiempo libre, los gustos, las prácticas artísticas, los gustos televisivos o cinematográficos, los saberes y capitales vinculados y las prácticas y rituales consecuentes a tales preferencias, que cada vez más nos ocupan desligados de lugares y tiempos. Con ello, los conflictos entre grupos sociales se hacen visibles solo si se develan las relaciones sociales y disputas de reconocimiento y legitimación que les subyacen.

La dinámica de transformación de la cultura y la comunicación hoy hace necesario revisitar los códigos de la cultura legítima, las expresiones de la cultura popular y las condiciones de reconocimiento de la hibridez y el sincretismo cultural. Los estudios de consumo cultural en Uruguay no están exentos de esta necesaria revisión y la necesidad de una agenda de investigación cultural en la que sociólogas y sociólogos de la cultura tienen mucho por hacer. Las preguntas a hacerse son muchas, en un campo tan dinámico como en estado de construcción.

¿Cuáles son los conflictos sociales que se despliegan desde el terreno imaginado “neutro” de la cultura y el arte? ¿En qué medida los procesos de diferenciación cultural y distinción social operan sobre la significación de gustos, prácticas y comportamientos culturales para los uruguayos? ¿Qué factores condicionan las elecciones culturales y artísticas entre los uruguayos? ¿Como operan los procesos de globalización en nuestra definición de identidades de consumos culturales?

Un ejemplo paradigmático para dar cuenta de la significación social y política de los fenómenos culturales es el análisis de los gustos musicales. Mientras se piensa habitualmente en los gustos musicales como una expresión de subjetividad y como un proceso de adquisición personal e intransferible, el gusto musical es clave para la investigación de las formas de identificación social y neurálgico para identificar conflictos sociales y políticos.

Los gustos y consumos musicales confrontan los corsés de las fronte-

ras sociales estructurales y revelan varios fenómenos al mismo tiempo: conflictos intergeneracionales como los que operan en la percepción apocalíptica del rock por una parte de los adultos mayores, o la percepción del envejecimiento del tango tan diferente a la vitalidad que ofrecen las milongas bonaerenses, la relevancia del sistema educativo para incorporar nuevos referentes del folclore o la música popular uruguaya, la disputa social por el significado y la legitimidad de la cumbia en sus variantes “cumbia plancha” y “cumbia cheta” para ser consignas de identificación nacional.

Ciertamente, los gustos de los uruguayos revelan cierta heterogeneidad y consecuentemente un cierto eclecticismo a partir del gusto por el folclore, la constelación de ritmos de la música tropical y el amplio espectro del rock y el pop; todos ellos ejemplos paradigmáticos de preferencias tradicional-nacionales y popular-globales. No obstante, cuando se exploran los márgenes de apertura cultural hacia géneros que no son los que se consideran “propios”, los datos traducen cierto nivel de intolerancia cultural. En particular, la cumbia es la expresión más clara del disgusto musical en los últimos años. Así es como la cumbia ha sido y será probablemente un objeto de investigación sociológico singularmente clave para el campo de estudios culturales en Uruguay.

El otro extremo de la identificación de estatus cultural, el ballet y la ópera han conseguido instalarse como una experiencia cultural significativa. Fenómeno de los últimos años y conflictivos también en el terreno de las apuestas culturales públicas, de la necesidad de políticas culturales en el ámbito de la denominada “alta cultura”. ¿Ballet para todos o ballet para entendidos? ¿Es válida la espectacularización del ballet en los medios? La legitimidad de las expresiones culturales se pone en cuestión y, con ello, la necesidad de investigar a fondo los usos sociales de la cultura y el arte y los conflictos políticos que les subyacen.

Entre las paradojas/contrasentidos de la modernidad imaginada y las prácticas culturales reales de los uruguayos se destaca en primer lugar ir al cine, una actividad tan presente en el imaginario del siglo xx que contrasta con lo poco convocadora que es hoy para las grandes mayorías. El sesgo urbano y perfil educado de los espectadores confirma tanto las disparidades propias de la desigual infraestructura cultural –salas de cine– en el país como las brechas sociales y los desencuentros en los gustos y las expectativas asociados a la práctica. El carnaval ofrece una paradoja más, quizá la más novedosa del paisaje cultural actual para los uruguayos, tratándose de una expresión tan convocante y arraigada al territorio y a

la presencia física que supone la fiesta en el imaginario cultural, mientras cada vez es más un espectáculo apreciado desde la pantalla televisiva.

Las tareas de quienes se aventuran a la sociología de la cultura tienen por delante dar respuesta a estas y otras tantas preguntas. Descubro que quienes trabajamos en la sociología de la cultura agudizamos la mirada de lo social en los momentos en los que otros se relajan. No hay espectáculo al que asista al que no mire insistentemente para atrás. Ello implica que lo que para muchos es un espacio de distensión, para quienes nos dedicamos a esta área lo es de trabajo. Inevitablemente perfilar los públicos surge como si fuera parte del ADN de un sociólogo de la cultura. Quiénes son, qué perfil tienen –género, edad, nivel socioeconómico, etc.–, cómo están dispuestos en sus asientos, que emociones expresan.

El desafío de tipificar, caracterizar, perfilar, comprender y explicar los fenómenos culturales como objeto paradigmático del oficio del sociólogo se ve interpelado por procesos extremadamente dinámicos que movilizan los significados, las prácticas y los comportamientos, así como ponen en jaque el aggiornamiento de las políticas públicas de la cultura, donde el caso de las TIC es paradigmático. Pero inevitablemente la sociología conjuga en su esencia el oficio de confrontar la realidad para aportar a transformarla. Ese espíritu crítico está presente en el arte y la cultura. Esta es una feliz coincidencia por la que me dedico al área y por la que debería impulsarse este campo de estudios sociológico.





## Una breve mirada al ejercicio de la sociología a partir del Uruguay de los 70

*María del Carmen Rico Menge\**

### **Una licenciada en Sociología de la segunda cohorte**

Soy una socióloga uruguaya de las primeras épocas, egresada de la segunda generación de la licenciatura en 1974, previamente a la prolongada clausura y posterior intervención del Instituto de Ciencias Sociales en el mismo año, en pleno período dictatorial. Ello quiere decir, en buen romance, que “me recibí” hace cuarenta y cinco años. El reciente congreso sobre nuestro oficio nos ofreció un interesante marco para pensar el campo profesional de la sociología en el país, en toda su diversidad. Y constituye también una oportunidad para una puesta en perspectiva de nuestra trayectoria académica y profesional en relación con la apertura del campo, o más arrogantemente en su eventual capacidad de contribución a la formación del campo profesional de la sociología en el país, como me planteó el apreciado presidente del Colegio Miguel Serna.

Simplemente, voy a compartir cómo la profesión de socióloga fungió en mi vida, en mi derrotero profesional y en mi vocación social.

Comienzo a unir puntos y mojones desperdigados en mi memoria y en diversos espacios, y construyo una especie de autobiografía sociológica... en la que identifiqué varios componentes de compromiso vocacionales:

- 1) El primero: soy madre de siete hijas (con dos pares de mellizas), una de ellas también cientista social. ¿Por qué aporto este dato de corte familiar? Porque varios de mis colegas me señalaban siempre que debía hacer mención a esa información e incluirla en mi *curriculum vitae*, por la incidencia de mi fecunda maternidad en las posibilidades de

\* PhD. Profesora honoraria asociada. Departamento de Comunicación Social y Pública Universidad de Quebec en Montreal. [rico.carmen@uqam.ca](mailto:rico.carmen@uqam.ca)

desarrollo profesional, y en tiempos en que las nociones de techo de cristal y las reivindicaciones propias de las mujeres no eran moneda demasiado corriente. En buen romance, ocuparse de siete hijas que nos propusimos tener por una suerte de vocación social en un Uruguay despoblado no siempre habilitó el espacio y el tiempo necesarios para madurar marcos conceptuales, plasmarlos en publicaciones de largo aliento, ni realizar investigaciones de mediano alcance, al menos en ese período.

- 2) Ese contexto personal familiar define de alguna manera las primeras etapas de mi “ser socióloga” y de mi quehacer sociológico. Lejos de pensar en “el crepúsculo de la sociología”, como afirmaba José Joaquín Brunner en su famosa conferencia por el 40° aniversario de Flacso,<sup>1</sup> referido de alguna manera a la contienda sobre las posibilidades de la disciplina de explicar la realidad social o a su recomposición para integrar también perspectivas profesionales, la docencia fue la que orientó mi cotidianeidad (con mucho humor, decíamos entonces que éramos como las maestras, que tenían vacaciones en verano, y por ende, nuestras hijas contentas y mejor atendidas...). Fui así durante varios años prioritariamente una docente, una transmisora crítica que reflexionaba compartiendo las preocupaciones teóricas de los autores que más me habían marcado.

Cecilia Montero Casassús ha sintetizado claramente los primeros debates regionales en torno a la misión de la disciplina y a las distintas vocaciones del sociólogo que luchaban por legitimarse con el mismo nivel de reconocimiento: el campo científico, el rol del intelectual crítico, y en particular la profesionalización a través de una sociología aplicada, o la del sociólogo involucrado en otros oficios.<sup>2</sup>

En lo que me concierne, soy una socióloga fervientemente convencida de su formación y profesión “de base”, con un grado seguido de cursos de maestría y posteriormente la obtención de un doctorado en Ciencias de la Información. Ese itinerario, que algunos pueden considerar atípico o híbrido<sup>3</sup> por haber ejercido particularmente en el ámbito de las insti-

1. José Joaquín Brunner, “Sobre el crepúsculo de la sociología y el comienzo de otras narrativas”, *Revista de Estudios Sociales*, N° 1, 1998, pp. 115-117.

2. Cecilia Montero Casassús, “Crepúsculo o renovación de la sociología: un debate chileno”, *Revista Colombiana de Sociología*, N° 20, 2019, pp. 189-206.

3. Cf. Dany Baillargeon y Alexandre Coutant, “Trajectoires professionnelles en communication”, *Communication et Professionnalisation*, vol. 7, N° 1, 2019, pp. 1-9.

tuciones privadas durante las tres primeras décadas, recoge algunos de los planteos de la sociología pública de Michael Burawoy. A fines de la década de 1970 nos interrogábamos sobre la eventual especificidad de nuestra profesión de sociólogos, y nos creíamos básicamente metodólogos.

No obstante, saliendo de la insularidad original de la disciplina, Burawoy proponía a inicios de este siglo cuatro subcampos disciplinares: la sociología académica (la producción dirigida a los pares en función de la acumulación de conocimiento), la experta (orientada por la demanda de un cliente), la pública (en dirección de un público extrauniversitario) y la crítica (el análisis reflexivo de instrumentos y programas de investigación). Salvo un fugaz pasaje como asistente de teoría en el viejo Instituto –pasaje truncado por el cierre de la universidad–, la sociología la ejercí primero en el ámbito privado con implicancias más pedagógicas y de gestión académica en los cargos de dirección y decanato, atravesando el campo específico sociológico hacia el de la comunicación, la cooperación y las relaciones internacionales, cruzando fronteras institucionales, disciplinares y geográficas y migrando a una universidad pública extranjera.

## **Tiempos, lugares y personas<sup>4</sup> cuya impronta es notoria**

### *Tiempos*

Además de las personales ya señaladas, otras variables temporales actúan como contextuales o intervinientes habilitando distintos espacios y campos para el ejercicio profesional: me recibí en plena dictadura. Y a las sociólogas y los sociólogos de entonces se nos tildaba a todos de marxistas. Ello impactaba tanto en la actividad pasible de ser desarrollada como en el propio lugar de ejercicio profesional: el hecho de no poseer un impoluto certificado “A” otorgado por las autoridades militares de turno eliminó del horizonte profesional la posibilidad de ejercer la docencia en cualquier institución pública... por lo que las instituciones “privadas” operaron en mi caso como refugio. En ese espacio me instalé y desarrollé luego mi quehacer por casi tres décadas, hasta ser invitada luego –curiosamente, o porque ya era tiempo de integrar ambos espacios (¿?)– a una

4. Cf. María del Carmen Rico, “El lugar del autor y el lugar del seminario: diálogos entre M. de Certeau, R. Barthes y M. Foucault”, conferencia Red Internacional de Educación y Pensamiento Contemporáneo (RIEPCO), Bogotá, UPTC-Uniminuto, 2018, e/p.

universidad pública en la ciudad de Montreal (Université du Québec à Montréal), Canadá, reorientando mis intereses académicos al campo de la comunicación internacional e intercultural y las perspectivas críticas del desarrollo.

### *Tiempos y lugares*

Me refiero a estos últimos como los institucionales y los geográficos que las circunstancias permiten o que se eligen para el ejercicio académico y profesional: Escuela Agrícola Jackson, Seminario de Formación de Sacerdotes Salesianos, Escuela de Servicio Social y carrera de Comunicación del entonces Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras –hoy Universidad Católica– fueron los habitados en Uruguay hasta inicios de este siglo, hasta desplazarme real, simbólica y geográficamente, desde el ámbito académico privado uruguayo a otro campo disciplinar ejercido en una institución pública en la provincia de Quebec en Canadá.

### *Personas*

Nuestros autores fetiches, como decimos en ambientes francohablantes también, van orientando perspectivas de reflexión. Docentes que ciertamente me marcaron: César Aguiar y Carlos Filgueira (para nombrar a los que ya no están), de cuyas clases –Teoría III, Max Weber, y Metodología IV– aún conservo la libreta de apuntes, como testimonio de la vigencia de sus cátedras. O autores que solo conocí a través de lecturas extremadamente inspiradoras como Michel de Certeau que, “releído al sur y al norte, entre viajes y errancias, recorridos y trazados, me abrió a una profunda reflexión sobre el prisma de mis referencias culturales y académicas [...] a un contenido que emana de su propia práctica pedagógica: las prácticas culturales (muchas, diversas) enunciadas, descriptas y vividas en el *topos* particular de la Universidad. Hizo revisar mi formación y docencia impregnada y atravesada por la latinoamericanidad occidental, referida a un norte europeo y norteamericano”.<sup>5</sup>

Esos tiempos, lugares y personas intersecan también con los *vectores*<sup>6</sup>

5. María del Carmen Rico (coord.), *Relecturas de Michel de Certeau*, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2006.

6. Cf. Dany Baillargeon y Alexandre Coutant, “Trajectoires professionnelles...”.

que inciden en las trayectorias profesionales: entre otros, vectores de orden deontológico, ético, político o sociotécnico.

La docencia, la investigación y la extensión (en ciertos ámbitos, compromiso social) se complementan simultáneamente con actividades que emanan del oficio de socióloga; encuestadora calificada, experiencias de investigación en sociología de salud (que retomaría treinta años más tarde desde la comunicación, y desde una perspectiva internacional), una columna en radio durante varios años, consultorías en organismos internacionales, evaluaciones académicas o institucionales, cooperación internacional a partir de la dirección de relaciones internacionales de la Universidad Católica.

Quisiera recordar que luego del cargo de asistente en la Udelar e impedida de continuar allí, recalé como profesora en la escuela agrícola Jackson, donde impartí sociología rural, y posteriormente sociología de la religión a los seminaristas salesianos, pensamiento social cristiano y ética en la Escuela de Servicio Social del entonces Instituto de Filosofía Ciencia y Letras, y finalmente opinión pública.

Volviendo a mis referentes: para poder armar un curso con un contenido medianamente coherente, hube de acudir a César Aguiar, que para todo tenía una sugerencia y abundantes referencias bibliográficas...

Todo ese recorrido dispar desde el punto de vista disciplinar, además de osado, da cuenta de cómo las posibilidades laborales en épocas de ausencia de libertad en las instituciones públicas, así como de escasez de sociólogos, contribuyen al diseño de las cartografías disciplinares posibles y de las orientaciones laborales.

En un atajo o bifurcación del recorrido, aparece la sociología de la comunicación que atraviesa, a partir de los cursos de opinión pública, algunas actividades ligadas a ella pero también mi formación de posgrado: entre los oficios hoy corrientes de los sociólogos, llamados como expertos a los medios, comencé una columna en Radio Sarandí a fines de los años 80, y luego los cursos de la maestría en Comunicación. En el doctorado ya confluyeron claramente la sociología y la comunicación política: el tema de mi tesis discutió la relación agonística entre políticos y periodistas radiales en la construcción del hecho político.

La dirección de una Cátedra Unesco en comunicación, el trabajo en redes, las plataformas enunciativas internacionales y la mediación de la lengua contribuyen a alimentar el campo de la comunicación internacional, pero me condujeron a un abordaje crítico de las teorías del desarrollo. El desplazamiento entre continentes fue fundamental para reconocer otras miradas y abogar por un pluralismo epistemológico, despositivizar

y desracionalizar mi pensamiento sociológico de antaño, reivindicando también las miradas decoloniales.

Mis últimos años de actividad académica se desarrollaron en una universidad pública, extranjera, que me permitió el asentamiento de líneas de investigación, financiada y libre, y el desarrollo de un observatorio y de grupos de investigación en comunicación internacional,<sup>7</sup> intercultural y perspectivas críticas.

De la mirada racional, positivista, cientificista, de inicios de mi formación, aprendí a convivir y dialogar con el pluralismo epistemológico y los saberes otros... Me convertí quizá, a fuer de ver horizontes heteróclitos, en una socióloga más humana y comprensiva.

Para concluir este muy conciso recorrido por mi sociología, por razones de espacio, no puedo evitar traer un recuerdo de los primeros años de la licenciatura: “No basta con querer hacer ciencia. Hay que saber qué ciencia se quiere y al servicio de qué...”, algo así nos decía César cuando nos iniciaba en la sintáctica, la semántica y la pragmática de la ciencia y de la sociología... poniéndonos ejemplos de la matemática y la lógica.

Así intenté, pues, que mi ser y mi quehacer de socióloga, fuera en el aula o en otras actividades de investigación y de extensión, en Uruguay y en Canadá, tuviera que ver con una opción fundamental de una sociedad más justa y solidaria.

7. [www.obscomii.uqam.ca](http://www.obscomii.uqam.ca); [www.reqciid.uqam.ca](http://www.reqciid.uqam.ca).

CUARTA PARTE

La sociología y la defensa de la profesión  
en América Latina





## Declaración del Encuentro de Colegios y Asociaciones de Sociología en América Latina (ALAS)\*

*Consejo de Profesionales de Sociología de Argentina: Alejandro Terriles  
Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires:*

*Juan Pedro Damian*

*Asociación de Sociólogos de la República Argentina: Rosana Pesce*

*Sociedad Brasileña de Sociología: Jacob Carlos Lima*

*Sindicado de Sociólogos de Rio de Janeiro (FNS-B), Brasil:*

*Alexandre Fernandes Correa*

*Colegio de Sociólogos y Sociólogos de Chile: Maite Descouvieres*

*Federación de Profesionales de Chile: Mónica Vargas*

*Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica: Carmen Camacho*

*Federación de Profesionales de Panamá: Rebeca Yanis*

*Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresados de la*

*Universidad de Panamá: Marina Abrego*

*Colegio de Sociólogos del Perú: Eduardo Arroyo*

*Colegio de Sociólogos del Uruguay: Miguel Serna, Eduardo Bottinelli*

1. Expresan su compromiso con la promoción y defensa pública de la sociología y su oficio como ciencia de la vida, parte integral del saber científico, de su contribución al pensamiento crítico y de su compromiso con la sociedad de su tiempo.

2. Afirman la relevancia de la cooperación y solidaridad entre las asociaciones de sociología y los colegios profesionales, así como entidades académicas y gremiales en el ámbito nacional y subnacional, promovien-

\* Colegios profesionales, asociaciones académicas, federaciones, sindicatos, etc., pertenecientes a ALAS, en el IV Congreso Uruguayo de Sociología, Montevideo, 26 de julio de 2019.

do la participación y el fortalecimiento de espacios de representación y de acción regional en América Latina y el Caribe, así como su vínculo, intercambio y participación activa con asociaciones internacionales de sociología.

3. Se plantean la difusión pública de la sociología y de su profesión mediante la generación y expansión de redes de sociólogos/os por medio de las nuevas tecnologías de comunicación para la promoción pública de la profesión del sociólogo/a.

4. Procuran estimular la generación de bases de datos con registro de sociólogos/as graduados y profesionales activos en cada país.

5. Se plantean la realización y extensión de encuentros en redes y eventos para la expansión capilar, descentralización y la visibilidad del papel de los sociólogos/as a lo largo de todo el territorio de cada uno de los países de América Latina y el Caribe.

6. Promueven la defensa activa de la profesión a través de acciones, regulaciones y protecciones en los mercados de trabajo y el ejercicio académico, público, privado y liberal de la profesión en el ámbito nacional y subnacional.

7. Se plantean la defensa activa de la profesión a través de acciones, regulaciones y protecciones ante las amenazas de su desregulación y liberalización comercial, en contrapartida estimular mecanismos de cooperación más equitativa entre países y regiones para la movilidad internacional de sociólogos/as.

8. Se propone el desarrollo de códigos de ética para el ejercicio del oficio y profesión del sociólogo/a para responder a las consecuencias e impactos sociales, culturales y valorativos sobre la sociedad.

9. En síntesis, procuran contribuir a una agenda común de trabajo que tiene como eje principal de acción la promoción y defensa de los espacios del oficio, inserción laboral y profesional del sociólogo/a en la sociedad.

# El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y los desafíos de las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana y caribeña

*Karina Batthyány\**

## **Coyuntura latinoamericana y caribeña: contradicciones y ambivalencias**

Si una imagen puede sintetizar el momento actual de América Latina y del mundo es la encrucijada. Encrucijada compleja debido a un conjunto de fenómenos que se producen simultáneamente en lo económico, ambiental, político, ideológico, cultural y social. Esta complejidad trasciende los graves problemas de la pobreza, la falta de empleo o la concentración de la riqueza, involucrando otras dimensiones como los derechos humanos, las desigualdades, las migraciones, la corrupción, la violencia, la inseguridad, la postergación de los derechos de los pueblos indígenas, la ausencia de institucionalidad estatal, la movilización social, la calidad de la democracia, las derivas autoritarias de algunos gobiernos, la falta de oportunidades y la debilidad institucional del Estado.

En el contexto político se observan, por un lado, surgimientos y retornos de gobiernos de derecha y ultraderecha, neoconservadores y neoliberales, con políticas sociales regresivas, excluyentes y retrocesos a nivel de derechos y condiciones de vida dignas. También, vulneraciones a la institucionalidad y avasallamiento de las libertades y los derechos políticos y civiles. Por otro lado, permanencia y en algunos casos revitalización de gobiernos progresistas o populares a nivel nacional y local.

A pesar de la mejora relativa de indicadores económicos y sociales en las últimas décadas, las desigualdades persisten. Esto abre un panorama de tensiones, paradojas y tendencias contrapuestas. Indicadores que relativamente mejoran en series de mediana duración y desigualdades

\* Doctora en Sociología. Secretaria ejecutiva de Clacso. Profesora titular, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [karina.batthyany@cienciassociales.edu.uy](mailto:karina.batthyany@cienciassociales.edu.uy)

que permanecen y hasta se profundizan. De esta manera, se visibilizan desigualdades multidimensionales, no solo socioeconómicas, de ingresos, fiscales o de posición social.

La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Estos altos niveles de desigualdad representan un claro obstáculo al ejercicio de los derechos de las personas, a la ampliación de la ciudadanía y la democracia.

En nuestra región latinoamericana las oportunidades de desarrollo están muy ligadas a dónde se haya nacido, sexo, grupo étnico, raza, religión u orientación sexual. La desigualdad de ingresos es también una dimensión relevante, pero no es la única dimensión significativa. Las desigualdades de género, orientación sexual, raza, grupo étnico, religión, situación económica y situación geográfica siguen afectando a la región y muchos de sus habitantes continúan en situación de pobreza. La erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, así como la reducción de la desigualdad, en todas sus dimensiones, continúan siendo desafíos centrales.

Aunque hubo avances importantes en los últimos quince años, los datos de Cepal permiten confirmar que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central. También, siempre de acuerdo con esos datos, entre 2002 y 2016 se produjeron en la región avances importantes en términos de inclusión social y laboral, pero persisten brechas estructurales que afectan en forma más acentuada a las mujeres y los jóvenes, así como a las personas indígenas, afrodescendientes y con discapacidad.<sup>1</sup>

Entre ellos, y no de manera excluyente, requieren especial atención:

- 1) Violencias y desigualdades de género: la situación de las mujeres se deteriora; ellas están más expuestas a violencias y desigualdades en la mayoría de los países de la región. En el mismo sentido, sectores políticos conservadores y reaccionarios, que proclaman el antifeminismo, persiguen lo que ellos llaman “ideología de género” y criminalizan las diversidades, se han fortalecido en los últimos años. La consolidación de la integración de las mujeres al mundo público en estos últimos cincuenta años, relacionada con su presencia continua y ascendente

1. Cepal, *Panorama social de América Latina, 2018*, LC/PUB.2019/3-P, Santiago de Chile, 2019.

en el mundo laboral, así como con cambios sociodemográficos tales como la reducción de la fecundidad, la prolongación de la esperanza de vida y las uniones de pareja más tardías, no ha significado cambios significativos en la brecha de desigualdad que afecta a la mayoría de las mujeres.

- 2) Procesos de inestabilidad política que refuerzan estas situaciones debilitan las políticas públicas y la capacidad estatal y amenazan el desarrollo del conocimiento en las universidades e instituciones de investigación, sea por restricciones políticas a la libertad intelectual y el ejercicio profesional o por la reducción presupuestaria.
- 3) Crisis ambiental: las sociedades latinoamericanas sufren de manera directa las consecuencias sociales y ambientales del cambio climático global. La devastación, las pérdidas de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales se presentan como resultado de la expansión de modelos de desarrollo insustentables, con matrices y patrones energéticos visiblemente predatorios.
- 4) Migración y movilidad humana: la movilidad humana a través de la migración y la movilidad es un fenómeno social de enorme impacto en la realidad contemporánea. Las acentuadas desigualdades sociales, la violencia y la búsqueda de mejores condiciones de vida han crecido en los países de la región.

En todos los casos, estas dimensiones operan de manera combinada, generando una vulneración y un deterioro de los derechos humanos en la mayoría de los países de la región. Esto refuerza las situaciones de violencia que viven amplios sectores sociales, siendo las mujeres, los niños, los jóvenes y los migrantes los más expuestos a ellas en los últimos años.

### **Desafíos para las ciencias sociales y humanas ante esta coyuntura**

La complejidad que atraviesa nuestra región requiere cambios que permitan elaborar agendas de temas prioritarios y el abordaje inter y multidisciplinario desde la diversidad de las ciencias sociales y humanas, pero también desde la interacción con otras ciencias. Esto requiere ampliar los horizontes de la oferta educativa, de la investigación social, crear y consolidar espacios de encuentros académicos, políticos y sociales más allá de los tradicionales, todo lo cual implica la reivindicación de las ciencias sociales en su potencial crítico y transformador.

Ante desigualdades multidimensionales y procesos políticos inestables

y complejos, se hacen necesarias herramientas de análisis, interpretación y comprensión que sean *multidimensionales, transversales e interdisciplinarias*.

A desigualdades multidimensionales, corresponden abordajes que den cuenta de esa complejidad, esa construcción interseccional con dimensiones económicas, sociales, ambientales, de género, generacionales, territoriales, culturales, educativas, laborales, vinculadas a migraciones y desplazamientos, entre otras.

Esta comprensión multidimensional, transversal e interdisciplinaria posibilitará construir herramientas de política pública e intervención social que permitan transformar la realidad social hacia sociedades más justas, democráticas, igualitarias y que fortalezcan los derechos humanos.

Clasco, en cuanto la mayor red global de las ciencias sociales y las humanidades con perspectiva latinoamericana y caribeña, creada en 1967 y que actualmente reúne a más de 700 centros de investigación y posgrado en 51 países de América Latina y otros continentes, se propone:

- Promover la investigación social para el combate a la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación democrática.
- Contribuir, desde los aportes de la investigación académica y del pensamiento crítico, a promover políticas de desarrollo sustentables en términos económicos, sociales y ambientales.
- Tender puentes entre la investigación social y las políticas públicas, impulsando acciones innovadoras, creativas y viables ante los grandes desafíos sociales, educativos, culturales y ambientales de América Latina y el Caribe.
- Apoyar la formación de redes de investigadoras e investigadores en instituciones en las ciencias sociales y las humanidades.
- Apoyar y promover la investigación y las condiciones de trabajo de quienes investigan, sobre todo en aquellos países con menor desarrollo relativo de las ciencias sociales o con situaciones económicas y políticas frágiles e inestables.
- Formar capacidades de investigación en investigadoras e investigadores en formación, decisores de políticas públicas y activistas sociales.
- Fortalecer las posibilidades de desarrollo científico y académico de los grupos con menos oportunidades: mujeres jóvenes, negros y afros, rurales, indígenas, jóvenes de sectores populares urbanos, entre otros.
- Fortalecer los procesos de internacionalización académica en América Latina y el Caribe.

- Promover el acceso abierto a la producción académica latinoamericana y caribeña, democratizando el conocimiento y facilitando su uso por parte de diversos actores políticos y sociales.
- Promover los diálogos Sur-Norte y Sur-Sur desde perspectivas comparadas, intercambiando saberes y experiencias y construyendo herramientas que contribuyan a superar las situaciones estructurales y coyunturales que se viven en estas regiones.
- Construir criterios de evaluación académica y científica que sean situados y constituyan alternativas a los paradigmas dominantes que no contribuyen a fortalecer las comunidades científicas e intelectuales de la región.

En esta coyuntura, organizaciones como Clacso adquieren aún más relevancia en cuanto red de redes que, desde su visión plural, integradora, tolerante y respetuosa de las diferencias en el marco del compromiso con la justicia social, la igualdad, la democracia y el Estado de derecho serán claves para abordar la realidad, analizar sus implicaciones y visualizar sus tendencias en perspectiva.





## Reflexiones sobre la relación de la sociología y la opinión pública en la Argentina\*

*Juan Pedro Blois\*\**

I. El trabajo en la industria de la opinión pública constituye desde su implantación en la Argentina a mediados del siglo pasado uno de los principales espacios de inserción profesional de los sociólogos. Sin dudas, la centralidad de la encuesta como dispositivo metodológico indispensable en el estudio de la opinión le dio a los sociólogos, identificados desde la fundación de las primeras carreras de Sociología con esa herramienta de producción de información, un marcado ascendiente sobre otros perfiles profesionales. La vinculación fue tal que, al menos en el espacio mediático, la figura de los “encuestadores” suele ser asociada de modo estrecho con la de los “sociólogos”. La medición de “lo que quiere la gente”,<sup>1</sup> aquello que definen como sus principales preocupaciones, tanto como sus opciones electorales, devino una de las principales tareas de una disciplina que, a diferencia de otras ciencias sociales, tuvo siempre dificultades más o menos claras para identificar sus “incumbencias” profesionales más allá de su actuación en el campo académico.<sup>2</sup>

Con todo, la relación entre los estudios de opinión y la sociología no se dio sin tensiones. En efecto, no fueron pocos los sociólogos que, inspirados en las expresiones más críticas de la disciplina, representadas

\* Este texto es una versión revisada de mi intervención en la mesa “Sociología, elecciones y opinión pública” en el marco del IV Congreso Uruguayo de Sociología. Agradezco al Colegio de Sociólogos del Uruguay y su presidente, Miguel Serna, la invitación a participar del evento.

\*\* Conicet-UNGS, Argentina.

1. Gabriel Vommaro, “Lo que quiere la gente”: sondeos de opinión y espacio de la comunicación política en Argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

2. Cf. Juan Pedro Blois, “La sociología como profesión en Argentina desde mediados del siglo XX”, *Cadernos de Pesquisa*, vol. 47, N° 165, 2017, pp. 938-962.

emblemáticamente por Pierre Bourdieu,<sup>3</sup> relegaron ese oficio. Algunos, incluso, llamaron la atención sobre sus potenciales derivas “manipulatorias”, contrariando así el discurso de quienes al estudiar la opinión pública creían aportar a la democratización de la sociedad.<sup>4</sup> Las tensiones se hicieron visibles en el perfil del principal espacio de formación del país, la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el estudio de la opinión pública no figuró hasta tiempos bien recientes como una aplicación legítima de la sociología. La inserción al cuerpo de profesores de uno de los principales consultores en opinión pública de la Argentina como docente de teoría sociológica, y no como alguien abocado a la transmisión de la *expertise* con la que se ganaba la vida fuera de la Universidad, da cuenta de la escasa receptividad hacia la opinión pública de un espacio en el que se formó la amplísima mayoría de los sociólogos.<sup>5</sup>

Inspirado en un conjunto de investigaciones previas sobre el desarrollo de la “sociología como profesión” y la dinámica de sus principales perfiles,<sup>6</sup> este breve texto se propone examinar las relaciones (y tensiones) entre sociología y opinión pública en la Argentina. Para ello, en un primer momento, se aborda el proceso de implantación de los estudios de opinión *vis à vis* el desarrollo de la sociología; y, a continuación, inspirado en las ideas de Michael Burawoy sobre los diversos tipos de sociología y sus posibles relaciones, se reflexiona sobre los vínculos de los espacios de formación de grado (en especial de la carrera de la UBA) y las experiencias de sus graduados en el campo de los estudios de opinión.

3. Pierre Bourdieu, “La opinión pública no existe”, en *Cuestiones de sociología*, Madrid, Istmo, 2008.

4. Cf. Claudia Daniel, *Números públicos: las estadísticas en Argentina, 1990-2010*, Buenos Aires, FCE, 2013.

5. En los últimos años se ha dado el surgimiento (o reapertura) de un buen número de carreras en la zona metropolitana y en el interior del país, proceso que se ha traducido en una merma del peso tradicionalmente ostentado por la carrera de la UBA. Cf. Juan Pedro Blois, *Medio siglo de sociología en la Argentina: ciencia, profesión y política*, Buenos Aires, Eudeba, 2018.

6. Entre ellos cabe mencionar mi tesis de doctorado, titulada “Obligados a elegir entre el «sacerdocio y la prostitución»: socialización universitaria y prácticas profesionales de los sociólogos de la UBA”, defendida en 2012, y el libro *Medio siglo de sociología en la Argentina: ciencia, profesión y política, 1957-2007*. En el caso de la tesis, la elaboración de una “sociología de la sociología” buscó trascender el marco de debates sobre lo que la sociología era o debía ser para reconstruir lo que efectivamente hacían los sociólogos insertos en diversas instituciones de la sociedad. Se trataba, para citar la feliz fórmula de Michel Callon, de dar con los sociólogos *in the wild*.

II. Entre quienes se ocuparon de estudiar la consolidación del campo de los estudios de opinión pública en la Argentina (y otros países latinoamericanos) es usual decir que su despegue se produce con la vuelta de la democracia a mediados de la década de 1980. La rutinización del calendario electoral habría sido el elemento clave en la medida en que, según se insiste, la edición regular de elecciones facilitó el despliegue de un saber preocupado por anticipar las preferencias de los votantes. Fue, en efecto, ese marco el que permitió a un conjunto de “pioneros”, provenientes casi todos de la sociología, difundir el instrumento de la encuesta entre posibles interesados (actores del campo político, empresarios y medios de comunicación), ejerciendo un esmerado trabajo de educación sobre sus bondades.<sup>7</sup> La “profesionalización” del trabajo de campaña y de las estrategias de comunicación de los partidos políticos contribuyeron por su parte a la demanda de datos e información; impulsando además la conversión de algunos encuestadores en consultores (o “gurúes”) políticos, agentes que al tiempo que auscultaban la opinión pública hacían recomendaciones sobre las formas de seducirla.<sup>8</sup> Fue así como, luego de algunos “hitos fundacionales” donde las encuestas dieron pruebas de su efectividad,<sup>9</sup> los encuestadores fueron consolidándose como parte central del escenario de la comunicación política,<sup>10</sup> al tiempo que los guarismos que ofrecían se consolidaban como “números públicos”; es decir, cifras que, trascendiendo los ámbitos expertos de discusión, poblaron los diarios

7. Cf. Gabriel Vommaro, *“Lo que quiere la gente”*.

8. Cf. Carlos Fara, *¿Cómo ser un consultor político? Todas las herramientas necesarias para iniciarse en la profesión*, Buenos Aires, PoliticsFlix, 2018.

9. Un hecho central en el proceso de visibilidad y legitimación de las encuestas fue la anticipación del (inesperado) triunfo del candidato presidencial Raúl Alfonsín en 1983. Posteriormente, las fallas en algunos de los pronósticos pusieron en cuestión a los encuestadores y su supuesta neutralidad. Es que los “errores” aparecieron en más de una oportunidad como parte de “acciones psicológicas” a favor de sus clientes. Esa situación obligó a los encuestadores a un esmerado esfuerzo por dar cuenta de las razones que explicaban la distancias entre los resultados de las encuestas y de las elecciones (cf. Claudia Daniel, *Números públicos*). El extendido fracaso de las encuestas en las últimas elecciones argentinas (en las primarias tanto como en el primer turno) han puesto nuevamente a los encuestadores en el ojo de la tormenta.

10. Cf. Gabriel Vommaro, *Mejor que decir es mostrar: medios y política en la democracia argentina*, Buenos Aires, UNGS, 2008.

y medios de comunicación orientando la percepción de la realidad de amplias franjas de la población.<sup>11</sup>

Con todo, tal como han venido mostrando algunos trabajos más recientes,<sup>12</sup> la innegable conjunción de encuestas y democracia tiende a desconocer la realización de encuestas en el período anterior, caracterizado por una secular alternancia de gobiernos militares y civiles. Tal vez por la clausura de los medios de expresión propios de la democracia, las autoridades militares no se privaron de auscultar las opiniones de la población sobre su accionar y principales políticas. De todos modos, según la lectura de los pioneros de la actividad, la etapa previa a la recuperación de la democracia no fue sencilla, en la medida en que no había una demanda institucionalizada y regular de estudios de opinión,<sup>13</sup> siendo la investigación de mercado destinada a empresas su principal actividad.<sup>14</sup>

11. Cf. Claudia Daniel, *Números públicos*. Actualmente el trabajo en opinión pública comprende un amplio abanico de iniciativas y clientelas. Si bien, como Carlos Fara nota en *¿Cómo ser un consultor político?*, en tono bíblico, “en el principio eran las encuestas” y los consultores eran consultores “todo terreno” (se encargaban del estudio, sugerían las estrategias y tácticas de comunicación, opinaban sobre las propagandas, etc.), el campo se fue haciendo más denso, dando lugar a una mayor variación en los métodos de estudio (que incluye entrevistas en profundidad, grupos focales y entrevistas y más recientemente análisis de medios y *big data*) y a una creciente división del trabajo entre consultores y publicistas que ya no participan en la elaboración de los estudios y los profesionales encargados de los relevamientos.

12. Cf. Bettina Favero, “Opiniones y actitudes de los jóvenes en los años 1960: una inmensa minoría en una encuesta realizada por José Enrique Miguens”, *Escuela de Historia*, vol. 10, N° 22, 2018, pp. 128-148; Daniel Lvovich, “¿Cerca de la revolución? Datos cuantitativos e interpretaciones de las encuestas sobre las distintas modalidades de apoyo a la violencia revolucionaria en Argentina, 1970-1973”, *Izquierdas*, N° 49, 2019, pp. 952-967; Andrés Shoai, “La estratificación social en los orígenes de las encuestas de opinión pública en Argentina”, IX jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2011, disponible en [cdsa.aacademica.org/000-034/591.pdf](https://cdsa.aacademica.org/000-034/591.pdf).

13. Cf. Andrés Shoai, “La estratificación social...”

14. Desde la década de 1940 la investigación de mercado había tenido un claro impulso gracias a la expansión del consumo masivo alentada por las políticas redistributivas del peronismo (cf. Natalia Milanesio, *Cuando los trabajadores salieron de compras*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014). Fueron de hecho las consultoras dedicadas a esa actividad las que desde fines de los años 50 se aventuraron, en varios casos, a la promoción de los estudios de opinión ante funcionarios estatales y políticos (financiando los primeros estudios con lo que ganaban conociendo a los consumidores). El entrenamiento y *know how* forjados en el trabajo para las empresas facilitaron esa transición. Pero la influencia de la investigación de mercado en la opinión pública no se dio solo en términos materiales o metodológicos. Según Manuel Mora y Araujo, el estudio de los consumidores indujo en quienes se volcaban a la opinión pública

Es en este sentido que, analizando el derrotero de la actividad para el conjunto de la región, César Aguiar se refiere a ese período como la “prehistoria” de los estudios de opinión, en una línea que coincide con Manuel Mora y Araujo.<sup>15</sup>

El desarrollo de la sociología en las instituciones académicas fue una condición necesaria en el despliegue de los estudios de opinión en la Argentina. Ya el Instituto de Sociología de la UBA, institución fundada en 1940, había intentado asociarse con la empresa estadounidense Gallup para incorporar su *know how* en pos de impulsar este tipo de indagaciones en el país.<sup>16</sup> Pero fue sin dudas la instalación de las primeras carreras de grado a mediados del siglo pasado, en particular la de la UBA y la de

---

una mirada más atenta a las “demandas” del campo político, en detrimento de los enfoques más tradicionales centrados en la “oferta” provista por los grandes actores colectivos (partidos políticos, corporaciones empresarias, sindicatos), volviéndolos más sensibles a las orientaciones y los “deseos” de los “individuos” o “ciudadanos”, pensados ahora a la manera de “consumidores” como electores “independientes” y a veces “indecisos” (cf. Gabriel Vommaro, “*Lo que quiere la gente*”). Asimismo, la investigación de mercado facilitó también el contacto con técnicas de persuasión y promoción movilizadas en el trabajo de consultoría política. Fue, de hecho, Paul Lazarsfeld, figura central en la difusión de los estudios de mercado y opinión en Estados Unidos, quien bromeó sobre las convergencias que había entre la “venta de jabón” y la promoción de un partido político (“An episode in the history of social research: A memoir”, en Donald Fleming y Bernard Bailyn, eds., *The Intellectual Migration: Europe and America, 1930-1960*, Cambridge, Harvard University Press, 1969). Resulta relevante llamar la atención sobre las íntimas conexiones entre los estudios de opinión y la investigación de mercado ya que no es inusual que quienes se dediquen a su estudio aborden ambas actividades por separado cuando, en la Argentina como en otras latitudes (cf. Kerstin Brückweh, “Perspectives for a History about citizens and consumers: Market research and opinion polling”, en Kerstin Brückweh, ed., *The Voice of the Citizen Consumer*, Londres, Oxford University Press, 2011), la indagación de los “ciudadanos” fue siempre de la mano del estudio de los “consumidores”. Sobre las diversas actitudes de los sociólogos frente a los estudios de opinión y la investigación de mercado puede verse Juan Pedro Blois, “Os sociólogos e a pesquisa de mercado e opinião pública na Argentina”, *Sociologia & Antropologia*, vol. 5, N° 1, 2015, pp. 183-206.

15. César Aguiar, “Para la historia de las encuestas de opinión pública en América Latina: una propuesta preliminar”, *Revista Latinoamericana de Opinión Pública*, vol. 1, N° 0, 2010; Manuel Mora y Araujo, “La opinión pública en la Argentina: de la sociología académica a la profesionalización”, en Rodrigo Cordero (ed.), *La sociedad de la opinión*, Santiago de Chile, Ed. Diego Portales, 2009.

16. Cf. Juan Morales Martín, “Entrecruzamientos en el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (1955-1965) y sus derivaciones: movilidad académica y *Latin American Studies*”, 1 Jornadas de Sociología UNCuyo, Mendoza, 2013.

la Universidad Católica Argentina (UCA), las que le dieron aliento a la actividad al ofrecerle la “mano de obra” que participaba de la recopilación de datos y aplicación de los cuestionarios pero también de su elaboración y análisis. Tanto Gino Germani como José Enrique Miguens, el director de la carrera de la UBA y el de la UCA respectivamente, tenían una clara orientación hacia la investigación empírica y estaban convencidos de la necesidad de proceder a una “importación” de las estrategias y herramientas metodológicas propias de los centros mundiales de la disciplina, lo que facilitó el entrenamiento de un buen número de graduados en el manejo de las estadísticas y encuestas. Miguens, por lo demás, fue un entusiasta impulsor de los estudios de opinión pública. Según consigna Bettina Favero, entre 1957 y 1973, desde su consultora, el Centro de Investigaciones Motivacionales y Sociales (CIMS), este sociólogo coordinó más de cien indagaciones centradas en distintos aspectos de la vida política y económica nacional, buena parte de los cuales abordaban la “opinión pública” sobre coyuntura y comportamientos económicos, la imagen del presidente, la del ejército y las fuerzas armadas, la integración económica latinoamericana y la seguridad continental, o los sentimientos suscitados por Estados Unidos y las políticas petroleras.<sup>17</sup> El peso de los sociólogos en la actividad no mermaría con el paso del tiempo. Lejos de ello, luego de la *impasse* introducida por la última dictadura militar (1976-1983) y ya recuperada la democracia, una buena parte de los graduados se orientaron a las consultoras de opinión y de análisis mercado.<sup>18</sup> De las quince figuras más reconocidas de la actividad desde la vuelta de la democracia, trece eran sociólogos.<sup>19</sup>

Ahora bien, tal como adelantamos, la presencia estelar de los sociólogos en esta área no se tradujo en un paralelo reconocimiento de sus labores en los principales espacios de formación. El proceso de

17. Bettina Favero, “Opiniones y actitudes...”. Cabe destacar que Carlos Durand (“Implantação da pesquisa de mercado no Brasil”, s/d) consigna que uno de los primeros estudios de opinión pública realizados en Brasil fue encargado por la empresa petrolera Esso con el fin de indagar las posibilidades de desplegar una campaña que sensibilizara a la “opinión pública” sobre las “ventajas” de la participación del capital externo en esa industria. La indagación fue encargada a Octávio da Costa Eduardo, sociólogo graduado de la Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) y uno de los principales promotores de los estudios de mercado en ese país.

18. Cf. Juan Pedro Blois, “Os sociólogos e a pesquisa...”.

19. Cf. Patricio Mogila, “Entre la política, el mercado y la academia: los consultores políticos, configuraciones de su identidad profesional en la ciudad de Córdoba”, trabajo final de graduación, Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, 2017.

“politización” en los años 60, que tendió a rechazar la asimilación de la sociología como una “profesión” tanto como la reorientación que se dio en la carrera de la UBA durante la última dictadura militar, dominada por un cuerpo de profesores poco especializado y una orientación más bien “libresca”, conspiraron contra ello.<sup>20</sup> La vuelta de la democracia no alteró el panorama aun cuando inicialmente el proceso de reorganización de la carrera, signado por el desplazamiento de los docentes que habían enseñado durante el período dictatorial, atrajo a varios “encuestadores”. Sin dudas, las tendencias que se iban imponiendo en la carrera durante la “primavera alfonsinista”, que recuperaban el perfil crítico y en algunos casos militante que había dominado la institución en el pasado, se revelaban poco acordes con lo que estos sociólogos desarrollaban en sus trabajos. En ese marco, algunos se insertaron como docentes de otras instituciones. Mientras Julio Aurelio se integraba al plantel docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Edgardo Catterberg se convertía en el primer director de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA; Manuel Mora y Araujo, por su parte, sería reclutado por la flamante Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Estas instituciones, a diferencia de lo que ocurría con las carreras de Sociología, ofrecían un marco en el que sus saberes y experiencias podían ser valorizados en nuevas ofertas académicas.<sup>21</sup> Como señala Gabriel Vommaro:

Aun cuando la mayor parte de los expertos tenga una formación como sociólogos, su intento de imponer la práctica de las encuestas como una rama importante de la sociología no tendrá el éxito esperado [...] Las dificultades para imponer como legítima, en el medio universitario público, la técnica de la encuesta tal como era utilizada por los expertos para medir las opiniones y las intenciones de voto, contribuyó a la progresiva “migración” de los encuestadores hacia las universidades privadas.<sup>22</sup>

20. La carrera de la UCA fue cerrada a principios de los años 80. En su lugar fue impulsado un programa de posgrados. Cf. Juan Pedro Blois, *Medio siglo de sociología...*

21. *Ibidem*.

22. Gabriel Vommaro, “*Lo que quiere la gente*”, pp. 94-95. En esas condiciones, para la mayoría de los graduados de la UBA que desde la vuelta de la democracia terminaron dedicados a la opinión pública su trabajo debió ser aprendido en la propia práctica, a la manera de un oficio. Su formación metodológica, con todo, ofrecía una base desde la cual proceder a ese aprendizaje. Cf. Juan Pedro Blois, “Os sociólogos e a pesquisa...”.

Como sugerimos anteriormente, esto no quiere decir que no hubiera figuras que se dedicaran a esta actividad en la carrera de la UBA, pero lo que sucedía es que no articulaban sus labores como consultores con sus clases; en algunos casos podían, incluso, enseñar metodología pero lo hacían sin destacar sus vínculos con los estudios de opinión. Según Mora y Araujo, semejante disociación no se daba sin consecuencias. Al tiempo que los estudiantes se perdían la posibilidad de conocer una importante salida laboral, el desentendimiento de las discusiones académicas había llevado a parte de los encuestadores a un reforzamiento de la lógica comercial que, en su búsqueda de clientes, acababa relajando ciertos controles metodológicos, atentando de ese modo contra la calidad de los servicios ofrecidos y de la opinión pública en su conjunto.<sup>23</sup> En el marco de unas jornadas realizadas en 2012 destinadas a pensar sobre posibles articulaciones entre el mundo de la consultoría y el mundo académico, ese sociólogo y otros colegas destacados del área coincidían en la necesidad de pensar y proyectar mayores diálogos, proponiendo para ello la realización de cursos de “metodologías aplicadas” en los espacios de formación, la edición de seminarios de intercambio entre consultores y académicos, o el más ambicioso lanzamiento de un banco de datos donde las consultoras, tal como ocurre en otros países, pudiesen socializar sus informes y compartir la información (que no fuera sensible para los clientes). La reciente creación de una materia optativa dedicada a la “sociología de la opinión pública” en la carrera de Sociología de la UBA parece apuntar en este sentido. Aun cuando resulta prematuro sacar conclusiones al respecto, la inclusión de semejante materia parece dar cuenta de una novedosa apertura hacia una actividad que hasta aquí no había tenido lugar en la formación universitaria de los sociólogos.

**III.** Como sea, el divorcio que tendió a primar entre el trabajo de quienes se dedicaban a la opinión pública y los principales espacios de formación no es algo específico de esta actividad. Lejos de ello, el tradicional ascendente de la figura del sociólogo como un intelectual volcado eminentemente a la vida académica, tanto como las resistencias a pensar otras formas de inserción profesional, se tradujeron, al menos hasta tiempo bien reciente, en una marcada reluctancia a incorporar la experiencia de los graduados desarrolladas en diversas instituciones y esferas sociales.<sup>24</sup> En el marco de un proceso de clara diferenciación y ampliación de las prácticas de los

23. Manuel Mora y Araujo, “La opinión pública en la Argentina”.

24. Cf. Juan Pedro Blois, *Medio siglo...*



sociólogos, las actividades y los espacios de intervención en la Argentina han sido heterogéneos: desde la orientación y confección de las políticas públicas contra la pobreza hasta el planeamiento de las estrategias de comunicación publicitaria de las grandes empresas, desde la actividad como docentes en la enseñanza media hasta la gestión de los recursos humanos en una empresa multinacional. La magnitud del proceso es tal que, aun con el aumento de la inversión en ciencia y técnica de los años 2000, es razonable pensar que la amplia mayoría de los graduados encontraron inserción más allá de los muros académicos.

En 2004, Michael Burawoy, entonces presidente de la American Sociological Association, pronunció un discurso, de gran repercusión en el ámbito internacional de la sociología, en el que llamaba a los sociólogos a comprometerse de manera decidida con aquello que sucedía más allá de los muros universitarios. Se trataba, según su visión, de promover la “sociología pública”: una sociología construida a partir del diálogo con diversos actores y movimientos sociales capaz de recuperar la “vocación primigenia” de la disciplina por la intervención en la sociedad. Tal vocación, según su visión, estaba amenazada por la expansión de un entramado académico que, con particular fuerza en Estados Unidos, había venido encerrándose cada vez más, reduciéndose de modo creciente a un diálogo entre pares en el que la producción del conocimiento tendía a aparecer como un fin en sí mismo.

Pero la sociología pública no era la única sociología posible o deseable. Lejos de ello, según Burawoy, el desarrollo y crecimiento cuantitativo de la disciplina habían llevado a una diversificación y especialización de distintas “sociologías”. Sobre la base de dos criterios –tipo de audiencia a la que se dirige (académica o extraacadémica) y tipo de conocimiento que producen (instrumental o reflexivo)–, distinguía, además de la sociología pública, tres tipos de sociología. Por un lado, está la “sociología práctica”, que opera al servicio de un fin definido por un cliente o empleador, procurando proveer soluciones a problemas que le vienen dados; se trata de la sociología como saber experto al servicio de las demandas de empresas, dependencias estatales y otras instituciones. Como la sociología pública, su audiencia va más allá de la comunidad de pares pero, a diferencia de ella, no se involucra en la discusión de cuestiones de valor. Su racionalidad es una racionalidad instrumental. Por otro lado, están la “sociología profesional” y la “sociología crítica”. Si ambas se dirigen a la comunidad de pares, su finalidad y el tipo de conocimiento producido son distintos. Mientras la primera elabora los conceptos, las teorías y los métodos de análisis (que luego utilizan las otras sociologías), la otra examina los

fundamentos normativos y los presupuestos epistemológicos a partir de los cuales aquella realiza sus investigaciones y trabajos. En la práctica, aclara Burawoy, esas diversas sociologías pueden solaparse.

Ahora bien, lo que interesa destacar aquí en función de lo referido para el caso de los estudios de opinión pública (pero que se extiende a las otras inserciones profesionales de los sociólogos) es que, según Burawoy, entre las diversas sociologías debe haber la mayor interdependencia y comunicación posible pues cada una de ellas obtiene –o podría obtener– “energía, significado e imaginación gracias a su interrelación” con las otras. Tal “sinergia”, reconoce, no es fácil pues esas sociologías “están compuestas por prácticas cognitivas profundamente diferentes”. De hecho, no es inusual que esas sociologías funcionen como esferas compartimentadas, en el marco de una mutua ignorancia o indiferencia. Sin embargo, es solo su diálogo lo que puede evitar, según este autor, las tendencias patológicas que cada sociología conlleva por su propia configuración institucional. Así, por ejemplo, si la sociología profesional, elaborada en el marco de una discusión de pares, puede degenerar fácilmente en una discusión excesivamente “encerrada”, perdiendo cualquier relevancia o valor en términos de impacto social, la sociología práctica, cuando es ejercida sin compromiso con el desarrollo disciplinario y escindida de sus productos conceptuales y metodológicos, puede ser “fácilmente atrapable por los clientes que imponen las estrictas obligaciones contractuales en su financiación”, pudiendo recaer en un “servilismo” que no reconoce la autonomía intelectual.<sup>25</sup>

Sin dudas, el llamado de Burawoy a la colaboración entre las diversas sociologías puede ser una fuente de inspiración a la hora de pensar formas de estructurar la formación y práctica de los sociólogos que, en vez de plantear escisiones, promuevan una mayor integración entre los diversos ejercicios de la profesión, incluyendo el de la opinión pública. Semejante integración parece adquirir particular relevancia en el contexto de creciente hostilidad que la sociología junto con otras ciencias sociales y humanas ha debido soportar en los últimos años en la Argentina –y en otras latitudes–,<sup>26</sup> aquejada por el desfinanciamiento de las universidades y los centros de investigación y por reiteradas campañas mediáticas de desprestigio.

25. Michael Burawoy, “For a public Sociology”, *American Sociological Review*, vol. 70, N° 1, 2005, pp. 4-28 (p. 213).

26. Cf. Bernard Lahire, *En defensa de la sociología*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016.

## Situación del mercado laboral de las personas profesionales en sociología en Costa Rica\*

*Carmen Camacho Rodríguez,  
Ariel Calderón González, Fernando Chavarría Lizano  
y Marvin Rodríguez Vargas\*\**

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR), en adelante nominado “Colegio”, fue creado en 2011 por ley de la República<sup>1</sup> como un ente público no estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, condición que le confiere la responsabilidad de velar por el progreso de la sociología, el intercambio científico entre sus miembros, el ejercicio de la profesión en forma ética, legal y de excelencia. Además, el Colegio debe emitir opinión y pronunciarse sobre la aplicación de políticas y acciones desde los poderes del Estado que permitan fortalecer la democracia y la configuración del Estado social de derecho.

La constitución del Colegio fue el resultado de luchas gremiales que se iniciaron en la década de 1970 motivadas por la ausencia de una organización aglutinadora, protectora y certificadora de quienes ejercen la profesión de la sociología.<sup>2</sup> Su primer presidente fue el doctor Daniel

\* Este artículo incluye algunos datos a noviembre de 2019 y consiste en un resumen de la ponencia presentada en el XXX Congreso Latinoamericano de Sociología, ALAS 2015, Costa Rica.

\*\* Los autores son miembros del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica. Carmen Camacho R. (coordinadora), actual presidente del Colegio de Profesionales en Sociología, trabajó como fiscalizadora de la Contraloría General de la República y es académica del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ariel Calderón G. es sociólogo, investigador, consultor independiente y asesor de la Asamblea Legislativa y la Embajada Británica. Fernando Chavarría L. es docente de la Universidad de Costa Rica. Marvin Rodríguez V. es asesor de Casa Presidencial y sociólogo del Banco Popular y de Desarrollo Popular de Costa Rica.

1. Asamblea Legislativa. Ley 8.974 firmada el 4 de agosto del 2011 y publicada en la *Gaceta*, N° 188, San José, 30 de septiembre del 2011.

2. La carrera universitaria de Sociología se inició en 1967 en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en 1973 con la fundación de la Universidad Nacional de Costa Rica, únicas hasta hoy en el país que imparten la carrera.

Camacho Monge y su primer vicepresidente el magíster Asdrúbal Alvarado, reconocidos sociólogos en el ámbito internacional y nacional, quienes han dedicado gran parte de su vida laboral a promover espacios para el intercambio de ideas en el campo de la ciencia sociológica y otros temas de interés común.<sup>3</sup>

El Colegio desde sus inicios realizó gestiones para promover el mejoramiento académico y las competencias laborales de las personas profesionales en sociología en el país y en el ámbito internacional. En este sentido, las comisiones de empleo, la académica y la de comunicación realizaron otros estudios para establecer las tarifas mínimas de profesionales tal como le confiere su ley de creación, divulgaron por sus redes sociales información sobre puestos de trabajo en entidades públicas, privadas y organismos internacionales que así lo demandan; realizaron foros y encuentros de discusión sobre experiencias profesionales, el desarrollo investigativo y publicaciones de colegas. Cada dos años se promueve una convocatoria al premio Doctor Daniel Camacho Monge al ensayo, libro o resultado investigativo más destacado. A partir de 2019 entró en funcionamiento una comisión especial que ha realizado una serie de actividades académicas y de capacitación dirigidas a motivar a las personas egresadas tanto de la Universidad Nacional de Costa Rica como de la UCR para que logren concluir sus trabajos finales de graduación.

Los resultados de esta investigación se enmarcan dentro de los objetivos del Colegio dirigidos a promover la superación integral de sus miembros, estimular investigaciones de carácter profesional y cooperar con las universidades y los centros de educación superior en el desarrollo de la sociología. Frecuentemente el Colegio debe atender la demanda de las instituciones sobre las funciones y calidades del profesional en sociología en una determinada institución o sector social, económico, ambiental o político. Se espera que esta primera investigación contribuya a ir configurando uno o varios perfiles profesionales de los profesionales en sociología en Costa Rica. En definitiva, los diversos ámbitos laborales y actividades que ejercen los profesionales en sociología en el proceso del desarrollo nacional e internacional, tal como se muestra en esta investigación, demandan la configuración de diversos perfiles profesionales sustentados en la teoría y práctica del quehacer de la sociología.

3. Cf. Asdrúbal Alvarado Vargas, "El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y su impacto en la democracia costarricense", *Revista de Ciencias Sociales*, N° 144, 2014, pp. 13-27.

## **Aspectos metodológicos: ¿cómo y a quien se consultó?**

La información sobre la condición laboral de los agremiados a noviembre de 2019 procede de la base de datos del Colegio, suministrada en las boletas de inscripción de los colegas al momento de su ingreso durante los años comprendidos entre 2012 y 2019; de tal forma, esta condición pudo haber cambiado durante este período. El resto del análisis se sustenta en los resultados de una investigación sobre el perfil sociolaboral de los agremiados del Colegio en una consulta realizada en 2015. Esta investigación estuvo a cargo de un equipo de sociólogos encargados de diseñar y analizar la información. La junta directiva del Colegio brindó el apoyo logístico sin el cual no hubiera sido posible obtener los datos.

La consulta se aplicó a las personas miembros del Colegio entre junio y julio de 2015. El objetivo fue conocer su desempeño sociolaboral, con el fin de retroalimentar el proceso para la definición de un perfil del profesional en sociología requerido como parte de la planificación, gestión y toma de decisiones del Colegio. Estos resultados fueron posibles gracias a la colaboración y el tiempo invertido por las personas profesionales en sociología que generosamente brindaron información que hace posible conocer, sistematizar y divulgar su condición sociolaboral en el país.

El enfoque metodológico de esta investigación se basa en análisis y técnicas cuantitativas que pudieran garantizar la mayor cantidad de respuestas en el menor tiempo posible, considerando la disponibilidad de recursos humanos y económicos. La población objetivo se definió como todas las personas miembros del Colegio al 27 de junio de 2015, por lo que se consultó a 663 profesionales en las diversas zonas del país. La herramienta utilizada fue el cuestionario con preguntas en su mayoría cerradas, el cual fue previamente validado y luego aplicado por medio de correo electrónico, medio por el cual se invitó a la población objetivo a brindar sus respuestas enlazando una dirección virtual ligada a una plataforma web.<sup>4</sup> Posteriormente se realizó un monitoreo telefónico para el caso de agremiados que no respondieron el cuestionario o lo hicieron en forma incompleta.

Del total de 663 afiliados se obtuvo respuesta de 266 personas que lo hicieron en forma satisfactoria, con lo cual se obtuvo 40,1% de la

4. La plataforma utilizada fue Limesurvey, que facilitó tanto la aplicación virtual del cuestionario como la generación de la base de datos requerida para su procesamiento en el paquete estadístico spss.

población objetivo.<sup>5</sup> El alto porcentaje de no respuesta se debió entre otros a dificultades en el acceso al cuestionario digital, la falta de tiempo de agremiados para contestar por el horario laboral, la desactualización de correos y teléfonos brindados por los agremiados para la base de datos del Colegio, o el desinterés de algunas personas en colaborar. Sin embargo, debe destacarse que, pese a ser un primer estudio de este tipo en el país, es altamente valioso tanto para los resultados en los que basamos este artículo como para estudios comparativos futuros.

## Resultados

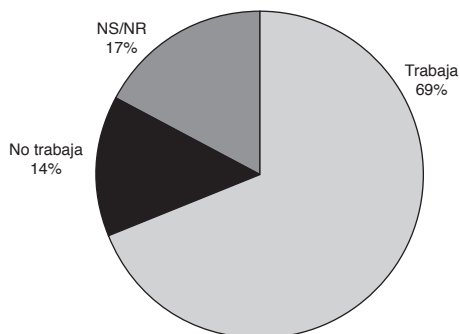
Los resultados de este estudio se dividieron en varias secciones. En la primera se describen las principales características sociodemográficas de las personas consultadas que brindaron la información. Posteriormente se analizan las condiciones de su inserción laboral y desempeño conforme a su perfil y género. Finalmente se analizan los obstáculos que tiene un sector importante de colegas, en especial las personas jóvenes recién graduadas, para obtener un empleo y competir con prácticas de selección y contratación poco transparentes.

Antes de presentar esta información y con el fin de actualizar algunos datos, cabe destacar que el Colegio, a noviembre de 2019, contaba con 830 agremiados, 200 colegas más que los censados en 2015. Esta cifra no incluye a muchos sociólogos que trabajan como docentes universitarios que por la ley 8.974 no están obligados a estar agremiados a nuestro Colegio y a muchos otros que ilegalmente ejercen su profesión sin estar debidamente incorporados al Colegio. La condición ocupacional indicada por estos agremiados cuando se inscribieron en el Colegio fue que 575 estaban trabajando, lo cual corresponde al 69,3%.

Como se puede observar en el gráfico, el 69% de las personas que se inscribieron en el Colegio entre 2012 y 2020 estaban trabajando, mientras solo el 13,4% de los agremiados manifestaron estar desempleados. El desempleo es levemente superior al promedio nacional, pero es importante señalar que en su mayoría son jóvenes. No obstante, el 17,3% no

5. Si estos resultados fueran parte de un marco muestral, para un universo de 663 personas se requiere un tamaño de muestra de 235 personas con un margen del 95% de confianza. Por lo tanto, esta investigación cuenta con un criterio estadístico de respaldo debido a la aleatoriedad de las respuestas pero, en razón de esta dificultad, la aplicación de un marco muestral (previamente definido) en un estudio posterior podría resolver sesgos derivados de la no respuesta.

### Condición ocupacional de agremiados al ingreso al Colegio, 2012-2019



Fuente: base de datos de inscripción. Colegio de Profesionales en Sociología, noviembre de 2019.

reportaron su condición o no quisieron hacerlo, lo cual es preocupante dado que podría tratarse de desempleados también. Además, la tasa de desocupación de las personas jóvenes también es de las más alta en el país, mientras que la tasa de desempleo nacional fue de 11,9%, una de las más elevadas en las últimas tres décadas, más del 35% de ellos son jóvenes.<sup>6</sup> Cabe destacar que la ley de creación del Colegio acepta la afiliación de bachilleres en sociología y que muchos jóvenes sociólogos lo hacen para obtener una certificación que les permita cumplir con los requisitos exigidos para optar a puestos en la administración pública o en algunas empresas que así lo establecen. De tal forma, los profesionales en sociología tienen dificultades para acceder a un trabajo y en mayor medida a un trabajo digno y afín a su formación académica, un reto que requiere la atención del gremio y de las universidades que forman profesionales para que puedan formar parte de la fuerza laboral. Seguidamente se analiza la condición social de los agremiados que accedieron a colaborar con la consulta realizada en 2015, que puede profundizar el perfil de estos profesionales.

### Caracterización sociodemográfica de la población colegiada a 2015

Se determinó que más de dos terceras partes (65%) de las personas agremiadas y que respondieron a la consulta del Colegio son mujeres, lo

6. Encuesta Continua de Empleo, segundo trimestre de 2019, INEC, agosto de 2019.

cual muestra una alta predominancia femenina. Este dato guarda similitud con el estudio de seguimiento laboral realizado por el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (OLAP-Conare) de la población graduada de las universidades costarricenses entre 2008 y 2010. Esto es importante destacarlo, porque estadísticamente son más las mujeres quienes se gradúan en las ciencias sociales, donde la relación mujer-hombre es de siete mujeres graduadas por cada tres hombres.<sup>7</sup>

En relación con la edad, se determinó que casi dos terceras partes de las personas consultadas son menores de 39 años, de los cuales el 30,4% tiene entre 20 y 29 años y 33,4%, entre 30 y 39 años. Esta condición puede tener relación con la apertura del Colegio de aceptar bachilleres y con el hecho de que son las personas jóvenes quienes buscan empleo y cumplen con las exigencias de los patronos del mercado laboral. Como se analiza más adelante, los agremiados jóvenes son precisamente quienes muestran mayores dificultades de insertarse en el mercado laboral y muchos buscan trabajo por primera vez. El estudio determinó que el 23,5% de las personas entre 20 y 29 años con título universitario están desempleadas, lo cual multiplica la tasa de desempleo nacional en casi tres veces.

La consulta realizada muestra que el 95% de los profesionales en sociología residen en las provincias que conforman el Gran Área Metropolitana (GAM) tales como Alajuela, Cartago, Heredia y San José, mientras solo el 5% viven en las provincias costeras (Guanacaste, Limón y Puntarenas). Esta concentración puede obedecer al modelo de desarrollo “vallecentralista” que tradicionalmente domina el país, determinado fundamentalmente por la ubicación de las sedes universitarias y las de instituciones públicas y empresas que ofrecen trabajo en el Valle Central, así como la dificultad de que sociólogos y sociólogos desarrollen trabajos por cuenta propia o consultorías que les permita residir fuera del GAM.

El análisis de la información sobre el último grado académico obtenido determinó que el 37,8% son bachilleres y el 47,5% tiene el grado de licenciatura, mientras que solo el 15% posee estudios de posgrado, donde predominan las maestrías o especializaciones. Menos del 3% tiene el doctorado o posdoctorado. Esto muestra la importancia de abrir espacios y mejorar las condiciones para que los agremiados continúen con sus estudios y logren obtener posgrados tanto en el país como a nivel internacional.

La mayor parte de las personas consultadas manifestaron haber

7. OLAP-Conare, *Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2008-2010 de las universidades costarricenses*, San José, Conare, 2015, p. 29.



obtenido su título en la UCR y en la Universidad Nacional. En el caso de los bachilleres, el 65% obtuvo su título en la primera y el 35% en la segunda, porcentaje que se mantiene en igual proporción para el grado de licenciatura. Por otra parte, de 37 personas que reportaron poseer un posgrado, 18 fueron otorgados por la Universidad de Costa Rica, 4 por la Universidad Nacional y los 13 restantes por otras casas de enseñanza, tanto nacionales como internacionales.

### **El quehacer profesional y la experiencia laboral de los profesionales en sociología**

El estudio muestra que casi dos terceras partes de las personas que respondieron la consulta realizada desempeña solamente un trabajo (61,7%). Sin embargo, casi una quinta parte (18%) tiene dos trabajos y en su mayoría lo hace como docentes en alguna institución o universidad pública o privada. El porcentaje de personas que desempeñan tres o más trabajos diferentes es muy bajo (4,6%). Cerca de una quinta parte (18,8%) de las personas consultadas se dedican solamente a la docencia universitaria y un porcentaje similar (18%) son profesionales en alguna institución pública. El 13,9% se dedica a la consultoría independiente y el 3% es consultor en una ONG. En una actividad similar, el 4,9% se dedica a la gestión o promoción de proyectos en instituciones públicas o privadas.

Un poco más de la mitad de quienes respondieron la consulta (53,8%) expresaron que se requiere el título en Sociología en su ocupación principal. Por el contrario, el 30,5% dice que el título no se requiere en esa ocupación. Llama la atención que cerca del 15% se dedica a actividades no relacionadas con la sociología, a pesar de contar con el título en la disciplina. En su mayoría trabajan en una institución pública, lo que permite suponer que se graduaron después de conseguir ese trabajo, que tienen otra profesión principal o que debieron asumir una ocupación en otra disciplina afín o complementaria.

La mayoría de profesionales en sociología consultados (60,5%) se dedican tiempo completo a su actividad principal, el 7,9% trabajan medio tiempo en esa ocupación y el 3,4%, un cuarto de tiempo. El 9,4% tiene un contrato definido por objetivos y resultados en su actividad como consultores en su mayoría. El análisis por sector institucional muestra que el 19,2% trabaja en alguna institución del gobierno central, el 17,3% en una universidad pública, el 12,8% en una institución autónoma o semiautónoma, el 11,7% en una empresa privada, el 7,5% se dedica a la

consultoría, el 2,6 trabaja en una universidad privada y solo el 2,3% tiene una empresa propia dedicada a la investigación.

En relación con el tamaño de la empresa donde trabajan, se determinó que el 60% lo hace en establecimientos grandes, con más de cien personas, mientras que el 11,3% lo hace en establecimientos con alrededor de cincuenta personas y el 13,9% comparte su trabajo con al menos diez personas. Un total de trece personas entrevistadas (4,8%) trabajan por cuenta propia principalmente como consultores independientes. Lo anterior es congruente con el hecho de que el ejercicio de la sociología se realiza principalmente en instituciones y universidades públicas, según el universo estudiado.

Con respecto al grado de satisfacción de estos profesionales con su ocupación actual, se determinó que el 28,6% expresó sentirse muy satisfecho. De igual manera, el 31,2% dice estar satisfecho y el 13,5%, algo satisfecho. Los porcentajes de insatisfacción laboral son relativamente bajos: el 6,4% se siente poco satisfecho y el 4,5%, insatisfecho. Lo anterior es importante, porque confirma el hecho de que la mayor parte de los profesionales en sociología miembros del Colegio están satisfechos de su profesión, pese a que, como se indicó antes, el 15% desempeña una ocupación no relacionada con la disciplina.

El 73,7% buscó trabajo mientras estudiaba Sociología y un poco más de la cuarta parte no lo hizo (26,3%) y se dedicó solo a estudiar. Casi la mitad (47,4%) consiguió trabajo en sociología antes de graduarse, pero estos en su mayoría obtuvieron su título antes de 1990. Además, el 35,3% de esos profesionales consiguieron un trabajo que estaba relacionado con la sociología.

En relación con los ingresos de la población que brindó este tipo de información, llama la atención que el 5,3% perciba menos de 200.000 colones y que la quinta parte (19,9%) manifestó percibir un ingreso que oscila entre los 200.000 y menos de 500.000 colones. El 12,4% percibe ingresos entre los 500.000 y menos de 750.000 colones.<sup>8</sup> El 15,5% tiene ingresos de entre 750.000 a menos de 1.000.000 de colones. También cerca de una quinta parte indicó tener ingresos en el rango de 1.000.000 a 1.500.000 de colones. Solo el 9% tiene ingresos de entre 1.500.000 y menos de 2 millones de colones. A la vez, solamente el 1,5% (4 personas) gana entre 2.500.000 a 3 millones de colones e igual número y porcentaje

8. El tipo de cambio en julio de 2015 estuvo a 540,6 colones por dólar. <http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400>

de personas tienen ingresos superiores a los 3 millones de colones. Estas últimas personas, en su mayoría, trabajan o han trabajado en docencia en universidades públicas.

### **La exclusión del mercado laboral: análisis del desempleo en la sociología**

Por lo general se tiende a pensar el quehacer sociológico desde el campo ocupado por las personas que han tenido la oportunidad de poder vivir del trabajo en la sociología, sea en el sector académico o en el público, e incluso el privado. Sin embargo, esta profesión exige hacer sociología desde aquellas personas que no consiguen trabajo. ¿Por qué es importante este análisis? Porque brinda una mirada a las formas de exclusión que operan dentro de este círculo profesional, pero también de los sesgos de la sociedad costarricense con nuestro gremio.

La consulta realizada al gremio mostró que la tasa de desempleo abierto es de 9,4%, un porcentaje similar al nacional que se encuentra en 9,5% según la Encuesta Continua de Empleo del INEC.<sup>9</sup> De manera que el desempleo entre profesionales en sociología se entrelaza con la tendencia a nivel nacional, problema agravado debido a diversos factores sociales, políticos y económicos a nivel interno e internacional. Los discursos de poder político y económico, las transformaciones en el parque empresarial y la apuesta a la flexibilización laboral, ligados a la inversión extranjera directa, perjudican a muchas personas que desean emplearse, pero que encuentran estos problemas estructurales.

Por la misma razón hay que preguntarse quiénes son los desempleados en sociología. La mayoría son mujeres y jóvenes. Del total de personas desempleadas, poco más de la mitad son mujeres menores de treinta años. Son ellas quienes tienen una tasa de desempleo mucho mayor en el gremio, alcanzando el 9,8%. Los sociólogos, en contraparte, tienen una tasa de desempleo un punto porcentual inferior a las mujeres (8,6%), aunque los varones jóvenes desempleados son menos (apenas el 24% del total de desempleados). Estos datos muestran que la exclusión es mayor en el caso de las sociólogas, por lo que la condición de género es un factor que puede estar explicando su condición.

La mayor incidencia del desempleo femenino dentro del gremio ocurre pese a que ellas cuentan con un nivel de instrucción superior que el de sus

9. Encuesta Continua de Empleo, segundo trimestre, INEC, 2015.

colegas hombres. Se determinó que el 54% de las sociólogas desempleadas consultadas poseía un título de bachillerato, mientras que en el caso de los hombres el 46% contaba con un título igual o mayor a la licenciatura. De manera que la escolaridad no aumenta las posibilidades de tener un empleo para estas mujeres. Este dato contrasta con el hecho de que mientras el 25% de los hombres con trabajo remunerado son bachilleres en sociología, las mujeres en igual condición constituyen el 15% de las asalariadas. Por lo tanto, los hombres tienen mejores condiciones para conseguir trabajo, incluso con el mismo título académico.

Las barreras para conseguir empleo para los profesionales en sociología son diversas. Se determinó que el 80% de las personas que buscan empleo opinó que es difícil o muy difícil conseguir trabajo en sociología, entre ellas, el 52% eran mujeres y el otro 28%, hombres. Ante esta situación, cabe preguntarse cuáles son las principales causas por las cuales los profesionales en sociología encuentran barreras en la búsqueda de empleo. En la consulta realizada las respuestas a la pregunta concreta “¿cuáles son las mayores dificultades para conseguir trabajo en sociología?”, la respuesta más frecuente fue la falta de reconocimiento que tiene la disciplina como ciencia social (29%), incluyendo aspectos como la falta de claridad sobre las funciones que desempeña este profesional y los términos de requerimientos para su contratación. Seguida a esta dificultad, surge la falta de ofertas laborales (16%). En el tercer y el cuarto lugar, en igual porcentaje (12%), está el hecho de ser joven y no tener experiencia. Muy cerca de ellos, con el 11%, la respuesta fue la necesidad de tener una especialización académica. Además, en menor porcentaje se denunciaron otras como el clientelismo o el acaparamiento de oportunidades para favorecer a otras personas, poca estabilidad laboral y una enseñanza desligada de la práctica, entre otras.

Finalmente, las respuestas a la consulta “¿cuáles son los medios más efectivos para conseguir empleo en sociología?”, se determinó que el 14% de los hombres dijeron que la recomendación de un amigo, profesor o familiar era la forma más efectiva de conseguir trabajo, contrariamente a las mujeres, entre las cuales solo el 4% lo considera así. Este mecanismo debe generar preocupación en el gremio, dado que no es transparente y resulta contrario al mérito profesional exigido por la ética y las leyes vigentes en la administración pública. Cabe recordar que el 51% de los profesionales en sociología trabajan en el sector público, incluyendo universidades, gobierno central e instituciones descentralizadas.

## Conclusiones

El estudio realizado muestra que se alcanzó el objetivo de conocer las características sociales y el desempeño laboral de las personas afiliadas al Colegio de Profesionales en Sociología en Costa Rica, tomando como referencia las bases de datos en 2019 y la consulta realizada en 2015. El mayor problema detectado es el desempleo y las dificultades de las personas profesionales en sociología para insertarse al mercado laboral con una remuneración digna y en las competencias o saberes aprendidos en el proceso de su formación académica y mejoramiento profesional.

Del perfil sociodemográfico de la población colegiada consultada se desprende que las mujeres doblan en proporción al gremio a los hombres (65% contra 35%), son predominantemente jóvenes o adultas jóvenes (65% tienen edades entre los 20 y 39 años) y el 95% habita en las provincias del Gran Área Metropolitana (95%). Las personas agremiadas con bachillerato o licenciatura representan el 85%, mientras solo el 15% posee un posgrado. Finalmente, las personas con bachillerato o licenciatura provienen de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional en una proporción de 2 a 1, respectivamente. Por otra parte, de 37 personas que reportaron poseer un posgrado, 18 fueron otorgados por la UCR, 4 por la Universidad Nacional y los 13 restantes, por otras casas de enseñanza tanto nacionales como internacionales.

El análisis sobre la inserción en el mercado laboral costarricense de las personas profesionales en sociología afiliadas al Colegio muestra que alrededor de dos terceras partes se encuentran trabajando, muchas de ellas realizando labores en instituciones públicas y otras son docentes en universidades, mientras muy pocos trabajan como consultores o trabajadores independientes. Es preocupante el hecho de que el 15% de ellos tuviera que hacerlo en puestos donde no ejercen como sociólogos. No obstante, un poco más de la mitad de las personas consultadas expresó que sí se requiere el título en sociología en su ocupación principal y muchos de ellos lo hacen en jornadas de tiempo completo, lo cual es un dato relevante para el Colegio de Profesionales en Sociología. Lo importante aquí es indagar más bien sobre aquellos que respondieron lo contrario, que no requieren el título para ejercer su profesión y trabajan una jornada parcial, cayendo en el subempleo y la exclusión social.

Las remuneraciones reportadas por quienes trabajan tienden a ser relativamente bajas, considerando que se trata de titulados universitarios y muchos con posgrados. Una cuarta parte de quienes trabajan perciben remuneraciones menores a los 500.000 colones (menos de 1.000 dólares);

no obstante, si el resto tiene remuneraciones superiores es por el hecho de que los empleados públicos y docentes universitarios son quienes tienen establecidas sus garantías sociales y derechos laborales. El desafío mayor lo tiene el desempleo, que alcanza el 9,4% de los agremiados consultados, mayor que el porcentaje nacional en 2015.

Es importante destacar que más de la mitad de las sociólogas y los sociólogos consultados indicaron estar satisfechos con la sociología en su ejercicio profesional, lo cual contrasta con apenas el 10% que se siente poco satisfecho o insatisfecho. En cuanto al quehacer profesional de las personas consultadas, se observó una clara diferencia en la condición sociolaboral entre aquellas que se graduaron antes de 1990 y las que se graduaron posteriormente, no solo en cuanto a acceso al trabajo relacionado con la sociología sino también en cuanto a los ingresos percibidos.

Finalmente, el estudio evidenció que existen barreras y mecanismos de exclusión sociolaboral en el gremio sociológico. Las mujeres resultaron las más marginalizadas de esta disciplina, siendo las jóvenes las que llevan la peor parte. Ante un problema tan serio como la desigualdad de género, se requiere empezar a generar acciones para evitar que haya tanta disparidad en los mecanismos de contratación que tienden a cuestionar la transparencia y la ética en los procesos de selección y elección de puestos. Es una responsabilidad del Colegio velar porque las instituciones y empresas contratantes resguarden principios como la equidad de género, definan y apliquen criterios de selección justos, y se amplíen las oportunidades para las personas jóvenes y no se excluyan a priori por la falta de experiencia. Al mismo tiempo, es necesario delimitar un perfil sobre el trabajo de las sociólogas y los sociólogos, que genere mecanismos para su empoderamiento como profesionales de las ciencias sociales, cuya tradición y experticia tiende a definir y redefinir constantemente su quehacer.

Asimismo, se logró diseñar y aplicar una herramienta metodológica que permitirá realizar análisis comparativos a futuro, con un conjunto de variables y preguntas que efectivamente facilitaron el análisis integral y comprensivo sobre el desempeño laboral de quienes son profesionales en sociología afiliados al colegio. De tal modo este primer estudio facilitará la realización de futuros monitoreos sobre la condición de profesionales de sociología en el país, así como posibles análisis comparativos a nivel internacional, un reto que se deja en la mesa. No obstante, hasta el momento, el Colegio no ha vuelto a realizar estudios similares, lo cual es un reto pendiente.

## Instituciones y asociaciones de sociología en México

*Angélica Cuéllar Vázquez\**

La sociología en México es una de las disciplinas intelectuales con mayor historia en Latinoamérica. La tradición sociológica en el país comienza a finales del siglo XIX con Gabino Barreda, quien impulsó la formación de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) donde se impartió la materia Sociología. Su objetivo era formar ciudadanos que pudieran enfrentar los retos de la sociedad mediante el desarrollo de un conocimiento científico que determinara la conducta moral de los individuos. En esta misma inercia, la materia Sociología se impartió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional y se instauraron algunas especializaciones en torno a esta disciplina.<sup>1</sup>

Los primeros años de la posguerra constituyeron una etapa de ajustes y cambios en el Estado mexicano, y una crisis en el paradigma positivista de la sociología.<sup>2</sup> Lucio Mendieta y Núñez fue el actor principal en esa etapa que permitió la consolidación de la sociología como un discurso científico, académico y vinculado con las instituciones universitarias. Mendieta y Núñez impulsó el desarrollo de una base institucional que pudiera formar profesionales en ciencias sociales. En este sentido, se fundó el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en 1930. De igual manera, en 1939 se funda la *Revista Mexicana de Sociología*, que actualmente es la que tiene mayor tradición en América Latina. Este proyecto de difusión tuvo como objetivo dar a conocer los trabajos del Instituto y las investigaciones de sociólogos contemporáneos de Europa y América Latina. Otros proyectos importantes durante el período que permitieron

\* Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. [acuellarunam@gmail.com](mailto:acuellarunam@gmail.com)

1. Cf. Alfredo Andrade Carreño, *La sociología en México: temas, campos científicos y tradición disciplinaria*, Ciudad de México, UNAM, 2015.

2. Cf. Fernando Castañeda Sabido, *La crisis de la sociología académica en México*, Ciudad de México, UNAM-Porrúa, 2006.

difundir las ciencias sociales fueron la creación del Centro de Estudios Sociales del Colegio de México (Colmex) en 1943 y el Fondo de Cultura Económica (FCE) en 1940.

En 1951, mediante una propuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés), se crea la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (ENCPYS). Esta institución inició cursos con cuatro carreras profesionales: Ciencias Políticas, Ciencias Diplomáticas, Periodismo y Ciencias Sociales. La carrera de Sociología se inicia con un perfil amplio que agrupaba diferentes disciplinas sociales. En 1966, con la aplicación del segundo plan de estudios, la carrera adquiere un perfil definido que considera como fundamentales las materias teóricas, los métodos de investigación, las técnicas estadísticas y el aprendizaje de idiomas.<sup>3</sup>

En las décadas de 1960 y 1970 la enseñanza de la sociología empieza a diversificarse a nivel nacional. En 1965, Pablo González Casanova asume la dirección del IIS y empieza a diseñar un programa de largo alcance para vincular la investigación sociológica con la docencia. Este proyecto se inició con la creación de la *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* como el principal medio de difusión de los trabajos científicos realizados en la ENCPYS. También se fundaron los primeros centros de investigación. Se estableció el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), dedicado al análisis de América Latina y el Caribe; el Centro de Estudios de Desarrollo, que posteriormente se convertiría en el Centro de Estudios Sociológicos, y el Centro de Estudios de Documentación y Estudios Administrativos. En 1969, con la creación de los estudios de posgrado, la ENCPYS se transforma en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), convirtiéndose en el principal centro de enseñanza de ciencias sociales del país.

A finales de la década de 1970, como respuesta a la creciente demanda de estudios superiores y la ampliación de la matrícula universitaria, se crearon otras instituciones para la enseñanza de la sociología. En 1975, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) crea el Departamento de Sociología que ofrece la Licenciatura en Sociología en sus tres planteles: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. En este mismo año se inaugura la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y en 1976 la FES Aragón, planteles de la UNAM que también ofrecen esta la licenciatura.<sup>4</sup>

3. Cf. Alfredo Andrade Carreño, *La sociología en México*.

4. Cf. Adriana Murguía Lores, "La sociología en México: génesis y desarrollo", *Convergencia*, N° 2, 1993, pp. 11-23.



El proceso por descentralizar la carrera de Sociología del área metropolitana<sup>5</sup> ha sido un proceso gradual. Las ciencias sociales en México han presentado un amplio crecimiento matricular y una diversificación dentro del territorio nacional. Según las estadísticas de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Licenciatura en Sociología en México se imparte al menos en veintidós estados de la República y suman un total de treinta licenciaturas entre universidades autónomas y estatales<sup>6</sup> (ver tabla).

Entre las principales universidades estatales fuera del área metropolitana que cuentan con mayor matrícula para formar sociólogos en el país se destacan la Universidad de Guadalajara (480), la Universidad Autónoma de Guerrero (272), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (237), la Universidad Veracruzana (221) y la Universidad Autónoma de Baja California (191).

### **Asociaciones profesionales de sociología en México**

Como se puede observar, la enseñanza en ciencias sociales, y en sociología, cuenta con una gran tradición académica en México. No obstante, la construcción de organizaciones o asociaciones de profesionales en esta disciplina ha tenido poco impacto a nivel nacional. Desde la institucionalización de la sociología como ciencia social en la década de 1950 hasta la actualidad se han constituido pocas asociaciones regionales y nacionales.

A nivel nacional, según describe Raúl Benítez Zenteno,<sup>7</sup> se constituyó por iniciativa de Lucio Mendieta y Núñez la Asociación Mexicana de Sociología, el 19 de febrero de 1951, en la Ciudad de México. El acta constitutiva y los estatutos fueron llevados a cabo ante la notaría N° 82. La asociación surgió como una filial de la International Sociological Association (ISA) constituida en 1948 por propuesta de la Unesco. El objetivo de esta asociación nacional fue crear un órgano académico autónomo que fuera de la Universidad mantuviese y extendiera la sociología en México agrupando a todos los que tuvieran conocimientos

5. El área metropolitana corresponde a Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo.

6. Cf. Cristina Puga, "Las ciencias sociales mexicanas en la primera década del siglo XXI", *Polis*, vol. 8, N° 2, pp. 19-39.

7. Raúl Benítez Zenteno, "Lucio Mendieta y Núñez: sociólogo y fundador de instituciones", en Verónica Camero Medina y Alfredo Andrade Carreño, *Precursores de la sociología moderna en México*, Ciudad de México, Siglo XXI-UNAM, 2008.

### Instituciones que imparten la carrera de Sociología en México, 2018

Estado	Municipio	Universidad	Escuela	Matrícula
Aguascalientes	Aguascalientes	Universidad Autónoma de Aguascalientes	Centro de Ciencias Sociales y Humanidades	69
Baja California	Ensenada	Universidad Autónoma de Baja California	Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	59
	Mexicali	Universidad Autónoma de Baja California	Facultad de Ciencias Humanas	72
	Tijuana	Universidad Autónoma de Baja California	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	191
Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Universidad Autónoma de Chiapas	Facultad de Ciencias Sociales	134
Chihuahua	Juárez	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	108
Coahuila	Torreón	Universidad Autónoma de Coahuila	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	83
Ciudad de México	Azcapotzalco	Universidad Autónoma Metropolitana	Unidad Azcapotzalco	1.304
	Coyoacán	Universidad Nacional Autónoma de México	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	891
	Iztapalapa	Universidad Autónoma Metropolitana	Unidad Xochimilco	1.007
	Tlalpan	Universidad Autónoma Metropolitana	Unidad Iztapalapa	595
Guanajuato	León	Universidad Pedagógica Nacional	Unidad Ajusco	229
	Acapulco de Juárez	Universidad de Guanajuato	Campus León, División de Ciencias Sociales y Humanidades	66
Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Universidad Autónoma de Guerrero	Unidad Académica de Sociología	272
	Pachuca de Soto	Universidad Autónoma de Guerrero	Unidad Académica de Filosofía y Letras	107
Hidalgo	Pachuca de Soto	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	84
Jalisco	Guadalajara	Universidad de Guadalajara	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	480

Estado de México	Naucaipan de Juárez	Universidad Nacional Autónoma de México	Facultad de Estudios Superiores Acatlán	641
	Nezahualcóyotl	Universidad Nacional Autónoma de México	Facultad de Estudios Superiores Aragón	392
	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	149
	Zumpango	Universidad Autónoma del Estado de México	Centro Universitario UAEM Zumpango	149
Morelos	Cuautla	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Facultad de Estudios Superiores Cuautla	60
Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Universidad Autónoma de Nuevo León	Facultad de filosofía y letras	91
	San Pedro Garza García	Universidad de Monterrey	División de Educación y Humanidades	10
Puebla	Puebla	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	237
Querétaro	Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Campus Centro Universitario	96
Sinaloa	Culliacán	Universidad Autónoma de Sinaloa	Unidad Académica Escuela de Filosofía y Letras	28
	Mazatlán	Universidad Autónoma de Sinaloa	Unidad Académica Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	75
Sonora	Hermosillo	Universidad de Sonora	Departamento de Sociología y Administración Pública	102
Tabasco	Centro	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades	192
Tamaulipas	Victoria	Universidad Autónoma de Tamaulipas	Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades	39
Tlaxcala	Tlaxcala	Universidad Autónoma de Tlaxcala	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología	75
Veracruz	Xalapa	Universidad Veracruzana	Facultad de Sociología	221

Fuente: ANUIES, elaboración propia con datos de los Cuestionarios 911\_9A. Ciclo escolar 2017-2018. Inicio de cursos.

y vocación por esta materia. La Asociación Mexicana de Sociología y el IIS han colaborado en la organización de doce congresos nacionales de sociología que se han reunido en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Ciudad Victoria y Toluca, y han tratado temas generales y regionales como la criminalidad, la educación, la economía, la vida rural y la urbana, el derecho, la revolución, la planificación, la política, el trabajo y el ocio. De igual manera, la Asociación Mexicana de Sociología fundó en 1991 la *Revista Interamericana de Sociología*, espacio que ha servido para difundir el conocimiento sociológico del país. Actualmente dicha asociación tiene como presidente a Fernando Castañeda Sabino, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Otra organización a nivel nacional que aún mantiene funcionamiento es el Colegio Mexicano de Sociología sc (Colmes);<sup>8</sup> este se fundó en 1992 en Veracruz y se llamó primeramente Colegio de Sociólogos de Veracruz. Nace como un colectivo académico entre profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana y la UNAM. Sus fundadores fueron Francisco Gómez Jara, José Luis Blanco Rosas y Margarita Urias Hermosillo. Posteriormente se integrarían profesores y egresados de la Universidad Veracruzana del Sistema de Enseñanza Abierta. En 2013 el Colegio tiene un período de reestructuración y finalmente en 2015 logró su constitución legal como sociedad civil, nombrándose Colegio Mexicano de Sociología sc. En 2017 obtuvo la acreditación como institución académica autónoma, así lo declara su acta constitutiva con número 280.218, sellada en agosto del mismo año por el notario público N° 2 con sede en la Ciudad de Orizaba, Veracruz.

El Primer Congreso Mexicano de Sociología organizado por el Colmes se llevó a cabo en noviembre de 2017 en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano. En dicha ocasión se presentaron aproximadamente cien ponencias que correspondieron a diez mesas de trabajo que buscaron poner de relieve el debate sociológico plural que existe sobre los más diversos temas de la disciplina. Se contó con la participación de ponentes de universidades de México, entre las cuales se destacan la Universidad Veracruzana, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato, la Universidad

8. La información del Colmes fue recabada en su página de internet <https://congresocolmes.wixsite.com/congresocolmes>.

Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Contó con asistentes de países de Latinoamérica como Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. El II Congreso Mexicano de Sociología se realizó en las instalaciones de la Universidad Veracruzana en 2018, y tuvo como temática central las reflexiones sobre Karl Marx y el marxismo en México y Latinoamérica. Recientemente, el Colmes realizó su III Congreso Mexicano de Sociología en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en 2019.

A nivel regional, se han constituido dos asociaciones de sociólogos. La primera fue la Red Mexicana de Sociólogos e Instituciones de Sociología (Remsis)<sup>9</sup> fundada en abril de 2013 por iniciativa de distintas universidades e instituciones entre las que se encuentran la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Ensenada), la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Mexicali), la Universidad Autónoma Benito Juárez (Oaxaca), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de México (Unidad Toluca y Zumpango), la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Iztapalapa), la UNAM (Ciudad Universitaria y FES Aragón), la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

La Remsis fue una red formada por profesionales de la disciplina en sociología e instituciones de distintas entidades federativas de México relacionadas, unidas para estudiar, analizar, compartir experiencias y producir conocimientos sobre la dinámica social con el fin de fortalecer esta disciplina en el país. El objetivo general de la Red era crear una plataforma para todos aquellos profesionales de la sociología o con alguna relación profesional con esta, así como instituciones en las que se imparten asignaturas o programas de sociología con la finalidad de establecer vínculos para intercambiar experiencias de investigación y de enseñanza con respecto a la formación de profesionales en sociología.

En este sentido, la realización de congresos nacionales fue una de sus principales acciones. El primer congreso que se llevó a cabo por parte de la Remsis se realizó en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2014. El impacto de los acuerdos de dicha reunión se midió por la respuesta

9. La información de la Remsis fue recabada en su página de internet <http://politicas.uaemex.mx/sociologia2015/index.php/que-es-la-remsis>.

a la convocatoria al Congreso y a la constitución de la Red donde participaron alrededor de veinticinco instituciones y se presentaron un centenar de ponencias; además de contar con la participación de Pablo González Casanova, Néstor García Canclini, Gilberto Giménez y Alfonso Bouzas como ponentes magistrales. Posteriormente, en 2015 se realizó el II Congreso Nacional de Sociología llevado a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se contó con la participación de diferentes universidades del país, así como con las conferencias magistrales de autores latinoamericanos como Theotônio dos Santos y Sergio Zermeño. Sin embargo, por falta de apoyo y seguimiento por parte de las instituciones responsables, la Remsis dejó de realizar sus reuniones y desapareció en 2016.

La segunda es la Asociación de Sociólogos, Colegio de Profesionistas, AC (ASCP).<sup>10</sup> Esta organización surge a partir de una serie de reuniones de un grupo de egresados de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. Dichas reuniones se realizaron de manera informal, pero con la visión de constituirse como una asociación o colegio establecido. En 2010 se extiende la invitación a más profesionales de la sociología para asistir a la reunión celebrada en junio de ese mismo año, cuyo resultado fue la elección de un comité ejecutivo, con la tarea de formalizar la asociación. Este comité quedó integrado por Elvira Cota González como presidenta, Marco Antonio Delgadillo Villanueva como secretario, Liliana Orozco Morales como tesorera, Efraín Mendoza López como primer vocal y Nallely Manríquez Bello como segunda vocal. La ASCP se constituyó legalmente en febrero de 2011, con una membresía de veintidós socios fundadores. A partir de esa fecha se han realizado asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, conferencias, reuniones de trabajo y eventos sociales.

Entre los principales objetivos de la ASCP están los siguientes: agrupar a los profesionales del Estado de Baja California para buscar la solidaridad interna que promueva, difunda y amplíe los intereses de estos, así como contribuir al fortalecimiento del ejercicio profesional de los sociólogos y al análisis sociológico de la problemática local, regional y nacional para emitir informes, dictámenes y asesorías que se consideren oportunas o se le soliciten para promover el fortalecimiento del tejido social. Asimismo, busca fomentar y promover el desarrollo de la sociología en los campos de la cultura, la investigación, la educación y la práctica profesional;

10. La información de la ASCP fue recabada en su página de internet <https://ascpac.webnode.mx/>.

participar en la administración pública a efectos de que sus servicios se realicen con el más alto sentido humano, que coadyuve al desarrollo social a través de la gestión e intervención en la sociedad; desarrollar los medios para lograr todos los fines expuestos o similares, colaborando con asociaciones e instituciones afines, así como en cursos de especialización, conferencias, seminarios y congresos tanto nacionales como internacionales, y cumplir con el ejercicio de sus funciones sobre la base de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Ejercicio de las Profesiones para el estado de Baja California.

Esta asociación ha realizado diversos congresos internacionales. El Primer Congreso Internacional de Sociología “Frontera Baja California-California” se realizó en noviembre de 2004 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en su campus Ensenada. Se presentaron 73 ponencias con un total de 117 académicos, quienes expusieron sus trabajos de investigación en cinco mesas temáticas: Cultura, Desarrollo Sustentable, Educación, Estado y Sociedad, y Globalización y Migración. La participación de académicos de la entidad fue muy importante, y también se contó con la presencia de investigadores de otras regiones y estados del país y del vecino estado de California. En octubre de 2006 se llevó a cabo el II Congreso Internacional de Sociología “Globalidad y localidad” en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera del Pacífico en Ensenada, Baja California, que situó sus objetivos específicos en el análisis de la relación entre lo local y lo global. Durante el evento se contó con seis conferencias magistrales presentadas por Rosalba Aída Hernández Castillo (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), José Manuel Valenzuela Arce (El Colegio de la Frontera Norte), Héctor Díaz-Polanco (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), Bryan Roberts (Universidad de Texas en Austin) y David Piñera Ramírez (Universidad Autónoma de Baja California). El III Congreso Internacional de Sociología “Imaginando la sociología del siglo XXI” se llevó a cabo del 3 al 6 de noviembre de 2008 en el Centro Estatal de las Artes y el hotel Corona de Ensenada y tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre los desafíos de la sociología del siglo XXI con una mirada de triple perspectiva –crítica, global y de largo aliento– por medio de cinco ejes temáticos: Espacios Laborales, Estado y Organización Colectiva, Cultura y Subjetividades, Globalización y Territorio, y Teoría Sociológica y Nuevos Paradigmas. Se contó con conferencias magistrales de José Luis Torres y Rocío Guadarrama Olivera (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa), Elizabeth Jean Maier-Hirsch (El Colegio de la Frontera Norte) y Pablo González Casanova, profesor emérito de la UNAM.

El IV Congreso Internacional de Sociología “Conectividades y disyuntivas: la complejidad en el quehacer sociológico”, se realizó en septiembre de 2010 en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, Baja California. Tuvo por objetivo generar un espacio de reflexión sobre la complejidad de los fenómenos sociales de la actualidad y su abordaje a través de los cinco ejes temáticos ya mencionados. En septiembre de 2005 se llevó a cabo en la misma sede el V Congreso Internacional de Sociología “Espacios contestatarios”, el cual contó con un centenar de conferencias agrupadas en los mismos ejes temáticos.

El VI Congreso Internacional de Sociología “Construcción de ciudadanías: nuevas realidades y miradas interpretativas” se llevó a cabo en septiembre de 2014 y tuvo como objetivo fomentar el debate sobre los desafíos de la construcción de la ciudadanía, debate en que se interrogó y amplió el concepto mismo a través de cinco ejes: Metodología y Nuevos Paradigmas, Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Culturales y Subjetividades, Espacios Laborales y Territorio y Ciudadanía. En septiembre de 2016 se llevó a cabo el VII Congreso Internacional de Sociología “Voces de resistencia: miradas críticas desde la sociología” en el Centro Científico y Cultural Caracol, en Baja California. El objetivo de ese espacio académico fue explorar con una mirada crítica las bases sociales de resistencia y las condiciones bajo las cuales se relacionan con alternativas socioeconómicas y políticas, además de las articulaciones entre luchas de resistencia y la defensa del espacio público, los derechos e identidades colectivos y de la calidad de vida. Asimismo, se buscó contribuir a la construcción del conocimiento sustentado en un enfoque epistemológico que incorpore la pluralidad de experiencias y saberes a través de cinco ejes temáticos: Prácticas y Paradigmas Sociológicos, Espacios Laborales, Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Culturas y Subjetividades y Geografías de Resistencia. Por último, en 2018, se realizó el VIII Congreso Internacional de Sociología “La intervención: ¿un compromiso de la praxis sociológica?”. El objetivo fue abrir el debate sobre el quehacer sociológico y su compromiso, abordando el proceso dialéctico entre el trabajo investigativo de análisis, intervención y reflexión del científico social, y las acciones del actor, su memoria, su visión, su espacio y su conocimiento. Para esta última edición se contemplaron tres conferencias magistrales y tres talleres, setenta mesas de trabajo, ocho documentales, diez presentaciones de libros, diecinueve carteles, así como mesas plenarias, todas actividades relacionadas con las experiencias en el campo de lo social, de lo político, de lo económico y de lo cultural.

Por último, en un marco general de ciencias sociales en el país existe el



Consejo Mexicano de Ciencias Sociales AC (Comecso),<sup>11</sup> una organización nacional fundada en 1977 por un grupo de académicos, responsables de diversos centros de investigación y docencia, preocupados por impulsar el desarrollo de las ciencias sociales en México. Cuenta con 86 instituciones asociadas de todo el país y se ha reorganizado en coordinaciones regionales, las cuales contribuyen al diagnóstico de las ciencias sociales en la nación, a la creación de grupos de trabajo y de redes de vinculación para abordar interdisciplinariamente temas de interés para las ciencias sociales.

Comecso rige su actividad a través de su asamblea general que se reúne anualmente, de un comité directivo en el que participan académicos y representantes oficiales de trece universidades del país y una secretaria ejecutiva que organiza y coordina los trabajos de la asociación. Actualmente el cargo está ocupado por Jorge Cadena-Roa, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. A su vez, los coordinadores regionales son Juan Manuel Romero Gil de la Universidad de Sonora, para la región noroeste; Rebeca Moreno Zúñiga de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, para la región noreste; Medardo Tapia del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, en la región centro-sur; Eduardo Carlos Bautista del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, en la región sur-sureste y María García Castro de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco en la región metropolitana.

Este consejo ha propiciado la formación de grupos de trabajo que conforman redes nacionales de investigadores en temas como procesos electorales, empresas y empresarios, desastres y religión; ha puesto en marcha varios programas de formación en ciencias sociales en universidades del país, llevado a cabo la Encuesta Nacional sobre Ciencias Sociales en los años 80, así como la publicación de diversos libros sobre cuestiones sociales y políticas. Entre sus proyectos actuales se cuenta la conformación de un gran banco de datos sobre el estado de las ciencias sociales en el país. A partir de la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología en julio de 2002, Comecso se integró como miembro de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT), lo cual le ha significado tener ante dicho organismo consultivo del gobierno federal la representación de las instituciones que se encargan de la investigación y docencia en las áreas de ciencias sociales en el país y ser parte

11. La información del Comecso fue recabada en su página de internet <https://www.comecso.com>.

de la presentación de proyectos y de algunas de las tomas de decisión más importantes que se llevan a cabo en materia de ciencia y tecnología.

El Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por Comecso se realizó en abril de 1999 dentro de las instalaciones de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Posteriormente, en octubre de 2009, y con el apoyo de diversas instituciones (UNAM, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales), Comecso organizó el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales celebrado en la ciudad de Oaxaca, el cual permitió el encuentro entre investigadores de las diversas disciplinas sociales y una actualización de sus temáticas y perspectivas.

En febrero de 2012 se realizó el III Congreso Nacional de Ciencias Sociales en la Ciudad de México, enfocado en la temática de los nuevos horizontes de las ciencias sociales en el país. Para el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Comecso eligió la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para su realización en marzo de 2014. En marzo de 2016 se llevó a cabo el V Congreso Nacional de Ciencias Sociales, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Recientemente llevó a cabo el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales en marzo de 2018 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

### **Reglamentación específica de la formación del sociólogo en México**

Uno de los cambios cualitativos de la tradición sociológica y de la formación de profesionales en ciencias sociales en México es la construcción de programas de acreditación y actualización de las instituciones que forman sociólogos en el país. Aunque no se cuenta con una reglamentación nacional de la profesión de sociólogos, pues cada universidad estipula el perfil de egreso de sus estudiantes y los criterios para obtener el grado de licenciado en Sociología, existe una organización que evalúa las instituciones y los programas que forman profesionales en ciencias sociales. La Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (Acceciso)<sup>12</sup> se fundó en 2002 por iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Este organismo está constituido por diferentes asociaciones civiles para evaluar

12. La información sobre Acceciso fue recabada en su página de internet <http://www.acceciso.org.mx>.

los programas de licenciatura. Las carreras son acreditadas según el nivel de su infraestructura, el cuerpo de docentes, los resultados de sus investigaciones científicas y la relación con la preparación de sus estudiantes, su titulación y su vinculación con la sociedad. La misión de este organismo es promover en la comunidad académica de las instituciones de educación superior en ciencias sociales de México y de otros países la evaluación, acreditación y certificación en los ámbitos de la Sociología, las Relaciones Internacionales, la Comunicación, las Ciencias Políticas, la Administración Pública, la Política y Gestión Pública, la Arqueología, la Antropología, el Trabajo Social, las Ciencias de la Información, la Bibliotecología, la Historia, las Ciencias de la Educación y la Geografía, acorde con los lineamientos nacionales.

El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de los programas de licenciatura y del ejercicio profesional, así como propiciar y fortalecer una cultura de la evaluación mediante el establecimiento de criterios compartidos de medición de la calidad de nuestras disciplinas, a partir de los ejercicios de autoevaluación de las instituciones, conforme a las variables y los indicadores establecidos por la Accesco y avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. A lo largo de quince años, esta organización ha evaluado y acreditado 220 programas de formación profesional en ciencias sociales, lo que ha brindado un importante impulso en la institucionalización de las disciplinas sociales, y particularmente en la formalización del oficio del sociólogo.



## Pasado, presente y futuro: el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile\*

*Maite Descouvieres\*\**

El 24 de noviembre de 1982 se creó el Colegio de Sociólogos de Chile, con el fin de dar apoyo y protección a mujeres y varones profesionales de la carrera en época de dictadura militar, con la elección de once miembros del consejo general con los siguientes objetivos:

- Promover y velar por la racionalización, el desarrollo y la protección, el perfeccionamiento, el progreso y las prerrogativas de la profesión de sociólogos, y por el regular y correcto ejercicio de la profesión por parte de sus asociados.
- Estimular las investigaciones científicas de interés sociológico y organizar congresos nacionales e internacionales.
- Prestar su colaboración a los organismos docentes en la formación profesional y procurar el intercambio de profesionales con los demás países.
- Estimular el perfeccionamiento profesional y propender a la difusión de la profesión por todos los medios a su alcance.
- Capacitar, asesorar y orientar a sus asociados en materias que sean de interés profesional.
- Prestar servicios a sus asociados.

Una de las principales labores del colegio fue primeramente intercambiar y difundir información respecto de las persecuciones, el hostigamiento y las diversas iniciativas del régimen dictatorial para impedir el desarrollo de la sociología en Chile. Las universidades estaban intervenidas y la carrera de Sociología solo se impartía en la Universidad de Chile, dirigida por

\* Las fuentes del proceso de formación histórica del Colegio se basan en un trabajo del sociólogo Jorge Gilbert.

\*\* Socióloga. Presidenta de la directiva del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile AG.

distintos personeros asociados del gremialismo y/o la ultraderecha, que no tenían una relación estrecha con el trabajo sociológico de investigación ni de políticas públicas ni del mundo profesional. Pocos profesores tenían una vocación sociológica y se declaraban firmemente como académicos, opositores a la intervención militar en la universidad. Algunos de ellos, como Alfonso Arrau, permitieron que la generación de los años 80 tuviera un acercamiento con los clásicos y la proscripta literatura latinoamericana, como el marxismo entre los primeros o la teoría de la dependencia en la segunda. Muchos colegas, cuya mayoría trabajaba en el tercer sector (ONG y fundaciones de la Iglesia Católica o vinculadas a la cooperación internacional), fueron objeto de acoso por parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), los militares o funcionarios gubernamentales. Tanto la Flacso como la Academia de Humanismo Cristiano (AHC) eran “supervisados” permanentemente, bajo la sospecha de desarrollar escuelas de pensamiento marxista o actividades terroristas encubiertas. Un contingente importante de intelectuales y profesionales sociólogos se cobijó en la AHC, a la sazón protegida por la Iglesia Católica del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien la había creado en 1975. Silva Henríquez la justificó del siguiente modo:

La intervención de las universidades por el régimen militar significó la exoneración por razones políticas de académicos de alto valor para el país. Convencido como estaba de que la riqueza de un país es la de sus valores humanos, contemplé con angustia cómo se gestaba un inexorable camino de exilio para nuestros talentos. Por eso decidí crear la Academia de Humanismo Cristiano, de la cual fui su presidente.<sup>1</sup>

Intelectuales como Enzo Faletto, Manuel Antonio Garretón y muchos otros impartían clases de sociología, economía y ciencias sociales. Numerosos estudiantes de la Universidad de Chile asistían a esas cátedras, que les reportaban una sociología viva, conectada con los problemas del país. Como la AHC se ramificó en diversos núcleos o grupos, como el Grupo de Estudios Agrorregionales (GEA), que lideraba Rodolfo Gálvez (expresidente del Colegio de Sociólogos) apoyado por la Fundación Ford.

La Academia de Humanismo Cristiano se ligaba con tres corporaciones: el mencionado GEA, el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA)

1. *Memorias de Raúl Silva Henríquez*, ed. Ascanio Cavallo, Santiago de Chile, Copygraph, 1991.

y el Centro de Estudios Sociales y Educación (Sur Profesionales). Estas instituciones, junto con Flacso, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE), el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, el Servicio Evangélico para el Desarrollo (Sepade) y otros desarrollaron espacios para la creación y difusión de la sociología (y otras ciencias sociales). Otro espacio para el desarrollo de la sociología fue el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), liderado por el abogado y cientista político Carlos Hunneus. Allí colaboró, entre otros, Eduardo Hamuy, el primer sociólogo que hizo encuestas en Chile (un estudio de opinión sobre el lanzamiento del primer satélite, el Sputnik, en 1957) y que fundó en 1965 el Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO) de la Universidad de Chile. Hamuy contó alguna vez que uno de los trabajos sociológicos que hizo, con cero impacto en la opinión pública, fue el estudio del plebiscito de 1980, donde se documentó el hecho de que decenas de funcionarios del régimen votaron quince o más veces y cómo los resultados fueron completamente fraudulentos.

En 1984, el Colegio organizó el Primer Congreso de Sociología, realizado en el Club Español de la Alameda. Decenas de sesiones durante tres días reunieron por primera vez a los sociólogos como un colectivo y permitieron conocer los trabajos profesionales-académicos que se realizaban fuera de la universidad militarizada.

En agosto de 1986 se realizó el II Congreso Chileno de Sociología. El presidente de la comisión organizadora, Manuel Antonio Garretón, presentó su ponencia “Seis tesis sobre redemocratización en Chile”, que junto a las ideas y reflexiones de colegas como José J. Brunner y Eugenio Tironi marcó de algún modo las estrategias políticas de las fuerzas opositoras a la dictadura.

En una oficina cedida solidariamente por el Colegio de Enfermeras de Chile, el Colegio funcionó y organizó el III Congreso Chileno de Sociología, en 1989, evento relevante donde las tesis del crecimiento con equidad y redemocratización de la sociedad chilena empezaban a agruparse para dar contenido programático a las propuestas políticas posplebiscito de 1988, donde ganó la oposición a la dictadura y comienza a delinearse la llegada de la democracia en Chile.

Una vez instalada la democracia, muchos sociólogos pasan a ocupar posiciones en el aparato del Estado, especialmente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideplan) y los ministerios sociales como vivienda, salud y educación. El colegio se dispersa y decae como espacio social, influido por el entusiasmo y las nuevas oportunidades que el pe-

riodo histórico ofrece a la profesión, que comienza a desestigmatizarse y a ser reconocida.

El IV Congreso de Sociología en 1992 da lugar a la escisión entre un grupo que patrocina la creación de una nueva entidad, de carácter más académico, denominada Sociedad Chilena de Sociología, y otros que pugnan por fortalecer el colegio y un carácter más gremial.

Durante los veinte años que siguen al retorno democrático, la actividad del colegio prácticamente desaparece. En 1999, la Sociedad Chilena de Sociología, instalada en la Universidad de Concepción, organiza el XXII Congreso Latinoamericano de Sociología (el III ALAS en Chile), pero tampoco se desarrolla posteriormente. La “explosión” de oportunidades laborales para los sociólogos, dentro y fuera del Estado, generó una diáspora, y los sociólogos tampoco fueron inmunes a los procesos de individualización del neoliberalismo. Además, la oferta universitaria de sociología a mediados de los años 90 se expandió mucho y en 2003 existían más de quince programas de pregrado en sociología, lo que permitió reclutar una gran cantidad de nuevos colegas. Se crea una red de carreras de sociología, la Red de Sociología de las Universidades de Chile (Sociored).

En el marco de las reuniones de Sociored, a la que pertenecen catorce de las dieciséis universidades que imparten la carrera de Sociología en el país, se empieza a retomar la idea de generar conversaciones para reactivar el Colegio de Sociólogos. En noviembre de 2011, el Colegio de Sociólogos y Sociólogas retoma sus labores.

Luego de conversaciones con sus miembros fundadores, se retomó la idea de refundar la institución. El presidente en ese momento era Rodolfo Gálvez y fue a quien un grupo de académicos solicitó se pusiera nuevamente al frente de la organización para reactivar su funcionamiento. Así lo hizo hasta que se llamó a elecciones el 24 de noviembre de 2012, cuando resultó electo como presidente Pablo Cottet, académico del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

Cottet cuenta que en sus inicios el Colegio de Sociólogos fue “una organización gremial fundamental en tiempos de dictadura, para dar apoyo y protección” a sociólogas y sociólogos víctimas del golpe de Estado. A esta organización pertenecieron referentes de la sociología como Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, Sergio González y muchos otros.

“La Sociología la cerraron en 1973 con el golpe de Estado y quienes estudiaban o ya se habían titulado se agruparon en el Colegio de Sociólogos, convirtiéndolo en un órgano de defensa de la Sociología y de los profesionales chilenos”, comentó Cottet.



De hecho, la institución cobró tal sentido de defensa que en épocas de democracia el interés por continuar se debilitó y, a partir de 1990, dejan de reunirse: “Fito [Rodolfo] Gálvez explicó que no había mayor interés por parte de los socios. Varios se habían ido a trabajar a organizaciones internacionales y a otras instituciones y algunos pensaban que ya se había cumplido su función y que en democracia no tenía razón de seguir existiendo”, agregó el académico.

En tal oportunidad se renovó la otra mitad del directorio, con siete cargos, y resultó elegido presidente Pablo Cottet, vicepresidente Hernán Mlanidic, Julio Troncoso como secretario general y Liliana Zalazar como tesorera. A la vez, se crearon comisiones de trabajo como la de comunicaciones y la de desarrollo institucional.

### **En defensa de la profesión**

“El objetivo”, afirmó el presidente del Colegio de Sociólogos, “es reformar los estatutos y levantar a los capítulos regionales”. Y agregó que durante ese período también se llevó a cabo una encuesta para relevar las condiciones laborales de sociólogas y sociólogos del país: “Hay muchos profesionales que trabajan a honorarios, por lo tanto, decidimos hacer esta encuesta con el fin de hacer un censo de profesionales en Chile, cuyos datos serán analizados durante junio y julio. Si pudiéramos estimar cuántos son y ponerlos en contacto, sería un gran aporte. Nuestro interés es saber las condiciones en las que se desarrolla el oficio”.

El conocimiento previo que se tiene es que sociólogos y sociólogas chilenos se encuentran trabajando principalmente en las universidades, en las empresas de estudio de mercado y en el Estado. “La mayoría de las sociólogas y los sociólogos del Estado y quienes hacen clases trabajan a honorarios”, agregó Cottet.

Esta es una de las preocupaciones gremiales del Colegio. La otra es lograr que la carrera de Sociología sea de exclusividad universitaria. “Con la ley LOCE [Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza]”, agregó, “dejó de ser una carrera de exclusividad universitaria, por lo que también la pueden dictar institutos, por ejemplo”.

De ahí que desde esta organización gremial se hicieron las gestiones necesarias para reactivar un reclamo de quienes son profesionales de la carrera, ya hecho con anterioridad: que se agregara un inciso a la ley en el que se señalara la exclusividad universitaria de la carrera. “Esto se aprobó en Senadores, pero al pasar a la Cámara de Diputados se

rechazó el pedido y pasó a una comisión mixta que no sesiona desde 2012”, apuntó.

El principal fundamento de este pedido es que la actividad de la socióloga o el sociólogo está vinculada a la investigación y esa es una actividad que las universidades están obligadas a desarrollar, no así el resto de las instituciones educativas. “La sociología ha sido siempre un oficio que incide en el desarrollo organizacional, en la resolución de conflictos, en la educación, y la base de esto está en la investigación social”, remarcó Cottet.

Por otro lado, la comisión de asuntos de agenda pública generó una declaración que se dio a conocer a los medios masivos de comunicación en la que se repudió el tratamiento que dio el Instituto Nacional de Estadísticas a la información recopilada en el XVIII Censo de Población y VII de Vivienda realizado en 2012.

## La antipática pero necesaria defensa política de la tecnocracia en América Latina

*Fernando Filgueira\**

Las sociedades modernas han incorporado, como un aspecto normal de su funcionamiento, la generación, el ordenamiento y la puesta en disponibilidad de la información comprendida en las denominadas estadísticas públicas o nacionales. Si es cierto que las sociedades que aspiran a un futuro mejor requieren una política de conocimiento, el desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de estadísticas nacionales, sistemas de información sectoriales y sistemas de evaluación basados en dichos sistemas de estadísticas e información deben ser vistos como una parte de ese propósito. Aunque generalmente la noción de política de conocimiento se atribuye exclusivamente a las ciencias y tecnologías duras, el rol que juegan las llamadas “tecnologías blandas” en cuanto información básica para el conocimiento de la sociedad y orientación tanto de la política pública como de los agentes privados y en sus relaciones con los organismos internacionales no debería minimizarse. En este sentido, una política de conocimiento implica, antes que nada, una política de Estado, una política que defina metas y objetivos de largo plazo, que sea capaz de sostenerla con la continuidad necesaria, que asegure su implementación, así como el financiamiento requerido para cumplir esas metas.

El éxito en la creación de sistemas de información estadística, sectorial y de evaluación en América Latina ha sido desigual y en términos generales modesta. Brasil, México y Chile se mencionan como algunos de los pocos países que se están aproximando a la creación de verdaderos sistemas de estadísticas nacionales, aunque lejos aún de sistemas de evaluación integrados, mientras que en la mayor parte de la región es dudosa la aplicación del concepto “sistema” a un conjunto disperso de instituciones públicas débilmente conectadas entre sí, superpuestas y descoordinadas

\* Doctor en Sociología. Profesor y coordinador de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [ffilgueirap@gmail.com](mailto:ffilgueirap@gmail.com)

y, con frecuencia, carentes de recursos financieros y humanos suficientes. Parecen existir obstáculos de diferente naturaleza si se quieren enfrentar los desafíos de crear un sistema integrado y razonablemente abarcativo de las estadísticas nacionales, sectoriales y de evaluación. Para superar esos obstáculos no parece suficiente dejar librado el desarrollo del sistema a las iniciativas particulares que pueden adoptar los organismos a cargo de las estadísticas. Al contrario, parece imprescindible definir una política explícita e intencional directamente dirigida al mejoramiento de las estadísticas nacionales, los sistemas de información sectoriales y al desarrollo y uso de sistemas de evaluación. En definitiva, debe propenderse a una tecnocratización del Estado y sus políticas.

Estos sistemas de información y evaluación y la construcción de estadísticas nacionales poseen puntos de contacto, pero se diferencian claramente de los normalmente considerados saberes disciplinarios. Si bien los diferentes sectores del Estado poseen saberes que les son propios a sus cometidos, y si bien dichos saberes alimentan la definición de indicadores y sistemas de evaluación, el objetivo último del Estado es crear sistemas de información que trasciendan, aun cuando se apoyan en ellos, en estos saberes disciplinarios. Muy especialmente debe desarrollar sistemas de indicadores y de evaluación que muchas veces se contraponen a los intereses y las preferencias de los operadores disciplinarios. Ni los banqueros deben definir sus propios parámetros de evaluación, ni los médicos, ni los maestros y pedagogos.

La sociología se constituye, en este sentido, en una disciplina clave en la construcción de los sistemas de información y evaluación. En particular es el bagaje y la tradición metodológica de los sociólogos la que ofrece un diferencial en la labor definida. Dos elementos clave de la disciplina se hacen presentes ante tales desafíos. A diferencia de otras disciplinas sociales, la sociología ha lidiado durante mucho tiempo con la necesidad de medir cosas, dimensiones, aspectos de la realidad que no poseen isomorfismo “natural”. La validez del constructo o validez conceptual de los procesos de operacionalización de conceptos en indicadores –o, a la inversa, de entender qué representa conceptualmente un registro, un conjunto de datos– es parte del oficio del sociólogo. Muchas cosas que suceden en el Estado no son naturalmente “cuantitativas”. Hay que asignar números a eventos y a cualidades. La sociología en sus mejores versiones trabaja estos problemas como centro de sus labores.

La otra parte en la cual la sociología se encuentra posicionada en forma única para abordar los desafíos de la evaluación y construcción de sistemas de información es su “desconfianza epistémica”. Las soció-

logas y los sociólogos siempre se preguntan sobre los supuestos y las dinámicas que operan en la definición y el estudio de nuestros objetos y que surgen del poder de los actores, de sus intereses o de sus marcos normativos. Las páginas que siguen procuran justamente discutir el espacio de la tecnocracia en la hechura de políticas públicas desde una perspectiva sociológica. Defender la tecnocracia en la definición de las políticas públicas es defender los sistemas de información y evaluación en el Estado. Pero tal tarea supone conceptualizar en forma no ingenua las fronteras de las dimensiones tecnocráticas y democráticas de la forja de la acción del Estado.

### **Los dos déficits de las políticas públicas latinoamericanas: democracia y tecnocracia<sup>1</sup>**

Existe un amplio reconocimiento por parte de analistas de las más diversas orientaciones políticas y académicas respecto de uno de los grandes déficits de la forma en que se producen políticas públicas en las naciones latinoamericanas. Se ha hablado y tipificado dicho déficit de diversas maneras: déficit democrático, fallas de representación, autoritarismo, centralismo, verticalismo, ausencia de voz y falta de transparencia y *accountability* vertical y horizontal. No todas las expresiones refieren al mismo fenómeno, pero todas poseen un denominador común: la idea de falta de participación y decisión de la población, ciudadanía y/o beneficiarios en los sistemas de toma de decisión y contralor de las políticas públicas o acciones del Estado.

Los procesos de democratización nacionales, descentralización territorial e incorporación de actores de la sociedad civil a diversos niveles de la toma de decisiones de las políticas públicas de los Estados se entienden como intentos de mejorar la cantidad y calidad del componente democrático en la hechura de las políticas públicas. La suerte de estos

1. Existe, a mi juicio, un tercer déficit en los Estados latinoamericanos de tipo burocrático, burocrático en el sentido weberiano del término. No me adentraré en esta área ya que requiere un amplio debate con el nuevo gerencialismo público y con las viejas cuestiones sobre clientelismo y patrimonialismo. Solo cerrar, entonces, una idea para otro documento. Los tres déficits de la región, en lo que hace a sus Estados y acciones, son de tipo democrático, tecnocrático y burocrático. La gerencia social orientada a la producción de valor público debe entonces combinar en forma adecuada dosis mayores de democracia, gobierno técnico y gobierno normativo en la producción y ejecución de las acciones del Estado.

procesos y el grado en el cual logran efectivamente mejorar dicha cantidad y calidad democrática está abierto a escrutinio y debate, pero lo que no lo está es la deseabilidad de tales rumbos y nortes en la transformación de nuestros sistemas políticos y la forma en que creamos, mantenemos, administramos y transformamos la acción estatal. A lo sumo, surgen algunas voces disidentes que alertan sobre los riesgos de sobrecarga de demandas a sistemas políticos bajamente institucionalizados y frágiles en sus capacidades fiscales y de gestión. Lo que sí se produce más claramente es el llamado de atención sobre los inmediateismos políticos que pueden generar impacto negativo sobre la necesaria maduración de las políticas y la capacidad de los Estados de ordenar, diferir y postergar demanda.

Frente a esta realidad de la agenda política y de las políticas públicas latinoamericanas, resulta al menos sospechosa la ausencia de menciones que elijan defender no ya el componente democrático de la hechura de nuestras políticas, sino su componente tecnocrático. Debe entenderse que abogar por la *democraticidad* de las políticas públicas y por la *tecnocraticidad* de ellas no es una postura contradictoria, y no lo es porque ambas refieren a funciones diferentes para etapas diferentes de la hechura de dichas políticas. En cuanto el problema de la democracia se orienta esencialmente a definir los fines deseables y a elegir la forma en que dichos fines deseables se traducirán en esfuerzos fiscales y organizacionales concretos, la *tecnocraticidad* se encuentra enfocada fundamentalmente al problema de la eficacia y eficiencia de los medios para alcanzar tales fines. Claro está que esta distinción tan simple de plasmar en papel es extremadamente compleja de dirimir en la realidad, donde ciertos fines son medios para otros fines y muchos instrumentos y medios están cargados de valores, preferencias e intereses políticos sustantivos.

Sin embargo, creo que es importante reconocer que, al menos analíticamente, la democracia debiera encontrar su función primordial en la definición de fines y de valores que articulan, limitan y dan sentido a los medios, en cuanto el componente tecnocrático debe hacerlo preferentemente en el espacio que remite a los problemas de eficiencia y eficacia de dichos medios. El déficit tecnocrático al que hago referencia remite a la baja incorporación de saberes técnicos, sistemas de información y mecanismos de evaluación en la definición y transformación de nuestros instrumentos de acción estatal.

Existe otra función fundamental donde tecnocracia y democracia son dimensiones complementarias de la hechura de las políticas públicas: aquella que remite a la construcción de sistemas de comunicación entre elites, gestores, políticos, grupos de interés y población. El debate

democrático y la validez de las preferencias de los individuos, actores políticos y corporaciones requieren espacios de comunicación eficientes en producir significados compartidos. Esto no debe confundirse con producir unanimidades y consensos automáticos. Por el contrario, posiciones discrepantes y aun abiertamente contrapuestas se requieren, si han de llegar a una resolución democrática de sus diferencias de reglas de juego compartidas y de lenguajes compartidos. Parte de dichas reglas y lenguajes deben provenir de los criterios técnicos con que se definen, miden y analizan los problemas sociales, económicos y políticos en una comunidad.

Así, actores corporativos del mundo empresarial y del trabajo pueden discrepar sobre qué debe hacerse respecto del déficit fiscal, pero ya rara vez discrepan sobre la forma en que se mide dicho déficit, y comparten también algunos consensos básicos sobre cómo ese déficit se vincula con otros problemas económicos. Y, cuando no lo comparten, apoyan sus afirmaciones en datos sobre los que sí comparten su naturaleza esencial y sus formas de medición: gasto, inflación, deuda, etcétera.

El problema central de la región en lo que hace a la calidad de sus políticas públicas no es meramente su déficit democrático –de hecho, es en esta área donde creo que más hemos avanzado–, sino su déficit tecnocrático. Se ha argumentado que las dictaduras y los regímenes burocrático-autoritarios del pasado pecaban de tecnocratismo. Esto es tal vez el mayor mito y la mayor falacia adosados a nuestro discurso político sobre la historia regional. Son contadísimas las situaciones en las cuales los autoritarismos hicieron predominar lógicas tecnocráticas. Por el contrario, diversas formas de clientelismo, patrimonialismo, particularismos, voluntarismos y ritualismo caracterizaron a la hechura de las políticas públicas en el pasado latinoamericano. Esto es cierto en regímenes autoritarios tradicionales, populistas, burocrático-autoritarios y también, claro está, democráticos. No debe confundirse el discurso antidemocrático y antipolítico de las dictaduras con acción racional con arreglo a fines (tal es, en definitiva, una forma básica de definir la acción tecnocrática).

Ahora bien, es verdad que existieron algunos países, y en algunos casos algunos sectores de políticas de algunos países, que sí parecen haber elegido en el pasado un sesgo aparentemente tecnocrático. Algo similar puede decirse de buena parte de los países del exbloque soviético. Aquí sí grandes teorías eran invocadas y espacios insularizados con fuerte componente técnico eran generados para administrar los asuntos del Estado y su acción pública. Pero este tipo de tecnocracia pretendía gobernar sobre la doble naturaleza de la política pública y sus receptores:

los fines y los medios. Allí sí estamos en presencia de una tecnocracia que socaba (o directamente ignora) el componente democrático deseable de toda acción estatal. Los técnicos no son, en estas aventuras, profesionales especializados en definir y debatir las virtudes relativas de diversos medios; son especialistas también en definir las finalidades deseables para las comunidades. No son inteligencia al servicio del Estado y su acción, no son actores responsables y potencialmente responsabilizables de la eficacia y eficiencia de su accionar; son *intelligentsia* que reclama para sí el monopolio del saber en la definición de fines y medios (que, claro está, demasiadas veces terminan pareciéndose excesivamente a las preferencias individuales de ellos y sus sectores inmediatos de apoyo). Es claro que cuando hablo de la deseabilidad de incrementar el tecnocratismo de la hechura de las políticas públicas no me refiero a esta última alternativa. Pero bien se me puede preguntar, entonces, a qué me refiero con tecnocracia. ¿No es el término en sí mismo claro? ¿No indica la idea misma de “gobierno de los técnicos”? Parcialmente, pero no totalmente. Argumento que por tecnocracia, en el sentido positivo que aquí le asigno, debe entenderse *la capacidad de la técnica y de los criterios y productos técnicos de gobernar parte de los procesos de toma de decisiones en políticas públicas*. Pues bien, ¿a qué parte me refiero entonces? Presento aquí los espacios específicos donde creo que la tecnocracia debe estar fuertemente presente y donde hoy existen enormes déficits regionales:

- Los criterios técnicos deben ser centrales en el gobierno de las innovaciones y transformaciones de los sistemas de políticas públicas que no se vinculan a una modificación de los fines de las políticas públicas y deben ser complementarios al gobierno democrático en aquellas innovaciones que sí afectan los fines de las políticas públicas. Es difícil pensar en la importancia de definir una currícula bilingüe si no se conoce adecuadamente la realidad de socialización en el lenguaje de las poblaciones a ser beneficiadas. Es inútil defender la necesidad de transformar e incrementar la atención materno-infantil sin conocer los perfiles epidemiológicos de dicha población y los recursos, procesos y productos que en ese momento ya están efectivamente operando en los sistemas de protección materno-infantil. Las innovaciones, y especialmente las de pública notoriedad, están cargadas de política coyuntural, intuiciones, intereses y voluntarismo. Los ministros y presidentes buscan dejar sus marcas y desarrollan para tal fin una tendencia natural a decir que están haciendo algo diferente de sus predecesores. Habitualmente las innovaciones están asociadas a una percepción más



o menos generalizada de que algo no está funcionando bien o de que no se están logrando los resultados deseados en alguna área. Dicha percepción es muy diferente de un diagnóstico sistemático sobre la base de datos estandarizados. Saber que los vecinos se encuentran molestos con la instalación en su barrio de comedores populares es diferente que saber que solo el 15%, pero un muy locuaz 15%, está molesto, o saber que las razones no son el comedor en sí mismo sino el impacto sobre el valor de sus propiedades, a diferencia de otros que declaran estar molestos por el incremento de personas en situación de calle usando sus jardines y plazas para dormir mientras esperan la apertura del comedor. No es lo mismo sentir que la repetición escolar es muy alta que decir que es superior al 30% a la década anterior, o que se ha mantenido estable a pesar de que se ha incorporado población más pobre al sistema, o que la mayor parte depende de inasistencia, mala conducta o aprendizaje. Señalar las altas tasas de mortalidad infantil en los hijos de madres adolescentes nos da poco insumo para la acción. Entender si esas tasas se concentran en zonas rurales o urbanas, debido a bajo peso al nacer, a enfermedades pos o neonatales, nos dice mucho más. Muy esquemáticamente estos ejemplos sugieren la diferencia entre percepciones, intuiciones y constataciones gruesas versus diagnósticos detallados y sistemáticos orientados a servir a innovaciones en políticas públicas.

- Los criterios técnicos deben gobernar la producción, sistematización y difusión de información que desde el Estado se ofrece para el debate político. Esto no suprime otros criterios y formas de producción y difusión de información (criterios de relevancia pública, de posicionamiento político de gobierno y actores, de mercado, de denuncias respecto de reglas formales e informales de convivencia, de preferencias), así como otros actores que la puedan generar (partidos políticos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil). Pero le compete al Estado ofrecer un conjunto de informaciones (con y sin sistemas de contralor y auditoría externa) estandarizadas, continuas y crecientemente legitimadas que ofrezcan parámetros técnicos al debate público. Dicha producción no puede ser ad hoc. Esto es, el Estado no debe publicar aquella información que el gobierno de turno está interesado en remarcar (aun si ella ha sido respetuosa en su construcción y validación de criterios técnicos adecuados) para la aprobación o la *advocacy* de una política en particular. Esto también va a suceder, y no es en sí mismo negativo. Pero la base informacional que brinda el Estado a los actores políticos y a la población en general no es una política de gobierno, es una

política de Estado. La arquitectura de esos sistemas de información estará necesariamente entrecruzada por intereses políticos diversos, pero el corazón que regula la producción de dicha información debe ser técnico (más complejo es definir el gobierno técnico que define la difusión de esa información). Demasiadas veces un gobierno decide colocar en la agenda temas de reforma sin poseer y haber difundido los elementos centrales de una evaluación diagnóstica adecuada. Demasiadas veces el Estado y los actores políticos discuten sobre la necesidad de incrementar el crédito a microempresas cuando no se sabe o no se comparten informaciones comunes acerca de cuántas existen, su capital de giro y el número de personas que en ellas trabajan. No me estoy refiriendo aquí a la necesidad planteada en el primer punto de conocer lo que se quiere cambiar, sino a la otra función fundamental de los sistemas de información y su rol en gobernar procesos de tomas de decisiones: la creación de parámetros informacionales compartidos que permitan entablar diálogos y debates entre los diferentes actores del sistema.

- Los criterios técnicos y sus productos deben incrementar su peso en el gobierno cotidiano de la toma de decisiones en materias de asignación de recursos y formas de implementación. El 80% de las decisiones que toman los organismos y agentes gubernamentales está fuera del escrutinio y la participación de la sociedad civil en términos cotidianos. Si bien las grandes transformaciones y algunas innovaciones específicas o problemas evidentes adquieren un espacio en la agenda pública, el día a día del gobierno no lo hace, y enfrenta, sí, la evaluación popular en las instancias electorales. En el día a día predominan las lógicas administrativas e incrementalistas, donde la mejor predicción de una política en el momento 1 es esta misma política en el momento 0. Ahora bien, dichas decisiones poseen diversos soportes de legitimidad e insumos para arribar a la decisión. Algunas son de corte administrativo y automático, otras se basan en opiniones de expertos del área, otras en intuiciones de operadores del sistema, otras en presiones de operadores en diferentes niveles del sistema y algunas, las menos, en datos estandarizados y sistemáticos, cuya legitimidad no depende de quién emite el juicio, ni tampoco de las reglas de agregación de voluntades, sino del método técnico de conocimiento por el cual se arriba a determinado juicio.
- La decisión de extender o adoptar una innovación o de suprimir o cerrar una forma de hacer las cosas debiera gobernarse por una combinación de democracia, saberes especializados del sector y sistemas técnicos

de evaluación. La gran contribución de los modelos de evaluación de impacto y evaluación de resultados es que obliga a los gestores a pensar como siempre debieran pensarse las políticas públicas: como acciones instrumentales con arreglo a fines, y por tanto como hipótesis de intervención que pueden ser puestas a prueba y evaluadas. Considere el lector las siguientes preguntas: ¿debe un gobierno extender la modalidad escolar de tiempo completo?, ¿es recomendable desarrollar una política de circuncisión masculina?, ¿es preferible gastar dinero en programas de reconversión laboral o en creación de empleo básico subsidiado directo?, ¿debe modificarse la canasta básica de medicamentos a ser subsidiada por el gobierno? Estas preguntas suenan extrañas y, sin embargo, el debate se da muchas veces en estos términos. Lo que a estas preguntas les falta es su dimensión instrumental, su *para qué*. ¿Debe un gobierno extender la modalidad escolar de tiempo completo para incrementar la igualdad de egreso? ¿Es recomendable desarrollar una política de circuncisión masculina para incrementar la prevención en las enfermedades de transmisión sexual? ¿Es preferible gastar dinero en programas de reconversión laboral o en creación de empleo básico subsidiado directo para cubrir las necesidades básicas de la población en contextos de crisis? ¿Debe modificarse la canasta básica de medicamentos a ser subsidiados por el gobierno para disminuir la prevalencia de enfermedades respiratorias y digestivas en niños menores de cinco años? Pues bien, una vez formuladas las preguntas de esta manera, la permanencia o no de un programa, la extensión e institucionalización de una innovación reciente en algún instrumento de una política o la adaptación de un programa piloto a escala nacional no debiera ser decidida sin una adecuada evaluación técnica relativa a si dicha hipótesis de intervención es efectivamente cierta. En muchos casos esto no es necesario, ya que existen diversos estudios pasados y en otros países que demuestran su validez. Aun en estos casos no debemos olvidarnos de las molestas preguntas de tipo técnico: son los contextos de aplicación similares, es el problema diagnosticado de similar naturaleza, son los recursos estatales, materiales, humanos y organizacionales comparables. Ello nos permitirá evitar la importación acrítica de experiencias desarrolladas en otros contextos, para otras necesidades y con otros recursos, y sorprendernos luego de que no dieran los resultados esperados. Ahora bien, formular la pregunta en términos instrumentales es el primer paso para incrementar el gobierno técnico de las políticas públicas. Nótese que dicho primer paso requiere un proceso político que no admite

a la tecnocracia como eje central: la definición de metas deseables, priorizadas sobre otras. El segundo paso es utilizar y legitimar procedimientos de evaluación que permitan realizar inferencias causales informadas sobre si fue o no mi acción la que permitió una modificación en la realidad que yo pretendía cambiar. Existen tres modelos predominantes para realizar dichas inferencias: el saber especializado del sector y sus practicantes, los modelos gerencialistas de análisis cualitativos que combinan saberes sectoriales con ingredientes de las teorías de las organizaciones y los modelos de evaluación de impacto inspirados en las tradiciones experimentalistas, cuasi experimentales y de manipulación estadística de datos cuantitativos. La primera ruta predomina más o menos formalizada en nuestros Estados y en nuestras políticas sectoriales: los médicos opinan sobre si el programa funcionó, los maestros determinan si una innovación fue exitosa o si un viejo instrumento de la política es positivo. La segunda modalidad ha sido menos extendida pero se ha tornado crecientemente utilizada. Los estudios de caso de innovaciones, las evaluaciones cualitativas de logros sobre la base de percepciones de actores y ejercicios cualitativos con beneficiarios y operadores son hoy moneda mucho más corriente que ayer. La tercera modalidad, salvo recientes y contadas excepciones, brilla por su ausencia. Y ello se debe en buena medida a un problema político: las corporaciones y sus actores y saberes no están dispuestos a admitir evaluaciones estandarizadas con metodologías fuera de su control ni a aceptar resultados legitimados por procedimientos que no son inherentemente disciplinarios. Por su parte las modalidades gerencialistas han sido preferidas por *joint ventures* de financiadores y ejecutores de políticas con evaluación desde el financiador, donde dicho financiador no depende del éxito sustantivo de la innovación para su legitimación, sino de la apariencia y el consenso en torno al éxito de dicha acción de financiador, ejecutor y en algunos casos receptor directo. Pero debe recordarse que la acción pública estatal no es una suma de saberes disciplinarios, ni una sociedad de prestamistas y acreedores ni una mera ecuación de poderes e intereses; el Estado toma decisiones y realiza acciones orientadas por un principio de eficacia y eficiencia general que debe poder traducirse intersectorialmente y para la población en su conjunto. La base última de este contrato es democrática, un medio privilegiado para que el Estado cumpla con su parte del contrato es tecnocrática: la capacidad de medir y evaluar el impacto de su acción.

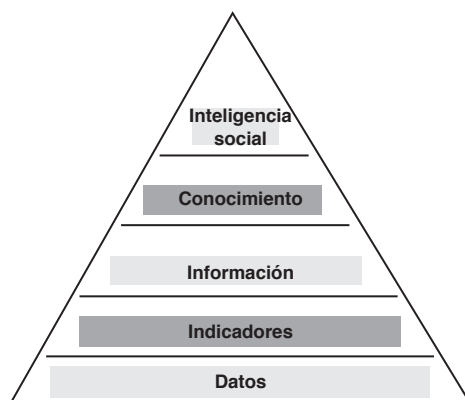
- Los criterios técnicos y sus productos deben gobernar la producción

de una *lingua franca* entre e intrapolíticas públicas que sustituya o al menos complemente la actual *lingua franca* de estas organizaciones: el reglamento y la norma administrativa, así como debe permear el discurso de la *lingua franca* que hoy predomina en el Estado y sus gobiernos hacia la población, basada en deseos, intenciones, valores y preferencias. Los actores en diferentes niveles de una política sectorial parecen ponerse de acuerdo solo cuando se cita un reglamento, decreto o norma administrativa. Los ministros y legisladores parecen “dirimir” y posicionarse retóricamente en su accionar a partir de deseos, intenciones, promesas y esperanzas, anclados en valores y metas normativas últimas acerca del bien público. Estas dimensiones, tanto la administrativa intramuros como la política extramuros, no deben desaparecer, pero la comunicación cotidiana en la babel organizacional del Estado debe ser la de la eficacia y eficiencia de los medios, no la de los sistemas normativos y reglamentarios ni la de los deseos y las preferencias normativas. Las primeras están para limitar las acciones legítimas del Estado, no para dinamizar su creación, ni administrar gerencialmente sus complejidades. Las segundas son indispensables para encender la innovación, pero insuficientes para evaluarlas. El lenguaje de los indicadores, las metas, los productos, los porcentajes, los índices de calidad y las relaciones costo-eficiencia son los que deben articular el lenguaje cotidiano. El lenguaje de las reglas, las normas, los requisitos, los permisos y los escalafones debe hacerse presente a la hora de definir estructuras organizacionales generales, adecuación legal, auditorías de ejecución, etc. En tanto, el lenguaje de la política con mayúscula, el del poder, los valores, las utopías, los fines últimos debe estar presente en el debate legislativo, en la retórica indispensable del político y la población, en la delimitación de fines deseados y esfuerzos comprometidos. Pero es en el consenso construido en torno a metas empíricamente referidas y a sistemas de evaluación sistemáticos y compartidos donde el Estado se enfrenta a sus reales posibilidades y limitaciones, y por tanto sus sistemas de prioridades de gestión dados ciertos fines establecidos como deseables, y es tal por tanto el lenguaje que debe predominar. El lenguaje de los recursos escasos es el lenguaje de la evaluación técnica.

Ahora bien, esta fuerte defensa del componente tecnocrático en la hechura de las políticas públicas y de la acción estatal puede haber dejado en el lector la sospecha (tal vez correcta) de un radicalismo tecnocrático fuera de lugar. Fuera de lugar por inadmisibles desde un punto de vista

democrático y fuera de lugar por impracticable desde un punto de vista de realismo político. Pero en mi defensa diré que la inadmisibilidad e impracticabilidad de esta postura solo es plausible si no se consideran tres elementos que han estado en mi argumentación en forma más o menos explícita y sobre los que me extenderé a continuación. En primer lugar, la incorporación de saberes y criterios técnicos en la toma de decisiones de las políticas públicas no es un acto temporalmente singular, sino un proceso iterativo donde el poder, los intereses y los aprendizajes de los actores darán el veredicto final. El proceso mediante el cual el saber técnico se hace presente en las políticas públicas implica una trabajosa ingeniería de muchos años mediante el cual las políticas empiezan a registrar en forma administrativa algunos medios y resultados básicos, para luego avanzar en la construcción de indicadores, y luego hacia la consolidación, la difusión y el uso de indicadores y estudios. Cada uno de estos pasos no es meramente técnico, sino esencialmente político. Tal como señalan Martha Sabelli y María Cristina Fernández, la existencia del registro no es lo mismo que la del indicador, ni tampoco es esto similar a la articulación de estos en un sistema de información y menos aún a su incorporación en el sistema complejo de toma de decisiones estratégicas. El gráfico 1 sugiere las etapas y la maduración que de alguna manera marcan la genealogía que va del registro a su uso en sistemas de toma de decisiones.

**Gráfico 1. Pirámide evolutiva del proceso de incorporación de saberes técnicos a las políticas públicas**



Fuente: Martha Sabelli, José Fernández y María Cristina Pérez, *El decisor en ciencia y tecnología como usuario de información estadística y/o indicadores: contribución para la elaboración de indicadores de ciencia y tecnología en Uruguay*, Montevideo, CIESU-Ediciones de la Banda Oriental, 1999, p. 15; modificado por Marha Sabelli sobre un diseño original de Irasel Páez Urdaneta.

En segundo lugar, el riesgo temido de que la técnica colonice más allá de lo deseable la hechura de las políticas públicas es un problema político que debe ser considerado pero no por ello tenido como inevitable. En todo caso, en el área de las políticas sociales, que es la que aquí más nos interesa, el problema, en la actualidad, no es la colonización técnica de áreas que debieran encontrarse en el espacio de la norma administrativa o en la arena política, sino la colonización política (la menos de las veces democrática) y administrativista de espacios de decisión donde debieran predominar los criterios técnicos e instrumentales basados en sistemas estandarizados de información y evaluación.

Finalmente, y esto nos lleva al siguiente punto, la construcción de los sistemas de información y evaluación no debe asimilarse a la actividad académica y científica. Este tipo de actividad posee sin duda una raíz común con la idea de tecnocracia, pero se construye en forma radicalmente diferente. El gestor de los sistemas de información y evaluación no construye considerando solo “el método científico”, lo hace debiendo tomar en consideración los insumos y constreñimientos de la política y de los sistemas administrativos donde operan las políticas y acciones estatales.

### **Lógicas, principios y componentes de los sistemas de información en políticas públicas**

#### *Las lógicas combinadas de los sistemas de información y evaluación en políticas públicas*

El uso de la ciencia, las técnicas cuantitativas y cualitativas y los datos deben reconocer, para ser útiles para las políticas sociales, tres lógicas diferentes y muchas veces contradictorias o contrapuestas: la lógica técnica de la ciencia, la lógica administrativa de la política y la lógica política de la política. A diferencia del cientista social en la universidad o en la actividad de investigación, el cientista social que debe contribuir a la construcción de sistemas de información de políticas públicas y de Estado debe reconocer los límites e insumos administrativos de las políticas como constitutivos en su accionar, así como incorporar y valorar las posturas, los poderes, intereses y saberes de los actores directamente vinculados a la política en cuestión (gráfico 2).

- La lógica científico-social orientada a la sistematización de información, construcción de conceptos y análisis. La ciencia y la metodología de

las ciencias sociales en particular son un elemento clave en la creación y consolidación de sistemas de información. Pero ello no quiere decir que el analista situado como asesor de políticas públicas debe considerar las lógicas y los requisitos de la ciencia en forma aislada. Existen limitantes e insumos administrativos y políticos que, si son obviados, tornan fútil el trabajo de base científica.

- La lógica política opera en la producción, transformación e implementación de políticas y programas sociales basadas en los actores, sus intereses, poderes y saberes. Los indicadores que seleccionamos y el uso que les damos en los sistemas de información de las políticas públicas no son opciones científicas puras. Ellos están cargados de contenidos normativos y de una definición, algunas veces implícita, otras veces explícita, sobre lo que se debe recordar, lo que se puede olvidar y sobre cómo se debe recordar. La experiencia de construcción del sistema estandarizado de evaluación de aprendizajes, o la creación del monitor educativo de primaria, que veremos más adelante, son dos ejemplos claros de cómo los límites y las posibilidades de los sistemas están fuertemente delimitados por los actores involucrados en la prestación y administración del servicio. En rigor, un sistema de información es útil si es utilizado por los prestadores y tomadores de decisión, así como por los beneficiarios y la población en general. Ello solo es posible si los indicadores seleccionados son considerados “válidos” o legítimos.
- La lógica administrativa basada en normas y en registros informativos necesarios para el funcionamiento legal de los sistemas. Al técnico de los sistemas de información le gustaría contar con una gran cantidad de información para realizar sus análisis y frecuentemente escuchamos sus quejas acerca de la falta de fuentes adecuadas para poder construir los sistemas de información. Ahora bien, un formulario de veinte páginas para cada maestro al inicio de cada trimestre resulta administrativamente inviable y coloca una carga insostenible en los prestadores del servicio. Asimismo, por diversas razones, existe información de corte confidencial, o información que no puede ni debe ser solicitada a riesgo de generar distorsiones y conflictos, cuando no desconocimiento liso y llano de la ley.

En definitiva, todo buen sistema de información es un sistema que en su base respeta los preceptos básicos de la construcción científica, reconoce e incorpora los saberes, poderes e intereses de los actores involucrados y se apoya en sistemas de registros que, siendo necesarios administrativa



**Gráfico 2. Las lógicas para situar la evaluación orientada a alimentar las políticas sociales**



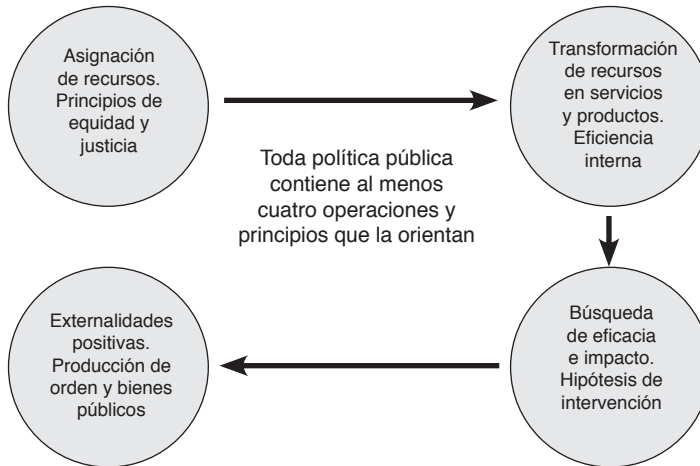
y técnicamente, no sobrecargan de modo innecesario la organización o política. Por su parte, en sus usos un buen sistema de información es aquel que respeta los límites de uso que las técnicas y los procedimientos científicos permiten desarrollar, que es apropiado y respetado como parámetro para la toma de decisiones de los actores y para la evaluación estratégica en el mediano y largo plazo y que produce resultados e informes que resultan de utilidad para la gestión administrativa cotidiana y de corto plazo de los centros, los subsistemas y el sistema de política pública. La buena gestión de la información orientada a las políticas públicas articula estas tres lógicas, sin que una de ellas domine a las demás.

*Principios y componentes de las políticas públicas:  
una mirada técnico-política*

*La evaluabilidad de los principios de las políticas públicas.* Toda política pública, en sus diferentes etapas de efectivización, posee una serie de hipótesis que la sustentan (gráfico 3). Todas estas hipótesis son susceptibles de evaluación empírica, y debieran por tanto estar acompañadas de sistemas de información que permitan dicha evaluación. En un nivel muy básico podemos pensar que las políticas públicas, cuando asignan recursos lo hacen entre otras consideraciones en base a hipótesis de ajuste a principios de equidad y justicia (sean estos cuales sean). Procuran tam-

bién en la definición de procedimientos y acciones maximizar el ajuste a principios de eficiencia interna (la capacidad de transformar recursos en productos) y procuran que los productos, regulaciones y servicios que dicha acción estatal crea se ajuste a principios de eficacia concreta e impacto agregado sobre el orden y bien público (sea este definido de la manera que los actores lo prefieran).

**Gráfico 3. Hipótesis que toda política pública sustenta**



Es posible evaluar si la cobertura y el monto de las jubilaciones se ajustan al principio de justicia de derecho privado adquirido, o si lo hacen a principios de necesidad básica, o a principios de derechos adquiridos en modelos de solidaridad intra e intergeneracional. Es también posible identificar si la distribución del gasto escolar respeta los aportes fiscales de diferentes regiones (en cuanto principio de justicia federalista), o si es mayor en las zonas más pobres (en cuanto principio de igualdad de oportunidades). Diferentes sociedades y sistemas políticos valorarán uno u otro tipo de principios de justicia, pero ello no quiere decir que no se pueda constatar –dada una cierta asignación de recursos, generación de productos y prestación de servicios– si dichos principios están siendo respetados. Cuando un grupo organizado defiende una medida de aumento de pensiones por el índice medio de salarios, invoca la idea de que ello es necesario para incrementar la igualdad o para garantizar un ingreso mínimo que mantenga a la tercera edad fuera de la pobreza.

Dada una estructura de pensiones altamente estratificada y concentrada en los trabajadores otrora formales, esta forma de gastar el dinero no garantiza ni el primer ni el segundo objetivo de justicia esgrimido. Posiblemente sí respete un tercer principio, y es que quien más aportó durante su vida activa, más debe recibir en su retiro. Un sistema de información e indicadores robusto y compartido informa sobre la legitimidad de las invocaciones a principios de justicia que el Estado, los políticos y los actores sociales esgrimen cuando plantean sus opciones de asignación de gastos y recursos.

Asimismo, es posible que las ONG argumenten que ellas son más eficientes que el Estado en transformar recursos en productos y servicios. Un buen sistema de información acordado con relación a la asignación del gasto y a qué productos y servicios deben generarse permite contrastar dicha opinión sobre la mayor eficiencia interna de un tipo u otro de institución de prestación.

Finalmente, y más allá del debate que ONG y Estado puedan tener sobre aspectos de eficiencia interna, estas pueden argumentar que ello es irrelevante y que lo importante es que, por ejemplo, las escuelas administradas por ONG enseñan mejor a sus alumnos que las administradas por los municipios. Si se alcanza un acuerdo sobre indicadores de aprendizaje (por ejemplo, tests estandarizados), dicha afirmación también puede ser puesta a consideración de la evidencia.

Si los maestros creen que la repetición en primer grado favorece el aprendizaje de los niños con bajos niveles de rendimiento y que no incentiva el abandono escolar, mientras las organizaciones de padres o los pedagogos creen lo contrario, ello puede dirimirse apelando a opiniones, saberes disciplinarios, intuiciones o casos específicos, o puede hacerse sobre la base de sistemas de evaluación experimentales y cuasi experimentales que, apoyados en información estandarizada, ofrezca respuestas sobre tal desacuerdo.

### *Consensos para la evaluabilidad: lenguaje, moneda y contrato*

En suma, los principios de justicia y equidad, de eficiencia interna y de impacto pueden ser puestos a prueba. Claro que para ello se requieren tres consensos fundamentales entre los actores: por un lado, es necesario acordar qué ingredientes de una política medir. Esto implica un ejercicio político y no meramente técnico; qué recordar y qué olvidar son siempre acciones políticas. En la medida en que no se puede medir todo, deben

priorizarse ciertos registros y ciertos indicadores por sobre otros. Esta operación contará obviamente con criterios técnicos, pero estos no son los únicos que se harán presentes. Los intereses y poderes de los actores, así como sus saberes y convicciones, enfatizarán ciertos indicadores por sobre estos. En segundo lugar, es importante llegar a acuerdos en cómo se mide, especialmente en lo relativo al problema de qué aspectos observables y medibles representan qué conceptos sustantivos de interés de una política pública. En efecto, es debatible qué aspectos observables representan qué tipo de conceptos. Por ejemplo, ¿es la repetición un adecuado indicador de aprendizaje?, ¿es el número de antibióticos entregados en los puestos de salud un adecuado indicador de resolutivez?, ¿es la satisfacción del usuario de un servicio un adecuado indicador de calidad del servicio?

Estos dos primeros consensos son esenciales, ya que solamente, de producirse, serán los resultados que arrojan los indicadores considerados legítimos por parte de la comunidad de una política pública (políticos, ejecutores, beneficiarios, técnicos, etc.). El tercer y último consenso refiere a las formas legítimas de evaluación y sus metodologías. El estudio de caso, el análisis organizacional y gerencial, el saber disciplinario específico de los operadores de los sectores y las metodologías de evaluación ancladas en los modelos estadísticos y experimentales se harán presentes, se combinarán y disputarán espacios de legitimidad diversos. Ninguno de estos tres consensos se construye mediante criterios técnico puros. La política, la negociación, el poder de las partes, la legitimidad precedente de una forma de hacer las cosas (qué medir, cómo medir, cómo evaluar), los límites administrativos y los objetivos cambiantes de las políticas públicas se combinan en procesos de largo aliento para ir tejiendo estos consensos, que serán, por otra parte, necesariamente imperfectos, plagados de áreas grises y aún en abierta contradicción, y necesariamente dinámicos.

Existen tres metáforas que permiten ilustrar esta trabajosa construcción de consensos:

- 1) la idea de contrato técnico-político-gerencial definiendo qué insumos deben ser considerados a la hora de tomar decisiones;
- 2) la idea de una moneda común definiendo equivalencias de valor público entre acciones diversas, aspectos y etapas diferentes de los procesos de generación y evaluación (técnica, política y normativa) de las políticas públicas, y
- 3) la idea de una *lingua franca* que combina, a partir de algunos signos con contenido semántico compartido, las multiplicidades de dialectos que pueblan la babel de una política pública (lógicas políticas,

administrativas y políticas, saberes disciplinarios diversos, niveles de ejecución diferentes, sectores organizacionales específicos, actores de la comunidad de la política pública distintos).

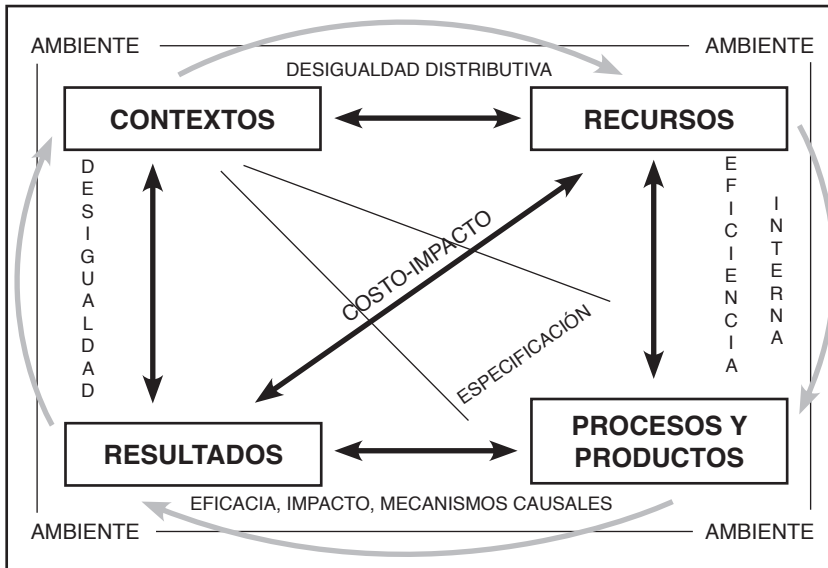
En definitiva, construir e incorporar capacidad técnica en el Estado requiere el desarrollo de dispositivos de traducibilidad y orientación de la acción mutuamente referida entre los diversos actores de una política pública. Tal empresa no es neutra; es siempre cargada de valores, mediada por intereses y dirimida por poder, legitimidad y persuasión.

### **Las formas de la evaluación y las formas de la validez de la evaluación: técnica al servicio de la política pública**

Toda política pública opera dentro de un ambiente general y se efectiviza en una multiplicidad de contextos sociales, políticos y económicos. Asimismo, toda política posee un conjunto de recursos de poder, económicos y de capital humano que utiliza para desarrollar procesos que a su vez producen bienes, servicios y regulaciones. Finalmente, toda acción del Estado pretende afectar en algún sentido o dirección la realidad sobre la que opera. Este esquema básico permite diagramar los procesos de generación de políticas públicas y las diferentes operaciones de evaluación que pueden construirse en y entre sus nodos articuladores (gráfico 4).

En primer lugar, toda política pública debiera poder medir y clasificar de acuerdo con una serie de criterios los contextos en los que opera (por ejemplo, el riesgo sanitario de los municipios para una política de salud o el contexto socioeducativo de una escuela para la política educativa), los recursos materiales y humanos con los que cuenta, los productos y servicios que genera y, claro está, los resultados sociales y económicos que son de interés de dicha área o política (la mortalidad infantil en salud, la repetición y el aprendizaje en educación, la criminalidad en el área de seguridad policial, la tasas de empleo en el área económica, etc.). Debe quedar claro que estos resultados no son en su totalidad derivados de la política en cuestión. Tienen que ser medidos no porque ellos impliquen o permitan en forma automática una atribución de impacto a la acción de la política, sino porque son el objeto de la política. Pero, además de considerar cada nodo del espacio de producción de una política pública, es posible establecer formas de evaluación donde se combinan indicadores de los diferentes nodos. Así, cuando combinamos contextos con resultados podemos evaluar niveles de desigualdad social (*outcome in-*

**Gráfico 4. Proceso de generación de políticas y operaciones de evaluación**



*equality*). Por ejemplo, podemos preguntarnos si las zonas de menores ingresos presentan resultados educativos poco o muy inferiores a las zonas de ingresos medios, o si las escuelas con niños de madres bajamente educadas repiten mucho más o menos que los de otras escuelas, o si las zonas de alta fecundidad presentan mayores tasas de mortalidad infantil y cuán grande es dicha diferencia, etc.). Podemos también combinar los contextos socioeconómicos donde operan las políticas con los recursos que a estas zonas se asignan, permitiendo una evaluación de desigualdad distributiva (*input inequality*), o combinar los contextos con los productos y procesos (*policy output inequality*). Es posible también evaluar qué recursos se convierten en productos para determinar la eficiencia interna de una política, y es finalmente posible evaluar qué recursos y productos se transforman y transforman resultados, ubicándonos entonces en el área de la evaluación de impacto (*impact evaluation*). Agregando un poco más, de estas diferentes formas de evaluación arribamos a cuatro formas básicas de evaluación con diferentes subtipos al interior de cada una de ellas. La evaluación de necesidad o evaluación diagnóstica puede combinar elementos de contexto, recursos, procesos y productos y resultados, o concentrarse en algunos de estos aspectos de la política. Un mapa georreferenciado de pobreza y desigualdad es un insumo que cae dentro

de la evaluación diagnóstica. Si se combina con un mapa de servicios, también estamos en el espacio de la evaluación diagnóstica, pero con énfasis en modelos de *output inequality*; si, por otro lado, se lo combina con indicadores de resultados específicos de una política, estamos en una evaluación diagnóstica de *outcome inequality*. La evaluación del tipo de monitoreo de procesos y productos puede remitirse tan solo a su identificación o cuantificación de servicios, rentas o productos entregados, o puede combinarse con indicadores de recursos para avanzar en una evaluación de monitoreo atenta a los problemas de eficiencia interna. La evaluación de resultados se concentra generalmente en los indicadores meta de un sector y política, en tanto que con la combinación de recursos y cuando combinamos procesos y productos con resultados procuramos evaluar el impacto de una política (gráfico 5).

El gráfico 5 ofrece estas modalidades básicas de evaluación y las funciones y tipos de indicadores que las componen. Tal vez la más abarcativa de todas estas formas es la evaluación diagnóstica, la cual en general combina elementos de contextos, recursos, productos y resultados y lo hace en muchos casos en forma meramente descriptiva, pero en otros establece en su análisis pretensiones de inferencia causal, intentando entender no solo cuáles son los problemas sociales a solucionar, sino cuáles sus posibles causas. Este tipo de operación diagnóstica –la que sugiere relaciones causales–, si bien rara vez cuenta con la metodología de evaluación de corte experimental, es fundamental a la hora de definir temas de agenda, necesidades de innovación y tipos de innovación. Por su parte, las evaluaciones de monitoreo e implementación se encuentran más cerca de la lógica descriptiva y administrativa, y resultan claves como insumos que problematizan y permiten mejorar problemas de eficiencia interna, así como garantizar transparencia y responsabilización por el gasto público.

Una nota aparte merece la distinción entre las llamadas “evaluaciones de resultados” y las llamadas “evaluaciones de impacto”. Las primeras remiten (aunque la forma de denotarlo sea engañosa) al problema de los resultados relevantes a las metas de un área sectorial o de una política pública, pero no, como señalamos, a la atribución causal de acciones de la política y efectos sobre la población. Esta asignación de causalidad solo puede realizarse combinando los indicadores de recursos y resultados, o de procesos y productos y resultados. La forma en que dichas evaluaciones deben ser realizadas ha sufrido en el último tiempo un importante cambio, esencialmente positivo. De modo creciente los modelos experimentales puros y los modelos cuasi experimentales extremadamente

**Gráfico 5. Las cuatro funciones y formas básicas de la evaluación**



cuidadosos respecto de la inferencia de causalidad o la atribución de impacto son reconocidos como la forma más adecuada de abordar estas preguntas (si bien aún son pocas las experiencias desarrolladas). Ello es bienvenido, y agrega, corrige y complementa las evaluaciones de corte gerencial, aquellas que realizaban atribuciones simplistas basadas en correlaciones simples de recursos, productos y resultados, y aquellas que se apoyaban en saberes disciplinarios. Ahora bien, esta nueva tendencia, apoyada en la influencia de las agencias multilaterales de crédito, no debe hacernos olvidar que la tarea fundamental de la técnica, la estadística y los sistemas de evaluación va mucho más allá que la acción de evaluar impacto de programas y proyectos. Hacer mediciones antes y después de



una intervención y construir grupos de control y tratamiento es sin duda útil, pero ello no sustituye y, lo que es más, difícilmente pueda hacerse adecuadamente, si no existen series históricas de datos estandarizados, de indicadores compartidos y legitimados que permitan medir los contextos, los recursos, los productos y sobre todo los resultados deseables de las políticas públicas. Las evaluaciones de impacto y sus modalidades experimentales y cuasi experimentales son una excelente noticia, pero no en cuanto mecanismo ad hoc de un programa de un año del Banco Mundial, sino en cuanto práctica crecientemente continua y articulada al sistema de información en su conjunto y combinada con las otras diversas formas de la evaluación.

### **A modo de cierre**

Los Estados latinoamericanos no se han caracterizado en el pasado ni por su democraticidad ni por su tecnocraticidad. Durante demasiado tiempo el discurso político y aun el académico han contrapuesto estos dos términos como antitéticos. He procurado argumentar a lo largo de este trabajo que, lejos de ser antitéticas, en buena medida estas formas de hacer políticas públicas son complementarias, y en muchos casos una forma requiere de la otra. El debate político debe estar informado por la técnica, sus ingredientes y productos, y debe reconocer en su elaboración y difusión las lógicas administrativas y políticas del Estado y sus políticas públicas.

Toda organización compleja, sea pública o privada, que presta servicios, genera y distribuye productos o rentas, está sujeta a cambios en el ambiente, deterioros organizacionales, exigencias de eficiencia y eficacia. El grado en el cual las organizaciones complejas satisfacen estas exigencias varía. Para corregir y mejorar los productos y servicios de un productor y/o prestador existen dos mecanismos fundamentales: la salida y la voz. Tal como hace ya tiempo señalara Albert Hirschman, el hecho de que un cliente o beneficiario “salga” de un bien o servicio y lo procure en otra parte envía una señal a la organización en cuestión. En un sistema de competencia estas señales son poderosas y obligan a la organización a mejorar la cantidad, calidad o costo de su servicio. Una parte importante de las reformas en políticas sociales en la región han procurado justamente incrementar el componente de “mercado” y “competencia” de tal manera de generar mecanismos que incrementan el impacto de la “salida” sobre las respuestas organizacionales. Sin embargo, y tal como

también señalara Hirschman, la salida no es siempre un instrumento o mecanismo adecuado cuando lo que está en juego es la calidad y equidad de los bienes públicos. Si quienes salen son los miembros más poderosos, ricos y con capacidad de discriminar calidad, los que quedan lo hacen presos en un sistema crecientemente deteriorado. Por otra parte, muchas veces quienes salen no dejan de aportar por la vía fiscal al Estado, con lo cual, a diferencia de una empresa, tal salida no siempre obliga a la organización estatal a mejorar su bien o servicio. Uno de los procesos más devastadores a los que asistió América Latina durante la década de 1990 fue la creciente “privatización de hecho” de bienes públicos, donde las elites compraron su salida, dejando a las políticas públicas huérfanas de defensores poderosos y en algunos casos de contribuyentes y bases fiscales.

El otro mecanismo por el cual se le hace sentir a las organizaciones nuevas exigencias y demandas relativas a cantidad y calidad es mediante la “voz”, voz esencialmente colectiva y política. La cantidad y calidad de la “voz” depende de la existencia de instituciones y culturas democráticas existentes en el aparato estatal (elecciones, comisiones consultivas, participación de beneficiarios, sistemas de *accountability* vertical y horizontal diversos, etc.). La democratización del aparato estatal, la creciente presencia de procesos electorales y participativos en las unidades subnacionales del Estado y la organización de la sociedad civil contribuyen, o se espera que lo hagan, a mejorar la voz y su impacto sobre la cantidad y calidad de bienes públicos. Pero la voz también es ejercida preferencialmente por los más poderosos y organizados, y deteriora su impacto sobre demandas de equidad y eficacia, si no existen bienes públicos robustos que contribuyan a agrupar y activar coaliciones distributivas amplias.

Mercado y política tienen sin duda un rol fundamental a cumplir. Pero ambos mecanismos no son suficientes ni operan en los contextos actuales de la región en forma óptima. Existen importantes fallas de mercado y fallas de representación. Frente a este panorama, es importante recordar que, además de la política y del mercado, se encuentra el Estado, no en cuanto receptor de demandas, sino en cuanto organización compleja con capacidades y debilidades propias, las cuales impactarán eventualmente en la cantidad, equidad y calidad de los bienes públicos que produce o contribuye a producir y distribuir. En este espacio, las capacidades técnicas, basadas en sistemas de información integrados y estandarizados, orientados estratégicamente a la dimensión instrumental de la política –su impacto–, constituyen uno de los grandes desafíos para poder imaginar un Estado latinoamericano más eficaz, eficiente e igualitario.

## A sociologia e os sociólogos no Brasil: da expansão e consolidação, aos desafios das mudanças

*Jacob Carlos Lima\**

A sociologia no Brasil se constitui campo consolidado, em termos de formação e pesquisa e tem como característica o forte enraizamento acadêmico, no qual a profissão e a atividade de sociólogo se confunde. Isto não é uma característica apenas brasileira, sendo comum em outros países no qual a consolidação se deu principalmente através da universidade.<sup>1</sup>

Essa consolidação esteve marcada por injunções políticas que ora facilitou sua expansão e legitimação enquanto conhecimento científico, ora o dificultou a partir do caráter “ameaçador” que a acompanha como disciplina, desde sua origem. Essa “ameaça” genética, decorrente do caráter crítico que lhe é inerente no desvendamento das relações sociais, e se configuraria no elemento ideológico que estaria por trás, na confusão existente, por exemplo, entre sociologia e socialismo. Durante todo o século xx e ainda no século XXI, no Brasil, volta com certa frequência no discurso político como fantasma a ser extirpado. O discurso governamental a partir de 2019, denuncia um “marxismo cultural” sorrateiro, solapando as bases da família brasileira, do qual a sociologia seria um dos instrumentos.

Mas para entendermos esse novo movimento anti-sociologia no país é necessário que historizemos um pouco o processo de constituição e consolidação da disciplina e de suas associações representativas. Faremos isso através de três eixos expositivos. O primeiro sobre a introdução da disciplina no ensino médio; o segundo a formação acadêmica e de pesqui-

\* Professor titular, Departamento de Sociologia, Universidade Federal de São Carlos. Presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia (2019-2021). *calimajb@gmail.com*

1. Cf. Ronaldo Baltar y Cláudia Siqueira Baltar, “A Sociologia como profissão”, *Revista Brasileira de Sociologia*, vol. 5, Nº 10, 2017, pp. 259-289; Telmo H. Caria, Filipa César y Raquel Biltres, “A profissionalização da Sociologia e o uso dualístico das Ciências Sociais”, *Configurações*, Nº 2, 2012, pp. 1-20.

sa; o terceiro sobre as associações representativas. Por fim discutiremos alguns condicionantes do mercado de trabalho.

Inicialmente podemos nos referir as propostas de introdução da Sociologia no ensino médio, que vem desde o final do século XIX. A partir daí uma série de projetos de lei e leis foram discutidas e algumas implementadas<sup>2</sup> que ora propunham inserir a obrigatoriedade da sociologia, ora sugeriria sua eliminação. Alguns estados estabeleceram a obrigatoriedade, outros ignoraram. Isso durou até o golpe militar de 1964 e a reforma educacional de 1968 que substituiu a sociologia por Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política Brasileira (OSP/B). Em 2006 foi aprovada lei que estabeleceu a obrigatoriedade, sendo implantada na maioria das escolas. Após o impeachment contra o governo do Partido dos Trabalhadores em 2016, foi realizada, a toque de caixa, uma reforma educacional que retirou a obrigatoriedade. O atual governo tem atacado o ensino de filosofia e sociologia como “inútil” ameaçando cortar verbas e eliminar a formação nestas disciplinas das universidades públicas.

A formação graduada em Sociologia teve início em 1933 com a Escola Livre de Sociologia e Política, seguida em 1934 pela fundação da Universidade de São Paulo e a abertura do curso de Ciências Sociais. As duas escolas se tornaram modelos até o início dos anos 1960 da formação em Sociologia. É interessante observar o termo “Ciências Sociais” tornou-se sinônimo de Sociologia no Brasil, embora englobe a formação nas disciplinas de Antropologia e Ciência Política, o que ficou institucionalizado como Ciências Sociais *stricto sensu*. A partir daí vários cursos foram abertos, sendo que até o golpe militar, cerca de 22 estavam em funcionamento em diversas regiões do país.

Essas duas escolas também marcaram o início da pesquisa em sociologia no país, com a vinda da missão francesa para a USP e da vinda de professores norte-americanos para a Escola de Sociologia e Política com apoio financeiro de fundações daquele país. Teve início que nos anos 1950 ficou conhecido como escola “paulista”, marcado pela preocupação com a cientificidade do conhecimento sociológico e que teve entre seus autores de referência Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Octávio

2. Sobre a sociologia no ensino médio no Brasil, historicamente veja-se, entre outros, Amurabi Oliveira, “O ensino de Sociologia na educação básica brasileira: uma análise da produção do GT Ensino de Sociologia na SBS”, *Teoria e Cultura*, vol. 11, Nº 1, 2016, pp. 55-70, o dossiê organizado por Cristiano Bodart e Marcelo Cigales, “Dossiê História do Ensino de Sociologia”, *Café com Sociologia*, vol. 4, Nº 3, 2015; Simone Meucci, “A institucionalização da Sociologia no Brasil: os primeiros manuais e cursos”, dissertação em Sociologia, Campinas, Unicamp, 2000.

Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Maria Isaura Pereira de Queiroz. No Rio de Janeiro, a sociologia se tornou mais “pública” se utilizarmos o termo popularizado por Michael Burawoy, dentro dos embates desenvolvimentistas do período, seja na universidade, seja em institutos como ISEB.<sup>3</sup>

Isso sem desconsiderar a sociologia produzida fora do eixo Rio-São Paulo, com a obra explicitamente de sociológica de Gilberto Freyre em Pernambuco. Entretanto, esse fora do eixo vai se expandir e consolidar a partir das políticas de expansão da pós-graduação implementadas durante a ditadura militar a partir da década de 1970. Ao mesmo tempo que os militares prenderam e aposentaram os principais nomes da sociologia brasileira de então, de forma contraditória, incentivaram a expansão da pós-graduação e da pesquisa na área em nome de uma “autonomia” científica nacional. Também, como forma de superar o gargalo de vagas em universidades públicas, facilitou a abertura de cursos em escolas privadas, o que dados de 1973 indicavam a existência de 75 cursos de ciências sociais no período mais repressivo da ditadura. Ameaças, repressão a professores e alunos tiveram continuidade nesse período, mas não houve fechamento de cursos, além da institucionalização do fomento à pesquisa.<sup>4</sup> Novos cursos foram abertos, sendo que em 2019 cerca<sup>5</sup> de 109 cursos estão funcionando, considerando cerca de 9 a distância, a maioria em universidades públicas e universidades confessionais e uma minoria em escolas privadas (a demanda é baixa e pouco lucrativa).

A área de sociologia e ciências sociais (a terminologia continuou na organização de cursos de pós-graduação), se expandiu fortemente também na pós-graduação. Dos dois cursos existentes até 1964, passou-se para em torno de 150, considerando a expansão de cursos disciplinares em Sociologia, Política e Antropologia, além dos de Ciências Sociais. Além disso, alguns programas interdisciplinares se aproximam fortemente do que seria “ciências sociais”.

3. Essa discussão foi feita por Maria Herminia T. Castelos na Areia Almeida (“Dilemas da Institucionalização das Ciências Sociais no Rio de Janeiro, 1930-1964”, *BIB*, N° 24, 1987, pp. 41-60), ao analisar a institucionalização das ciências sociais no Rio de Janeiro no período de 1930 a 1964.

4. Renato, Ortiz, “Notas sobre as ciências sociais no Brasil”, *Novos Estudos Cebrap*, N°27, 1990, pp. 163-175.

5. O número é aproximado, uma vez que o MEC divulga o número de cursos com autorização de funcionamento. Pesquisa junto as universidades evidenciam que, no caso das universidades privadas, nem sempre são implementados, ou deixam de abrir turmas em função da demanda.

Junto com a expansão, órgãos de fomento estatais como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e as Fundação de Amparo a Pesquisa (FAP), órgãos estaduais, instituições internacionais de fomento como Fundação Ford, Fundação Volkswagen entre outras, passaram a apoiar projetos de pesquisa e a formação pós-graduada que se tornou exigência para cargos de professor nas universidades públicas.<sup>6</sup> Da mesma forma, o financiamento da pesquisa ficou atrelado fortemente à universidade, sendo criada bolsas pesquisadores em órgãos como o CNPq e algumas FAPS estaduais.

Com isso, a produção sociológica se “nacionalizou” no sentido que se estendeu por todo o país, com centros de formação e pesquisa, certificados com graus de excelência. O campo se estendeu, com a multiplicação de revistas, congressos e seminários, com uma dinâmica comunidade acadêmica e crescente presença internacional.

Ao lado desse processo, como forma de resistência à ditadura militar, deve se destacar a formação de centros de pesquisa que agruparam os aposentados do regime militar e que se tornaram referência em pesquisa social como o Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento (Cebrap, 1969) e o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec, 1976), que junto com as universidades contribuíram para a formação da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), em 1977. A ANPOCS se consolidou como centro aglutinador das ciências sociais no país seguida por associações disciplinares como a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP).

Um terceiro eixo, de nossa rápida exposição histórico contextual, refere-se a formação de associações na área de Sociologia. A Sociedade Brasileira de Sociologia, teve início como Sociedade Paulista de Sociologia em 1937, mas não teve continuidade no quadro do golpe de estado daquele ano que instituiu o chamado Estado Novo comandado por Getúlio Vargas, com censura e repressão aos dissidentes. Foi reorganizada

6. Cf. Sérgio Micelli, “O cenário institucional das Ciências Sociais no Brasil”; em Sérgio Miceli (org.), *História das ciências sociais no Brasil*, vol. 2, São Paulo, Sumaré, 1995; Jacob C. Lima e Soraya M.V. Cortês, “A Sociologia no Brasil e a interdisciplinaridade nas ciências sociais”, *Civitas*, vol. 13, Nº 3, 2013, pp. 416-435; Irllys Barreira, Soraya M.V. Cortês e Jacob C. Lima, “A sociologia fora do eixo: diversidades regionais e o campo da pós-graduação no Brasil”, *Revista Brasileira de Sociologia*, vol. 6, Nº 13, 2018, pp. 76-103, 2018.

em 1950, agora como Sociedade Brasileira de Sociologia. Na origem de ambas, professores em sua maioria da Universidade de São Paulo e da Escola de Sociologia Política. Organizou seu primeiro congresso em 1954 em São Paulo e o segundo em Belo Horizonte em 1962. Em seguida veio o golpe militar, e suas atividades foram suspensas só retornando em 1987 com o terceiro congresso realizado em Brasília. A partir daí, sua atuação foi regularizada com a realização bi-anual de congressos. Em 2019 foi realizado o 19º congresso em Florianópolis e previsto para 2021 o 20º congresso em Belém. Os congressos tem aglutinado uma média de 1500 pessoas em cada evento.

Ao lado da SBS que mantém seu caráter fortemente acadêmico, sem descuidar das discussões sobre mercado de trabalho e problemas da profissão, a partir da abertura política na segunda metade da década de 1970, foram sendo constituídas várias associações, sindicatos e a Federação de Sociólogos. Seus membros, às vezes se sobrepõem, dada a predominância de atividades vinculadas ao estado, principalmente na área de educação superior e ensino médio e básico.<sup>7</sup> E também com grande dificuldade de se manter, considerando que nem sempre o sociólogo é contratado como sociólogo, pode ser como pesquisador, técnico de planejamento, professor, fazendo com que até a militância profissional seja compartilhada com outras formações.

Ronaldo Baltar e Cláudia Siqueira Baltar, caracterizando os profissionais da área demonstrou sua fragmentação, embora ressalte a predominância simbólica do sociólogo acadêmico como o representante mais valorizado da área.<sup>8</sup> Cerca de 25% são professores de educação básica e ensino médio, 6,4% professores do ensino superior, 20% dos profissionais encontram-se em profissões mal definidas, e os demais, em atividades diversas que não passam de 5% cada. Também destacou a inadequação da organização dos cursos de graduação que visam mais sua própria reprodução acadêmica do que com a atuação num mercado de trabalho mais amplo.

Em 2012, foi fundada a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, no qual seu manifesto de fundação destaca a proposta de “não reproduzir falsas hierarquias entre professores e pesquisadores” e voltados aos professores do ensino médio e atrair o então crescente mercado aberto com a obrigatoriedade da sociologia. O Censo dos profissionais

7. Cf. Maria da Glória Bonelli, “O mercado de trabalho dos cientistas sociais”, *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 25, Nº 9, 1994, pp. 110-126.

8. Ronaldo Baltar e Cláudia Siqueira Baltar, “A Sociologia como profissão”, *Revista Brasileira de Sociologia*, vol. 5, Nº 10, 2017, pp. 259-289.

da educação realizado pelo INEP-MEC em 2012, apontava a existência de apenas 19% dos professores de sociologia eram licenciados em sociologia ou ciências sociais, sendo que a maioria viria de outras disciplinas conexas como a história e a pedagogia. Em pesquisa direta realizada por Cristiano Bodart e Roniel Silva no ano seguinte, 2013, apontou uma situação distinta com 72,9% de respondentes voluntários com a formação na área de Sociologia.<sup>9</sup> Outros estudos, apontam para situação pior, também utilizando o censo escolar de 2013, cerca de 12%.<sup>10</sup> Dada a disparidade de percentuais fica difícil fazer uma análise mais acurada. Uma coisa porém é fato: o baixo número de aulas da disciplina termina fazendo com que um mesmo professor termine lecionando disciplinas diferentes para completar sua carga horária e que os salários no ensino públicos são baixos para uma adesão à carreira. Com a supressão da obrigatoriedade, a busca por licenciaturas pode diminuir, uma vez que o mercado irá ficar mais restrito.

As mudanças políticas em curso e que tiveram início com a eleição de um governo de extrema direita, deixa uma série de dúvidas acerca de um mercado de trabalho marcado por sua fragmentação, própria de uma profissão que não tem como estabelecer critérios de entrada e permanência limitantes. O profissional de sociologia atua em atividades conjuntamente com outros profissionais com formação conexa dentro da grande área de humanidades.

A Universidade pública está sendo atacada e nela a sociologia aparece com destaque sendo questionada em sua utilidade e aplicabilidade. Questionamento este decorrente da ignorância acerca da relevância do conhecimento científico, o que atinge todas as ciências e não apenas a sociologia. Corte de verbas para as universidades, os órgãos de fomento como a Capes e o CNPq estão com verbas cada vez menores o que coloca em xeque a formação de quadros e a pesquisa na área. Discussões acerca da formação que vinham sendo feitas, experiências com outros formatos na graduação; debates sobre o fortalecimento da sociologia frente as outras ciências sociais; deram lugar a luta pela defesa da ciência enquanto forma de conhecimento frente a uma enxurrada de proposições

9. Cristiano Bodart e Roniel S. Silva, “O perfil do professor brasileiro de Sociologia do ensino médio e sua percepção da condição docente”, *Inter-legere. Revista de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN*, N° 18, 2016, pp. 168-189.

10. Cf. Patrícia Trópia, “Os professores de Sociologia do Ensino Médio no Nordeste do Brasil entre profissionalização e desprofissionalização”, 16° Encontro Nacional da ABET, 3-6 setembro 2019, Salvador (BA) GT08 “Trabalho e educação”.



obscurantistas com cunho religioso na proposição de políticas públicas e de ordenamento social.

A desregulamentação crescente do mercado de trabalho embaralha outras lutas que os sociólogos vinham organizando como a formação de um Conselho Federal de Sociologia para o estabelecimento de critérios de exercício da profissão.<sup>11</sup> O momento agora, mais uma vez, é unir forças para resistir ao desmonte das políticas sociais e do próprio Estado brasileiro empreendidas com extrema rapidez e voltadas aos interesses de poucos. Os avanços sociais das últimas décadas incomodaram os que sempre utilizaram o Estado a riqueza social produzida em benefício próprio. Com isso assistimos um processo descivilizatório no sentido de Norbert Elias, com profunda regressão social. O desafio é resistir a esse processo.

11. A profissão foi regulamentada em 1980 ainda na ditadura militar. Porém a luta pela regulamentação vem desde o início dos anos 1960 (Evaristo Moraes Filho, “Regulamentação da profissão de Sociólogo”, *Síntese Política Econômica Social*, vol. 8, Nº 31, 1966, pp. 50-79.



## Los vínculos entre la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo y la sociología del trabajo uruguayo

*Francisco Pucci\**

Existen numerosas redes de intercambio para los estudiosos del mundo del trabajo en América Latina: los grupos de Clasco vinculados al tema laboral, los congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, las diferentes asociaciones de laboristas y de psicólogos del trabajo son algunos ejemplos. Dentro de estos espacios, la asociación que congrega principalmente a los sociólogos del trabajo es la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST). En sus orígenes, se denominaba Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, lo que marca la centralidad de la sociología en su desarrollo institucional. Esta centralidad, sin embargo, no impedía que se abordara el mundo del trabajo, en los diferentes congresos de la Asociación, desde diversas disciplinas: economía, antropología, derecho, ciencia política, medicina, etc. Recientemente, se decidió darle carácter institucional a este abordaje multidisciplinario, por lo que pasó a su actual denominación, aunque mantiene la sigla original.

El Primer Congreso de ALAST se realizó en México en 1993, lo que muestra la relativa juventud de este espacio institucional. En ese marco, la Asociación se propuso dar cuenta de los cambios ocurridos en el mundo del trabajo en la década de 1990. La mayoría de los países latinoamericanos pasaron por procesos de desestructuración del mundo del trabajo consolidado en el período anterior, mostrando fenómenos de desempleo, desregulación, flexibilización y fragmentación de la clase obrera, así como de ruptura o debilitamiento de los pactos corporativos entre sindicatos, empresarios y Estado.

En la mayoría de los países latinoamericanos se asistió a una crisis del modelo de desarrollo original basado en la industrialización sustitutiva de

\* Doctor en Sociología. Profesor titular del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. [francisco.pucci@cienciassociales.edu.uy](mailto:francisco.pucci@cienciassociales.edu.uy)

importaciones. Este modelo se sustentó en la producción manufacturera nacional especializada en bienes de consumo, con alta dependencia de la importación de tecnologías, insumos estratégicos y bienes de producción modernos. El Estado jugó un papel importante en ese modelo, protegiendo el desarrollo industrial a través de controles aduaneros, cupos de importación, subsidios de exportación y cambios de tasa múltiples, entre otros. El mercado laboral funcionó en condiciones de casi pleno empleo, con salarios reales bajos de lento crecimiento, según las diferentes políticas de distribución del ingreso.

A partir de los años 80, el modelo de producción postsustitución de importaciones mostró sus límites estructurales y se radicalizó la crítica a él, en particular desde las perspectivas neoliberales. La reestructuración productiva de la década de 1980 se manifestó en múltiples dimensiones (tecnologías, relaciones laborales, perfiles de la mano de obra), estimulando la subcontratación, la tercerización y los nuevos encadenamientos productivos. Las nuevas tecnologías implicaron transformaciones importantes en lo que respecta a la organización del trabajo y a la composición de la fuerza laboral. La organización del trabajo bajo los nuevos requerimientos tecnológicos se orientó hacia una flexibilización de la fábrica, del trabajador y de las regulaciones laborales. La fábrica debía tener una mayor adaptabilidad y un equipamiento tecnológico que le permitiera responder a una demanda incierta y fluctuante, tanto en volumen como en composición. El trabajador, a su vez, requería una formación general y técnica amplia, que le permitiera desempeñar distintas funciones en el seno de un proceso productivo en el cual las categorías profesionales y las jerarquías se fueron desdibujando y donde el involucramiento en la calidad y la responsabilidad individual y colectiva fueron estimulados.

En este plano, muchas de las nuevas formas de organización del trabajo implementadas en nuestros países no asumen la lógica integral de los nuevos modelos productivos, sino aspectos parciales y fragmentarios de ellos. Los procesos de transformación de la industria uruguaya, al igual que otros contextos industriales latinoamericanos, pueden explicarse a través del concepto “hibridación”.<sup>1</sup> Esta perspectiva parte de la base de que existe una interacción compleja entre los modelos de organización del trabajo, las decisiones estratégicas de los núcleos empresariales o de las autoridades jerárquicas y los contextos nacionales e institucionales en

1. Cf. Marta Novick, Gabriel Yoguel, Ana Catalano y Facundo Albornoz, *Adaptación de modelos productivos en países emergentes: el caso de la industria automotriz en la Argentina*, Buenos Aires, LITTEC-UNGS, 2002.

los cuales se implementan estos procesos. El resultado es que las formas de organización del trabajo tienden a asumir formas “híbridas”, en las cuales se yuxtaponen y se entremezclan componentes de diferentes modelos, sobre la base de la transformación o redefinición de los equivalentes funcionales del modelo de origen. Otro componente importante de estos procesos es que, en numerosas ocasiones, el modelo original de trabajo tiene una fuerza emblemática que permea todas las futuras transformaciones que se dan en la organización de la empresa o del servicio.

Tanto a nivel de la industria como a nivel de los servicios, las estrategias empresariales priorizaron, en los gobiernos de impronta neoliberal, la reducción de costos vía flexibilización de las condiciones contractuales de la mano de obra o la tercerización de partes del proceso productivo, más que la apuesta a una mejora en el desempeño laboral de la empresa. Estas tendencias no son, por cierto, uniformes en todos los sectores o ramas, pero fueron las predominantes en el contexto productivo uruguayo.<sup>2</sup> Los bajos porcentajes de empresas industriales, el análisis de los porcentajes de empresas industriales y de servicios que se han incorporado a los procesos de certificación de calidad y las dificultades para incorporar recursos humanos en el sostenimiento y la mejora de la calidad de los productos corroboran estas tendencias.<sup>3</sup> Por otra parte, no se modificó sustantivamente la lógica patrimonialista y rentista de los empresarios uruguayos, ni la forma de gestión de los recursos humanos concebidos como la extensión del modelo de organización familiar a la empresa, basado en vínculos particulares y lealtades personales.<sup>4</sup>

La posibilidad de constituir nuevas formas de pertenencia productiva depende estrechamente de la relación sociohistórica de los asalariados con la empresa, profundamente marcada por el contexto técnico-organizacional en el cual se ejerce el trabajo. En las empresas marcadas por el modelo taylorista, las viejas características del trabajo no desaparecen en provecho de las nuevas exigencias. Estas se superponen a las antiguas

2. Cf. Marcos Supervielle y Francisco Pucci, “Transformaciones de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales en la salud privada ante los procesos de globalización en Uruguay”, documento de trabajo N° 31, Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 1996.

3. Cf. Francisco Pucci, Rodolfo Levin, Nicolás Trajtenberg y Carlos Bianchi, *La implementación de normas de calidad en la industria uruguaya: entre la innovación y el ritualismo*, Montevideo, Trilce, 2008.

4. Cf. Mariela Quiñones, Marcos Segantini y Marcos Supervielle, *Gestión de recursos humanos en la industria manufacturera exportadora de Uruguay, 1991-2010*, Montevideo, Ediciones Universitarias-CSIC, 2014.

y tal sedimentación se traduce en múltiples tensiones dentro del sistema productivo. La tentativa de conciliar estas exigencias contradictorias se manifiesta en las opciones que se toman, como la de pedir a los trabajadores que puedan llenar diferentes puestos con tareas parcelizadas más que construir una polivalencia a partir del enriquecimiento de las tareas. Esta contradicción se concreta también en un cierto número de oscilaciones y de compromisos inestables entre la especialización y la integración de servicios. Producto de estas tensiones, la adaptación del modelo taylorista revela estrategias paradójicas, en las cuales la utilización que se hace de la participación constituye un indicador.<sup>5</sup>

Las empresas se enfrentan, en las nuevas condiciones de producción, con el dilema de generar un sentimiento de pertenencia productiva para involucrar al trabajador con los objetivos de calidad de la producción. En el modelo taylorista, la pertenencia productiva se expresa a través de una fuerte ambivalencia: la comunidad de referencia es una comunidad de productores, pero también una comunidad de oposición al orden establecido en la empresa. La búsqueda de la eficiencia se hace a través de un proceso de demarcación con relación a los modos de razonamiento impuestos. Se trata de un *consentimiento paradójico* o de una *participación paradójica*, término que busca dar cuenta de una actitud extremadamente compleja que consiste en elaborar y movilizar saberes empíricos y capacidades de microinnovación, mejorando las condiciones y la eficacia de la producción, al tiempo que se expresa una desconfianza y una distancia con respecto a las reglas de juego de la empresa taylorista.<sup>6</sup> Estaríamos frente al caso en el cual existe cooperación pero no confianza entre las partes, modalidad de cooperación prevaleciente en el modelo taylorista-fordista de producción.

En el caso uruguayo, las relaciones entre empresarios y trabajadores en la industria se mantienen, en su mayor parte, dentro de la lógica del modelo taylorista de producción y se expresan a través de formas de cooperación ambiguas, marcadas por la desconfianza en las reglas de juego tanto al interior de la empresa como en el marco más amplio de la negociación colectiva. El desarrollo de relaciones de cooperación que incluya altos componentes de confianza implica generar una estructura de incentivos a través de la cual los actores laborales puedan reconocer una comunalidad de intereses en que esta funcione: mayor competitividad

5. Cf. Jean-Louis Laville, "Participation des salariés et travail productif", *Sociologie du travail*, N° 1/93, 1993, pp. 27-47.

6. *Ibidem*.

para el empresario, estabilidad en el empleo y mejores salarios para los trabajadores. Sin embargo, esta dimensión no alcanza. La construcción de relaciones de confianza requiere también que las interacciones entre empresarios y trabajadores modifiquen las representaciones que cada uno se hace del otro. Este aspecto, que se caracteriza por fuertes componentes de contingencia, puede explicar que, dada una misma estructura de incentivos, en algunas empresas sea exitosa y en otras, fracase. Estos diferentes resultados muestran la diferencia entre asumir la perspectiva de la confianza relacional, cuyo fundamento es el sistema que se impone, y la perspectiva de la confianza social, cuyo fundamento está en la calidad de las interacciones de los agentes.<sup>7</sup>

Si bien no podemos decir que los recientes procesos de reestructuración productiva de la industria uruguaya sean simplemente formas de fluidez organizacional que permiten ajustar la fuerza de trabajo a los intereses de la empresa, o mecanismos a través de los cuales se disfrazan estrategias de reducción de costos y de ajuste de la cantidad de trabajadores a los requerimientos productivos, tampoco estamos frente a modelos que desarrollen formas de racionalidad comunicativa que transformen la relación del trabajador con su trabajo.<sup>8</sup> El diagnóstico más ajustado parece ser el que ve en estos procesos una forma de tecnificación del proceso de trabajo superior a la implementada en las clásicas formas de organización del trabajo de las industrias sustitutivas de importaciones, el desarrollo de criterios más universales de evaluación del trabajo y, en algunos casos, las posibilidades de instaurar procesos de retaylorización que, de todos modos, constituyen formas más adecuadas que los modelos tradicionales de tipo paternalista.

Un caso diferente lo constituyen las nuevas inversiones en el área rural, en particular el desarrollo de la industria forestal. Desde principios de los años 90, la actividad forestal en Uruguay ha tenido un crecimiento sustantivo tanto en términos económicos como sociales, posicionándose como el sector con mayor dinamismo en los últimos quince años debido

7. Cf. Vincent Mangematin, "La confiance: un mode de coordination dont l'utilisation dépend de ses conditions de production", en Christian Thuderoz, Vincent Mangematin y Denis Harrison (coords.), *La confiance: approches économiques et sociologiques*, Toronto, D. Gaëtan Morin Éditeur, 1999, pp. 32-55.

8. Cf. Francisco Pucci, Rodolfo Levin, Nicolás Trajtenberg y Carlos Bianchi, *La implementación de normas de calidad...*

a su gran demanda laboral.<sup>9</sup> Las empresas incorporan procesos tecnológicos modernos y formas de gestión de la fuerza de trabajo inspiradas en los modelos “toyotistas” de producción. Para México, Enrique de la Garza Toledo señala que las nuevas formas de organización del trabajo de tipo “toyotista” tuvieron que adaptarse, como ocurrió anteriormente con el taylorismo, a las condiciones locales de cada país, en términos de niveles de inversión, composición de la mano de obra, relaciones laborales y culturas de trabajo.<sup>10</sup> Esta nacionalización del toyotismo, que pasó por las decisiones de los actores empresariales, de los sindicatos y del Estado, terminó conformando una configuración sociotécnica que De la Garza denomina “toyotismo precario”, como forma dominante de la reestructuración productiva de México. Esta configuración implicó la aplicación parcial de algunos de los componentes del modelo toyotista, como el “justo a tiempo” y el control total de la calidad, la continuación de la segmentación entre trabajadores técnicos y operadores de planta, el achatamiento o inexistencia de carreras profesionales, la flexibilidad salarial combinada con incentivos por productividad y la persistencia de bajos niveles salariales.

Este tipo de configuración productiva tiene puntos de contacto con las formas organizativas de las empresas forestales uruguayas. Este sector ha experimentado en los últimos años un proceso de modernización de su actividad productiva, a través de la implantación, en diferentes regiones del país, de empresas nacionales o extranjeras que realizaron importantes inversiones en infraestructura y tecnología. Tal modernización tuvo como consecuencia un creciente proceso de formalización de la mano de obra contratada para trabajar en el sector, mejorando notoriamente las condiciones de empleo de los trabajadores de las regiones en las que las empresas se instalaron, los cuales se desempeñaban en actividades rurales de baja calificación y en condiciones precarias desde todo punto de vista.

La modernización del sector en términos tecnológicos y de organización del trabajo cambia las características típicas del trabajo rural, sustentado en la fuerza física y en la resistencia corporal, para aproximarlos a las modalidades del trabajo industrial. Este cambio tiene como consecuencia el aumento de las exigencias de capacitación y formación de la mano de obra, que debe desarrollar capacidades y habilidades para

9. Cf. Humberto Tommasino y Yanil Bruno, “Empresas y trabajadores agropecuarios en el período 2000-2009”, *Anuario 2010*, Montevideo, MGAP, 2010, pp. 369-373.

10. Enrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa, *Trabajo y modelos productivos en América Latina*, Buenos Aires, Clacso, 2010.



manejar tecnologías y procesos de trabajo más calificados. Sin embargo, pese a estos importantes cambios que acompañaron la modernización del sector, la actividad forestal mantiene dos características históricas: la estacionalidad y la tercerización del proceso de trabajo.

La estacionalidad de la producción y la necesidad de contar con trabajadores jornaleros cuando las necesidades de producción lo determinan deriva en la segunda característica significativa de la actividad forestal: la fuerte tercerización de sus procesos de trabajo, desde los cuales emerge una figura típica del mundo forestal, el contratista. Los diferentes componentes del proceso de trabajo de la producción forestal están a cargo de diferentes contratistas, que se ocupan de proveer la mano de obra y, en algunos casos, los implementos necesarios para su desarrollo. El proceso de trabajo forestal se compone, en función de la estacionalidad de la producción, de múltiples cuadrillas pequeñas de trabajadores jornaleros, dependientes de un contratista quien, a su vez, es contratado por la empresa forestal en la cual se desempeñan trabajadores estables que realizan tareas de supervisión, coordinación o dirección. La estacionalidad y la presencia de trabajadores jornaleros provistos por los contratistas son modalidades históricas de la producción forestal, que los procesos de modernización no han modificado. En algunos casos, la estacionalidad se ve atenuada por la incorporación tecnológica que genera condiciones que independizan la producción de los ritmos de la naturaleza, pero esta realidad constituye más una excepción que una regularidad. A estas condiciones de empleo hay que agregar una modalidad que se incorpora más recientemente en la producción forestal: la fijación del salario del trabajador de acuerdo con criterios de productividad individual, lo que acentúa las condiciones de precarización de la mano de obra.

En los años 2000, las resistencias generadas por las recetas neoliberales abrieron la posibilidad para la instalación de gobiernos progresistas. El descontento popular favoreció el ascenso al poder, en la primera década de este siglo, de líderes políticos que propugnaban la necesidad de un cambio radical en las políticas económicas y de un cambio en las relaciones entre Estado, empresarios y sindicatos. En esta etapa se fortaleció en muchos países la normativa laboral, aumentaron los niveles de formalización del empleo, se retomó la negociación colectiva y se mejoraron los salarios y las condiciones laborales de numerosos trabajadores. Sin embargo, la continuidad de estas políticas se ve actualmente amenazada y el retorno a recetas de tipo neoliberal gana espacios nuevamente en numerosos países del continente.

En el caso uruguayo, la llegada de la izquierda al gobierno impulsó un

conjunto de políticas que permitieron el fortalecimiento del movimiento sindical, expresado, entre otras dimensiones, en el aumento de la cantidad de afiliados a la central sindical.<sup>11</sup> La tasa sindical global pasó del 16,9% en 1996 al 22% en 2010. El crecimiento de la institucionalización de los sindicatos y la ampliación de su cobertura de afiliación y de representación en casi todos los sectores donde hay trabajadores asalariados fueron el resultado de las nuevas reglas de juego impuestas por el Estado impulsando el diálogo social en múltiples planos. La crisis económica de principios de este siglo cambió profundamente el perfil del sindicalismo uruguayo, en la medida en que pasó de tener un perfil con un relevante componente obrero-industrial a fines del siglo pasado a un sindicalismo de perfil mayoritariamente del sector público y de servicios. Este proceso se revirtió durante el crecimiento y desarrollo de la economía, en el contexto de las nuevas reglas de juego del gobierno de izquierda.<sup>12</sup>

El nuevo marco jurídico que se desarrolla a partir de 2005 introduce un cambio fundamental en las relaciones laborales: la posibilidad de que la convocatoria a consejos de salarios se realice a pedido de trabajadores, de empresarios o, como lo establecían las normas anteriores, por voluntad del Poder Ejecutivo. Esta norma establece las condiciones para construir un sistema de relaciones laborales que funcione con autonomía del sistema político, de acuerdo con el modelo de “neocorporativismo social” caracterizado por Schmitter.<sup>13</sup> Este modelo, cuyos ejemplos históricos más salientes son las experiencias de negociación colectiva de los países del norte de Europa, se sustenta en la autonomía y legalidad específica de los espacios de negociación de intereses, espacios que generan acuerdos estables, de largo plazo, que se convierten en políticas de Estado, ya que trascienden los cambios de poder político. Estos modelos neocorporativos se sustentan, a su vez, en la estrecha relación entre sindicatos y partidos políticos de izquierda, y se comienzan a implementar cuando estos lograron mayorías electorales y llegaron al gobierno tras años de oposición.<sup>14</sup>

11. Cf. Luis Senatore, “Uruguay, 1992-2009: las políticas laborales y el sujeto sindical”, *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, año xiv, N° 22, 2009, pp. 53-76.

12. Cf. Mariela Quiñones y Marcos Supervielle, “Nouveau syndicalisme, nouveaux syndicats: impacts recherchés et effets inattendus du gouvernement Mujica dans le monde des travailleurs”, *Cahiers des Amériques Latines*, vol. 74, 2014, pp. 143-157.

13. Philippe Schmitter, “Still the century of corporatism”, *The Review of Politics*, vol. 36, N° 1, 1974, pp. 132-170.

14. Cf. Francisco Pucci, Soledad Nión y Fiorella Ciapessoni, “La negociación colectiva en el primer gobierno de izquierda del Uruguay”, *Latin American Research Review*, vol. 49, N° 2, 2014, pp. 3-23.

Las modificaciones más importantes que se introducen en ese período son la ampliación de la cobertura al sector rural y a las empleadas domésticas y el desarrollo de un marco normativo para dar un respaldo formal a los procesos de negociación. El primer punto salda una deuda histórica con sectores tradicionalmente excluidos de la negociación colectiva, pero no modifica sustantivamente el formato de negociación. El desarrollo del marco normativo, en cambio, establece avances sustantivos con respecto a formatos anteriores, en la medida en que genera las condiciones para superar la escasa institucionalización que tuvieron históricamente los anteriores procesos de negociación colectiva. Si bien la negociación colectiva en nuestro país surge en el marco de la Ley de Consejos de Salarios de 1943, este conjunto normativo no regulaba numerosos aspectos de la negociación colectiva y de las relaciones laborales que se regían por prácticas de hecho más que de derecho. Esta ausencia de regulación se corresponde, a su vez, con la defensa de la autonomía del movimiento sindical frente al Estado, bandera histórica del movimiento sindical desde sus orígenes anarquistas hasta nuestros días. La negociación colectiva que se retoma a partir de 1985 es aún más informal en términos jurídicos, en la medida en que retoma aspectos parciales de la Ley de Consejos de Salarios de 1943 con procedimientos de la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos (Coprín) de 1968, organismo que fijaba por decreto del Poder Ejecutivo precios e ingresos de los trabajadores.

La normativa jurídica sancionada a partir de 2005 también tuvo un efecto importante en la disminución de los desequilibrios de poder entre los actores laborales que participaron en la negociación colectiva. Las diferentes leyes de protección de los derechos sindicales otorgaron a los representantes de los trabajadores garantías formales para el desarrollo de sus funciones, lo que les permite tener una relación más equilibrada con la contraparte laboral. Los empresarios criticaron este desbalance normativo, que tendió a otorgar garantías a los trabajadores sin avanzar en disposiciones que dieran garantías a los empresarios, como la reglamentación del derecho de huelga. Más allá de esta discusión, el resultado parece inclinarse hacia un mayor equilibrio en el relacionamiento de las partes, equilibrio que quizá no se hubiera establecido si la normativa hubiera ofrecido garantías iguales a actores desiguales en términos de poder estructural. La normativa jurídica jugó un rol compensador de las diferencias de poder que se inscriben en la estructura social, aspecto que constituye un avance sustantivo con relación a las experiencias de negociación colectiva del pasado.

Estos procesos, que marcan similitudes y singularidades del proceso

uruguayo con relación al resto de los países latinoamericanos, fueron abordados por los estudios del trabajo realizados en el marco de ALAST desde diferentes ángulos. Los clásicos estudios sobre mercados de trabajo, organización y condiciones laborales, tercerización y subcontratación, relaciones entre trabajo y educación, trayectorias laborales, desigualdad, pobreza y cambio tecnológico se vieron enriquecidos con la perspectiva de género, los problemas de identidad, los estudios de formas de trabajo no clásico, de las migraciones laborales y de los procesos de profesionalización. Los actores laborales también se han estudiado a través de la acción colectiva de los sindicatos, las estrategias empresariales, las políticas laborales y los procesos de negociación colectiva.

Desde su fundación a la fecha, ALAST ha realizado nueve congresos, en la Argentina, Brasil, México, Cuba, Colombia, y, en 2007, en Uruguay. La Asociación edita de manera ininterrumpida una revista especializada en temas laborales denominada *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (Relet)*, que ya cuenta con 37 ediciones y donde se comunican los principales resultados de las investigaciones de las ciencias sociales aplicadas al trabajo. Una característica específica de la Asociación es su escaso nivel de institucionalidad formal. El presidente de ALAST y los responsables de la edición de la *Relet* son elegidos por las organizaciones vinculadas con los estudios del trabajo del país que organiza el evento. Esto obliga a la *Relet* a cambiar de sede cada tres años, acompañando la nueva sede de los congresos, lo que conspira con las posibilidades de indexación internacional de la revista. Estos problemas se debatieron en el último congreso realizado en Colombia, en el cual se decidió emprender acciones para formalizar jurídicamente a la Asociación.

Si bien ALAST es una red que congrega a investigadores latinoamericanos, en sus congresos también participan investigadores del mundo del trabajo de primer nivel de Europa y de América del Norte. Las principales discusiones de la sociología del trabajo de Europa, entre cuyos referentes más notorios podemos citar a Harry Braverman, Pierre Naville, Georges Friedman, Alain Touraine, Michel Aglietta, Robert Boyer y Michel Freyssenet, entre tantos otros, generaron insumos teóricos relevantes para el estudio de las transformaciones del trabajo en América Latina. Los trabajos más recientes, por citar algunos, de Juan José Castillo, Carlos Prieto, Philippe Zarifian, Rainer Dombois, Luger Pries, Luc Boltansky, Robert Castel y Michael Burawoy, muchos de los cuales estuvieron presentes en los congresos de ALAST, profundizaron y enriquecieron la comparación con las realidades del mundo laboral de los países desarrollados. Más allá de la fuerte influencia de estos autores,

los estudios del trabajo latinoamericanos también tuvieron capacidad para generar desarrollos teóricos específicos a través de autores como José Nun Miguel Murmis, Aníbal Quijano y Enrique de la Garza Toledo, entre otros.

Una impronta típica de los congresos de ALAST es la fuerte participación que tienen las organizaciones sociales y laborales en ellos y, en particular, pero no exclusivamente, de los sindicatos. Esta participación permite numerosas formas de intercambio de las experiencias sociales y políticas de los actores sociales y laborales con los estudios y resultados académicos, lo que nutre la discusión empírica y conceptual de los congresos. Estos intercambios no van en desmedro, sino que, al contrario, potencian la calidad académica de la Asociación.

La sociología del trabajo uruguayo ha participado en todos los congresos de ALAST, y tuvo la presidencia de la Asociación en la persona de Marcos Supervielle, fundador de la sociología del trabajo uruguayo, entre 2007 y 2010. La participación de los sociólogos del trabajo uruguayos tiende a ampliarse en cada congreso, llegando a diecisiete ponentes en el último congreso realizado en Colombia. Esta realidad refleja el crecimiento de esta disciplina en nuestro país, aunque todavía no existe una asociación que nuclea a los investigadores del trabajo uruguayos al estilo de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), la Associação Brasileira do Estudos do Trabalho (ABET) o la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET). Un primer paso ha sido la creación de la Red de Estudios del Trabajo que reúne a abogados laboralistas, psicólogos del trabajo, economistas y médicos especializados en salud ocupacional, a través de la cual se presentan proyectos, se realizan jornadas de intercambio y se organizan eventos académicos.

La sociología del trabajo uruguayo ha crecido acompañando los debates generados en el marco de ALAST, con estudios nacionales sobre calidad, cambios productivos, gestión del conocimiento, mercado de trabajo, categorías laborales, condiciones laborales y riesgos. También se han desarrollado trabajos sobre negociación colectiva, acción sindical, identidades laborales, empleo rural y desigualdades de género, contribuyendo a la discusión latinoamericana de estas temáticas. Estos trabajos sirvieron de insumos a la acción colectiva y a la formación de líderes sindicales, en sintonía con las tendencias generales de los estudios del trabajo latinoamericanos. La articulación de la investigación nacional con estos espacios institucionales internacionales también ha potenciado el intercambio de estudiantes de posgrado y de docentes en las formaciones de posgrado locales.

El próximo congreso de ALAST se realizará en Chile en 2022, lo que constituye una nueva posibilidad para presentar trabajos e investigaciones sobre el mundo del trabajo uruguayo. La *Relet* también realiza convocatorias semestrales para presentación de trabajos, organizados en torno a un tema específico planteado por los editores. La continuidad y el fortalecimiento de estos vínculos internacionales permiten enriquecer el debate nacional, potenciar a los grupos de investigación en esta temática y presentar los componentes específicos de la realidad laboral uruguaya en el mundo latinoamericano, en el marco de las políticas laborales ensayadas por los diferentes gobiernos de la región.

## Medio siglo de sociología rural en América Latina

*Alberto Riella\**

Hace cinco décadas se fundaba la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) en la ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 1969. Eran años de fuertes movilizaciones populares y en la mayoría de los países de la región la agenda de políticas públicas incluía distintas propuestas de reforma agraria como uno de los instrumentos para el desarrollo rural y la democratización de las sociedades rurales.

Eran épocas donde el poder local de los terratenientes y latifundistas estaba por encima del estado de derecho y las fuertes migraciones internas debilitaban el tejido social y campesino, pero aun así la mayoría de la población del continente vivía y trabajaba en áreas rurales. En estas circunstancias un grupo de sociólogos preocupados por los problemas agrarios lograron, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) concretar la creación de una asociación que nucleara a los sociólogos rurales de América Latina con el objetivo de generar espacios de diálogo e intercambio para analizar y comprender mejor los desafíos del desarrollo rural desde una perspectiva latinoamericana.

Esta temprana iniciativa de asociación nos muestra que la sociología rural es una de las ramas de la disciplina que ha presentado siempre un alto grado de institucionalización relativa, alcanzando hoy a tener asociaciones regionales en los cinco continentes, todas ellas agrupadas en la Asociación Internacional de Sociología Rural (IRSA, por su sigla en inglés), creada en 1962.<sup>1</sup>

\* Doctor en Sociología. Profesor titular del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Presidente de ALASRU (2014-2018). [alberto.riella@cienciassociales.edu.uy](mailto:alberto.riella@cienciassociales.edu.uy)

1. Esta organización mundial surge como la unión de la Sociedad de Sociología Rural (RSS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, fundada en 1937, y la Sociedad Europea de Sociología Rural (ESRS, por su sigla en inglés), que se organizó en 1957.

Desde su fundación ALASRU siempre ha buscado vincular, mediante múltiples actividades, los debates de los sociólogos rurales con los movimientos sociales, las instituciones públicas y los organismos internacionales que trabajan en las diversas temáticas de los mundos rurales y agrarios. Esto nos ha permitido comprender mejor las complejas y diversas desigualdades sociales que tensan esos territorios y contribuir, con nuestras investigaciones, en la búsqueda de transformaciones sociales que impulsen mayor igualdad, participación y respeto a los bienes comunes.

En este sentido, la Asociación ha sido por medio siglo un escenario privilegiado para los debates sobre la ruralidad en América Latina, la cuestión agraria y su vinculación con los modelos de desarrollo, las alternativas sociopolíticas y el papel que deben tener los sujetos agrarios en dichos proyectos.

Como veremos a continuación, el pensamiento social y sociológico sobre los mundos rurales se ha ido modificando y la “percepción de lo rural” y su significado refleja en buena medida los estilos de “época” por los que han atravesado nuestros países, ya que como afirma Francisco Entrena, la ruralidad no es una “realidad en sí”, es una construcción social que depende del momento histórico y puede variar para cada sociedad o región del mundo.<sup>2</sup>

En este artículo trataremos de sintetizar en cuatro grandes momentos la trayectoria que han tenido estos debates y su consecuente construcción de lo “rural”. El primero de ellos es anterior a la fundación de ALASRU y refiere principalmente a las reflexiones clásicas y su posterior efecto en América Latina. El segundo momento es la reacción crítica a las miradas modernizadoras, donde se colocará como eje central del debate las clases sociales y sus relaciones de poder, como factor de las transformaciones rurales. El tercero puede ubicarse en las dos últimas décadas del siglo xx, con la emergencia de los modelos neoliberales, donde el eje de las discusiones rota hacia la capacidad del mercado para ordenar la sociedad. Y, por último, el momento actual, que comienza en los primeros años de este siglo y que está signado por la crisis ambiental y la emergencia de las cadenas agroalimentarias globales.

**I.** Puede afirmarse que el debate sobre el “mundo rural” estuvo presente desde los orígenes mismos de la sociología. Fue uno de los ejes de reflexión de los principales autores clásicos: tanto Émile Durkheim como

2. Francisco Entrena, “Viejas y nuevas imágenes sociales de ruralidad”, *Estudios Sociedade e Agricultura*, N° 11, 1998, pp. 76-98.



Karl Marx y Max Weber dedicaron parte de sus obras al estudio del mundo campesino y rural de sus épocas y observaron con atención cómo se erosionaba su centralidad mientras se abría paso a la expansión de los burgos y la organización de la vida social en las ciudades.

Para la comprensión de estos fenómenos, dichos autores utilizaron diferentes marcos conceptuales que fueron marcando los rumbos de las distintas perspectivas de abordaje de lo rural, dando así origen a las principales corrientes que nutren hasta hoy el estudio de los procesos sociales vinculados con los espacios rurales y las actividades agrarias.

Uno de los autores que más influencia ha tenido en la mirada hegemónica sobre lo rural durante el siglo xx es sin duda Ferdinand Tönnies con su célebre distinción entre “sociedad” y “comunidad”,<sup>3</sup> que más tarde será utilizada y ampliamente divulgada por Max Weber. El autor alemán, al analizar y exponer esta distinción conceptual entre diferentes formas de constituir los lazos sociales, toma como ejemplo de comunidad la organización social de los territorios rurales, y las características de la sociedad se las atribuye a la organización social de los territorios urbanizados.

Si bien la intención de Tönnies no fue caracterizar el tipo predominante de organización social en los territorios, la posterior interpretación realizada fundamentalmente por la teoría del sistema social de Talcott Parsons, que inspirará la teoría de la modernización en nuestro continente, interpreta que lo “urbano” es lo moderno, racional, avanzado, diferenciado y universalista, en tanto lo “rural” será considerado como lo tradicional, indiferenciado e irracional y controlado por creencias religiosas.<sup>4</sup>

Esta mirada de las áreas rurales como “el problema del atraso” se vuelve hegemónica cuando la teoría de la modernización pasa a dominar las explicaciones sobre el “subdesarrollo”. A partir de ese momento se colocan todos los atributos de la modernidad en las ciudades y en la industrialización, y los problemas del subdesarrollo, en las áreas rurales y en su producción primaria. Los enfoques más específicos de esta teoría sobre la ruralidad son introducidos principalmente por las facultades de agronomía que, siguiendo la tradición norteamericana, incluyeron desde muy temprano en sus currícula cursos de sociología rural funcionalista, que en poco tiempo se harían hegemónicos también en los estudios rurales en América Latina.<sup>5</sup>

3. Ferdinand Tönnies, *Comunidad y sociedad*, Buenos Aires, Losada, 1947.

4. Talcott Parsons, *La estructura de la acción social*, Madrid, Guadarrama, 1968.

5. Cf. Alberto Riella y Gonzalo Kmail, “La(s) sociología(s) rural(s)”, *Revista de Ciencias Sociales*, vol 1, Nº 7, 1992, pp. 78-90.

Las consecuencias de esta conceptualización fueron impulsar una fuerte transformación de lo rural para que adquiriera las características de modernización que presentaban las ciudades. La principal herramienta para producir este cambio social eran las políticas públicas en educación, control social e impulso a nuevas tecnologías de producción más “científicas”. Se afirmaba que la acción de estas políticas llevaría a eliminar las culturas rústicas de los campesinos y de los pueblos originarios, y sustituirlas por formas de socialización más racional y moderna.

Estas concepciones desvalorizadoras y negativas de lo rural fueron acompañadas también por la creación de una fuerte dicotomía demarcatoria que distinguía de forma tajante lo rural de lo urbano. Este enfoque originalmente creado por Pitlrim Sorokin y Carle Zimmerman establecía una serie de rasgos funcionales y causalmente conectados que separaban la sociedad rural de la urbana, como la ocupación, el volumen de la comunidad, las diferencias ambientales, la movilidad, la estratificación y la interacción.<sup>6</sup> En Uruguay y la región, esta mirada fue aplicada y divulgada por Aldo Solari, quien en 1958 publicó su libro *Sociología rural nacional*, y cuya influencia trascendió el país con la publicación en 1963 de *Sociología rural latinoamericana*, que tuvo una amplia difusión y marcó el pensamiento sobre la ruralidad también en el continente.<sup>7</sup>

La visión de que había que “superar” de alguna forma “lo rural” fue tan dominante en esas décadas en la sociología que de forma indirecta las corrientes más críticas vinculadas con el marxismo tenían también una idea relativamente similar a esta. Se consideraba que los espacios rurales y su organización social pertenecían a un modelo de producción con vestigios de formas feudales y de servidumbre que deberían ser superadas por las transformaciones capitalistas para dar paso al desarrollo nacional, donde se podría construir las bases sociales para impulsar una revolución socialista.

Con estos presupuestos teóricos se estableció durante medio siglo xx una suerte de “batalla” para transformar lo rural en urbano, desconociendo sus especificidades, sus culturas, sus identidades y sus equilibrios ambientales, negando de esta forma muchas de sus verdaderas potencialidades para el desarrollo.

6. Pitlrim Sorokin y Carle Zimmerman, *Principles of Rural-Urban Sociology*, Nueva York, Henry Holt, 1929.

7. Aldo E. Solari, *Sociología rural nacional*, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, 1958; *Sociología rural latinoamericana*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.

Este reduccionismo conceptual, que asimiló los territorios a determinadas formas de organización social y que construyó una equivalencia lineal de lo urbano con el progreso y lo rural con el atraso y lo no deseado, se hará presente por décadas en el diseño de las principales políticas públicas y los esfuerzos estatales para el desarrollo rural, lo que puede explicar muchos de los fracasos que dichas políticas tuvieron a lo largo de esas décadas.

II. En la década de 1960 el pensamiento de la modernización comenzó a ser muy cuestionado dentro de las universidades tanto por la visión cepalina del centro-periferia como por la posterior teoría de la dependencia y las diversas visiones de cuño marxistas más arraigadas en la academia. Como parte de este impulso renovador se funda ALASRU. Las nuevas miradas teóricas introducirán un giro en la agenda de los debates sobre los temas rurales que pasarán a centrarse en el papel de la agricultura en las economías latinoamericanas, los problemas de acceso y tenencia de la tierra, la democratización de las relaciones sociales en el campo y el papel de los sujetos sociales agrarios en un proceso de cambio social.

El debate teórico que despertó mayor interés entre los sociólogos rurales latinoamericanos de la época fue la confrontación entre el pensamiento marxista y el pensamiento chayanoviano en torno al futuro del campesinado en las sociedades capitalistas.<sup>8</sup> Las miradas marxistas, influenciadas por los trabajos de Lenin y Kautsky, afirmaban que este grupo social se vería afectado por las tendencias a la diferenciación y proletarianización que impulsaba irremediablemente la penetración del capitalismo en el agro, mientras que las perspectivas centradas en la teoría de Aleksandr Chayanov sostenían que los campesinos tendrían capacidad de subsistir como un sistema de producción propio en el marco del capitalismo y que sus procesos económicos estaban relacionados con los ciclos familiares y no necesariamente con las tendencias del capitalismo. Esto dará lugar a un nutrido debate donde se conformarán dos enfoques rivales que conviven hasta hoy, denominados corrientes “campesinista” y “descampesinista”. Ambas posiciones siguen teniendo fuertes implicancias en las discusiones actuales sobre el desarrollo rural, las políticas públicas y el papel de estas formas de producción en el capitalismo contemporáneo.

Estas discusiones teóricas fueron acompañadas por importantes in-

8. Cf. Roger Bartra, “La teoría del valor y la economía campesina: invitación a la lectura de Chayanov”, en *Comercio exterior*, Ciudad de México, Bancomex, 1975, pp. 517- 528.

vestigaciones empíricas desarrolladas en varios países de la región, que renovaron las miradas sobre la ruralidad y sus formas de organización social. Dichos trabajos incorporan el estudio de los problemas de la estructura agraria, el monopolio y control de la tierra, la importancia del Estado y la falta de neutralidad de sus políticas públicas, las formas de resistencia de las unidades familiares y la importancia que iba adquiriendo el trabajo asalariado en la producción primaria a gran escala.<sup>9</sup>

Estos también fueron los años de la revolución socialista triunfante en Cuba, la cual se había desplegado y fortalecido en las zonas rurales y cuyas primeras medidas apuntaban a la colectivización de la tierra como solución al problema del latifundio. Esta experiencia motivó importantes movilizaciones rurales en varios países de la región, dando una visibilidad creciente a las organizaciones de campesinos, indígenas y jornaleros que reclamaban formas de acceso a la tierra y denunciaban las condiciones de explotación a las que eran sometidos en las grandes haciendas y plantaciones.

La relevancia que alcanzaron estas discusiones en nuestros países quedó objetivada con la realización del V Congreso Mundial de Sociología Rural en 1977 en México, organizado por ALASRU e IRSA. La presidencia del congreso estuvo a cargo de Rodolfo Stavenhagen, una de las principales figuras intelectuales del debate en torno a la cuestión agraria y autor de una obra de referencia del período sobre las especificidades de la estructura de clases en el medio rural latinoamericano.<sup>10</sup> En dicho evento mundial se presentaron 480 ponencias, con una importante participación de países de nuestro continente, y como resultado de este se publicaron veinte tomos en conjunto con IRSA que recogieron los principales trabajos del congreso.<sup>11</sup>

Pero a fines de la década de 1970 y en casi toda la de 1980, estos debates irán perdiendo centralidad a raíz de la instalación y el auge de las dictaduras militares, la represión directa a los movimientos sociales y el cierre de varios centros universitarios de referencia. Los años 80 estarán marcados por la crisis de la deuda externa, el estancamiento económico y el empobrecimiento de la población. En estas condiciones se irá abrien-

9. Cf. José Francisco Grazi da Silva, *De bóias frias a empregados rurais*, San Pablo, Civilização Brasileira, 1981.

10. Rodolfo Stavenhagen, *Las clases sociales en las sociedades agrarias*, Ciudad de México, Siglo XXI, 1969.

11. Edilberto Niño Velázquez, "Breve historia de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural", en Diego Piñeiro (comp.), *Treinta años de la sociología rural en Latinoamérica*, Montevideo, ALASRU, 2000, pp. 203-235.

do la lenta y paulatina implantación de los modelos de desregulación neoliberal que recorrerán las dos décadas finales del siglo anterior, y con ello se instalará una mirada diferente sobre los problemas agrarios.

**III.** El inicio de la década de 1990 estará signado políticamente por la crisis de los países del socialismo real y el derrumbe de la Unión Soviética. Ante estos sucesos, en la academia emerge el supuesto “fin de la historia” como mirada conservadora de dichos acontecimientos, mientras que desde la izquierda entrarán en escena las diversas corrientes posmodernas y sus críticas a las conceptualizaciones científicas. En este período los estudios de la sociología rural en nuestro continente, al igual que el resto de las ciencias sociales, pasan por una pérdida de referencias conceptuales y un cierto consenso del deterioro de la centralidad de lo agrario, como consecuencia del comienzo de los procesos de globalización que muestran sus primeros efectos en la desterritorialización de las relaciones sociales.<sup>12</sup> En estas circunstancias se da la reemergencia de un pensamiento conservador que hegemonizará la academia como forma de “pensamiento único”.<sup>13</sup> En la sociología rural volverán a reintroducirse las viejas visiones modernizantes de lo rural, pero ahora dando énfasis a la idea de que la única forma de proteger a los campesinos y productores familiares es transformarlos en pequeños empresarios emprendedores, que orienten su producción a la exportación para nichos de mercado de alto consumo dispuestos a obtener productos selectos y exóticos a altos precios.

Las políticas públicas de esa década fueron abandonando los espacios rurales, mientras que la centralidad de la producción agraria en las economías nacionales se iba reduciendo con la caída sistemática de los precios internacionales. Los altos subsidios que los países desarrollados otorgaban a sus exportaciones agrícolas inundaban el mercado mundial de alimentos, produciendo un gran deterioro de los términos de intercambio durante todos esos años.

Los estudios y debates de la sociología rural giraron en torno a los efectos sociales de las transformaciones que se estaban produciendo a raíz de los nuevos avances tecnológicos, los encadenamientos agroindustriales

12. Cf. Octavio Ianni, *A era do globalismo*, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996; Norma Giarracca, “La agricultura y el mundo rural desde las ciencias sociales en Argentina”, en Diego Piñeiro (comp.), *Treinta años de la sociología rural en Latinoamérica*, Montevideo, ALASRU, 2000, pp. 71-110.

13. Cf. Atilio Boron, “Pensamiento único y resignación política: los límites de una falsa coartada”, en *Tiempos violentos: neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Clacso, 1999, pp. 138-156.

y el aumento en las escalas de producción. Estos procesos beneficiaban a una capa reducida de grandes productores en pocos rubros de exportación, mientras que los campesinos y productores familiares eran sistemáticamente excluidos de estas cadenas de valor. Por otra parte, aquellos que lograban seguir produciendo alimentos básicos para el mercado interno se veían cada vez más afectados por la reducción, o en algunos casos la eliminación total, de las protecciones arancelarias frente a exportaciones de terceros países.

El núcleo central de las investigaciones profundizó en el análisis de las diversas formas y mecanismos de exclusión de los complejos agroindustriales, la pérdida creciente de autonomía de la fase agraria ante estos encadenamientos y la modalidad de transnacionalización que presentaban estos procesos. También se concentró la atención en los impactos que estos fenómenos tuvieron en el incremento de los niveles de pobreza en las comunidades, en el aumento de la precarización y la estacionalidad del empleo agrícola. El cúmulo de estudios sobre estos procesos demostró con abrumadora evidencia lo que Jacques Chonchol denominó “modernización conservadora y excluyente” durante la cual se desplazaron las viejas oligarquías terratenientes –en algunos casos aprovechando las reformas agrarias de la década anterior, como fue en el caso de Chile– por un empresariado capitalista más tecnologizado, con mayor articulación en las cadenas agroindustriales y con vínculos más estrechos con otras fracciones del capital.<sup>14</sup>

En este contexto, en 1990 se realiza el III Congreso de ALASRU, en Neuquén, Argentina, organizado por Mónica Bendini, que inaugura una nueva modalidad de congresos, logrando un amplio poder de convocatoria, el cual se mantiene hasta hoy, abriendo la participación a amplias capas de jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado. La globalización se instala como tema central del Congreso y los debates pondrán de manifiesto cómo la modernización conservadora abrió camino a un tipo de globalización que profundizaría los problemas sociales de las poblaciones rurales.<sup>15</sup> Se observa la necesidad de explorar alternativas frente a las visiones hegemónicas que presentaban la “globalización” como la solución definitiva de los problemas agrarios de nuestro continente y

14. Jacques Chonchol, *Sistemas agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a la modernización conservadora*, Santiago de Chile, FCE, 1997.

15. Cf. Alessandro Bonnano, “Globalización del sector agrícola y alimentario: crisis de convergencia contradictoria”, en Alessandro Bonnano (ed.), *La globalización del sector agroalimentario*, Madrid, MAPA, 1994, pp. 60-75.

la adaptación a ella como única racionalidad posible para las políticas de desarrollo rural.

Llegamos en estas circunstancias a los últimos años del siglo xx con una profunda crisis del tejido social en amplias regiones rurales del continente y en un marco de severa desmovilización social. En esos años la sociología rural introduce el concepto de multifuncionalidad de los espacios rurales, generado en Europa, para poner de manifiesto la importancia y la necesidad de proteger las zonas rurales y a los pequeños y medianos productores.

Lo destacado de este concepto radica fundamentalmente en poner de manifiesto la importancia de las actividades no agrícolas que se realizan en el medio rural, dando lugar a una renovada mirada sobre la ruralidad.<sup>16</sup> Este enfoque producirá uno de los puntos de inflexión más relevantes en la disciplina. A partir de esta idea las áreas rurales no necesariamente serán vistas solo como espacios de producción de alimentos y materias primas, sino que se otorgará visibilidad a otras actividades y funciones que allí se cumplen y que también son necesarias para el conjunto de la sociedad. Este reconocimiento implica una nueva separación analítica muy relevante para la sociología rural entre lo “rural” y lo “agrario”. Los enfoques predominantes hasta ahora identificaban la dinámica de lo rural como “idéntica” a la agraria y viceversa. La multifuncionalidad permitió una adecuada apertura de miradas a otras actividades económicas y funciones sociales que cumplen los territorios rurales, como la conservación de los recursos naturales, la producción de paisaje, la de esparcimiento y recreación, la de localización de actividades económicas no agrarias y la residencia.

Esta conceptualización introdujo además otro elemento central para entender tal renovación teórica: el concepto “territorio”. Inspirados en las discusiones de la nueva geografía humana francesa y sujetos a la premisa del territorio como una construcción social, los sociólogos rurales tomarán dicha noción para poder reconciliar en una sola mirada más envolvente los procesos sociales rurales y agrarios. Este enfoque territorial de la sociología rural permitirá una mirada más abarcativa e integradora, que cuestionará la lógica exclusivamente productivista y les permitirá reflexionar sobre los procesos de desagrarización de la sociedad rural

16. Cf. Edelmira Pérez, “Hacia una nueva visión de lo rural”, en Norma Giarracca (comp.), *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Buenos Aires, Clacso, 2001; Hubert C. de Grammont, “La nueva ruralidad en América Latina”, *Revista Mexicana de Sociología*, año LXVI, número especial, 2004.

e introducir una perspectiva ambiental en sus análisis. Esta perspectiva contribuirá a mejorar la comprensión de los procesos sociales y será inspiradora de varias de las políticas de desarrollo rural territorial de los gobiernos progresistas de la próxima década.

También en esos últimos años de la década de 1990, en el marco de los debates sobre la globalización y los territorios rurales, se abren paso los estudios sobre las especificidades y singularidades de las relaciones de género y generaciones, dando lugar al reconocimiento de su importancia en el medio rural. Estos estudios contribuyeron a la comprensión de sus particularidades, sus reclamos y necesidades, llegando a conformar campos específicos de reflexión de nuestra disciplina, que acompañan hoy el fortalecimiento y los avances de estos colectivos.<sup>17</sup>

**IV.** Arribamos de esta forma al siglo **xxi**, cuando la agenda de la sociología agraria y rural se ha visto conmocionada por los múltiples efectos que ha ocasionado el avance sin precedentes del capitalismo en el agro latinoamericano. En estos últimos veinte años, casi todos los países de la región han sufrido una fuerte reprimarización de sus economías, lo que ha causado un sinnúmero de tensiones sociales y políticas a lo largo de los territorios rurales del continente. Es así como al entrar en este nuevo siglo, y contrariando todas las predicciones sobre la “muerte de lo rural”, se colocarán nuevamente los problemas agrarios y rurales en la agenda política de la mayoría de nuestros países. Los temas rurales, ahora amplificados por sus vinculaciones con los problemas ambientales, alimentarios y con los derechos de los pueblos originarios, vuelven a ser cruciales en los “conflictos del desarrollo”.

Estas circunstancias han dado lugar a un conjunto de conceptualizaciones en la sociología rural que han ampliado sus horizontes de acción, y la agenda de la disciplina entra en una nueva fase de debates orientando sus ejes de reflexión sobre estas transformaciones, en el marco de un ciclo importante de movilizaciones de grupos campesinos e indígenas<sup>18</sup> y de una serie de cambios políticos en los gobiernos de varios países de Amé-

17. Cf. Sara Lara Flores, “La feminización del trabajo asalariado en los cultivos de exportación no tradicionales en América Latina: efectos de una flexibilidad «salvaje»”, en Sara Lara Flores (coord.), *Jornaleras, temporeras y bóias frias: el rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina*, Caracas, UNRISD-Nueva Sociedad, 1995, pp. 15-34; John Durston, *La juventud rural en América Latina: marco conceptual y contextual*, Santiago de Chile, Cepal, 1998.

18. Cf. Armando Bartra, “Campesinos del tercer milenio: aproximaciones a una quimera”, *Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural*, N° 10,



rica del Sur que buscarán nueva formas de pensar y orientar las políticas públicas de desarrollo rural.<sup>19</sup>

Un reflejo de estas discusiones ha sido el x Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural que realizamos en Montevideo a fines de noviembre del 2018, donde el tema central de la convocatoria fue “Ruralidades en América Latina: convergencias, disputas y alternativas en el siglo xxi”. El evento se convirtió en un gran foro donde se analizaron en profundidad los conflictos que tensan las ruralidades de nuestro continente ante las reiteradas crisis alimentarias, el deterioro ambiental y la disputa a escala planetaria por el control de los recursos naturales.

Un primer eje de las investigaciones presentadas en el Congreso fueron los cambios que se han producido en los sistemas agroalimentarios nacionales a raíz de la emergencia de las nuevas redes globales que controlan la producción y el consumo de alimentos a escala mundial. A causa de esta globalización alimentaria la población ya no depende de lo que se produce en sus naciones para alimentarse, sino que ahora la humanidad necesita, cada día más, adquirir estos productos en el mercado mundial. Esto ha traído un creciente deterioro de la soberanía alimentaria de los países de la región, promoviendo la importación de alimentos a precios cada vez más elevados para la población, mientras los campesinos, agricultores familiares y comunidades indígenas ven reducir cada día más las posibilidades de mantener sus tierras, sus formas de producción y sus culturas. Las cadenas globales regulan de esta forma la circulación, la distribución y los precios mundiales de los alimentos. Estos grandes encadenamientos agroalimentarios se han constituido en verdaderos “imperios alimentarios” que se sirven cada vez más del desarrollo de las tecnologías de comunicación e información en un marco de desregulación neoliberal, para afianzar su modelo de dominación en los territorios rurales.<sup>20</sup> Las investigaciones sociológicas que se vienen realizando al respecto reúnen nutridas evidencias de que este nuevo orden agroalimentario mundial permite a las cadenas transnacionales aumentar su poder de apropiación

---

2014, pp. 17-44; José Bengoa, “¿Fin del desarrollo rural?”, *Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural*, N° 10, 2014, pp. 87-107.

19. Cf. Blanca Rubio, *América Latina en la mira: las transformaciones rurales en la transición capitalista*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.

20. Cf. Jan van der Ploeg, “Imperios alimentarios, soberanía alimentaria y luchas sociales”, *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*, vol. 4, N° 7, 2019, disponible en <http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/article/view/561>.

de la riqueza producida en los espacios rurales, agotar la naturaleza sin ningún reparo y profundizar las desigualdades y la exclusión social en los mundos rurales.<sup>21</sup>

El segundo eje de las investigaciones contemporáneas de la sociología rural, discutidas en el Congreso, son las múltiples formas de resistencia que han desplegado los movimientos sociales, las organizaciones agrarias, los sindicatos y las comunidades rurales ante estas nuevas formas de dominación, dentro de esta línea de investigación que señala que el nuevo orden agroalimentario mundial conlleva resistencia global bajo los reclamos por los problemas alimentarios. Varios investigadores observan que la agenda de la pequeña producción familiar y campesina hoy ha dado un giro importante ubicando los temas de la agroecología, la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria como sus puntos principales. Este cambio de perspectiva es señalado como una forma alternativa para aglutinar fuerzas para un movimiento “alimentar global” construido desde los territorios campesinos, e impulsar una transición agroecológica que permitiría “reconectar” nuevamente la producción de alimentos con alimentación sana, el campo con la ciudad, la alineación con la cultura y la naturaleza con la salud.<sup>22</sup> En este sentido, también hay varios estudios actuales que ponen de manifiesto la importancia de la feminización de las luchas por la alimentación y el ambiente, señalando cómo sus organizaciones han ganado espacios de visibilización social y logran que sus acciones se amplifiquen en movimientos más amplios y globales para defender la soberanía alimentaria y su identidad, su cultura y sus territorios.<sup>23</sup>

Dentro de esta línea de investigación también se han destacado las distintas formas de resistencia de los asalariados y jornaleros agrícolas. Varios estudios muestran cómo sus organizaciones enfrentan cotidianamente el poder de las grandes empresas para denunciar los bajos salarios, las nuevas formas de intensificación de la explotación de la mano de obra

21. Cf. Philip McMichael, “A food regime genealogy”, *Journal of Peasants Studies*, vol. 36, N° 1, 2009, pp. 139-169.

22. Cf. Bernardo Mançano Fernandes, “Regimes alimentares, impérios alimentares, soberanias alimentares, movimientos alimentares”, *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*, vol. 4, N° 7, 2019, disponible en <http://www.cei.conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/article/view/561>.

23. Cf. Ivonne Vizcarra, “Mad Max y las defensoras de las semillas: mujeres indígenas y campesinas en los movimientos sociales de lucha por las soberanías”, *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*, vol. 4, N° 7, 2019, disponible en <http://www.cei.conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/article/view/455>.

y los problemas de salud y seguridad que tienen en sus empleos. Estas acciones han puesto de manifiesto el escaso apoyo de los Estados para regular las condiciones de trabajo en estas empresas, y cómo en ellas se reprime la acción colectiva de los trabajadores y se criminaliza a los líderes sindicales.<sup>24</sup>

Un tercer tema que concentra el interés de los sociólogos rurales es el de las políticas públicas y los programas que se han desplegado en la década “progresista”. Hoy existe un creciente debate académico sobre las fuertes tensiones y conflictos que se han dado durante estos gobiernos y si las medidas tomadas por ellos han logrado avances en el reconocimiento de los derechos económicos, políticos y culturales de los sectores más postergados, como la agricultura familiar y las comunidades indígenas. Hay colegas que sostienen –basados en sus investigaciones– que estas políticas han logrado mejorar la situación inicial de estos grupos sociales. En cambio, otros afirman en sus estudios que ellas han sido poco efectivas y han fomentado la lógica empresarial, la mercantilización de los bienes comunes y no han logrado dar un suficiente acceso a la tierra a estos grupos sociales.<sup>25</sup> También en esta línea de investigación, varios estudios se han orientado a analizar el giro a la derecha que se ha producido en los últimos años en varios países del Cono Sur. Para esta labor investigativa se están desarrollando interesantes marcos analíticos sobre las formas de “desmontar” y/o desarticular las políticas “progresistas” de desarrollo rural y cómo ello está llevando a una rápida reversión de los indicadores sociales y ambientales en dichos territorios.<sup>26</sup>

Por último, queremos resaltar la influencia que ha tenido la destacada vitalidad de los movimientos sociales rurales y su renovada agenda de reivindicaciones en la teoría sociológica de la región. En particular puede observarse la fuerte imbricación de estos movimientos con dos corrientes del actual pensamiento social latinoamericano: el decolonialismo y el

24. Cf. Alberto Riella y Paola Mascheroni, *Asalariados rurales en América Latina*, Montevideo, Clacso-Departamento de Sociología-Udelar, 2015.

25. Cf. Catia Grisa, Éric Sabourin y Jean-François Le Coq, “Políticas públicas para a agricultura familiar na América Latina e Caribe: um balanço para a construção de uma agenda de pesquisa”, *Raízes*, vol. 38, N° 1, 2209, pp. 7-21; Cristóbal Kay y Leandro Vergara Camus, *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina: campesinos, agronegocio y neodesarrollismo*, Buenos Aires, Clacso, 2018.

26. Cf. Éric Sabourin, “Erosión, crisis y el surgimiento de políticas para una agricultura y agroecología familiar en América Latina”, documento de conferencia, seminario de OPPA “Políticas públicas para o meio rural brasileiro no período recente: mudanças, continuidades e rupturas”, 2018, disponible en [researchgate.net/publication/332849776](https://researchgate.net/publication/332849776).

antiextractivismo. Ambas incorporan varios elementos de la agenda de estos movimientos rurales en la teorización de sus modelos interpretativos y postulan a estos colectivos como uno de los agentes principales para alcanzar los cambios sociales que promueven esas conceptualizaciones.

En resumen, hemos tratado de mostrar en estas páginas una breve reseña de la evolución de los principales ejes de discusión de la sociología rural y de las transformaciones y desafíos que enfrentan actualmente los mundos rurales latinoamericanos. También hemos ilustrado la historia de nuestra asociación científica y cómo ha logrado, a lo largo de sus cincuenta años de vida, ser un escenario privilegiado de estos debates. Pensamos que compartir esta perspectiva sociológica de los espacios rurales de la región es útil para comprender mejor a nuestras sociedades latinoamericanas y tener una visión más integral de las transformaciones que deben impulsarse para que sean más justas, democráticas e integradas territorialmente.